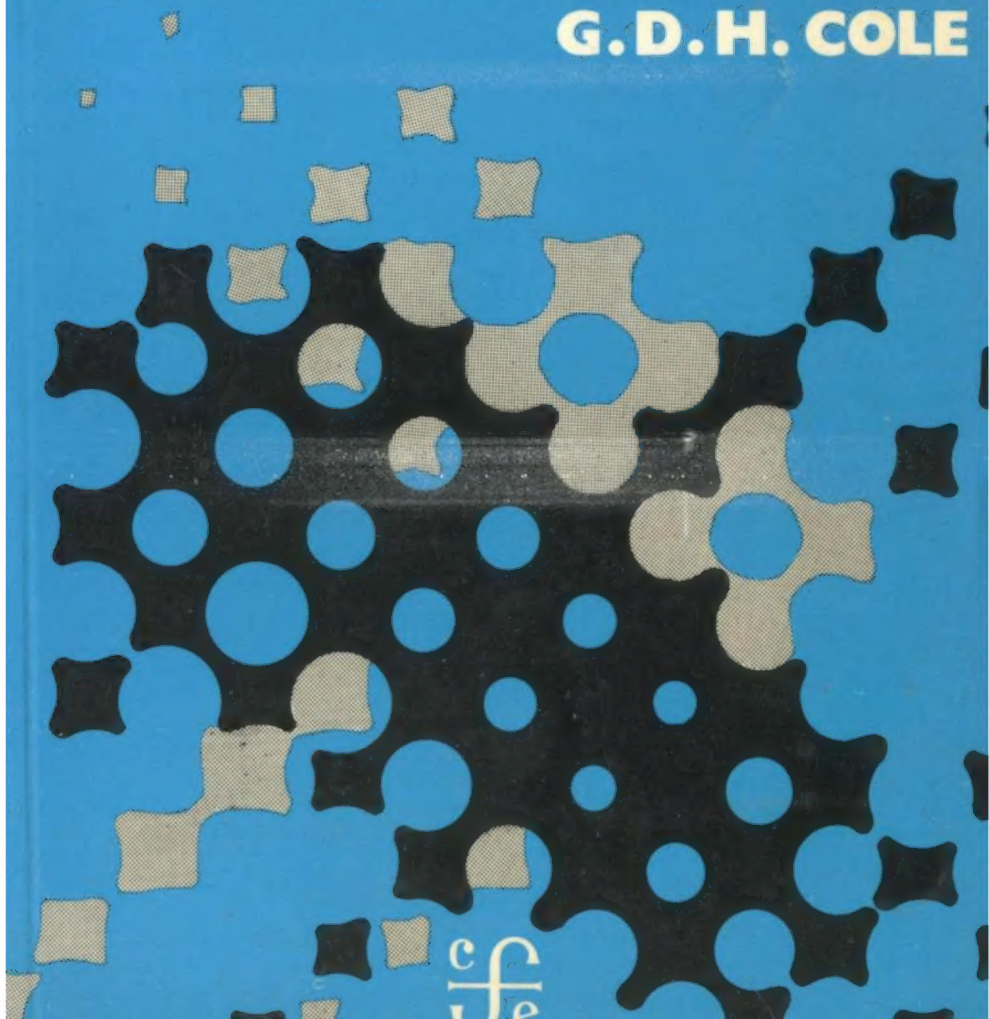


HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIALISTA

VII

Socialismo y Fascismo 1931-1939

G. D. H. COLE



cf
fe

G.D.H. COLE

HISTORIA
DEL PENSAMIENTO
SOCIALISTA

Vil

Socialismo y Fascismo
1931-1939

Primera edición en inglés, 1960
Primera edición en español, 1963
Primera reimpresión, 1974

Traducción de
JULIETA CAMPOS

Título original:

Socialism and Fascism (1931-1939)

© 1960 Macmillan and Co., Londres,

D. R. © 1963 FONDO DE CULTURA ECONOMICA

Av. de la Universidad 975, México 12, D. F.

Impreso en México

FIGURAS PRINCIPALES

| | Cap. | | Cap. |
|---|------|---|------|
| KAUTSKY, 1854-1938 ¹⁻² | 13 | JOUHAUX, 1879-1952 ² ... | 4 |
| LANSBURY, 1858-1940 ^{*-2} ... | 3 | STALIN, 1879-1953 ² | 11 |
| B. WEBB, 1858-1943 ¹⁻² | 3 | AZAÑA, 1880-1940 | 5 |
| S. WEBB, 1859-1947 ² | 3 | TRANMAEL, 1879- ² | 7 |
| BRACKE, 1861-1955 ² | 4 | TROTSKY, 1879-1940 h. ² | 11 |
| VLIEGEN, 1862-1947 ² | 8 | TAWNEY, 1880- ² | 3 |
| HENDERSON, 1863-1935 ¹⁻² .. | 3 | O. BAUER, 1881-1938 ² | 6 |
| JOWETT, 1864-1944 ² | 3 | BEVIN, 1881-1951 ² | 3 |
| SNOWDEN, 1864-1937 ^{*-2} ... | 3 | FIMMEN, 1881-1943 ² | 8 |
| MACDONALD, 1866-1937 ^{*-2} .. | 3 | FOSTER, 1881- ³ | 10 |
| VANDERVELDE, 1866-1938 ^{*-2} .. | 8 | GRIMM, 1881-1958 ² | 8 |
| ADDISON, 1869-1951 ² | 3 | RYKOV, 1881-1938 ² | 11 |
| CACHLN, 1869-1958 ² | 4 | V. TANNER, 1881- ² | 7 |
| GANDHI, 1869-1948 ² | — | VOROSHILOV, 1881- ² | 11 |
| KRUPSKAIA, 1869-1939 ² | 11 | WIGFORSS, 1881- ² | 7 |
| LARGO CABALLERO, 1869- 1946 ² | 5 | DIMITROV, 1882-1949 ² | 9 |
| DE LOS RÍOS, 1870-1949 ... | 5 | ATTLÉE, 1883- ² | 3 |
| DE MAN, 1871-1947 ² | 8 | COMPANYS, 1883-1940 | 5 |
| PIECK, 1871- ² | 2 | KAMENEV, 1883-1936 ² | 11 |
| HUYSMANS, 1871- ² | 6 | PRIETO, 1883-1962 | 5 |
| BLUM, 1872-1950 ² | 4 | VISHINSKI, 1883-1955 ² | 11 |
| SAVAGE, 1872-1940 ² | — | ZINOVIEV, 1883-1936 ² | 11 |
| BRAILSFORD, 1873-1958 ² ... | 3 | SHINWELL, 1884- ² | 3 |
| RAKOVSKY, 1873-? ² | 11 | SANDLER, 1884- ² | 7 |
| STAUNING, 1873-1942 ² | 7 | N. THOMAS, 1884- ² | 10 |
| J. H. THOMAS, 1873-1949 í- ² .. | 3 | V. AURIOL, 1884- ² | 4 |
| KALININ, 1875-1946 ² | 11 | HANSSON, 1885-1946 ² | 7 |
| LITVINOV, 1876-1951 ² | 11 | RADEK, 1885-? ² | 11 |
| SCULLLN, 1876-1953 ² | — | CHUTEH, 1886- ² | 12 |
| J. LONGUET, 1876-1938 ² ... | 4 | BELA KUN, 1886-1936 ² | 9 |
| U. SINCLAIR, 1878- ² | 10 | P. MURRAY, 1886-1952 ² ... | 10 |
| F. ADLER, 1879-1960 ² | 6 | BEN GURION, 1886- ² | — |
| NYGAARDSVOLD, 1879-1952 ² .. | 7 | THAELMANN, 1886-1944 ² ... | 1 |
| | | DALTON, 1887- ² | 3 |
| | | KAROLYI, 1887-1955 ² | — |

Estudiado también en los volúmenes III-IV.

Estudiado también en los volúmenes V-VI.

| | Cap. | | Cap. |
|---------------------------|------|-----------------------------|------|
| MORRISON, 1888-2 | 3 | BULGANIN, 1895-2 | 11 |
| SOKOLNIKOV, 1888-72 | 11 | HAYA DE LA TORRE, 1895-2 | 10 |
| BUJARTN, 1889-1938 2 | 11 | MIKOYAN, 1895-2 | 11 |
| NEHRU, 1889-2 | — | ZHUKOV, 1895- | 11 |
| COLÉ, 1889-1959 2 | 3 | Li LI-SAN, 1896- | 12 |
| NEGRÍN, 1889-1956 | 5 | FENNG PAI, 1896-1929 | 12 |
| CRIPPS, 1890-1952 2 | 3 | GOTTWALD, 1896-1953 | 9 |
| Ho CHI MIN, 1890- | — | BEVAN, 1897-1960 2 | 3 |
| MOLOTOV, 1890-2 | 11 | CHOU EN-LAI, 1898-2 | 12 |
| POLLITT, 1890-2 | 3 | BERIA, 1899-1953 | 11 |
| Trro, 1890-2 | 9 | CHANG WAN-TIEN, 1900- .. | 12 |
| BRAUNTHAL, 1891^ | 6 | A. PHILIP, 1901- | 4 |
| NENNI, 1891-2 | — | STRACHEY, 1901- | 3 |
| RAKOSI, 1892-2 | 9 | DÍAZ, 1902-1940 | 10 |
| NIN, 1892-1937 | 5 | ORWELL, 1903-1950 2 | 3 |
| MAO TSE-TUNG, 1893-2 | 12 | CH'EN SHAO-GÜ, 1904- | 12 |
| LASKI, 1893-1950 2 | 3 | GAITSKELL, 1906-1963 2 | 3 |
| GOLLANCZ, 1893- | 3 | DURBIN, 1906-1948 | 3 |
| LOMBARDO TOLEDANO, 1893-2 | 10 | SILONE, 1906- | — |
| TOGLIATTI, 1893-2 | — | CH'IN PANG-HSEIN, 1907-1946 | 12 |
| JRUSCHOV, 1894- | 11 | REUTHER, 1907-2 | 10 |
| EVATT, 1894-2 | — | | |

PREFACIO

por MARGARET COLÉ

G. D. H. Cole murió súbitamente en enero de 1959. La redacción de este volumen, el último proyectado de su *Historia del pensamiento socialista*, había sido concluida y mecanografiada un poco antes; pero debido en gran medida a un accidente en el que sufrió la fractura de un brazo, no pudo someterlo a la cuidadosa revisión y análisis de otras autoridades, como en el caso de los anteriores volúmenes. La redacción mostraba, por tanto, algunas repeticiones y errores que seguramente habría suprimido; además, dos de los capítulos —el dedicado a Israel y el de la India— así como la bibliografía, excepto la parte dedicada a China, estaban demasiado incompletos para publicarse de esa manera. Su muerte fue demasiado imprevista para permitirle hacer recomendaciones en sus últimos momentos; por lo tanto he omitido esas partes (quedando la sección de bibliografía referente a China como apéndice al capítulo xii) y con la ayuda de nuestro hijo, Humphrey Cole, y de Julius Braunthal, que ha escrito la "Introducción", he limado las redundancias y los errores menores que se pudieron descubrir. En otras palabras, he cuidado de la edición del libro hasta donde me ha sido posible y pido la indulgencia de los críticos para las incorrecciones que puedan haber persistido. Por lo demás, el libro queda tal como él lo escribió. En un momento, como lo indica el prefacio al volumen III, había pensado prolongar la historia hasta 1945. Sólo lo hizo en parte; la narración termina, en casi todos los casos, al estallar la guerra. Pero el largo capítulo final indica claramente que éste debía ser el último libro de la serie y que había dicho cuanto quería decir.

Por las razones señaladas, este Prefacio no contiene, como los de volúmenes anteriores, una larga lista de personas a las que se debe agradecimiento; y aquellos, que deben ser muchos, que contribuyeron con alguna información —especialmente en los países extranjeros— mientras el libro estaba en preparación, sírvanse aceptar este reconocimiento generalizado de sus servicios. Sin embargo, debo hacer público, específicamente, mi agradecimiento a unos pocos: a Humphrey Colé, que trabajó extensamente en las revisiones necesarias; a Julius Braunthal, que revisó cuidadosamente las pruebas e hizo valiosas sugerencias; al Nuffield College, que prestó su inestimable ayuda en la copia del manuscrito y a Miss Brotherhood, del Nuffield College, que realizó con notable precisión la tarea de leer y descifrar una escritura extremadamente difícil.

Kensington, 1959.

INTRODUCCION

por JULIUS BRAUNTHAL

Estoy muy agradecido a la señora Margaret Colé por haberme pedido que leyera las pruebas de galera del volumen postumo de la *Historia del pensamiento socialista* del fallecido G. D. H. Colé y que escribiera una breve introducción. Me conmueve profundamente el gran honor de haber sido invitado a asociar mi nombre a esta importantísima contribución a la historia del socialismo internacional.

La obra de G. D. H. Cole es una enorme realización, nunca antes intentada por ningún estudioso de ningún país. Cuando concibió el alcance del estudio que proyectaba, pensó limitarlo a una historia del solo pensamiento socialista, como lo declaró en el Prefacio al primer volumen de su obra; consideraba que escribir una historia general del socialismo era "una tarea imposible para un solo autor". No obstante, lo imposible ha sido logrado. Ha dado más de lo que prometió. Su obra es, en efecto, la historia más completa del socialismo moderno escrita en cualquier idioma; una enciclopedia del movimiento socialista internacional lo mismo que del pensamiento socialista.

Esta hazaña es tanto más notable cuanto que fue realizada con la desventaja de una salud cada vez más debilitada. Enfermo por muchos años de diabetes, comprendía que con toda probabilidad no llegaría a una edad avanzada; y algunas veces, al contemplar las dimensiones de la tarea que se había impuesto, ponía en duda, como en el Prefacio al volumen IV* publicado a fines de 1958, si tendría vida suficiente para terminarla. Mediante un enorme esfuerzo de voluntad consiguió escribir las quinientas páginas que constituyen este volumen y prolongó así la historia del socialismo mundial hasta la segunda Guerra Mundial y, en algunos casos, más allá.

G. D. H. Cole dio a este volumen el título de "Socialismo y fascismo", pero, de hecho, abarca mucho más de lo que el título indica. La historia de la tragedia del socialismo europeo es reflejada en toda su plenitud y la naturaleza del fascismo perspicazmente analizada con un original enfoque del fenómeno. Son examinados y valorados el resurgimiento del movimiento obrero norteamericano, estimulado por la gran depresión de los primeros años de la década de los treinta, y los cambios en la situación de fuerza de la clase obrera en los Estados Unidos producidos por el Nuevo Trato. El carácter peculiar de la revolución social en México y los movimientos sociales en los demás países latino-

* Volumen V de nuestra edición. [E.]

americanos son descritos y explicados. El comunismo conserva, sin embargo, el lugar más importante dentro de este estudio. Al investigar las fuerzas principales que produjeron el eclipse del socialismo europeo y el triunfo del fascismo, la importancia de la revolución bolchevique, su ideología y el desarrollo económico de la Unión Soviética desde los inicios del primer Plan Quinquenal hasta casi las vísperas del XX Congreso del Partido Comunista ruso son analizados detalladamente de nuevo. Y, finalmente, la filosofía del comunismo chino y su elevación al poder son examinados en un fascinante capítulo.

Además, G. D. H. Cole concluyó el estudio con un capítulo que trasciende los límites indicados en el título del volumen. En "Una mirada al pasado y al futuro", intentó determinar la situación actual del socialismo y calcular sus perspectivas. Este volumen expresa, así, en muchos aspectos su última palabra en torno a ideas y acontecimientos. Hace un recuento del desarrollo del pensamiento socialista desde sus principios a fines del siglo xviii hasta nuestros días, mostrando cómo se ha transformado en el proceso de interacción de ideas y circunstancias. Elabora luego reflexiones altamente estimulantes sobre el problema crucial del socialismo actual, el problema de cómo salvar el desastroso abismo que separa a socialdemócratas y comunistas. Analiza la esencia de los valores que la socialdemocracia trata de realizar —los derechos civiles, los derechos políticos y la seguridad social y económica, surgidos de la demanda básica de igualdad individual— y los valores de las sociedades comunistas, originados en un colectivismo fundamental que niega la prioridad de los derechos individuales. En conclusión, no veía la manera de trascender esta diferencia fundamental.

G. D. H. Cole no era, sin embargo, ni comunista ni socialdemócrata, porque consideraba al comunismo y a la socialdemocracia como doctrinas de centralización y burocracia, mientras él pensaba, como lo advirtió en las palabras finales de su obra, "que una sociedad socialista fiel a sus principios igualitarios de fraternidad humana debe descansar en la difusión más amplia posible del poder y la responsabilidad".

Esta concepción del socialismo, formulada teóricamente por primera vez por G. D. H. Cole en sus trabajos sobre el socialismo gremial hace cuatro décadas, orientó su labor creadora a lo largo de toda su vida. Inspiró, además, el análisis de diversas escuelas del pensamiento socialista en los sucesivos volúmenes integrantes de esta obra, especialmente el estudio del proudhonismo y de algunos aspectos del bakuninismo, de la versión del socialismo de César de Paepe y de algunos aspectos del sindicalismo francés. En particular se sentía atraído por dos formas del socialismo contemporáneo que le parecían la más cercana aproximación al ideal que sostenía: el socialismo israelita, basado en el *kibbutzim* y el *histadrut*, y la filosofía hindú de Savordaya, difundida

por Vinova Bhave y Jayprakash Narayan y encarnada en el movimiento budiano.*

A pesar de no haberse completado, la obra monumental de G. D. H. Colé será la fuente obligada sobre la historia del socialismo durante muchos años. Con esta obra ha añadido a su renombre como historiador del movimiento obrero inglés la distinción de ser el más prodigioso historiador del movimiento socialista internacional.

G. D. H. Colé fue una gran figura del socialismo internacional, no sólo del socialismo inglés. Naturalmente, resulta muy difícil calcular toda la medida y profundidad de su influencia sobre el movimiento socialista internacional. La sorprendente lista de idiomas a los que se han traducido sus libros —japonés, chino, hebreo, italiano, español, polaco, serbio y, por supuesto, alemán, sueco, noruego y holandés— lo coloca, por sí sola, en primera fila entre los estudiosos del socialismo conocidos por los socialistas del mundo entero. G. D. H. Colé es respetado en el movimiento socialista internacional, en primer lugar, como el más notable historiador de su época del movimiento obrero británico. Su *Short History of the British Working Class Movement*, traducida al japonés, al hebreo y al italiano, ha sido escogida como texto por universidades de diversos países. Su admirable ensayo sobre el pensamiento económico de Marx, que sirvió de introducción a la edición de *El capital* de la colección Everyman y, más aún, la lúcida exposición del marxismo en su famoso libro *What Marx Really Meant* (reeditado en 1948 con el título de *The Meaning of Marxism*) son grandes contribuciones a la difusión y comprensión de la filosofía marxista. Pero algunos de sus libros, si se me permite hablar por experiencia propia, han ejercido una influencia inmediata sobre el movimiento socialista internacional. Por ejemplo, su *Self-Government in Industry*, publicado en 1917, y traducido al alemán y al sueco, fue una fuente de inspiración para los arquitectos de la reconstrucción socialista en Alemania y Austria, cuando el impulso revolucionario a fines de la primera Guerra Mundial planteó el problema de la socialización de las industrias en esos países. Rudolf Hilferding, uno de los principales líderes de la clase obrera alemana y miembro de la Comisión de Nacionalización creada por el gobierno socialista alemán, escribió una Introducción para la versión alemana del libro y la obra de Otto Bauer *Weg zum Sozialismus*, publicada en 1919, fue muy influida por las ideas de Colé. Lo mismo puede afirmarse del proyecto de nacionalización de Otto Neurath, que elaboró para los entonces gobiernos socialistas de Sajonia y Baviera.

Fue mucho más inmediata, sin embargo, y mucho más decisiva la

* Este movimiento propugna la repartición de tierras en forma igualitaria sin distinción de castas. [E.]

influencia de G. D. H. Colé como maestro. En sus primeros años de profesor-ayudante universitario y en el movimiento educativo de la clase obrera influyó profundamente en muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, que participaron en la construcción del mundo de la posguerra. Después, cuando se convirtió en profesor titular y dedicó la mayor parte de su tiempo a la enseñanza para posgraduados, tuvo numerosos discípulos de los Estados Unidos, de la Comunidad Británica y de Asia. Los estudiosos de los movimientos sociales en los países asiáticos, surgidos después de la segunda Guerra Mundial, han explicado frecuentemente el fenómeno de la sorprendente extensión de las aspiraciones socialistas por toda Asia —uno de los más notables fenómenos, en efecto, de la historia contemporánea— por el predominio de tendencias socialistas en el pensamiento de los intelectuales asiáticos. Esta observación la he visto confirmada en mis conversaciones con intelectuales en Tokio y Hong Kong, en Djakarta, Singapur, Rangún y Delhi, ya se tratara de miembros activos del movimiento obrero o de profesores universitarios o de funcionarios de la administración de sus respectivos países. Para ellos el nombre de Cole, y los de Laski y Tawney, son familiares y sus enseñanzas y escritos son recordados con reconocimiento como la fuente de su inspiración socialista.

G. D. H. Cole creía en el socialismo como una doctrina vital. Para él no era simplemente una hermosa idea adecuada a la contemplación de los estudiosos, sino una rigurosa exigencia moral a la que había que responder con la mayor energía para ponerla en práctica. En sus años de juventud fue encargado de investigaciones del A.S.E. (convertido después en Unión Amalgamada de Trabajadores Mecánicos) y uno de los principales fundadores de la Liga Gremial Nacional y de la Oficina Fabiana (más tarde laborista) de Investigaciones; fue también el primer secretario de estudios o investigaciones del Partido Laborista y siempre uno de los dirigentes más importantes de la Asociación Educativa de los Trabajadores. Entre las dos guerras participó activamente en muchas organizaciones socialistas, y fue el principal promotor de la Nueva Oficina Fabiana de Investigaciones que, al principiar la guerra, galvanizó a la Sociedad Fabiana, otorgándole nueva vida e influencia; era presidente de la Sociedad cuando murió. En sus últimos años, en su intento por revivir el espíritu de cruzada en el movimiento socialista, inspiró la formación de la Sociedad Internacional de Estudios Socialistas.

La idea motora de su última participación en el terreno de la acción socialista es un noble testamento al idealismo que lo caracterizaba. Desilusionado por el *impasse* del socialismo, tal como lo confesó en dos valiosos artículos para el *New Statesman*, no veía posibilidades de rescatarlo de la limitación de las fronteras nacionales a no ser recreando

un movimiento socialista internacional, no como federación de partidos nacionales, sino más bien como cruzada de una minoría entregada a la causa en cada país. Surgiría el establecimiento de una Orden Mundial de socialistas, comprometidos individualmente a poner en primer lugar su deber hacia el socialismo como causa universal. Porque el socialismo es en esencia, insistía, un evangelio internacional del humanismo, la visión de un mundo vivificado por el sentido de fraternidad humana, una fe en la igualdad social no sólo de los propios compatriotas sino de toda la humanidad.

Este maravilloso espíritu del internacionalismo socialista no constituye la menor parte del rico legado que G. D. H. Cole ha transmitido al movimiento socialista internacional. Fue, en verdad, un gran socialista.

Septiembre, 1959.

CAPÍTULO I

EL MUNDO DE 1931 A 1939

El periodo estudiado en esta parte de mi obra es el de los años treinta. —o, más exactamente, de los años que pasan entre el desastre económico de 1931 y el estallido de la segunda Guerra Mundial ocho años después. Fue un periodo de cambios políticos y económicos sensacionales, así como de rápidas volteretas en las actitudes y creencias sociales. En estos ocho años el fascismo, en su manifestación nazi, se adueñó absolutamente de Alemania y Austria y se extendió con poderosa influencia en gran parte de Europa, extinguiendo los movimientos obreros en un tiempo poderosos de Alemania y Austria en forma más despiadada aun de lo que el fascismo italiano sometió al movimiento obrero en Italia. Los Estados Unidos sufrieron un severo cataclismo económico y social sin paralelo, del que resurgió, gracias al Nuevo Trato, con un movimiento sindical mucho más fuerte que antes y gozando de un reconocimiento público y social que jamás había conocido. La Unión Soviética realizó las sucesivas etapas de sus planes económicos bajo un sistema de control policiaco cada vez más dictatorial y acompañados de una serie de juicios sensacionales donde muchas de las principales figuras de la Revolución fueron eliminadas para satisfacer la sospechosa y desordenada ambición de poder y adoración de Stalin. En Gran Bretaña, el Partido Laborista experimentó en 1931 una derrota tan desastrosa que en 1939 todavía no había logrado recuperarse plenamente de ella. En Francia, donde la crisis económica se desarrolló más tarde que en ninguna otra parte, la izquierda agrupó sus fuerzas para lanzar, en 1936, lo que se conoció como "la experiencia Blum", pero por las agudas divisiones políticas no logró triunfar en las urnas y se hundió en una confusión que la incapacitó para enfrentarse al desastre de 1940. En los países escandinavos, los socialistas moderados lograron superar la gran depresión, que resultó mucho menos fuerte para ellos que para el resto de la Europa occidental. Finalmente, en España, la victoria de los republicanos y socialistas fue ahogada en sangre por una guerra civil donde las potencias fascistas dieron considerable ayuda a las fuerzas rebeldes, mientras que las potencias occidentales permanecían timoratamente al margen en una actitud parcial de supuesta "no intervención".

El balance del socialismo mundial durante este tormentoso periodo no es fácil de trazar. Por una parte están la absoluta destrucción de los movimientos obreros alemán y austríaco y el eclipse parcial de la

acción obrera y socialista en casi toda la Europa suroriental; el eclipse total del movimiento español después de su heroica resistencia en la Guerra Civil; el serio retroceso del movimiento inglés a partir de 1931; y la degeneración del comunismo ruso en un sistema de tiranía personal no limitada por escrúpulos morales de ninguna clase —pero acompañada, a pesar de todo, de grandes realizaciones económicas que echaron las bases del progreso tecnológico y científico aún más notable de los años recientes—. Contra estas adversidades hay que pesar el rápido auge del sindicalismo en los Estados Unidos, que se produjo sin un renacimiento de la influencia socialista; el surgimiento de movimientos socialistas, todavía pequeños pero importantes, en la India y otros países económicamente subdesarrollados; los éxitos de los gobiernos socialistas moderados en los Países Escandinavos; la aparición del socialismo como fuerza considerable en Canadá y el fortalecimiento de la influencia laborista en Australia y Nueva Zelandia; cierto desarrollo del socialismo —y del comunismo— en América Latina, especialmente en México; y, entre los intelectuales de muchos países, el desarrollo de un apasionado sentimiento antifascista como contrapartida del creciente influjo del fascismo en otros sectores de las clases medias. En general, parece evidente que, hasta 1939, las pérdidas socialistas superaron con mucho a las ganancias; pero las ganancias no fueron por ello menos reales y sus efectos se vieron considerablemente reforzados por las condiciones de la guerra —cuando menos hasta 1940— cuando se hizo indispensable movilizar la opinión popular en favor del esfuerzo bélico, suponiendo esto, sobre todo en los países democráticos, la asociación a las fuerzas del movimiento obrero, al precio de incrementar notablemente su influencia práctica y su prestigio social.

En Europa, al oeste de la Unión Soviética, los años treinta fueron la gran época del fascismo; y es de la mayor importancia para comprender esto apreciar justamente qué fue en realidad el fascismo. Es, en mi opinión, erróneo considerar al fascismo como el último golpe del capitalismo en decadencia, aunque el fascismo por supuesto recibió amplia ayuda de los capitalistas en su subida al poder y en sus medidas para lograr la destrucción de los movimientos obreros. El fascismo fue, por supuesto, aliado del capitalismo en esta lucha; pero no fue simplemente el lacayo de los intereses capitalistas. Su desarrollo se vio muy favorecido por las condiciones económicas de la época y por los sentimientos de frustración que la adversidad económica sembró en el espíritu de los jóvenes; pero a pesar de esto no fue fundamentalmente un movimiento económico, sino más bien la manifestación de un nacionalis-

¹ Los capítulos referentes a la India, Palestina y el socialismo árabe estaban inconclusos al morir el autor.

mo agresivo que apelaba a las pasiones violentas del subconsciente. Tratar de caracterizarlo en términos puramente económicos es prescindir de la clave esencial de su fuerza impulsora y no ver su característica más peligrosa: su irreprimible tendencia hacia la guerra. Probablemente Hider nunca habría llegado al poder en Alemania si una gran depresión no hubiera dejado sin trabajo a millones de alemanes y no hubiera impuesto malísimas condiciones de trabajo a los que pudieron conservar sus empleos. Pero esto no significa que Hitler, ni el movimiento inspirado por él, fueran, exclusiva o primordialmente, un producto de condiciones económicas, aunque éstas constituyeran la causa principal de su elevación al poder. El movimiento nazi fue en su esencia político más que económico: surgió de los sentimientos extraviados de una Alemania derrotada, decidida a la autoafirmación nacional y a la venganza. Utilizó a los capitalistas alemanes más de lo que fue utilizado por ellos; y la Alemania que creó fue mucho menos capitalista que militarista, arrastrada por la creencia fanática en la superioridad de los alemanes sobre el resto de la humanidad. Su antisemitismo y su antieslavismo no fueron en absoluto manifestaciones de sentimientos o actitudes capitalistas: surgieron de fuentes psicológicas mucho más primitivas. Si el nazismo fue esencialmente inestable —como lo fue sin duda— su inestabilidad surgió, no de las contradicciones del capitalismo que no podía evadir, sino de su propensión inherente a hacer la guerra a sus vecinos para demostrar el predominio de Alemania en una escala mundial.

Los comunistas, cuyo marxismo los inclinaba a interpretar todo más bien en términos económicos, fueron incapaces de ver en el nazismo lo que era realmente. Lo reconocieron inmediatamente, con bastante claridad, como un enemigo al que había que combatir por todos los medios a su alcance e hicieron lo posible por ponerse de acuerdo con todos los que estuvieran dispuestos a agruparse a ellos en una especie de "Frente Unido" antifascista. Pero los comunistas alemanes en particular dieron muestras de una absoluta falta de capacidad para comprender el peligro que tenían enfrente en los años críticos en que el nazismo iba elevándose hacia el poder y, como hemos visto, llegaron inclusive a colaborar con los nazis contra los socialdemócratas en algunos momentos críticos.² La unidad de la clase obrera era la única oportunidad posible de resistir al nazismo en los últimos años de la República de Weimar; pero los comunistas alemanes, acusando a los socialdemócratas de traidores a la Revolución alemana, les eran demasiado hostiles para que resultara posible la unificación. En estas circunstancias, los comunistas llegaron a convencerse de que una victoria nazi no sería tan terrible después de todo, ya que por su naturaleza misma sería tran-

2 Véase Vol. VI, p. 184.

sitoria y estaría condenada a desaparecer por las contradicciones capitalistas que sería incapaz de evadir o de trascender: de tal manera que, de hecho, el nazismo estaría preparando el camino al comunismo contra su voluntad y en contra de sus intereses. Esta idea era consoladora, sin duda, en aquel momento; y resultó cierto que la victoria del nazismo no había de durar más de una decena de años. Lo que hizo que se desplomara, sin embargo, no fue el verse enredado en las contradicciones del capitalismo sino la loca ambición de poder, que lo empujó a una guerra de agresión y lo hizo acrecentar irracionalmente el número de sus enemigos atacando a la Unión Soviética y provocando a los Estados Unidos a ir en rescate de sus aliados de la Europa Occidental. Ciertamente, el nazismo era inherentemente inestable; pero los comunistas estaban absolutamente equivocados en cuanto a las razones de ello y difícilmente habrían podido autoconsolarse como lo hicieron si hubieran diagnosticado correctamente el peligro nazi y hubieran previsto cuánta destrucción y desvastación comportaría derrocarlo; y sobre todo para el pueblo de la Unión Soviética.

He de comenzar pues por establecer, con la mayor claridad posible y según mi criterio, el verdadero carácter del nazismo alemán. Es frecuente reunir, bajo el socorrido calificativo de *fascistas*, a numerosos regímenes de los treinta que de hecho eran considerablemente diferentes por naturaleza —aunque no niego que también tenían algo en común—. Se incluye, además del nazismo, al fascismo italiano, el régimen de Horthy en Hungría, las diversas dictaduras implantadas en los Balcanes, el régimen de los "Mariscales" en Polonia, después de la muerte de Pilsudski; el gobierno dictatorial de Salazar en Portugal y el régimen de Franco en España después de la Guerra Civil. Estos regímenes eran todos en espíritu fuertemente nacionalistas y todos eran declarados enemigos del socialismo y del movimiento obrero. Todos recibían apoyo capitalista; pero en ninguno de ellos era el capitalismo la principal fuerza. Surgidos en países cuyos niveles de desarrollo económico eran ampliamente diversos, diferían en sus características económicas. Algunos eran esencialmente conservadores y reaccionarios en su política económica y descansaban en gran medida en el apoyo de las clases feudales y aristocráticas, alarmadas por el peligro de una revolución desde abajo, pero no necesariamente de una revolución *proletaria* ya que en algunos de los países afectados el proletariado estaba demasiado poco desarrollado como para hacer una revolución y la principal fuerza revolucionaria residía en los campesinos, sin cuya activa participación simplemente no podía triunfar una revolución. Estos elementos feudales aristócratas, que apoyaron en todas partes al fascismo una vez surgido, eran particularmente considerables en Hungría, en Polonia y en España —y también, por supuesto, en la Alemania oriental

y en el sur de Italia—. En estos casos, como en algunos otros, la Iglesia Católica era también un poderoso instrumento antisocialista. En otros, la principal fuerza activa no era en absoluto feudal o aristocrática: por el contrario, era principalmente plebeya, fundando su mayor fuerza en elementos de la clase media baja, que resentían agudamente las ambiciones igualitarias de las clases trabajadoras y se veían adversamente afectadas por la depresión económica y la escasez de los altos empleos que traen consigo prestigio social. Este elemento de clase media baja fue muy importante en Alemania e Italia y su influencia difirió grandemente de la que poseían los elementos conservadores adheridos al fascismo; porque le preocupaba, no el mantenimiento de un orden social existente, sino la creación de un nuevo orden que le brindara las oportunidades de poder y avance que el orden existente le negaba. En la práctica, tanto en Italia como en Alemania, el fascismo de este género, más radical y subversivo, se alió llegado el momento a las fuerzas agresivas del feudalismo y el capitalismo aunque no, en Alemania, sin un "baño de sangre" en el que fueron destruidos por la fuerza los elementos más radicales. Pero, aun consumadas estas alianzas, el nazismo alemán no se convirtió esencialmente en feudal-aristocrático ni capitalista; permaneció fundamentalmente nacionalista y militarista e influyó en las masas, que lo apoyaron principalmente por su apelación a la agresividad nacionalista profundamente arraigada, más que por poner en juego motivos económicos. Estos motivos desempeñaron un importante papel, sin duda, en las actitudes mentales de muchos de sus partidarios individuales, que veían en ello la perspectiva de beneficios financieros y de poder. Pero las corrupciones económicas del nazismo no deben cegarnos en cuanto a su naturaleza real, que descansaba en los impulsos primitivos de crueldad e intolerancia, impulsos que despertó y alió a un sentimiento nacionalista agresivo.

Antes de Hitler, Mussolini había construido el fascismo italiano en torno al culto a la nación, concebida esencialmente como un grupo de poder autoafirmativo, activado por un "egoísmo social" colectivo en sus relaciones con el resto del mundo e inspirado por el culto a la "violencia", a la que exaltaba al igual que a la crueldad como virtudes cuando se manifestaban en pro de la causa de la nación así concebida. En la práctica, sin embargo, aunque los fascistas italianos practicaron el asesinato sin escrúpulos y atacaron todo tipo de humanismo liberal como despreciable imbecilidad sentimental, no fueron hasta los extremos a que llegaron los nazis y demostraron menos cruel bestialidad en el trato a sus contrarios. No retrocedieron ante el asesinato, como en los casos de Matteotti y de los hermanos Roselli entre otros; pero no recurrieron al asesinato en masa ni, en general, a la tortura sistemática. Había pocos judíos en Italia y, en parte sin duda por esa razón, el

antisemitismo nunca desempeñó un papel importante en el fascismo italiano, que era, por la fuerza que lo impulsaba, más nacionalista que racial; mientras que en Alemania el antisemitismo fanático fue uno de los principales rasgos de la doctrina nazi, y la exaltación de los alemanes como el *Herrenvolk** siempre se mantuvo en el primer plano del nazismo. El nazismo fue, de hecho, un movimiento mucho más vil que el fascismo italiano y supuso un repudio mucho más completo de toda la tradición de civilización occidental europea y, con ello, una invocación mucho más directa a la amoralidad oculta en el subconsciente.

Las dos formas principales del fascismo diferían también en el papel que asignaban al líder. Mussolini era "Il Duce" y como tal tenía derecho a ejercer un gran poder y a recibir toda la reverencia de sus partidarios; pero nunca fue, en la medida que lo fue Hider, la única fuente de autoridad, ni siquiera en teoría. El fascismo italiano reunía las nociones de jefatura personal y de "Estado corporativo", donde la mayor autoridad pertenecía, por derecho, al Consejo General Fascista como representante del Partido Fascista y se reconocía cierta autoridad, aunque fuera secundaria, a las corporaciones a través de las cuales los fascistas se dedicaron, en general sin éxito, a organizar las principales actividades de su sociedad, especialmente en el terreno económico. Los principios según los cuales debía compartirse la autoridad entre los tres —Duce, Partido y corporaciones— nunca fue claro; pero, en todo caso, nunca hubo una insistencia tan intransigente como en la Alemania nazi en la derivación de todos los poderes de la voluntad del inspirado Führer. Mussolini tenía, sin duda, su *carisma* —para utilizar el conocido término de Max Weber—; pero el carisma que poseía estaba lejos de parecerse a la pretensión de Hider de encarnar en su propia persona toda la voluntad y el destino del pueblo alemán. Puede decirse que, en realidad, las corporaciones italianas contaban poco y, de hecho, apenas existían; pero aun sin tomarlas en cuenta, la distribución de poderes y funciones entre el Duce y el Partido Fascista fue esencialmente diferente a la que existía entre el Führer y el Partido Nazi en Alemania. Esta diferencia surgió sin duda, en gran medida, de una diferencia de temperamento nacional entre italianos y alemanes: los alemanes fueron mucho más inescrupulosos e inflexibles al llevar la doctrina hasta sus extremos. Liquidaron a Rohm y suprimieron a los Strassers, que apoyaban una concepción más colectiva de las funciones del Partido de lo que podía tolerar Hitler; mientras que, dentro del movimiento italiano, hombres como Bottai pudieron conservar sus puestos y seguir apoyando hasta cierto punto las demandas de direc-

* "Pueblo de los señores." [E.]

ción corporativa. Tampoco se suprimió en Italia la expresión del des* contento en la misma medida que en Alemania. Yo mismo oí decir a un líder fascista local, en el climax de poder del régimen, en un mitin improvisado al aire libre, que estaba "harto" de las responsabilidades de su cargo y pensaba renunciar y retirarse a la vida privada. No sé si llegó a retirarse ni qué le sucedió como resultado de su discurso; pero estoy seguro que semejante incidente no podía haber sucedido en Alemania después que los nazis se establecieron en el poder. La *Gleichschaltung* * se practicó en cierta medida en Italia lo mismo que en Alemania; pero fue mucho menos total que en Alemania, y resultó mucho más fácil para los italianos como individuos que para los alemanes vivir sin ser molestados mientras se mantuvieran callados, si no tenían antecedentes políticos que los expusieran a la persecución.

Hubo siempre en el fascismo italiano un elemento de actuación teatral marcadamente ausente del nazismo. Las burlas de Mussolini sobre la "plutodemocracia" siempre tuvieron un giro retórico muy diferente de las denuncias de Goebbels o las fulminaciones antisemitas de Streicher. Puede afirmarse que esto no demuestra más que los nazis alemanes eran mucho más sinceros en sus horribles doctrinas; y, sin duda, muchos lo eran por entero. Pero la diferencia no es menos marcada por ello. El fascismo italiano y el nazismo alemán utilizaron los elementos más brutales y violentos de la invención humana; pero los nazis fueron mucha más allá, construyendo su régimen deliberadamente sobre un culto a la pura bestialidad. Por supuesto, muchos de los que se elevaron a posiciones de autoridad dentro de ambos regímenes eran asesinos por naturaleza o arribistas sin escrúpulos con ambición de poder, sin importarles mucho los fines para los cuales éste fuera utilizado. Individuos de este tipo gravitaron naturalmente hacia ambos y en los dos encontraron los medios para satisfacer sus malos impulsos. Pero al lado de los asesinos y ambiciosos de poder había en ambos movimientos simpatizadores genuinos; y, dentro de los límites fijados por la aceptación de los fines generales de ambos movimientos, surgió efectivamente en estas personas una especie de auténtica camaradería en el mal que podía incluso encontrar expresión en el sacrificio personal. Este espíritu, a mi parecer, fue mucho más fuerte entre los nazis que entre los fascistas italianos y fue una fuente importante de fuerza del régimen nazi, haciéndolo más potente y total en su abominable conducta —porque lo "humano" puede ser el mal lo mismo que el bien.

Estoy seguro de que ni en el fascismo italiano ni en el nazismo la fuerza impulsora fundamental era económica ni basada principalmente en los intereses o sentimientos de clase. Ambos contenían por supuesto

* Unificación, coordinación (término político). [E.]

estos elementos y tenían como uno de sus rasgos principales la unificación de grupos que pretendían una superioridad social o económica contra las tendencias igualitarias que encontraban su principal expresión en el movimiento obrero, que ambos se dedicaron a destruir. Tanto el nazismo como el fascismo italiano lograron agrupar un núcleo considerable de apoyo dentro de la clase obrera que no se obtuvo, en mi opinión, por las promesas tan liberalmente formuladas de rescatarla del desempleo y la mala situación —aunque es indudable que tuvieron cierta influencia, especialmente en las primeras etapas de desarrollo del movimiento. La mayoría del apoyo obrero fue atraído al nazismo mucho más por su intransigente nacionalismo y racismo que por su atractivo económico o, de todos modos, se consolidó en su apoyo al nazismo principalmente por estas razones no económicas. Aunque los capitalistas y un amplio sector de la clase media vieran en el nazismo sobre todo una fuerza capaz de favorecer y mantener su superioridad social y económica sobre los trabajadores, esto no puede explicar por qué tantos trabajadores renunciaron a la sociodemocracia y al comunismo y se adhirieron definitivamente a la causa nazi. La República de Weimar en sus últimos años no sólo estaba deprimida económicamente sino que resultaba todavía más profundamente deprimente para los que deseaban afirmarse como seres humanos activos y sentían que Alemania sufría bajo la degradación del *Diktat* de Versalles. Este sentido de degradación afectó a los trabajadores y a los miembros de las clases "superiores" y permitió a los nazis apoderarse del poder en nombre de la nación más que de las clases económicamente hostiles a la nivelación socialista.

No quiero decir con esto, lo repito, que los factores económicos carecieran de importancia, sino sólo que es un grave error considerarlos como los únicos importantes o interpretar el nazismo simplemente como los últimos golpes del capitalismo en su decadencia.

La situación era diferente, en mi opinión, en otros países que entre las dos guerras fueron presa de regímenes llamados por lo común "fascistas". En Hungría, por ejemplo, el régimen de Horthy —aunque tenía rasgos en común con el fascismo alemán y el italiano— estaba obviamente mucho menos en deuda, en su fuerza impulsora esencial, con las influencias capitalistas que cualquiera de ellos y tenía como principal elemento de apoyo, por una parte, a la aristocracia terrateniente y sus dependientes, que controlaban en gran medida la administración, y por otra un poderoso nacionalismo magiar, interesado en restaurar y mantener la superioridad magiar sobre los elementos eslavos que permanecían o pudieran estar de nuevo sujetos en un momento dado al predominio magiar. Los elementos económicos fueron poderosos, especialmente después del intento de Bela Kun por sostenerse en el po-

der; pero, en su mayoría, eran feudales-aristócratas más que capitalistas, como era inevitable en vista del carácter subdesarrollado de gran parte de la industria húngara y de la medida en que la industria y el comercio estaban en manos de los no magiares. En la España de Franco, aunque el capitalismo era un factor serio en Cataluña y en algunas otras regiones, no contaba mucho en el resto del país; y la principal fuerza alentadora de la contrarrevolución surgió de la Iglesia y los altos cuadros de las fuerzas armadas más que de fuentes económicas. Monarcas ambiciosos, rodeados principalmente por consejeros militares, fueron los principales responsables de la destrucción de los regímenes parlamentarios establecidos después de 1918 en los países balcánicos; y los capitalistas, que eran relativamente débiles, no fueron sino aliados subordinados, aparte del papel siniestro desempeñado a veces por influencias capitalistas extranjeras. En Polonia, donde Pilsudski comenzó como hombre de izquierda, y nunca llegó a un acuerdo con Dmowski y la derecha nacionalista, el régimen de los coroneles a partir de la muerte de Pilsudski fue el resultado de un pacto de los jefes militares con los terratenientes más que de influencias capitalistas realmente poderosas y ampliamente extendidas —aunque, por supuesto, recibió el apoyo capitalista en su lucha contra los socialistas, los sindicatos y el ala izquierda del movimiento campesino—. En ninguno de estos países puede entenderse el surgimiento de los movimientos llamados "fascistas" en simples términos de conflicto económico entre ricos y pobres, o entre la clase trabajadora y el resto de la nación, aunque en todos supuso una aguda lucha entre las clases "superiores" y el movimiento obrero organizado, que casi fue aniquilado en todos los países donde subió al poder uno de estos regímenes.

La razón esencial que hace posible explicar el fascismo, en todas sus variadas manifestaciones, en términos de fuerzas económicas y de lucha de clases es que, en casi todas partes, los movimientos obreros constituían la principal, cuando no la única, fuerza organizada de oposición a los nuevos regímenes. Las oposiciones liberal-democráticas, en tanto que habían estado representadas por partidos burgueses de la izquierda y el centro, se mostraron incapaces en todas partes de hacer una lucha sostenida contra las nuevas fuerzas autoritarias, que simplemente las hicieron a un lado; y ni siquiera los partidos parlamentarios socialdemócratas salieron mejor parados. Quedó a los comunistas y a una pequeña minoría de sindicatos de izquierda, principalmente bajo control comunista, desempeñar el papel principal en los movimientos clandestinos de resistencia que pudieron sobrevivir en los regímenes fascistas. De los líderes socialdemócratas unos cuantos, cuando se les dio la oportunidad, se acomodaron a las limitadísimas posibilidades de oposición constitucional dentro de los Estados fascistas: la

mayoría escapó al extranjero y trató de mantener partidos "fantasmas" en el exilio, que rápidamente perdieron contacto con sus antiguos miembros y se vieron reducidos a representar muy poca cosa aparte de ellos mismos.

El hecho de que, en un país tras otro, el fascismo —cualquiera que fuera su carácter esencial— hiciera una guerra sin cuartel a los socialistas y al movimiento obrero hizo posible sugerir que el fascismo debía ser esencialmente una forma del capitalismo, con el propósito fundamental de acabar con su principal enemigo, el socialismo. La crisis económica de los treinta fue diagnosticada, en general correctamente, como una crisis del mundo capitalista, a la cual era inmune la Unión Soviética, con su economía socializada; y se pensó que los capitalistas no podían resolver la crisis con medidas puramente económicas y que, en ese dilema, recurrían a la acción política violenta, en la esperanza de quedar libres para actuar a su antojo imposibilitando la oposición de los trabajadores. Se habló mucho de que el capitalismo estaba cerca de su crisis definitiva, en la que se desintegraría sin posibilidades de paliativos por el paso de sus contradicciones inherentes —sobre todo, su incapacidad para encontrar mercados para la productividad siempre en aumento, consecuencia necesaria del avance técnico—. Se sostenía que Marx había tenido razón al ver en la limitación del poder de consumo de las masas la causa final de las crisis recurrentes del capitalismo; porque si el poder de compra de las masas era mantenido en un bajo nivel por la explotación capitalista, la consecuente limitación en las necesidades totales del mercado tenía que poner un límite a las utilidades producidas por la inversión y conducir en consecuencia a una depresión y desempleo generales. Se llegó a la conclusión de que el aplastamiento del movimiento obrero, que permitiría a los capitalistas explotar a los trabajadores aún más, no constituiría un remedio ya que al amenazar todavía más el mercado de consumo disminuiría más la inversión y empeoraría en vez de superar la depresión. En consecuencia, los capitalistas al recurrir al fascismo estaban cavando en realidad su propia tumba, cualquiera que fuera el éxito inmediato en la destrucción de la fuerza de la clase trabajadora; porque con ello estarían destruyendo al propio capitalismo y echando las semillas de la revolución mundial, que se produciría de una u otra manera como consecuencia de la creciente miseria de los obreros, aunque las organizaciones obreras fueran quebradas y llevadas a la clandestinidad. Los capitalistas no podían verlo porque estaban ciegos ante las causas reales de la depresión y esperaban remediarla quedando en libertad absoluta para tratar a los trabajadores a su antojo. Por tanto, no importaba realmente si los partidos socialistas y los sindicatos eran disueltos; de hecho, podía constituir inclusive una ventaja positiva si

los partidos socialistas constitucionales y los sindicatos reformistas eran privados de su fuerza para dirigir erróneamente y traicionar a los trabajadores, dejando así el camino abierto a los revolucionarios verdaderos, cuya doctrina los capacitaría para organizar, aun dentro de la dictadura fascista, fuerzas clandestinas que, a su debido tiempo, pondrían fin a un capitalismo incapaz ya de organizar a las fuerzas de producción.

Si el fascismo hubiera sido de hecho simplemente una manifestación del capitalismo en su último aliento, estas esperanzas habrían podido tener algún fundamento; porque una dictadura capitalista dirigida claramente a explotar cada vez más a los trabajadores y a privarlos de todos los medios de resistencia colectiva podría efectivamente conducir, ante la depresión cada vez más profunda de la que no podía encontrar salida, a una situación revolucionaria que habría podido aprovechar la resistencia clandestina. Pero, en términos puramente realistas, el diagnóstico era totalmente falso. En Alemania cuando menos, los nazis pudieron reducir el desempleo a dimensiones relativamente pequeñas y aumentar la producción en gran medida. Es verdad que se logró primordialmente mediante el suministro por el Estado de ocupación de emergencia sobre una base no económica y, llegado el momento, por un aumento máximo de los gastos dedicados a armamentos —a los "rifles" y no a la "mantequilla"—. Pero, aunque los salarios eran bajos y las contradicciones inherentes del capitalismo quedaron fundamentalmente sin resolver, la mayoría de los trabajadores tuvieron empleo; y, por ello, la agitación clandestina se vio incapacitada para alentar la rebeldía de las masas. Los capitalistas podían explotar a los trabajadores sin el control de la resistencia sindical; pero estaban sujetos también a pesadas demandas del Estado en interés de una militarización intensiva con vistas a crear los recursos para la guerra de agresión. Al mismo tiempo toda la población, incluyendo a los trabajadores, fue arrastrada por una intensa propaganda nacionalista y militarista, que actuó poderosamente sobre ella a medida que todos los recursos del Estado eran movilizados bajo la dirección nazi y que se ponía a su servicio la más reciente técnica psicológica. Estas condiciones no eran en absoluto las deseadas por los capitalistas, en todo caso no lo eran una vez lograda la destrucción del movimiento obrero. Hacían del capitalismo no el amo, sino el servidor tolerado del militarismo y de la doctrina nazi de violencia y sádica afirmación nacional. Toda la economía alemana, bajo el nazismo, se convirtió en una vasta estructura de preparativos militares: de tal modo que la suerte del capitalismo alemán quedó ligada a las perspectivas de una victoria en la guerra; victoria no de los capitalistas —primordial y esencialmente—, sino del *Herrenvolk* dirigido por el Partido Nazi y su inspirado y

lunático Führer, cuyas ambiciones no conocían otro límite que la conquista y subordinación del mundo entero.

Los comunistas estaban en lo justo, pues, al afirmar que los sistemas fascistas de los treintas eran inestables por naturaleza, pero se equivocaron respecto a las causas de esa inestabilidad. Lo que los hacía inestables no era su incapacidad para dar empleo a los trabajadores, sino la determinación de los dirigentes de aplicar los recursos de la producción primordialmente en preparativos bélicos y con un propósito definido de hacer la guerra a sus vecinos. Si el nazismo hubiera sido simplemente el capitalismo en busca de escapes para la crisis económica y la depresión, no habría preferido los "rifles" a la "mantequilla": habría buscado los mercados más amplios posibles para la creciente producción de la industria alemana. Pero las fuerzas que estaban en el poder en la Alemania nazi se interesaban por el capitalismo sólo en tanto que pudieran utilizarlo para servir a sus fines de agresión nacionalista y se habrían vuelto en su contra rápida y decisivamente si éste no se hubiera ajustado a sus planes.

Además, en los países capitalistas que escaparon al dominio fascista la crisis económica de los treintas no demostró ser la "crisis definitiva" del capitalismo, como habían esperado los comunistas. En los Estados Unidos, donde su impacto fue mayor que en ningún otro lugar, el Nuevo Trato del presidente Roosevelt produjo una sustancial, aunque incompleta, recuperación económica, que fue acompañada de un verdadero cambio en la distribución del poder social. El sindicalismo norteamericano, hasta entonces ineficaz fuera de un escaso número de industrias y generalmente desprovisto de prestigio dentro de la sociedad, experimentó un gran renacimiento cuando el Congreso de Organizaciones Obreras Industriales logró controlar las grandes industrias de producción en masa, como la de automóviles y la del acero, a medida que los sindicatos "blancos" eran liquidados y que los patronos norteamericanos se adaptaban forzosamente a las prácticas del contrato colectivo. Las relaciones laborales en los Estados Unidos se transformaron esencialmente en pocos años; y llegó a ser una práctica reconocida que los trabajadores tuvieran una considerable participación en los frutos del progreso técnico. En estas nuevas condiciones, el capitalismo norteamericano se recuperó con notable éxito, en condiciones muy aceptables para la gran masa de los trabajadores norteamericanos; de tal manera que, mientras el sindicalismo se hacía cada vez más fuerte y más influyente, el socialismo norteamericano desaparecía casi por completo. El capitalismo recuperó su fuerza, pero a condición de aceptar el nuevo *status* de los sindicatos y de reconocer en la práctica una mayor intervención estatal en los asuntos económicos, incluyendo un notable desarrollo de los servicios sociales impartidos por el Estado y

cierta responsabilidad de éste en el mantenimiento de la ocupación a un nivel adecuado. Muchos capitalistas norteamericanos opusieron grandes reservas a la aceptación de estos cambios y ansiaban una vuelta a las viejas condiciones de *laissez-faire* y "sálvese quien pueda"; pero sus quejas fueron en general ineficaces para promover un renacimiento de las viejas condiciones de lucha de clases abierta. Al mismo tiempo, existían en los Estados Unidos tendencias todavía en su mayoría latentes hacia la intolerancia nacionalista, semejantes a las que cimentaban el desarrollo del fascismo en Europa; pero no adquirieron la forma fascista por el carácter básicamente más democrático del "modo de vida" norteamericano. Surgieron a la superficie más tarde, como macartismo y "norteamericanismo ciento por ciento", con las cazas de brujas a expensas de todo progresismo que pudiera presentarse como deslealtad al régimen establecido. Pero esto, sin embargo, se desarrolló seriamente mucho después del periodo que ahora analizo: en los treinta la principal corriente en los Estados Unidos parecía fluir en dirección de un capitalismo más liberal, reformado, dispuesto a llegar a acuerdos con las demandas de los trabajadores y a hacer concesiones a todos los grupos numerosos que hasta el momento no habían recibido un "trato justo".

Entretanto, en Gran Bretaña, el impacto de la crisis económica mundial había sido mucho menos extremo que en los Estados Unidos; y, a pesar del eclipse casi total del Partido Laborista en las elecciones generales de 1931, los sindicatos tuvieron bastante éxito al lograr la limitación de las rebajas de salarios a pesar de su debilitamiento después de la huelga general de 1926. La depresión era, de hecho, muy seria en algunos sectores —especialmente en los astilleros y en las industrias del carbón y del acero—; y la recuperación en estos sectores afectados por la depresión fue lenta y no había llegado a ser completa al estallar la guerra. Políticamente, el Partido Laborista recobró lentamente la fuerza después de la derrota, pero todavía en 1935 estaba demasiado débil para constituir una verdadera amenaza en las elecciones; los conservadores gozaron de un periodo ininterrumpido de poder político hasta el estallido de la guerra y durante el año de "*phoney war*".* La recuperación del laborismo habría podido ser más rápida si no se hubiera visto preso en un serio dilema entre su arraigado pacifismo y su deseo de desempeñar un papel en la resistencia colectiva al fascismo como fuerza alentadora de trastornos en el terreno internacional. Su pacifismo, reforzado por una honda desconfianza de las intenciones de los conservadores, le impidió apoyar el rearme bajo un gobierno conservador, cuando se hacía cada vez más evidente que nada ex

* Los primeros ocho meses de la segunda Guerra Mundial, cuando nada parecía augurar una guerra larga. [E.]

cepto la fuerza armada en gran escala podría ser eficaz para controlar la agresión nazi. La ambigüedad de la actitud laborista se hizo también claramente evidente en relación con la Guerra Civil española cuando —en parte presionado por el gobierno de Blum en Francia, debilitado también por la fuerza de los sentimientos pacifistas franceses— apoyó una política nada realista de "no intervención", que en ningún sentido impidió que las potencias fascistas intervinieran de parte de los rebeldes contra el gobierno republicano español.

El dilema del laborismo era, en efecto, muy difícil de resolver. Cada mes era más claro que las potencias fascistas —sobre todo, la Alemania nazi—, iban hacia la guerra y que nada, excepto una suprema demostración de fuerza, podría detenerlas. No se sabía, sin embargo, en qué orden decidiría Hitler atacar a sus enemigos; y, entre los conservadores británicos, muchos esperaron hasta el último momento que no se ocupara de Occidente y dirigiera su ataque contra la Unión Soviética, cuya destrucción habrían aplaudido aunque viniera de manos de Hider. El Partido Laborista, aun después de aceptado el rearme, siguió fundando sus esperanzas de paz en la seguridad colectiva a través de la Sociedad de Naciones —que, de hecho, era una flecha rota—. Sin poder determinar la política del gobierno, ni siquiera influirla seriamente, tuvo que permanecer al margen, aunque protestando, cuando Munich; y cuando estalló efectivamente la guerra en Occidente, en 1939, siguió impotente hasta que el colapso de Francia hizo caer a Chamberlain y obligó a Winston Churchill, nuevo Primer Ministro, a llamar al Partido Laborista para participar en un gobierno que necesitaba unificar tras sí a toda la nación en el esfuerzo aparentemente desesperado de proseguir la lucha prácticamente solos.

En Francia la depresión se produjo después que en otros países, principalmente porque Poincaré había estabilizado el franco a un bajo nivel que dejó bastante campo a la economía francesa cuando la moneda osciló de un lado a otro a partir de 1931. Políticamente, sin embargo, los franceses no se habían recuperado en absoluto de sus grandes pérdidas de hombres jóvenes en la primera Guerra Mundial; y gran parte del pueblo francés reaccionó ante el surgimiento del nazismo en Alemania con un sentimiento de temor que lo inclinó, no a fortalecer sus energías para un nuevo conflicto, sino a llegar a cualquier acuerdo con los alemanes con tal de evitar la guerra. El movimiento obrero francés, a diferencia del inglés, había sido dividido por la disputa entre comunistas y socialistas democráticos y la mayoría de los obreros manuales organizados se habían hecho comunistas, dejando al Partido Socialista como partido diezmado, apoyado en general por empleados y otros grupos de trabajadores no manuales. Esta división, que se extendió a los sindicatos, despojó de sus fuerzas al movimiento económico; y

también se hizo evidente que no había posibilidades de un gobierno de izquierda durable sin el apoyo comunista. En estas circunstancias, el Frente Unido, rechazado en Gran Bretaña, fue aceptado en Francia, pero mucho menos por razones internacionales que internas. El Frente Popular encabezado por Léon Blum se dirigió menos contra el fascismo que en favor del mejoramiento de las condiciones de los trabajadores franceses, mediante una legislación social progresista. Trajo consigo la unificación de las fuerzas sindicales en la *Confédération Générale du Travail*, que después fue controlada en su mayoría por los comunistas. Siguiéron los Acuerdos de Matignon que estipulaban un mayor reconocimiento de los derechos de contratación colectiva y aumentaban la intervención del Estado en las querellas laborales, además de la introducción de la semana de cuarenta horas, que imponía una considerable tensión sobre una economía que no estaba al día en equipos ni en métodos de producción. Los trabajadores obtuvieron, por el momento, verdaderos beneficios económicos; pero la balanza de pagos de Francia resultó afectada. En esta situación, las clases patronales se hicieron más obstinadas; y el ala derecha respondió a la izquierda en el gobierno con crecientes manifestaciones de violencia fascista o semifascista. Blum se sentía demasiado débil para ir en auxilio de los republicanos españoles o para adoptar una actitud firme ante los alemanes; y su sucesor como Primer Ministro, el radical Daladier, fue partícipe con Chamberlain en la rendición de Munich. El régimen parlamentario fue seriamente conmovido por la violencia de los *Cagoulards* y de otros grupos fascistas: Pierre Laval y un grupo influyente de políticos insistían en la necesidad de tratar con los fascistas y el país entero se mostraba indeciso y en una actitud que no podía conducir al triunfo en una guerra. La estrategia militar francesa había descansado casi exclusivamente, desde el surgimiento del nazismo, sobre la base de una defensa estática, con el bastión de la Línea Maginot. Pero cuando vino la guerra y quedó demostrada rápida y desastrosamente la inutilidad de confiar en esta forma de defensa, Francia se desplomó espiritual y militarmente y fue una fácil presa para la ocupación alemana y las despreciables pretensiones del régimen de Vichy, que trató de convertir al mariscal Pétain en una figura paternal para cubrir su vergüenza, pero sólo logró acarrear mayor vergüenza sobre un pueblo derrotado y alicaído.

Mientras el socialismo sufría un total eclipse en Alemania y experimentaba serios retrocesos en Gran Bretaña y Francia, los Países Escandinavos ofrecían un espectáculo en contraste agudo por el éxito del socialismo moderado. Los Países Escandinavos salieron en general bastante bien de los años de depresión, en parte porque sus principales exportaciones eran de artículos de los que había demanda en todas par-

tes y, en parte, porque sus gobiernos demostraron gran sentido común para resolver las dificultades que se les presentaron. Mientras la mayoría de los demás países bajo regímenes capitalistas trataban de combatir la adversidad económica con medidas deflacionistas que, temporalmente al menos, empeoraban la situación, los suecos en especial demostraron el buen sentido de incurrir en déficit presupuestales transitorios para combatir el desempleo, preservándose de la inflación al asegurar la recuperación del equilibrio en años posteriores. Esta prudente política fue adoptada por gobiernos socialdemócratas apoyados por mayorías parlamentarias independientes o sostenidos por coalición con partidos menores con una posición semejante. Estos gobiernos no intentaron, en efecto, grandes avances en la socialización de los medios de producción, que dejaron en gran parte en manos capitalistas. Se dedicaron a implantar amplias medidas de seguridad social y se contentaron con ejercer una influencia reguladora cada vez mayor sobre la conducta capitalista. Ayudados por condiciones económicas favorables, tuvieron en general bastante éxito y lograron mantenerse en el poder por largo tiempo basados en el apoyo popular. Fueron ayudados, sin duda, por el hecho de que las diferencias de riqueza e ingresos en el pueblo eran ya sustancialmente menores que en los grandes países capitalistas; porque esta mayor aproximación a la igualdad bajaba la temperatura de la controversia política y evitaba el desarrollo del comunismo como serio rival de la socialdemocracia. En los treinta se generalizó la referencia a Suecia como el ejemplo supremo de éxito del socialismo moderado y, económicamente, como país iniciador en el empleo de nuevas técnicas de acción estatal para el mantenimiento de un alto nivel de ocupación. En general, estos elogios eran bien merecidos, aunque gran parte del éxito se debió en mayor medida a circunstancias favorables más que a un genio socialista especial para encontrar soluciones a problemas realmente difíciles. La debilidad inherente al socialismo escandinavo era que parecía destinado a llegar pronto al término de lo que podía hacerse para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera mediante la legislación social y que no daba muestras de estar dispuesto a avanzar a la etapa inmediata, para emprender la construcción de una economía plenamente socialista. Por el momento, sin embargo, los beneficios obtenidos eran suficientes; y los escandinavos —especialmente los suecos— parecían dar un convincente ejemplo de las potencialidades del socialismo evolucionista puesto en práctica con el apoyo sostenido de núcleos populares de electores, satisfechos en líneas generales, dentro del sistema parlamentario.

En Holanda y Bélgica, por otra parte, así como en Suiza, los socialistas parecían haber llegado a una situación de estancamiento. Después de hacer considerables adelantos inmediatamente después de la pri-

mera Guerra Mundial, los movimientos socialistas en estos países se habían mantenido como representativos de grandes núcleos de opinión minoritaria, pero no daban señales de avanzar hacia la obtención de mayorías que pudieran capacitarlos para asumir en sus manos el gobierno, aunque fuera en coalición con otros partidos a los que tendrían que tratar como colaboradores y no como subordinados. En Holanda y Bélgica, el principal obstáculo al avance del socialismo era la presencia de partidos con base religiosa —católicos en Bélgica y en Holanda católicos y protestantes— capaces de obtener considerable apoyo en la clase obrera, pero, en último término, controlados no por sus miembros obreros sino por influencias conservadoras estrechamente relacionadas con las jerarquías de las respectivas Iglesias. También los sindicatos estaban divididos en esos países en movimientos rivales bajo el control socialista y religioso; y no parecía haber un camino para unificar a la clase trabajadora, política o económicamente, ni, a falta de esa unidad, de lograr una mayoría parlamentaria.

En España, los treinta presenciaron la creación y la caída de la República y la victoria de los fascistas dirigidos por el general Franco y la Falange. La República surgió como sucesora de una dictadura —la de Primo de Rivera— y fue sustituida por otra mucho más severa y reaccionaria, después de desintegrarse por las disensiones internas. Las fuerzas republicanas constituían en un principio una irreductible coalición de elementos diversos —desde constitucionalistas católicos conservadores, como el presidente Alcalá Zamora, pasando por liberales burgueses y radicales anticlericales hasta una amplia variedad de socialistas, sindicalistas, anarquistas y comunistas— que sostenían puntos de vista totalmente irreconciliables sobre el carácter de la nueva sociedad que querían establecer. Algunos eran enérgicos partidarios del centralismo, otros decididos pluralistas y otros más opositores extremos del Estado en cualquiera de sus formas. La mayoría de los dirigentes, aunque no todos, eran fuertemente anticlericales y se entregaron a una lucha a muerte contra los desmesurados privilegios de la Iglesia Católica, que en España era terriblemente intolerante y monopolizadora. Muchos de sus partidarios eran rebeldes por naturaleza contra cualquier autoridad —contra la autoridad de la República lo mismo que contra cualquiera otra de sus formas—. La huelga de masas había sido endémica por mucho tiempo en muchas partes de España y el levantamiento espontáneo de los campesinos en muchas otras; el colapso de la dictadura y la monarquía y la promesa de un "nuevo trato" general constituían una evidente oportunidad para que estas manifestaciones se produjeran en una escala sin precedentes. No había en España un partido disciplinado, estrechamente organizado, capaz de capear la tor-

menta que acompañó a la Revolución republicana; y los grupos que se habían unificado para hacerla se dividieron tan pronto como fue necesario decidir cómo debía actuarse después del éxito inicial. Al principio, los elementos en disputa lograron en general coincidir en la redacción de la nueva Constitución de la República de 1931, que estableció una legislatura de una sola Cámara, las Cortes, electas por sufragio universal y voto secreto; pero, aun en esta etapa inicial, los republicanos de derecha retiraron su apoyo cuando se atacó a la Iglesia y los radicales anticlericales se les unieron pronto en la oposición, mientras que en la extrema izquierda, sindicalistas y anarquistas, al margen de la nueva maquinaria del Estado, no apoyaron a los sucesivos gobiernos que intentaron rebasar la tempestad. Se intentó restablecer la unidad republicana a través del Frente Popular en 1935; y, en el terreno electoral, esta tendencia triunfó señaladamente cuando, en febrero de 1936, el ala izquierda obtuvo una clara mayoría en las Cortes sobre la derecha y el centro reunidos. Por entonces, sin embargo, ningún gobierno podía ejercer una autoridad real. Las huelgas se sucedían interminablemente y los campesinos, molestos al no ver verdaderos avances de la Ley Agraria, que el centro se había negado a poner en práctica con vigor, se tomaban cada vez más la iniciativa en sus propias manos para apoderarse de la tierra sin esperar la sanción legal. Mientras tanto, la derecha hacía los preparativos de la contrarrevolución; y, después que su líder Sanjurjo murió en un accidente de aviación al volver de Portugal, el general Francisco Franco levantó el estandarte de la rebeldía abierta en el Marruecos español, en junio de 1936. La guerra civil comenzó.

En Europa, fuera de los países ya analizados, no hay mucho que decir acerca del socialismo en los treintas, porque apenas existía excepto en pequeña escala, en la clandestinidad o en pequeños grupos de exiliados cada vez más desconectados de los grupos de opinión dentro de sus respectivos países; y ni los conspiradores clandestinos ni los exiliados estaban en posición de contribuir con originalidad al pensamiento socialista —aunque esto no les impedía entregarse a agudas querellas de facciones—. En Yugoslavia, por ejemplo, después del golpe militar realista de 1929, el socialismo y el comunismo fueron ambos perseguidos y sólo había posibilidad de actuar clandestinamente. Los líderes socialdemócratas, el más conocido de los cuales era Topalović, se radicaron en el extranjero y la mayoría de los comunistas salieron también del país e intentaron dirigir la labor del Partido desde Viena. Aun cuando Tito asumió la jefatura en 1937, los comunistas yugoslavos no pudieron hacer mucho hasta que la ocupación del país por el Eje durante la segunda Guerra Mundial les permitió ponerse a la

cabeza de un movimiento de resistencia nacional y preparó así el camino a la "Liberación" de 1945.

En lo internacional, el socialismo no pudo ejercer gran influencia en los treinta. El único país donde se hizo fuerte fue Palestina. En ese país el movimiento sionista estaba encabezado mayoritariamente por socialistas y una parte considerable del desarrollo económico adoptó formas socialistas, tanto en los establecimientos agrícolas colectivos, los *Kibbutzim*, como en el *Histadrut*, organización sindical que implantó en muchas industrias el sistema cooperativo. En otros lugares, la situación era deprimente. La Internacional Laborista y Socialista siguió reuniéndose en congresos periódicos y tuvo numerosas ocasiones para protestar contra las violentas medidas adoptadas contra los socialistas en los Estados sujetos a gobiernos fascistas o a otras formas de gobierno dictatorial. Pero quedó muy debilitada por el eclipse del socialismo en Alemania y después en Austria y se vio envuelta en una disputa continua con el Comintern, que se había convertido cada vez más en simple instrumento para la consecución de los intereses rusos, después que Stalin renunció a las esperanzas de una Revolución mundial y se decidió a construir el "socialismo en un solo país", sobre la base de una planificación industrial intensiva y de la colectivización agrícola. Este cambio no significaba, por supuesto, que los bolcheviques renunciaran a sus esfuerzos de fortalecer a los partidos comunistas fuera de la Unión Soviética; pero sí quería decir que se preocuparían menos por fomentar la revolución en los países capitalistas avanzados y mucho más en crear problemas a los gobiernos de estos países, estimulando la actividad comunista en las áreas coloniales y en sus dependencias, así como en los países sometidos a su penetración económica.—por ejemplo, la India y otros países de Asia y América Latina—. En muchas de estas regiones los partidos comunistas se desarrollaron con gran rapidez en los años de la depresión, que afectó a los países menos desarrollados con especial fuerza, produciendo una gran baja en los precios mundiales de las materias primas y deteriorando así seriamente sus "condiciones de comercio" con los países avanzados. El socialismo democrático, lo mismo que el comunismo, empezaron en estas condiciones a echar raíces en algunos países subdesarrollados donde apenas habían existido antes como movimiento organizado—por ejemplo, en la India, donde su desarrollo inicial se produjo dentro del marco del Partido del Congreso como principal órgano de la lucha nacional por la independencia—. Surgieron también pequeños e inseguros pasos hacia el establecimiento de movimientos socialistas en algunos países árabes, especialmente en Egipto; pero estos movimientos se produjeron todavía principalmente entre intelectuales, y no reunían gran apoyo

popular. Había, sin embargo, una marcada tendencia del comunismo a prestar mayor atención a las tendencias antimperialistas fuera de Europa y a hacer todo lo posible por empeorar las cosas para las potencias imperialistas, preocupadas con sus dificultades internas.

Esto es válido especialmente para los primeros años de la década de los treinta. A medida que la amenaza nazi de una guerra mundial se hizo más insistente, los rusos tuvieron que variar gradualmente de política inmediata y subordinar sus actividades dirigidas contra las grandes potencias imperialistas al esfuerzo por crear, dondequiera que fuera posible, movimientos antifascistas de amplias bases en forma de Frentes Populares. Veremos cómo esto se logró en Francia, reunificando al movimiento sindical y apoyando al gobierno de izquierda de Léon Blum —aunque pronto lo atacaron por no acudir en auxilio de los republicanos en España—. También veremos cómo el movimiento del Frente Popular en Gran Bretaña fue abortado por la negativa del Partido Laborista a responder a las insinuaciones comunistas y como, en la propia España, el Frente Popular, después de permitir a la izquierda obtener una notable victoria electoral en 1936, se disolvió bajo el impacto de la rebelión y la Guerra Civil. En las relaciones diplomáticas, la Unión Soviética, con Maxim Litvinov como Comisario de Relaciones Exteriores, hizo por un tiempo verdaderos esfuerzos por llegar a un acuerdo con las potencias occidentales para oponer una resistencia unificada a la agresión fascista y utilizar la Sociedad de Naciones como instrumento para este fin; pero sus esfuerzos fueron nulificados ante la política de "apaciguamiento" seguida por Chamberlain y Daladier y la negativa de Occidente a considerar seriamente las entrevistas militares arregladas por fin entre los comandos militares soviéticos y occidental. El resultado de estos acontecimientos fue la decisiva modificación de la política rusa, en el Pacto Nazi-Soviético de 1939; pero ese extraordinario *volto-face* no significa que los anteriores intentos de los rusos por crear un frente mundial común contra el fascismo no hubieran sido auténticos mientras duraron ni que pueda atribuirse a los rusos toda la culpa del Pacto. No hay duda que la actitud de los estadistas occidentales, que fueron tan lejos en el "apaciguamiento" de Hitler en Munich, encerraba una esperanza de que lanzaría sus fuerzas contra los rusos más que contra Occidente ni que estaban dispuestos inclusive a alentarlo en esa política, que parecía a muchos de ellos el resultado natural del Pacto contra el Comintern concertado entre las potencias del Eje. El Pacto Nazi-Soviético fue, sin duda, una terrible traición a la fe antifascista que había sido la raíz de la política internacional comunista en los años anteriores; pero no dejaba de tener excusas, ante la actitud de los "apaciguadores" occiden-

tales, a pesar de ser un bocado duro de tragar para muchos comunistas *in partibus infidelium*, cuando les cayó inesperadamente y los obligó a tragarse sus palabras o a abandonar su fe hondamente arraigada en la Unión Soviética como protagonista de la causa socialista mundial. El hecho de que la mayoría de los comunistas occidentales se tragaran el bocado poco apetitoso se debió no sólo al influjo enormemente fuerte que la Unión Soviética ejercía sobre su lealtad, sino también a sospechas bien justificadas de las intenciones de las potencias occidentales mientras los "apaciguadores" permanecieron en el timón de sus Estados durante la "phoney war" de 1939-1940. La caída de Francia y la evacuación de las fuerzas británicas de Dunquerque conmovió rudamente a muchos de ellos; y cuando, en 1941, Hitler rompió el pacto y lanzó su ataque contra la Unión Soviética, se alegraron de cambiar posiciones nuevamente y de unirse una vez más a la cruzada antifascista de la que habían sido alejados con rudeza menos de dos años antes.

La segunda Guerra Mundial, sin embargo, no fue, ni siquiera después que la Unión Soviética se vio obligada a participar, una guerra por el socialismo. Fue una lucha a muerte contra la agresión fascista, con las potencias occidentales y la Unión Soviética como colaboradores llenos de reservas y naturalmente desconfiados para resistir a un peligro común. Mientras duró, el antagonismo hondamente arraigado entre Occidente y la Unión Soviética fue temporalmente superado por la necesidad imperativa de laborar conjuntamente, pero siempre permaneció en segundo plano y debía avanzar de nuevo al primer plano tan pronto como terminara la lucha.

En cierta medida, esta situación existía en los treintas, pero complicada entonces —y evitada la división del mundo en dos bloques antagonísticos— por la existencia del fascismo como amenaza mayor tanto para el socialismo como para el gobierno parlamentario. Además, esta amenaza era entonces tan directa e inmediata como para distraer la atención del antagonismo fundamental entre el comunismo y el gobierno parlamentario y favorecer la inclinación de algunos partidarios de ambos sistemas —no de todos, ni siquiera de un número suficiente— a unir sus fuerzas en su contra. Antes, en los últimos veintes y principios de los treintas, este antagonismo había sido mucho más evidente. En esos años el Comintern, controlado firmemente por los rusos, recibió instrucciones de seguir en todo el mundo la política del "Frente Unido desde abajo" o, para utilizar el lema que se extendió por todas partes, de la "lucha de clases". Esto significaba en la práctica el intento persistente de los comunistas por atraer a los trabajadores a un "Frente Unido" dirigido por los comunistas y separarlos de los líderes socialdemócratas, atacados como lacayos y aliados de la burguesía y, cada

vez más, como "social-fascistas"; porque se convirtió en táctica de los comunistas el negar toda diferencia real entre socialdemócratas y fascistas y acusar a los socialdemócratas de colaboración positiva con los fascistas contra la clase obrera. En todo el periodo de la subida al poder de los nazis en Alemania, los comunistas persistieron en su actitud, rechazando toda noción de acción común con los socialdemócratas en su contra.

En efecto, en todos los países donde los partidos integrantes del Comintern pudieron influir el curso de los acontecimientos, se siguió la misma política en términos generales, mientras el capitalismo pareció próspero y en vías de avance y después, cuando se hundió en la gran crisis de los primeros años treintas. No fue sino algún tiempo después que el movimiento obrero alemán fuera totalmente destruido que el Comintern cambió su línea, prescindiendo del lema de "lucha de clases" y de su política de "Frente Unido desde abajo". En Alemania los líderes que favorecieron un cambio de política antes de que Stalin estuviera dispuesto a efectuarlo —como Remmele y Neumann— fueron depuestos de la dirección, que quedó en manos del siempre dócil Thaelmann; y hubo purgas semejantes en algunos otros países —en particular de Kilbom en Suecia y algunos disidentes en los Estados Unidos—. Aunque la política del ala derecha socialdemócrata pudiera servirles de excusa, los comunistas siguieron indudablemente, en los últimos años de la década de los veinte y principios de los treintas, una desastrosa política responsable en gran medida de la victoria de Hitler en Alemania y del debilitamiento de la resistencia de la clase trabajadora en todo el mundo hasta las terribles consecuencias de la depresión y el surgimiento del fascismo.

En la propia Unión Soviética, es obvio que la subida al poder de los nazis en Alemania y la evidente falta de voluntad de los gobiernos inglés y francés de hacer nada efectivo para controlar la agresión nazi en Europa tuvo efectos muy serios sobre el desarrollo del sistema de gobierno y el clima de opinión bolchevique. Queda fuera de discusión que los grandes juicios por traición de finales de los treintas, donde tantos comunistas cayeron víctimas del absolutismo staliniano, estuvieron estrechamente ligados a los temores inspirados por el auge del nazismo y la declaración de hostilidad al comunismo de las potencias del Eje. Siempre será un punto a discusión en qué medida la degeneración del comunismo en los treintas se debió a la personalidad de Stalin o hasta qué punto Stalin encarnaba simplemente una reacción que se habría manifestado de no haber existido él con otros dirigentes. Parece evidente, sin embargo, que la suspicacia de Stalin y su ambición de poder personal fueron factores importantes que influyeron en los mé-

todos empleados para liquidar las críticas —aun las potenciales— contra el régimen y que, en esa medida, lo que se ha afirmado después de su muerte de los abusos del "culto a la personalidad" tiene cierta justificación real. No hay que olvidar, sin embargo, que la intolerancia y disgusto por las restricciones morales tradicionales fueron desde un principio características inherentes del bolchevismo, inclusive en tiempos de Lenin, ni que podían fundarse en muchas manifestaciones del mismo Marx, especialmente cuando escribía francamente a su amigo Engels. Stalin no fue, de ninguna manera, el inventor de esos aspectos de la conducta comunista, aunque contribuyó mucho a que esas manifestaciones se hicieran cada vez más extremas. Tampoco fue el desarrollo de la desigualdad económica como elemento de la planificación soviética en los treinta simplemente el resultado de las opiniones personales de Stalin. Es muy probable, en todo caso, que el estajanovismo y los demás incentivos económicos presentados con los Planes Quinquenales lograran un más rápido avance en la producción de lo que hubiera podido obtenerse sin ellos y pudieran justificarse por ello por quienes consideraran el éxito de los Planes como más importante que cualquier otra cosa. El temperamento personal de Stalin le facilitó sin duda la adopción de esta línea, porque no le hizo cobrar consecuencias de los valores que se estaban sacrificando para construir el poder soviético frente a un mundo hostil; pero aun aquellos que apreciaran más estos valores habrían podido adoptar la opinión de que había que sacrificarlos en interés de la supervivencia misma del poder soviético. Stalin no habría podido actuar como lo hizo, si sus actos hubieran producido un malestar real y profundo en la mayoría de sus colegas del Partido Comunista. Todas las pruebas demuestran que no sucedió así —quizás porque no se comprendió la iniquidad de sus métodos en todo su alcance, pero quizás también a pesar de haberse comprendido—. Las condiciones en las que se realizó la colectivización agrícola no dejan duda, en efecto, de la falta de escrúpulos y la insensibilidad comunistas frente al sufrimiento humano; y estas cualidades estuvieron presentes, no sólo en Stalin, sino en la mayoría de los dirigentes del Partido Comunista soviético —y probablemente también en la mayoría de sus miembros—. Esto no es sorprendente, en vista del legado de inhumanidad que el comunismo había heredado del pasado ruso; aunque fuera suficientemente terrible con todo y eso. Resulta difícil creer, no obstante, que la mayoría de los colaboradores de Stalin tuvieran plena conciencia, o siquiera alguna, de la medida en que se estaba efectuando la "fabricación de pruebas" en contra de sus opositores en los juicios por traición, aunque muchos deben haber sabido o, al menos, sospechado que mucho de lo contenido en las acusaciones no podía de hecho

ser cierto. Para los que estábamos afuera, como yo mismo, resultaba muy difícil formarse un juicio digno de crédito acerca de lo que estaba pasando en Rusia en los treintas; y dudo que haya sido mucho más fácil para los mismos rusos.

En todo caso, en los treintas parecía a la mayoría de los socialistas, aun a muchos fuertemente hostiles al comunismo, enormemente importante que la Revolución rusa sobreviviera y que la gran aventura de la planificación soviética tuviera éxito, tanto más cuanto que había tan pocos elementos capaces de alentarnos en los acontecimientos del resto del mundo y muchos más para aumentar nuestros temores en el avance casi sin oposición del fascismo en Europa. Por mucho que los socialistas se sintieran impulsados a criticar la filosofía comunista y sus manifestaciones prácticas en la Unión Soviética, la mayoría de ellos no estaban dispuestos a llevar su crítica hasta desear que el sistema soviético fuera derrocado por las fuerzas agrupadas activamente en su contra. Muchos profundamente hostiles al comunismo admiraban grandemente sin embargo las colosales realizaciones de la Unión Soviética al echar las bases de una economía industrial notablemente avanzada, al impartir la educación en una escala sin paralelos en ningún otro país —o, cuando menos, en ninguno de los países donde todavía la pobreza era casi primitiva— y al desarrollar los servicios sociales en un nivel altamente adelantado. Se sabía que todo esto se había logrado a expensas del consumo inmediato y había supuesto enormes sufrimientos del pueblo; pero muchos sostenían que estos sacrificios eran una condición inevitable del éxito económico y que, una vez logrado éste, vendría la compensación en más altos niveles de vida y en mayor libertad personal. En estas circunstancias se produjo una actitud bastante extendida de no ver los defectos de lo que se consideraba una economía socialista en surgimiento, con las mejores promesas; y los abusos se perdonaban, o simplemente se ignoraban para desaliento de los anticomunistas intransigentes, especialmente los exiliados, que infatigablemente negaban que los comunistas de la Unión Soviética tuvieran derecho a llamarse socialistas y estaban dispuestos a hacer causa común con cualquiera que proclamara su anticomunismo de una manera bastante estridente. Era menos fácil aun que en la actualidad discernir un camino razonable entre los partidarios extremos de todo lo que se hacía en la Unión Soviética y los adversarios extremistas del comunismo; pero la balanza pesaba más en los treintas del lado de la Unión Soviética, por la vehemencia con que los fascistas la atacaban y la mayoría de los socialistas, al menos los de izquierda, sentían una genuina admiración por sus realizaciones económicas.

Por encima de todo esto, muchos socialistas opuestos al comunismo

sentían cierta genuina admiración por el Partido Comunista y por la disciplina que éste ejercía sobre sus miembros. La dedicación de los comunistas a su Partido contrastaba con el relajamiento y hasta la indiferencia con que la gran mayoría de los socialdemócratas consideraban las demandas de sus partidos; y la diferencia se atribuía, en gran medida, al hecho de que los comunistas tenían una filosofía básica para guiarlos e inspirar su adhesión, mientras que los partidos socialistas occidentales no tenían ese lazo de unión en un credo común que los impulsara por igual. Esto no era, de hecho, totalmente cierto; porque el socialismo parlamentario tenía en realidad su propia filosofía, muy diferente de la del comunismo y basada más bien en una continuación de las tradiciones del liberalismo occidental que en una negativa de éstas. Era cierto, sin embargo, que el comunismo hacía demandas mucho mayores a sus miembros que la socialdemocracia y parecía en la práctica, a pesar de sus fulminaciones contra el "idealismo", la doctrina más idealista que inspiraba mucha mayor devoción práctica y disposición al sacrificio personal. En los países donde los comunistas no estaban en el poder, sino que constituían una minoría no aceptada e inclusive perseguida que intentaba derrocar el orden existente, la profesión de fe comunista suponía con frecuencia serios sacrificios personales, soportados gustosamente por la "causa"; y en la propia Unión Soviética, aunque sin duda el comunismo atraía a muchos arribistas y amantes del poder personal, había todavía un gran núcleo de devoción pura que los dirigentes podían aprovechar y muchos prestaban servicios genuinamente, por puro entusiasmo hacia la nueva sociedad que iba naciendo dolorosamente en el sentimiento de muchos. Aunque, en los treinta, el Partido Comunista de la Unión Soviética; hubiera sido ampliamente burocratizado —como estoy seguro que lo fue— y hubiera perdido mucho de su democracia interna con las manipulaciones de Stalin, la necesidad de construir el poder soviético para resistir al fascismo parecía todavía a muchos lo primordial e inspiraba genuinos sentimientos de aceptación gustosa del control centralizado del partido.

A pesar de todas las iniquidades practicadas en los treinta por Stalin y sus serviles subordinados, a pesar de la falta de escrúpulos de la colectivización agrícola y la negativa de la más elemental justicia a los supuestos kulaks y a pesar de la absoluta inmoralidad de los procesos mediante los cuales Stalin inventó acusaciones contra sus opositores, reales o imaginados; a pesar de la fantástica escala en que se realizaron las acusaciones de "trotskismo" y que el mismo Trotsky fue perseguido; a pesar de todo ello, creo que los que siguieron defendiendo a la Unión Soviética contra sus enemigos estuvieron esencialmente

en lo justo. Sin duda, Hider y Stalin se parecían en que eran autócratas totalitarios ávidos sobre todo de poder y carentes en absoluto de escrúpulos en cuanto a los medios. No obstante, existía entre ellos la gran diferencia de que buscaban el poder para fines distintos: Hider en persecución de un nacionalismo agresivo tendiente a conquistar el mundo para una raza supuestamente superior (una ambición que sólo podría realizarse venciendo en una guerra de agresión) y Stalin pensando en una revolución mundial de los explotados y sometidos, lo que colocaba básicamente a la Unión Soviética en el lado justo de los problemas internacionales, a pesar de todas las prácticas erróneas efectuadas para lograrlo. Se objetará a esta opinión que, de hecho, Stalin en los treinta no perseguía la Revolución mundial sino los intereses nacionales de la Unión Soviética; y es cierto en gran medida. No obstante, la Unión Soviética con todas sus perversiones, siguió siendo en los treinta un verdadero baluarte del socialismo contra el fascismo, que debía preferirse por amplio margen a pesar del evidente retraso de las facilidades de la vida civilizada. Era razonable esperar que, si la amenaza fascista a la existencia misma de la Unión Soviética hubiera podido eliminarse y la necesidad de sacrificar el nivel de vida en aras de la seguridad hubiera dejado de existir, la severidad de la dictadura soviética se habría reducido gradualmente y, bajo la presión popular, la libertad personal habría aumentado también gradualmente. Esto no significa necesariamente que en el curso del tiempo la Unión Soviética llegara a adoptar las instituciones de la democracia liberal tal como las entiende Occidente; pero era razonable esperar que los rusos, a su debido tiempo, elaborarían un modo de vida menos incompatible con las concepciones occidentales que la forma existente de dictadura de un solo partido. El Estado soviético tardaría quizás demasiado tiempo en "desvanecerse" como se había pronosticado; pero de seguro empezaría a "desvanecerse" una vez que la presión ejercida sobre él fuera definitivamente suprimida con la eliminación del fascismo.

En todo caso, eso era lo que yo deseaba y esperaba, en común con otros muchos observadores de las cuestiones internacionales durante los inquietos treinta; y creo que la esperanza era razonable. Dos décadas después, sigo abrigando la misma esperanza y creo que hay algunas señales de su realización en un perceptible relajamiento del control sobre la expresión de la opinión, así como en la otorgación de mayor importancia a las demandas de los consumidores. Sin duda, la dirección soviética es todavía dura y sigue desconfiando intensamente de Occidente; pero ¿no tiene derecho a abrigar desconfianza ante los antecedentes de la política norteamericana y el sometimiento de la Europa occidental a la insistencia norteamericana? Después de haber adoptado,

casi obligatoriamente, una línea rígida ¿se ha brindado suficientes incentivos a la Unión Soviética para modificarla en los últimos años? Obviamente no.

Sin embargo, en este capítulo deseo referirme más a los treinta que a la actualidad. Lo que quiero decir es que, en los treinta, era justo que los socialistas occidentales, a pesar de los errores de Stalin, estuvieran de parte de la Unión Soviética contra sus enemigos y se mostraran dispuestos a hacer causa común con ella contra la agresión fascista. Si se hubiera hecho esto, y si Hitler hubiera sido obligado desde un principio a hacer la guerra en dos frentes y no en uno solo, Occidente probablemente no habría sufrido el desastre de 1940 y la derrota nazi habría sido asegurada desde un principio. Tal como estaba la cuestión política en Occidente, en 1938-39, la izquierda era demasiado débil para insistir en una acción común aunque hubiera estado unificada para luchar en favor de ella —y no lo estaba—. Había opiniones socialistas divididas en la Europa occidental y en la Unión Soviética y la política de "apaciguamiento" llevó a la Europa occidental al borde del desastre irreparable antes de renunciar a ella y Gran Bretaña, con un nuevo gobierno, tuvo que luchar sola durante un tiempo para ser salvada por dos cosas, la entrada de los Estados Unidos en la guerra y la demente invasión de Hitler a la Unión Soviética. Estos dos sucesos contribuyeron a destruir al nazismo, pero no a lograr, salvo para ese propósito limitado, un acuerdo entre la Unión Soviética y Occidente; de modo que, cerca de veinte años después, el mundo sigue siendo presa de la "guerra fría" y sólo se evita una tercera Guerra Mundial por el prodigioso ritmo en que la fuerza de destrucción ha superado a todas las demás realizaciones humanas convirtiéndose en una amenaza a la supervivencia misma de la raza humana.

CAPÍTULO II

EL ECLIPSE DEL SOCIALISMO EN ALEMANIA

En el sexto volumen de esta *Historia*, traté de hacer la historia de la República de Weimar hasta el momento en que la depresión mundial empezó a sentirse seriamente en 1931 y de describir la continua erosión de los elementos democráticos en Alemania por el creciente predominio de los jefes militares y la ola cada vez mayor de sentimiento nacionalista. No hay duda que, desde 1924, hubo una rápida recuperación económica, hecha factible por grandes préstamos de capital, principalmente de los Estados Unidos. Estabilizada la moneda con el Plan Dawes, y una vez que los aliados renunciaron a sus pretensiones más fantásticas de reparación, Alemania se convirtió por unos años en un campo atractivo para la inversión de capital extranjero; y, mientras el capital afluyó en escala suficiente, se pudieron cubrir las nuevas demandas de reparaciones, a pesar de que resultaban todavía bastante poco realistas, no con un excedente real de capital alemán sino mediante la continua afluencia de fondos extranjeros. Esto no fue obvio, sin embargo, mientras se mantuvo la afluencia: los que suscribieron el Plan Dawes y los demás préstamos a Alemania recibieron sus intereses y se hicieron los pagos por reparaciones estipuladas en el Plan Dawes. La producción y las exportaciones alemanas aumentaron rápidamente; y los salarios, muy bajos en un principio, subieron gradualmente bajo la presión sindical. Se predijo con confianza que lo peor había pasado y que Alemania estaba en camino de una durable recuperación económica.

Esta situación continuó hasta 1928, cuando se hicieron evidentes los primeros signos de verdadera inestabilidad. Los norteamericanos, en medio de un gran auge en su propio país, empezaron a encontrar menos atractiva la inversión en el extranjero que la especulación en los Estados Unidos y la afluencia de capital norteamericano a Alemania disminuyó y llegó a detenerse casi por completo. A fines de 1928 se produjo una corriente inversa, a medida que las instituciones norteamericanas empezaron de hecho a retirar los capitales prestados a corto plazo a los alemanes, para emplearlos en obtener ganancias especulando en su país. Los alemanes, que habían estado utilizando estos préstamos a corto plazo en gran medida para la otorgación de créditos a largo plazo a sus clientes comerciales en Europa, se encontraron incapacitados para devolver de inmediato el dinero obtenido en préstamo e hicieron

todos los esfuerzos posibles por lograr préstamos en otros lugares para llenar el hueco. Pero otros países sufrían también de una escasez de fondos debida a la exportación de dinero por sus propios financieros ávidos de participar en las ganancias del auge norteamericano; y, aunque Alemania obtuvo importantes préstamos de Gran Bretaña y de otros países, las sumas así obtenidas también se colocaron de tal manera que no podían ser devueltas cuando los acreedores empezaron a presionar por el pago. Los problemas inmediatos de Alemania surgieron, no de la depresión en los Estados Unidos, sino del auge especulativo que allí se produjo y que elevó los precios de los valores en la Bolsa más allá de toda relación con las bien fundadas esperanzas de obtener utilidades en los negocios.

La situación financiera alemana era ya muy precaria cuando, en el otoño de 1929, el auge del mercado de valores norteamericano llegó abruptamente a su fin y una aguda caída en los precios de los valores empujó a multitud de imprudentes especuladores a pelearse por conseguir capitales líquidos para responder a sus pérdidas. El cambio del auge a la depresión en los Estados Unidos, lejos de facilitar las dificultades de Alemania o de los demás países europeos, las aumentó considerablemente al producir una verdadera arrebatifia para recuperar el dinero invertido en el extranjero. Por un tiempo, en 1930, se evitó la crisis absoluta; y, en el intervalo, las condiciones de los pagos por reparaciones se revisaron nuevamente en La Haya y se hizo otro intento por estabilizar la economía alemana con la ayuda de los préstamos que formaban parte del Plan Young. Las condiciones del Plan Young, no obstante, a pesar de que disminuían aún más la suma total que debían pagar los alemanes, eran todavía poco realistas, excepto en el supuesto de que siguiera la expansión continua, sosteniéndose los mismos precios, en la demanda de exportaciones alemanas; mientras esta demanda era obviamente disminuida, en serias proporciones, por las crecientes dificultades en las balanzas de pagos de los países compradores. El colapso de la Credit Anstalt en Austria había sido la señal del próximo desastre en las finanzas europeas; el gobierno laborista británico se enfrentaba a una crisis financiera que lo hizo caer ignominiosamente del poder en agosto; y los mismos norteamericanos despertaban poco a poco a la magnitud del desastre económico que afectó a tantos y tantos como castigo por los excesos especulativos de los años anteriores.

Al principio, las calamidades fueron máximas para los alemanes, porque no tenían reservas a las cuales recurrir y tenían que hacer frente a una acumulación de reclamaciones a las que era totalmente imposible para ellos responder. Entre 1924 y 1929, la industria alemana se había

reconstruido rápidamente con nuevos instrumentos de producción que podían producir a un precio bastante bajo si se utilizaban hasta el límite, pero cuyos costos de producción se elevaban agudamente cuando bajaban las ventas. Además, la base de la industria alemana de exportación era estrecha y dependía principalmente de un alto nivel de la demanda de bienes de capital, especialmente acero, productos mecánicos, eléctricos y químicos, que eran, en su mayoría, productos que solamente podían venderse mediante la otorgación de créditos amplios y eran, en todo caso, de los más expuestos a la restricción de la demanda en tiempos de depresión económica. Los alemanes se vieron frente a un desempleo creciente, e incapacitados para cubrir sus deudas con el extranjero.

En estas circunstancias se hicieron algunos intentos por paliar la situación de la economía alemana, en espera de momentos más favorables, mediante sucesivos expedientes temporales. En la primavera de 1931 la Moratoria de Hoover suspendió los pagos por reparaciones por un año, pero exigía aún a los alemanes que pagaran los intereses por los préstamos Dawes y Young. En los meses siguientes una serie de acuerdos establecieron una moratoria sobre el pago de las deudas a corto plazo de Alemania. Pero estos acuerdos, que tenían que renovarse al expirar un año después, eran totalmente inadecuados a la situación; tampoco atacó la raíz del problema el Acuerdo de Lausana de 1932, que reducía las reclamaciones aliadas por reparaciones a una fracción de su monto en 1930 y establecía una moratoria total sobre los pagos por reparaciones en los próximos cuatro años —aunque, cuando se hizo, muchos comprendieron por fin que el pago de las reparaciones probablemente no se reanudaría jamás. Nada de lo hecho controlaba la aguda caída de las exportaciones alemanas ni evitaba que el desempleo en Alemania asumiera terribles proporciones ni que los salarios de los que todavía tenían trabajo se redujeran drásticamente.

Estos duros golpes económicos, sobre un país que ya estaba en condiciones de gran inestabilidad política, llevó pronto a la República de Weimar a un ignominioso fin y a los nazis al poder absoluto. Por un momento, el político católico reaccionario Brüning intentó capear la tormenta con drásticas medidas deflacionistas y restricciones a las importaciones, que trajeron consigo una rápida caída en los niveles de vida alemanes —caída que los socialdemócratas y los sindicatos no veían cómo resistir—. La consecuencia política del régimen de Brüning fue una rápida disminución en el número de miembros de los partidos centristas —entre los cuales hay que contar a los socialdemócratas— y un rápido aumento en el apoyo a los extremistas: comunistas por una parte y nazis y nacionalistas por otra. En las elecciones generales de 1928 los

nazis habían podido sacar electos sólo 12 miembros para el Reichstag; en julio de 1932 obtuvieron 230 y 13 750 000 votos. Es verdad que en las siguientes elecciones de noviembre de 1932 su votación bajó a 11 750 000 y el total de miembros elegidos a 196; y muchos creyeron por un momento que el nazismo había pasado su etapa cumbre y declinaría rápidamente. Pero dos meses después, en febrero de 1933, cuando Hitler ya era Canciller a pesar del retroceso de noviembre, la votación de los nazis subió a 17 250 000 y, expulsados ya los comunistas del Reichstag, tenían una clara mayoría en conjunción con sus 52 aliados nacionalistas.

El gobierno de coalición encabezado por los social-demócratas había caído del poder en marzo de 1930, cuando los colaboradores de los social-demócratas exigieron una drástica disminución de los subsidios de desempleo y los servicios sociales. El gobierno de Brüning, que lo sustituyó, duró hasta junio de 1932, cuando fue depuesto en favor de un gabinete nacionalista de derecha encabezado por Von Papen. Von Papen, cada vez más impopular, permaneció en el poder hasta diciembre de 1932 y fue sustituido por Von Schleicher, miembro también de la antigua ala derecha, que hizo un breve intento por conciliar a los sindicatos, pero fue eliminado por el presidente Hindenburg al mes siguiente y sustituido por Hider, a quien el presidente obligó a entrar en coalición con los nacionalistas y aceptar a Von Papen como Vicecanciller. En la práctica, sin embargo, la coalición nunca fue muy real y el poder quedó totalmente en manos de los nazis. Muy pronto, el líder nacionalista Hugenberg fue obligado a renunciar y su Partido Nacionalista fue absorbido forzosamente dentro del Partido Nazi. Bajo los nazis, el Partido Socialdemócrata fue completamente destituido y el movimiento sindical libre compartió su suerte, siendo integrados sus miembros, por la fuerza, dentro del nuevo "Frente Laboral" dirigido por los nazis y controlado por ellos. El Partido Comunista ya había sido proscrito y empujado a la clandestinidad; y los partidos burgueses también fueron liquidados sin piedad. Los nazis se dedicaron, con la política de *Gleichschaltung*, a sujetar bajo el control nazi a toda organización influyente en la sociedad alemana y a suprimir todo posible punto de oposición. Los líderes social-demócratas —los que no fueron apresados y liquidados— huyeron al extranjero y trataron de establecer en Praga un cuartel general de propaganda para Alemania, pero no pudieron llevarlo a efecto. Miles de socialistas y sindicalistas e inclusive de burgueses liberales fueron asesinados o golpeados y confinados en campos de concentración donde fueron tratados con la mayor brutalidad. Las Iglesias, protestante y católica, fueron también atacadas con vehemencia, excepto cuando se sometían totalmente. Toda Alemania quedó pronto

sometida a una dictadura mucho más brutal y completa que la de la Italia fascista.

Además, el nazismo alemán estuvo animado siempre por sentimientos que lo hacían prodigiosamente peligroso para el resto del mundo. En su exaltación de la fuerza bruta y de la superioridad racial del pueblo alemán era incapaz de aceptar como un hecho que los ejércitos alemanes hubieran sido derrotados en el campo de batalla, y recurrió al mito de la "puñalada por la espalda", explicando la *débacle* militar como consecuencia de la traición a los soldados por civiles que habían perdido el coraje o eran traidores deliberados a la causa alemana. Cualquiera que, a la hora de la derrota, hubiera aceptado la Paz de Versalles, llamada generalmente el *Diktat* de Versalles, o hubiera aceptado después la política de "cumplimiento de los compromisos" con el Plan Dawes, era acusado de traidor; y se consideraba que la República de Weimar en general encarnaba esta despreciable actitud de sumisión y era fundamentalmente contraria a las necesidades del pueblo alemán de un régimen que encarnara su sentido de superioridad racial y de autoafirmación. Todo sufrimiento experimentado por un alemán leal, todo obstáculo en el camino de la capacidad alemana para lograr un modo de vida satisfactorio, toda frustración, cualquiera que fuera su naturaleza, se atribuía a las maquinaciones de hombres malvados que se habían hecho dueños de la sociedad alemana y utilizaban su poder para rebajarla o desintegrarla. Se dijo a los desempleados que su falta de medios para ganarse decentemente la vida se debía a las malas prácticas de los enemigos del pueblo, que se enriquecían a sus expensas. Se acusó a los banqueros de negar créditos so pretexto de perseguir la estabilidad monetaria; a los comerciantes y asociaciones de comercio de conspirar para cobrar en exceso a los consumidores; y estos ataques eran reforzados identificando a los culpables con elementos extraños que se habían abierto camino hasta ocupar posiciones claves en la economía alemana; sobre todo los judíos, de los que se decía que dominaban los más altos campos de las finanzas y el comercio y que utilizaban su influencia deliberadamente para arruinar y degradar a los elementos honestos, nórdicos, que constituían verdaderamente el pueblo alemán. Con frecuencia, estas denuncias de personas y grupos que poseían poder dentro de la República de Weimar llevaba en apariencia un fuerte tono radical que, de hecho, llegó a alarmar a muchos capitalistas y a muchos miembros de la clase media relativamente acomodados. Pero dentro de todo ello había un furioso rencor contra el movimiento obrero, al que se atacaba por su amplio pacifismo y su devoción a las formas de parlamentarismo democrático incompatibles con las demandas del nacionalismo militante y la devoción a la reafir-

marión de los derechos alemanes. El antisemitismo tenía hondas raíces en la sociedad alemana mucho antes que los nazis lo convirtieran en principio básico de acción e hicieran de la posesión de sangre judía una razón suficiente para negar los más elementales derechos de humanidad.

El programa original del Partido Nazi, redactado en 1920 principalmente por el mecánico Gottfried Feder, comenzaba, como el primero de sus 25 puntos, con una demanda de "unión de todos los alemanes en un Estado pangermano (*QGrossdeutschland*^{*)}), de acuerdo con el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación". No se explicaba si esta *Grossdeutschland* debería incluir regiones donde los alemanes formaban sólo una minoría de la población; pero la proposición de unir a *todos* los alemanes parece suponer esto, aunque la referencia a la autodeterminación para todos los pueblos parezca negarlo. En la práctica, por supuesto, los nazis nunca se preocuparon por los derechos de nadie que no fuera alemán. El punto 2, sin embargo, sólo exigía que el pueblo alemán tuviera "derechos iguales a los de otras naciones" y que los Tratados de Versalles y St. Germain fueran abrogados. El punto 3 demandaba el *Lebensraum* * para el sostenimiento del pueblo alemán y el desahogo de su excedente de población reafirmando así las pretensiones colonialistas de Alemania.

Hasta aquí el programa era simplemente ultranacionalista. En el punto 4 establecía que sólo personas de sangre alemana podían ser ciudadanos del Estado alemán o podían ser considerados como compatriotas y establecía como corolario explícito que "ningún judío puede ser considerado como compatriota". Así, se proclamaba el antisemitismo, desde un principio, como parte esencial de la doctrina nazi, sin mencionar ningún otro caso particular de no alemanes. El programa pasaba entonces, en términos más generales, a las relaciones entre alemanes y no alemanes en la proyectada sociedad pangermana. El punto 5 establecía que los no alemanes sólo podrían vivir dentro del Estado alemán como extranjeros y sujetos a leyes especiales sobre los extranjeros. El punto 6 limitaba los derechos de voto a los ciudadanos (es decir, a los alemanes) y excluía a todos los no alemanes de cualquier cargo público, central, regional o municipal. Declaraba también la oposición a "la administración parlamentaria democratizante en la cual los puestos se designan por favores de partido, sin consideración al carácter ni a la capacidad".

Después venía, en el punto 7, la demanda de que "los Estados se dediquen a asegurar que todo ciudadano tenga una oportunidad justa de vivir decentemente y de asegurar su vida", con el significativo aña-

* "Espacio vital". [E.]

dicta de que "si resulta imposible sostener a toda la población, los extranjeros deben ser expulsados del Estado". El punto 8 exigía no sólo la prohibición absoluta de toda ulterior inmigración de no alemanes, sino la expulsión de todos los extranjeros que hubieran entrado en Alemania desde agosto de 1914. Venía entonces, en el punto 9, la demanda de que derechos y deberes fueran iguales para todos los ciudadanos y, en el punto 10, la proclamación de que el trabajo, mental o físico, es "el primer deber de todo ciudadano" y que ningún ciudadano debe realizar un trabajo deletéreo para la comunidad, sino que debe contribuir al beneficio de todos.

Estos diez puntos forman una especie de preámbulo general a las demandas más concretas que seguían. La primera de éstas, contenida en el punto 11, es bastante violenta. Exigía categóricamente la abolición de todos los ingresos no producto del trabajo. Después, en el punto 12, se hacía una demanda de confiscación "hasta el último centavo", de todas las ganancias procedentes de aprovechamiento de la guerra, junto a la declaración que todas las ganancias personales resultantes de la guerra deben considerarse traición a la nación. El punto 13 pedía que el Estado confiscara todos los *trusts* y el 14 que el Estado participara en las utilidades de todas las grandes industrias. El punto 15 solicitaba un considerable aumento en las pensiones estatales para los retirados de edad avanzada.

Después venía, en el punto 16, una demanda de "la creación y mantenimiento de una clase media sólida", seguida por la demanda explícita de que las grandes tiendas fueran comunizadas y arrendadas a pequeños comerciantes y que, en todos los contratos de suministros para el Estado, se prefiriera a los pequeños comerciantes. El punto 17 se refería a la reforma agraria, pidiendo la expropiación sin compensación de la tierra necesaria para fines nacionales, la abolición de la renta de la tierra y la evitación de toda especulación sobre la tierra. El punto 18 era muy general: exigía "medidas inflexibles contra todos los que actúan en detrimento del interés público" y castigo de muerte para todos los "traidores, usureros, explotadores, etc.", independientemente de raza o credo. El punto 19 pedía la sustitución del Derecho Romano, "que sirve a un ordenamiento materialista del mundo", por el derecho consuetudinario alemán.

El punto 20 se refería a la educación y la cultura. Establecía que "para hacer posible que todo alemán capaz y laborioso obtenga una educación superior y con ello la oportunidad de elevarse a puestos importantes, el Estado deberá organizar totalmente el sistema cultural de la nación". Los planes de estudio de todas las instituciones educacionales se trazaban "de acuerdo con las necesidades de la vida práctica".

La "concepción de la Idea de Estado" sería inculcada en las escuelas desde los primeros años. Los hijos de padres pobres con talento especial serían educados a expensas del Estado. Después, el punto 21 determinaba que era deber del Estado elevar el nivel de salud de la nación proporcionando centros de atención para la maternidad, prohibiendo el trabajo de los niños, introduciendo juegos y gimnasia obligatorios, y alentando lo más posible todas las asociaciones dedicadas al bienestar físico de la juventud.

En el punto 22 se pedía la abolición del ejército profesional para sustituirlo por un "ejército nacional". A esto seguía, en el punto 23, una serie de demandas referentes a la prensa. Debía actuarse contra todos los que utilizaran la prensa para propagar y diseminar "mentiras políticas". Todos los editores y periodistas de diarios publicados en Alemania debían ser ciudadanos alemanes. Los periódicos no alemanes sólo podrían publicarse con autorización del Estado y no en alemán. No podrían tener intereses en los periódicos quienes no fueran alemanes ni ejercer influencia alguna sobre ningún periódico alemán. Los periódicos que transgredieran el interés común serían suprimidos. Se ejercería acción legal contra "cualquier tendencia en arte o literatura que ejerciera un efecto desintegrador sobre la vida del pueblo" y cualquier organización que favoreciera esas tendencias sería disuelta.

El punto 24 se refería a la religión. Pedía la libertad para todos los credos religiosos dentro del Estado, "en tanto que no pongan en peligro su existencia ni ofendan la moral ni el sentido ético de la raza alemana". Declaraba después que el Partido Nazi "representa el punto de vista del cristianismo positivo sin inclinarse a ninguna fe en especial" y, además, postulaba la oposición del Partido al "espíritu materialista judío dentro y fuera" y afirmaba que la recuperación duradera de la nación sólo podía lograrse desde dentro, sobre el principio del "Bien del Estado por encima del Bien del individuo".

Finalmente, para facilitar la realización de todas las demandas de los puntos anteriores, el punto 25 pedía "la creación de una fuerte autoridad central en el Estado y el control incondicional por el Parlamento político de todo el Estado y de todas sus organizaciones". Demandaba entonces la formación de comités de profesionales y de comités representativos de los diversos estados del país, para asegurar que las leyes promulgadas por las autoridades centrales fueran cumplidas en los distintos estados de la Unión. En las palabras finales del Programa, los dirigentes del Partido se comprometían a promover su ejecución "a cualquier precio, con el sacrificio de sus vidas".

Este programa, que Hitler declaró inalterable seis años después, en 1926 —aunque de hecho fue considerablemente alterado cuando

los nazis llegaron al poder— tiene cuatro características importantes. Es pangermano, antisemita, autoritario y pequeño-burgués. Lo más notable es la falta de toda referencia a un 'líder' como poseedor de un papel especial en su formulación o en su realización. Data, en efecto, de un periodo anterior al momento en que Hitler se constituyó en el líder y antes que la concepción misma de un solo líder carismático se hubiera definido. Fue el producto colectivo de un grupo, ninguno de cuyos miembros con excepción de Hider estaba destinado a desempeñar un papel principal en el pleno desarrollo del nazismo; y la manera misma de redactarlo lo relaciona claramente con la situación que existía en Alemania en los años inmediatamente posteriores a 1918 —años de extrema dislocación económica y social, gran desempleo, moneda inestable y extravagantes demandas aliadas de reparaciones que Alemania no podía en absoluto satisfacer—. En la raíz misma estaba un nacionalismo pangermano agresivo; pero estaba a enorme distancia del nacionalismo aristocrático de viejo cuño de la antigua clase dominante y, en sus aspectos sociales y económicos, era vehementemente anticapitalista lo mismo que antisocialista. Su énfasis en los derechos del pequeño comerciante —mucho más definido que su solidaridad con la causa de los campesinos— destaca su carácter esencialmente pequeño-burgués y está claramente ligado a su total anti-semitismo por el hecho de la preeminencia judía en el terreno de los negocios. Finalmente, en su visión general es fuertemente estatista, centralizador y autoritario y contiene los fundamentos de la política de *Gleichschaltung* que los nazis se dispusieron a poner en práctica cuando llegaron al poder. Es socialista, si lo es en alguna medida, sólo en el sentido de pedir la total subordinación del individuo a las exigencias del Estado y de proclamar la responsabilidad del Estado en la ordenación y planeación de las cuestiones económicas, lo mismo que de las políticas y sociales. Sujeta a este principio dominante, concibe claramente la conservación de la empresa privada como base principal de la acción económica; pero, al mismo tiempo, declara la guerra a los *trusts* y grandes concentraciones de capital —aunque no exige el fraccionamiento de la industria en gran escala, sino sólo la participación del Estado en sus utilidades—. Es antitérrateniente y exige la completa desaparición de todas las formas de renta no producto del trabajo; pero no se declara siquiera, específicamente, favorable a la división de las grandes propiedades rurales, aunque sí a la abolición de la renta de la tierra. Su objetivo no es restablecer el sistema derrocado en la Revolución de 1918, sino crear una nueva Alemania donde el poder esté en manos de un pueblo alemán inspirado por intenso fervor nacionalista y vehemente agresividad contra los extranjeros de toda especie —sobre todo contra los

judíos y, después, contra otros residentes extranjeros, principalmente eslavos— en territorios que ellos consideran incluidos dentro de las fronteras del "Gran" Estado alemán. El nazismo, cualesquiera que hayan podido ser sus desarrollos posteriores, ciertamente no comenzó como el último golpe del capitalismo contra la creciente ola del socialismo, sino como un intento de elementos nacionalistas de clase media por librarse de las consecuencias de la derrota de Alemania en la guerra por reconstruir el poder de la nación alemana sobre la base de un estado unipartidista, fuertemente centralizado y autoritario.

El nazismo fue sin embargo, desde sus inicios, el decidido antagonista del movimiento socialista y obrero. Los nazis odiaban al socialismo y a los sindicatos asociados con él por diversas razones de fuerza. Una era que, en opinión de los nazis, inclusive los socialistas mayoritarios estaban teñidos de internacionalismo y de pacifismo y de rechazo de las ideas raciales que constituían la fuerza unificadora detrás del movimiento nazi. No pocos judíos ocupaban importantes posiciones en el movimiento socialista; y era fácil representarlos como poseedores de mucha mayor influencia dentro del movimiento de la que realmente ejercían—inclusive de afirmar que lo controlaban a través de una conspiración secreta inspirada por los propósitos más siniestros.

En segundo lugar, el comunismo alemán era definitivamente parte de un movimiento bajo inspiración y dirección eslavas, y aceptaba las órdenes de Moscú como las determinantes de su política. Estas órdenes emanaban sin duda, en definitiva, no del gobierno soviético ni del Partido Comunista soviético, sino del Comintern, que era en cierta forma un organismo supranacional, representativo de la clase trabajadora de todo el mundo. Esto, sin embargo, no lo habría hecho más aceptable para los nazis, cuya doctrina era el nacionalismo alemán agresivo; y, en la práctica, como todos sabían, el control del Comintern estaba en manos de los rusos y su política era trazada de acuerdo con los intereses de la Unión Soviética. Es verdad que los comunistas alemanes y los nazis habían trabajado en algunas ocasiones conjuntamente, en hostilidad a la República de Weimar, y que lo habían hecho por recomendación del Comintern, que sostenía la errónea opinión de que los nazis, al derrocar la República, estarían preparando, sin saberlo, el camino a la Revolución comunista. Esta cooperación, sin embargo, no podía afectar la oposición fundamentalmente irreconciliable entre nazismo y comunismo; y los comunistas alemanes no obtuvieron beneficio alguno de su disposición a unirse con los nazis contra la República de Weimar. Los social-demócratas estaban, por supuesto, en una posición muy distinta en este aspecto: eran profundamente hostiles a los comunistas y, además, eran los principales defensores de la República,

aun cuando estuviera gobernada por sus enemigos declarados, como Brüning y Von Papen. Pero, a los ojos de Hider, eran también execrables marxistas, exponentes del materialismo "judío" y enemigos del espíritu nacional y, en consecuencia, sólo servían para ser eliminados al igual que sus opositores comunistas. Su mayor pecado era que no hacían diferencias, oponiéndose por igual a las pretensiones de la propiedad privada y a las ambiciones personales legítimas de los buenos militantes alemanes que querían elevarse a posiciones de superioridad social afirmando su calidad al servicio del espíritu nacional. La socialdemocracia alemana, a pesar de todas las confusiones en sus intentos por defender la República de Weimar era, en opinión de los nazis, el partido de los poltrones y favorecedores de la mediocridad contra la autoafirmación y confianza en sí mismo naturales al espíritu nórdico, constituyendo así el mayor obstáculo al renacimiento nacional y a la victoria sobre las fuerzas que mantenían reducida a Alemania. No podía catalogarse, por supuesto, al lado del comunismo como movimiento controlado desde el extranjero; pero no por ello quedó menos señalado para ser destruido y, en la medida de lo posible, se le identificó con el comunismo como otro exponente del punto de vista anti-nacional marxista.

En cuanto a los sindicatos, los nazis consideraron necesario ser más circunspectos, hasta que el poder político pasara definitivamente a sus manos. Mientras los nazis desearon reunir apoyo entre los trabajadores industriales, en los años de la lucha por el poder, no intentaron crear sus propios sindicatos para oponerlos a los sindicatos "libres" predominantemente socialistas o a los pequeños sindicatos católicos asociados en su mayoría dentro del Partido Católico centrista. En 1928 habían establecido, es cierto, un organismo llamado N.S.B.O. (Organización Laboral de Células Nacional-socialistas) para actuar como instrumento de reclutamiento del partido en las fábricas y sitios de trabajo; y este organismo, reorganizado en 1931 bajo la dirección de Reinhold Machow, pronto estableció células en casi todas las fábricas y logró un considerable número de miembros, pero se impidió su participación en las negociaciones sobre salarios o que usurpara otras funciones ordinarias de los sindicatos. Actuaba solamente como organismo político de afiliación al nazismo de los obreros y reclutamiento para el ejército privado de camisas pardas de los nazis, las S.A. Los sindicatos siguieron pues desempeñando sus actividades, negociando los contratos colectivos, sin que los nazis, como partido, tomaran parte —aunque esta actitud produjo considerables disensiones entre los dirigentes nazis—. Gregor Strasser, en especial, que tenía un alto puesto en el distrito en Berlín y formaba parte del ala izquierda del movimiento nazi en la política social

y económica, deseaba que el Partido adoptara una línea definitivamente anticapitalista y hubiera querido que tratara decididamente de ganarse el apoyo sindical. Strasser quiso también, en los últimos meses de 1932, cuando la influencia nazi pareció decaer rápidamente después de su gran avance a principios del año, llegar a un acuerdo con el general Von Schleicher y los sindicatos contra las fuerzas socialmente reaccionarias agrupadas en torno a Von Papen, en la esperanza de que semejante alianza permitiría a los nazis obtener una suficiente participación en el poder, en una coalición con Schleicher como Canciller, para poner en práctica gran parte de su programa siguiendo una orientación anticapitalista. Pero el resultado de la rebeldía de Strasser fue que, a principios de diciembre de 1932, se le obligara a renunciar a todos sus cargos en el Partido Nazi frente a la decidida oposición de Hider a su política. Esto sucedió en un momento en que Hider, decidido a subir al poder sólo por medios constitucionales, contenía la presión de muchos de sus partidarios que querían tomar el poder por un golpe de Estado y muchos de ellos pensaban que estaba dejando pasar su oportunidad. Los nazis, en julio de 1932, habían ganado una sonada victoria electoral que les dio 230 asientos en el Reichstag de un total de 607 —cerca de las dos quintas partes del total—, y se habían entablado negociaciones entre Hider y el presidente Hindenburg, en las cuales el presidente había consentido en incluir a Hider en el gobierno como vicescanciller con Von Papen como jefe del gobierno —una oferta que había sido airada y despreciativamente rechazada—. Von Papen había permanecido como canciller, aunque sólo contaba con una inútil minoría en el nuevo Reichstag, cuyo presidente era el nazi Hermann Goring. Von Papen, derrotado en el Reichstag, utilizó la autoridad del presidente para disolverlo; y se efectuaron nuevas elecciones a principios de noviembre. En estas elecciones, los nazis perdieron más de dos millones de votos y bajaron de 230 asientos a 197, mientras los comunistas subieron de 89 a 100 y los aristócratas nacionalistas de 37 a 51. Los socialdemócratas bajaron de 133 a 121 y el Partido Centrista de 97 a 89. Así la extrema derecha y la extrema izquierda ganaron a expensas de los partidos de centro y de los nazis. Además, en las semanas siguientes, los nazis tuvieron pérdidas aun mayores en las elecciones locales para las Dietas de los estados y parecían perder su influencia en escala creciente. Éstas fueron las circunstancias que condujeron a la caída de Von Papen, que era odiado por el centro lo mismo que por los nazis y a la elevación del general Von Schleicher al cargo de canciller, aunque no tenía posibilidades de poder gobernar el país si no lograba cierto apoyo de los nazis y del centro. Siguió un remolino de intrigas. Gregor Strasser, que quería llegar a un acuerdo con

Schleicher, fue absolutamente derrotado dentro del Partido Nazi y expulsado de todos sus cargos. Schleicher, en su intento por llegar a una salida de transacción para las dificultades económicas de Alemania, contrarió a Hindenburg y los nacionalistas al proponer reformas agrarias que incluían cierta redistribución de las grandes propiedades rurales de la Alemania oriental, y Hindenburg rechazó su demanda de una nueva disolución del Reichstag, para efectuar nuevas elecciones. Los nacionalistas extremistas querían que se disolviera el Reichstag, pero que no se realizaran elecciones —en otras palabras, querían un golpe que instaurara una dictadura presidencial y eliminara la Constitución de Weimar—. Hindenburg, profundamente desconfiado de Hider, quería que Von Papen volviera como canciller, pero comprendió que semejante gobierno carecería de base suficiente sin el apoyo nazi y trató nuevamente de persuadir a Hider para que fuera vicescanciller en un gabinete presidido por Von Papen donde carecería de poder efectivo. Hider quería la cancillería, pero se negaba a intentar tomar el poder por la fuerza. Hindenburg, que sostenía la necesidad de un gabinete de "concentración", basado en el apoyo de una mayoría del Reichstag, se negó a aceptar a Hitler como canciller en su calidad de líder de un partido. Pareció que se había llegado a un completo *impasse*.

Se encontró una salida cuando Hider llegó al acuerdo con los dirigentes de los Partidos Nacionalista y Centrista y con Von Papen, de que él sería canciller y Von Papen vicescanciller en un gobierno de coalición donde los nazis estarían definitivamente en minoría. En estas condiciones, Hindenburg fue inducido a aceptar a Hitler como canciller, declarando claramente que lo designaba, no como líder de los nazis, sino como representante de una concentración de la opinión nacional. Al hacer esto, Hindenburg y los dirigentes de los demás partidos tenían la equivocada impresión de que podrían controlar a los nazis y que el propio Hider se había comprometido a no utilizar su cargo para los fines del partido. El líder nazi se vio, en efecto, obligado a aceptar a Von Papen como Primer Ministro de Prusia, además de vicescanciller; pero el nazi Frick se convirtió en Ministro del Interior del Reich y Góring asumió el mismo cargo en Prusia. El nacionalista Hugenberg ocupó dos ministerios —Comercio y Agricultura— en el Reich y en Prusia. El conservador barón Von Neurath permaneció como Ministro de Relaciones Exteriores y los demás cargos del gabinete fueron otorgados en su mayoría a amigos y partidarios de Hindenburg y Von Papen. Los reaccionarios de viejo cuño confiaban en haber maniobrado para neutralizar a Hider y en que habían consolidado su propio poder.

Pronto se vieron desalentados. Goring, desde su ventajoso puesto en el Ministerio del Interior de Prusia, se dedicó de inmediato a desplazar a todos los altos funcionarios policiacos que no eran dignos de confianza desde el punto de vista nazi y a sustituirlos por gente leal al Partido. Procedió entonces a aumentar las fuerzas de policía, mediante reclutamientos en masa de agentes especiales, procedentes en su mayoría de las S. A. y las S. S. y a emitir una serie de órdenes que eran, de hecho, incitaciones a la violencia policiaca, incluyendo la seguridad de que recibirían pleno apoyo por las más brutales medidas contra los "enemigos del Estado" y especialmente contra los comunistas. "Los oficiales de la policía que utilicen armas de fuego en la ejecución de su deber pueden contar con todo el apoyo, independientemente de las consecuencias de sus actos", declaraba la orden de Goring del 17 de febrero de 1933. En lo sucesivo, no había límite prácticamente a la violencia con que podía actuarse, no sólo contra los comunistas sino contra los socialdemócratas e inclusive los opositores burgueses moderados de la doctrina nazi. Se otorgó a la policía poderes virtualmente ilimitados para romper y dispersar las reuniones y se sometió a la prensa a un estricto control que impidió la más ligera crítica a la política nazi. Muchas personas fueron muertas y muchas más golpeadas por los matones de la S. S. y la S. A., reclutados como policías o sin ser molestados por ésta. Los comunistas intentaron convocar a una huelga general, que fue fácil y brutalmente sofocada. Inclusive las reuniones del Partido Centrista fueron disueltas después que Hider rechazó las demandas centristas de cierta libertad constitucional.

Junto a esta sistemática campaña de violencia se hizo un enorme esfuerzo electoral en la esperanza de obtener una mayoría en el nuevo Reichstag, que debía elegirse a principios de marzo. Cuando terminaron las elecciones, los nazis habían ganado 288 asientos de 647, aumentando considerablemente su fuerza en relación con las elecciones de julio de 1932 —su anterior momento de triunfo— pero aún sin llegar a una clara mayoría. Los socialdemócratas, a pesar del terrorismo practicado a sus expensas, todavía pudieron obtener 120 miembros, en comparación con los 133 de julio y los 121 de noviembre de 1932 y los comunistas 81, en relación con 89 y 100 en las dos elecciones anteriores. El Partido Centrista sacó 73 diputados, mientras que antes había obtenido 75 y 70; todos los demás partidos obtuvieron en conjunto 14 asientos. El Partido Popular en un tiempo poderoso —el de Stresemann— había quedado reducido a dos asientos. Además los comunistas, a pesar de su triunfo relativo frente a la terrible persecución, quedaron de hecho excluidos de toda participación en el nuevo Parlamento. La mayoría de sus representantes fueron pronto encarcelados

o enviados a campos de concentración establecidos por nuevas disposiciones de Goring y muchos socialdemócratas compartieron su suerte. Estas exclusiones dieron a los nazis la mayoría absoluta que los electores les habían negado y los capacitó para pasar por encima de sus colegas nominales en el gobierno de coalición. Procedieron a presentar ante el Reichstag un proyecto de ley de "Autorización", que de hecho abrogaba la mayor parte de la Constitución y autorizaba al gobierno a dictar leyes con carácter obligatorio sin necesidad de aprobación del Reichstag, aboliendo así, prácticamente, hasta las apariencias de un gobierno parlamentario. Esta medida se aprobó por 441 votos contra 94 de los socialdemócratas—votando en apoyo de los nazis el Centro y los partidos menores, así como los nacionalistas.

El Partido Comunista había sido declarado ilegal en febrero, antes de efectuarse las elecciones, aunque los votantes podían votar por sus candidatos, si así lo deseaban, en las elecciones de marzo. Después de la legalización, lo que quedaba del Partido pasó a la clandestinidad, siendo arrestados algunos de sus dirigentes y enviados a los campos de concentración, mientras otros escapaban al extranjero y unos pocos permanecían en el país para proseguir la labor como fugitivos de la justicia nazi. Los socialdemócratas, excepto los que fueron arrestados o asesinados, pudieron como ya hemos visto ocupar sus asientos en el Reichstag; y el partido, aunque sujeto a violenta persecución, conservó por corto tiempo su existencia legal. Hizo, en efecto, desesperados esfuerzos por ajustarse al gobierno nazi, en la esperanza de poder conservar sus propiedades y su organización. Otto Wels, su dirigente, renunció a su puesto en la Internacional Laborista y Socialista cuando ese organismo denunció enérgicamente al régimen nazi; y, en abril, el partido eligió un nuevo Comité Central, excluyendo a los dirigentes que ya habían huido al extranjero. Pero esta semirrendición no les valió de nada. El 10 de mayo Goring ocupó los edificios y las oficinas de los periódicos del partido y confiscó sus fondos. A pesar de ello, los socialdemócratas, una semana después, hicieron acto de presencia en el Reichstag y votaron en favor de la declaración de Hider sobre política exterior, sólo para que se les recompensara, al siguiente mes, con un decreto de Frick prohibiendo toda futura actividad del partido, excluyendo a sus miembros de todos los parlamentos y organismos de los gobiernos locales y, finalmente, cerrando todos sus locales y suprimiendo sus periódicos y editoriales. Por entonces muchos más de sus dirigentes habían huido al extranjero o habían sido arrestados; mientras que Otto Wels y sus partidarios habían establecido una oficina general del partido, en el exilio, en Praga.

En líneas generales, los nazis lograron establecer su nuevo orden

casi sin resistencia: tenían en sus manos tan completamente los medios de fuerza y los aplicaron tan despiadadamente utilizando la violencia no sancionada por la ley o legalizada que jamás pudo ser impedido. Los socialdemócratas demostraron al principio cierta firmeza personal, al acudir al Reichstag a votar contra el proyecto de ley de "Autorización"; pero no hicieron ningún intento de oponerse a la fuerza con la fuerza y dejaron que el "Ejército" de su partido, el Reichsbanner, fuera destruido sin intentar utilizarlo contra las tropas de choque nazis. Cualquier intento de ese tipo habría estado condenado al fracaso, aun cuando los comunistas y los socialdemócratas hubieran olvidado sus diferencias y actuado conjuntamente en defensa de la República —cosa que ninguno de los dos partidos estaba dispuesto a hacer—. Cuando Von Papen suprimió al gobierno socialdemócrata de Prusia en julio de 1932, fue la última oportunidad en que semejante resistencia hubiera podido tener cierto éxito; y aun entonces las posibilidades de triunfo habrían sido muy pequeñas. El Reichsbanner, aunque bastante numeroso, casi no tenía armas; y los comunistas se habían manifestado de lo más hostiles a los socialdemócratas prusianos, que, además, no eran mayoría en la Dieta prusiana y habían permanecido en el poder sólo porque no había una mayoría capaz de unificarse en su contra. Las S.A. —y todavía más las S.S.— estaban relativamente bien armadas; es más, el Reichswehr, muy bien armado, y el Stahlhelm de los nacionalistas se habrían alineado en su contra. El gobierno prusiano de Otto Braun y Karl Severing habría sido derrotado con toda seguridad en caso de intentar una resistencia armada ante Von Papen en vez de rendirse, no sin protestar por la demostración de fuerza. Sin embargo, en ese momento la resistencia era aún posible; mientras que posteriormente tal posibilidad ya no existía en la práctica. Otro factor importante que inclinó la balanza en contra de la resistencia al golpe de Von Papen fue, desde luego, la actitud de los sindicatos que, dirigidos por Theodor Leipart, se manifestaron partidarios de la sumisión y mantuvieron una política de abyección frente a la subsecuente subida al poder de Hitler y Goring. Ninguna ventaja sacaron de esta abyecta sumisión los líderes sindicales, que habían esperado salvar así sus fondos y locales y que se les permitiera conservar una sombra de existencia organizada. El 1.º de mayo de 1933, los nazis convirtieron el antiguo Día del Trabajo de los socialistas en un gran festival nazi bajo los auspicios del recién establecido Frente Laboral; al día siguiente ocuparon todos los edificios sindicales, arrestaron a cientos de sus líderes y transfirieron a los miembros de los sindicatos, en masa, al Frente Laboral. En este organismo, totalmente subordinado al Partido Nazi bajo el control del doctor Ley, que encabezaba también la organización del

partido, los miembros de los antiguos sindicatos "libres", cristianos y de otras denominaciones se vieron ligados a la fuerza en catorce "uniones", relacionada cada una con cierta actividad laboral. Ley trató primero de dar al "Frente Laboral" un carácter corporativo, afiliando a los patronos lo mismo que a los obreros; pero este intento fracasó. Sin embargo, aunque el "Frente" pretendía representar a los trabajadores, no tenía verdadero poder para actuar en su nombre. El 19 de mayo el gobierno de Hider designó para cada una de las 13 regiones en las cuales había dividido a Alemania un Fideicomisario de Trabajo, seleccionado después de consultar con el *Gauleiter* * de la región; y les dio autoridad para sustituir la contratación colectiva por medio de sus propias decisiones en cuanto a salarios y condiciones de trabajo. La función del Frente Laboral no era negociar estas cuestiones ni defender los intereses propios de los trabajadores, sino movilizar la mano de obra nacional y ponerla al servicio del Estado nazi. Así, el movimiento sindical alemán fue liquidado completamente casi sin resistencia; y sus dirigentes, Leipart y Grossmann, a pesar de su sumisión, fueron enviados a campos de concentración.

Debemos preguntarnos qué papel desempeñaron en estos acontecimientos los dirigentes de la clase patronal alemana. Algunos grandes patronos se unieron a los nazis mucho antes del golpe y contribuyeron en forma notable al financiamiento del Partido Nazi —en especial Fritz Thyssen, el magnate del acero—. Thyssen y los que siguieron su orientación querían utilizar a los nazis en servicio del capitalismo alemán para suprimir y destruir a los socialistas y comunistas y a los sindicatos y esperaban poder controlar al nazismo y emplearlo como punto de apoyo de las demandas capitalistas; y a medida que la amenaza nazi contra la República de Weimar se hizo más fuerte y violenta, un gran número de capitalistas adoptó este punto de vista y se identificó con el nazismo, a pesar de los elementos anticapitalistas no repudiados que todavía contenía el Programa Nazi. No obstante, incluso cuando Hitler se convirtió en canciller, no era ésta la actitud predominante entre los portavoces de la clase patronal, políticamente dividida en los diversos partidos burgueses —especialmente el partido centrista— y en formas reaccionarias nacionalistas mucho más ligadas al nacionalismo alemán de Hugenberg que a los nazis. La toma de posesión de Hitler como canciller fue la señal para una serie de luchas internas por el poder dentro de los organismos representativos del capitalismo alemán, tales como la Asociación Nacional de la Industria Alemana, cuyo presidente era Krupp Von Bohlen. Se pidió

* Jefe regional de las S.S. o de las S.A. [E.]

la renuncia de Krupp, pero fue el director administrativo de la Asociación, Kestl, el que se vio obligado a renunciar. Krupp logró mantener su posición y, en el intento, el doctor Otto Wagner, principal autoridad económica de los nazis, fue derrotado y no pudo poner a la Asociación bajo el control del partido. Wagner, junto con el doctor Ley, trató de hacer de la Asociación un elemento, con el Frente Laboral, de una Corporación que incluyera a patronos y trabajadores; pero la Asociación no estaba dispuesta a ello. Por el contrario, se afirmó como Corporación regional (*Reichsstand*) sin participación alguna de los trabajadores; y bajo esta influencia Hitler abandonó sus proyectos de una organización corporativa. Wagner fue desplazado de su cargo y sustituido por Wilhelm Keppler, más bien visto por los industriales y, en junio, otro partidario decidido de los intereses capitalistas fue nombrado Ministro de Comercio. Los demás organismos representativos del capitalismo en Alemania eran la Asociación para la Preservación de los Intereses Económicos de Renania y Westfalia —conocida como la "Unión de nombre largo"— y la Asociación Patronal del Noroeste, que actuaba principalmente en los distritos del carbón y del acero. Dirigía la primera el doctor Schlucher, antiguo miembro del Partido del Pueblo alemán que se ligó estrechamente más tarde con los nacionalistas de Hugenberg. Schlucher fue obligado pronto a renunciar y, tras un corto intervalo, fue sustituido por Thyssen, quien también fue nombrado presidente de la Asociación del Noroeste, con lo que él tuvo así la más alta posición de influencia en la industria de la Alemania occidental. En general, los nazis lograron obtener el control de las principales organizaciones del capitalismo alemán, pero sólo bajo condición de ajustar su política económica a los intereses capitalistas y de renunciar a sus promesas de una organización corporativa que trascendiera las diferencias de clases. En estas condiciones la mayoría de los grandes patronos estaban plenamente dispuestos a colaborar con el régimen nazi, especialmente cuando comprobaron la fiereza con que se ejercía la venganza nazi contra el movimiento obrero.

No es que los grandes patronos tuvieran muchas oportunidades de escoger, realmente. Como consecuencia de la seria depresión gran parte de la industria alemana estaba controlada por los bancos, que a su vez habían acudido al Estado en busca de apoyo. Cualquiera que controlara la maquinaria del Estado estaba, pues, en una fuerte posición para asegurar su complacencia; y los nazis no eran personas que dejaran perder una oportunidad así de acrecentar su poder. Sin embargo, mucho antes de 1933, Hider había perdido interés en los elementos anticapitalistas que habían participado en la redacción del Programa Nazi. Estos elementos habían sido útiles para atraer simpatizantes de la pequeña burguesía, mediante ataques a las grandes empresas indus-

triales y comerciales. Pero cuando el nazismo amplió su campo de acción y se convirtió cada vez más en vocero del nacionalismo popular extremista, decreció su necesidad de apelar a la pequeña burguesía contra los elementos más ricos y su cruzada contra el movimiento obrero lo empujó a una alianza con los grandes patronos. No obstante, hasta 1933, muchos pequeños comerciantes y pequeños patronos, organizados en una "Asociación de Combate" de las clases medias industriales, todavía confiaban en que los nazis dividirían las grandes empresas comerciales para entregarlas a los pequeños comerciantes, conforme a su programa. En marzo de 1933 la Asociación de Combate claramente controlada por los nazis, tomó la iniciativa para crear una Corporación del Comercio Alemán del Reich, dirigida por el doctor Von Rentelen; y este organismo también controló al Comité Alemán de Industria y Comercio, unión central de las cámaras de comercio locales, del que también fue presidente Von Rentelen. Estos organismos, no obstante, se vieron pronto envueltos en agudo conflicto con el doctor Ley, que deseaba basar la nueva estructura corporativa del Reich nazi en su Frente Laboral, y no en las organizaciones de la pequeña burguesía. Ambos contrincantes fueron derrotados por igual cuando Hider, en vez de dar su apoyo a unos u otros, renunció a toda idea de un gran Estado corporativo y se puso, de hecho, de parte de los grandes capitalistas contra ambos.

Esto no significaba sin embargo, como señalé en el capítulo inicial, que el nazismo se hubiera convertido en instrumento del capitalismo alemán en su lucha contra el socialismo. En la alianza resultante entre nazismo y capitalismo, los nazis más que los capitalistas llevaron la iniciativa. El capitalismo alemán pudo escapar de sus apremiantes dificultades y revivir bajo el gobierno nazi y, mientras tanto, dio fuerte apoyo al nazismo en los años siguientes. Sin embargo, siempre fue el miembro subordinado de la alianza, obligado a seguir las directivas nazis de "fusiles" antes que "mantequilla" y de prioridad al rearme y la guerra sobre sus propias ventajas económicas. Que este ajuste conviniera a los capitalistas porque suprimía la amenaza del socialismo y daba a los patronos una ventaja absoluta sobre los trabajadores no cambia el hecho de que, en el Tercer Reich, los nazis y no los capitalistas tuvieran las riendas para manejar la industria alemana según sus propios fines nacionalistas.

Fue menos fácil para los nazis llegar a un acuerdo con los grandes terratenientes, puesto que eran hostiles a toda medida encaminada a dividir las grandes propiedades de la Alemania oriental. En 1933, los nazis ya tenían tras de sí un nuevo movimiento campesino, organizado en el llamado Órgano Político Agrario del Partido Nazi bajo la dirección de R. Walther Darré, socio-economista de origen argentino que había adquirido una rápida influencia en el partido, conocido principal-

mente por su insistencia en la necesidad de reducir las tasas de interés real al 2 %. A esta medida se oponían Hugenberg, que favorecía las medidas destinadas a aumentar los precios de los productos agrícolas, y los expertos financieros del partido Schmidt y Hjalmar Schacht. Darré, con el apoyo de Hitler, se dedicó a organizar al campesinado alemán en una corporación de productores y consumidores de alimentos del Reich, bajo su control personal, y a promulgar leyes que impidieran la venta de la tierra propiedad de los campesinos y la evicción de los campesinos por deudas. Los campesinos, declaró, eran la verdadera base de la grandeza nacional y los promotores del espíritu nacional, por lo que esperaba poner en práctica medidas tendientes al establecimiento de los campesinos en las grandes propiedades rurales de la Alemania oriental. Esta política, sin embargo, lo hizo entrar en agudo conflicto con Hugenberg y con el presidente Hindenburg —ambos fuertes defensores de los derechos de los terratenientes—; tampoco logró el apoyo de Hider, quien declaró que el problema del *Lebensraum* para el pueblo alemán no podía resolverse mediante la colonización en el interior del país, sino que requería imperativamente la conquista de áreas de colonización fuera de los territorios del Reich —principalmente en la Europa oriental. Darré, para conservar su autoridad, se vio obligado a abandonar su demanda de reducción del interés al 2 % y a llevar más lentamente sus proyectos de distribución de tierras en Alemania oriental. Estas consecuencias, no obstante, no beneficiaron a Hugenberg ni a sus partidarios nacionalistas. En junio, los nazis lanzaron un ataque masivo contra los clubes y círculos nacionalistas en toda Alemania, ocupando sus locales y haciendo numerosos arrestos. Hugenberg hizo violentas e infructuosas protestas en el gabinete contra estos ataques y el 27 de junio renunció a su cargo. Hider respondió disolviendo el Partido Nacionalista alemán, y, quince días después, el gabinete proclamó un nuevo decreto-ley, que declaraba al Partido Nazi el único partido político autorizado en Alemania y disolvía a todos los demás partidos.

Así terminó la inestable coalición que había gobernado nominalmente a Alemania los primeros seis meses de cancillería de Hitler. La coparticipación en el poder nunca había sido real, aunque la presencia de Hugenberg en el gabinete había servido en algunos aspectos —especialmente en relación con la reforma agraria— como freno a las intenciones nazis. El efecto principal de la retirada de Hugenberg fue permitir a Hitler consolidar su control sobre el Reichswehr y, al hacerlo, reducir su dependencia de las S.A.; cuyo líder, Rohm, quería presionar mediante la violencia revolucionaria en formas tales que tenían que contrariar necesariamente a los nacionalistas y a muchos elementos de la opinión capitalista y burguesa. En agosto de 1933, Goring, en Prusia,

llegó a licenciar a los policías militares especiales, que procedían principalmente de las filas de los S.A. Se preparaba la escena para el conflicto que culminó en 1934, con la caída y muerte de Röhm. El nazismo, una vez obtenido el poder absoluto, se iba transformando, después de ser un movimiento revolucionario dirigido contra el orden existente, en un defensor del nuevo orden que había creado y, al repudiar muchas de sus anteriores doctrinas económicas subversivas, se convertía en represor de quienes todavía actuaban con ese espíritu. Esto no quiere decir que el nazismo disminuyera su violencia característica, sino sólo que los objetivos contra los cuales debía dirigirse esta violencia se iban definiendo más claramente y más estrechamente. No aligeró en absoluto la persecución de los judíos o de los comunistas y socialdemócratas o de los miembros de los sindicatos "libres"; pero dejó de dirigir su violencia contra los capitalistas que aceptaran el nuevo orden nazi y contra los arios dispuestos a colaborar con ellos o a aceptar tácitamente su gobierno.

La caída y asesinato de Röhm en el verano de 1934 trajeron consigo la destrucción definitiva de las S.A., como poder capaz de actuar independientemente y, con ello, el sometimiento definitivo del ala izquierda nazi. En lo sucesivo Hitler fue abiertamente un líder del pueblo alemán más bien nacionalista que nacional-socialista y un firme defensor de la empresa capitalista contra todos los que quisieran atacarla, ya fuera en interés del pueblo en general o de los elementos pequeño-burgueses que habían contribuido tan considerablemente a su elevación al poder. Como hemos visto, este cambio del nazismo había empezado y avanzado desde mucho antes. Se había iniciado, en efecto, antes de que Hider fuera canciller, tan pronto como el Partido Nazi empezó a recibir nutridas subvenciones de Thyssen y de otros capitalistas prominentes; se hizo evidente pocos meses después de que Hider aceptara el cargo, en el momento en que éste se dedicó a la tarea del rearme y a los preparativos para la agresión bélica, tareas que él mismo se había asignado. Para estos fines, necesitaba el apoyo de las grandes finanzas y de todos los alemanes nacionalistas a los que pudiera convencerse de que debían aceptarlo como "líder" —especialmente los que ocupaban posiciones influyentes en cualquier movimiento que pudiera someterse al proceso de *Gleichschaltung*. Una vez eliminada la posibilidad de resistencia de los movimientos socialista y sindical, no quedaba otro núcleo de oposición probable que no fuera el de las Iglesias, con las cuales los nazis consideraban necesario actuar con mayor circunspección que con sus demás oponentes.

El socialismo alemán, con sus bases en la teoría marxista, había sido tradicionalmente un movimiento antirreligioso, hostil sobre todo al protestantismo luterano de la parte oriental de Alemania y al cató-

lirismo de la región renana, Westfalia, Baviera y otras regiones del Sur. Bajo su influencia, un gran sector de la clase trabajadora y los dirigentes socialistas y de los sindicatos "libres" estaban fuera del control y la influencia de la religión. Los sindicatos cristianos, aunque abiertos a los protestantes, eran principalmente católicos tanto por sus dirigentes como por su actitud, pero representaban sólo una pequeña minoría del movimiento sindical. El nazismo, por otra parte, desde un principio se mostró indiferente a la religión, más que antirreligioso. Como pretendía dirigirse a todos los verdaderos alemanes, apelaba por igual a protestantes y católicos y evitaba en lo posible los tópicos que pudieran dividirlos. Hider era católico por su formación y siguió siéndolo, al menos formalmente, aunque demostró poco interés por las cuestiones religiosas. El presidente Hindenburg, por su parte, era un protestante decidido y un enérgico defensor de las pretensiones de preeminencia de los protestantes y de la idea protestante de una Iglesia estrechamente aliada al Estado, por lo menos en Prusia. Las Iglesias protestantes en Alemania estaban organizadas sobre una base regional, y no sobre una base unitaria de todo el país; cada estado dentro del Reich tenía su propia Iglesia estrechamente ligada al gobierno estatal. Estaban, pues, asociadas a las concepciones del feudalismo y los derechos del Estado, aunque en la práctica la Iglesia luterana prusiana gozaba de cierta preeminencia. Como movimiento centralizador apoyado, insistentemente, en la unidad nacional de todos los alemanes, el nazismo pronto entró en conflicto —hasta cierto punto— con el regionalismo de los protestantes alemanes, y la afirmación nazi de la autoridad absoluta del gobierno del Reich suponía una definitiva subordinación de la autoridad religiosa a la política, contraria a las pretensiones eclesiásticas de poseer una autoridad moral suprema sobre los fieles. Algunos nazis exigieron pronto que se colocara al cristianismo dentro de la línea de las pretensiones nórdicas de la doctrina nazi mediante una aceptación definitiva del racismo como artículo de fe; a medida que la influencia nazi penetró más y más, surgió un movimiento de protestantismo nórdico que, en sus formas más extremas, se acercó al rechazo activo de la moral cristiana. El pastor luterano Hassenfelder se convirtió en el principal exponente de un llamado "cristianismo alemán" y se dedicó a unificar el control de las Iglesias luteranas despojando de sus cargos a las autoridades religiosas que los desempeñaban. A pesar de la tradición de sujeción de la Iglesia al control del Estado, el ataque de Hassenfelder provocó una gran oposición y Hider lo retiró de su cargo designando a un capellán del Reichswehr originario de la Alemania oriental, Ludwig Müller, para sustituirlo como jefe de los cristianos alemanes. Se celebró entonces, en mayo de 1933, una conferencia formal de tres días entre Müller y numerosos eclesiásticos prominentes, en el curso de la

cual Müller concedió libertad a la Iglesia de la tutela del Estado; y, después de esto, las autoridades eclesiásticas de Berlín eligieron a un conocido teólogo ortodoxo, Friedrich Von Bohlswingh, como *Reichsbishop* —es decir, como jefe de la Iglesia luterana de Alemania. Esto era demasiado para Hitler, que rechazó la designación de Bohlswingh y dio instrucciones a Goring, como jefe del gobierno prusiano, para designar a un funcionario de la administración, Jäger, como comisionado de cuestiones eclesiásticas con supremas facultades. Jäger depuso entonces a los jefes de la Iglesia prusiana y designó a Müller como jefe de la Unión Alemana de la Iglesia Evangélica. Bohlswingh fue depuesto y los nazis ocuparon las iglesias protestantes y colocaron en ellas sus banderas con suásticas. Este desafío puso en acción al presidente Hindenburg. Llamó a Hitler y exigió que se restableciera la libertad de las Iglesias y se arreglaran los malentendidos entre los nazis y los jefes eclesiásticos mediante una amistosa negociación. Hitler cedió por el momento. La orden de Müller de que en el futuro las autoridades eclesiásticas fueran designadas por el gobierno fue rescindida y la llamada "cláusula aria" que permitía ser miembros de la Iglesia sólo a los de raza "aria" fue suprimida, excepto para el clero. El control independiente de la doctrina y el culto por las Iglesias regionales fue reafirmado; y Jäger fue depuesto de su cargo de comisionado. Se dispuso la reelección de las asambleas de las Iglesias, que los nazis habían sometido a un proceso de *Gleichschaltung* para sujetarlas totalmente al control nazi. Hitler pudo informar al presidente que sus órdenes habían sido cumplidas y que se había llegado a un acuerdo entre las Iglesias y el Estado.

Hasta ese momento parecía que los nazis habían sufrido una señalada derrota, pero no perdieron tiempo en reafirmar sus posiciones. Las elecciones para las nuevas Asambleas de las Iglesias se efectuaron en condiciones de gran intimidación y dieron como resultado aplastantes victorias para los "cristianos alemanes", especialmente en Prusia. Müller fue electo entonces Obispo del Estado de la predominante Iglesia prusiana y, poco después, en septiembre de 1933, fue designado *Reichsbishop* por un Sínodo Nacional en Wittenberg. Estas medidas provocaron fuertes protestas de los ortodoxos. Dos mil pastores firmaron el "manifiesto de Marburgo" en protesta y el teólogo de Bonn, Karl Barth, publicó su famoso folleto en contra, *Yo digo "no"*. Pero las protestas fueron ineficaces y Hindenburg no intervino ya. No obstante, los eclesiásticos recalcitrantes habían ganado algo; porque los "cristianos alemanes" advertidos por la crisis, se abstuvieron de llevar a extremos la *Gleichschaltung* y sus opositores pudieron conservar cierta fuerza para sostener su actitud de protesta.

Entretanto, los nazis habían tratado de llegar a un acuerdo con la

Iglesia católica. Antes de la subida de Hitler al poder, los obispos católicos en Alemania habían hecho varios pronunciamientos formales contra el nazismo; pero ante la victoria política nazi se apresuraron a modificar su actitud. En marzo de 1933 los obispos declararon que, sin revocar su condenación a las herejías religiosas y morales en que incurrieran los nazis, "el episcopado se considera justificado al considerar innecesarias sus anteriores prohibiciones y advertencias generales", con lo que dio un importante paso hacia la aceptación del régimen nazi. La Iglesia católica, sin embargo, siguió mostrándose al margen de las extremistas doctrinas raciales del nazismo y protestando contra los excesos violentos practicados por las S.A. Los nazis, por su parte, disolvieron el Partido Centrista Católico y su contrapartida, el Partido Popular Bávaro, así como los sindicatos cristianos; pero Hitler envió también a Von Papen a Roma para negociar un concordato con el Vaticano y se llegó a un acuerdo en julio, firmándose el concordato. En estas condiciones, se concedió la libertad de credo y de culto público a los católicos alemanes y la independencia de la administración eclesiástica quedó garantizada; pero, a cambio de ello, el papado aceptó prohibir a sacerdotes y frailes toda participación en cuestiones políticas y, además, consultar a las autoridades civiles en todas las designaciones de obispos o arzobispos, así como autorizar a cada obispo un juramento de lealtad al Estado donde se encontrara su diócesis y al Reich y su gobierno. Éstas eran concesiones importantes; y aunque los católicos conservaron su participación en actividades educativas y lograron la tolerancia hacia sus asociaciones sociales y religiosas, la victoria pertenecía a los nazis y se ponía de manifiesto que el papado no estaba dispuesto a adoptar una posición efectiva contra las pretensiones del régimen nazi.

Protestantes y católicos por igual obtuvieron de los nazis, en todo caso, cierta tolerancia hacia sus actividades en la suposición de que aceptaran la supremacía general del nuevo orden en Alemania. Para los desgraciados judíos no existía semejante posibilidad; desde un principio se les condenó no sólo a incapacitaciones legales sino a severos maltratos y violencias personales. Era imposible eliminar de inmediato a todos los judíos, puesto que practicaban las principales profesiones, como medicina y derecho; pero los nazis no ocultaron sus intenciones de arianizar estas y otras profesiones lo más rápidamente posible: casi desde un principio el número de judíos a los que se permitió seguir practicando sus profesiones fue drásticamente limitado. Tampoco era posible cerrar de inmediato todas las tiendas de judíos ni excluirlos de la participación en el comercio al por mayor; pero, después de obligar por medios violentos a un total boicot de un día a todos los comerciantes judíos, aunque no se prosiguió con el boicot total, se siguió utili-

zando la violencia y los insultos para influir sobre los que tenían tratos con firmas judías y los judíos siguieron en peligro constante de ser sometidos a violencias personales y a la ruina económica. De hecho, no hubo, en 1933, ni siquiera una aproximación a los ahorros del antisemitismo nazi en sus subsecuentes manifestaciones de la segunda Guerra Mundial; pero lo que sucedió en 1933 fue lo bastante malo como para impulsar una fuerte protesta internacional y hacer que se exiliara una corriente de judíos alemanes que lograron escapar. Muchos habían esperado que los nazis, obtenido el poder político, renunciarían en gran parte a la violencia antisemita y a su radicalismo anticapitalista; pero la tendencia fue la contraria. El racismo demostró ser un ingrediente mucho más profundo en la constitución de la actitud nazi que el radicalismo social que había utilizado para la conquista del poder, y el fervor antisemita se hizo más fuerte y encarnizado a cada paso de la persecución. Al principio los judíos ricos corrieron mucha mejor suerte que los pobres; pero pronto el gobierno nazi dirigió sus armas contra los propietarios judíos lo mismo que contra los judíos pobres más indefensos. Aun entonces, no pocos judíos ricos pudieron escapar al extranjero al precio de abandonar la mayoría de sus propiedades; sólo después del estallido de la guerra se entregaron los nazis a la campaña de absoluto exterminio de los judíos alemanes. Pero, casi desde que subió al poder, el nazismo fue mucho más allá de la política que contenía su programa original, que dejaba a los judíos los medios de ganarse la vida, privándolos sólo de todos sus derechos políticos.

La extinción del socialismo en Alemania fue un golpe mucho más serio al socialismo, como movimiento mundial, que su extinción por el poder fascista en Italia, no sólo porque Alemania era un país mucho más poderoso, capaz de ejercer una mayor influencia en el curso de los acontecimientos mundiales, sino también porque Alemania había sido la cuna del Partido Socialista organizado con más empuje y la principal fuente de la doctrina socialdemócrata en Occidente. El choque que ocasionó el colapso alemán sobre el resto del mundo fue aminorado, sin duda, por el evidente fracaso de la Revolución de 1918 para establecer un nuevo orden viable en sustitución del desintegrado régimen de los Hohenzollern y por la evidente decadencia del Partido Socialdemócrata en los años siguientes. La socialdemocracia alemana había caído bastante de su posición predominante en el periodo anterior a 1914, muchos años antes de que los nazis logaran su completa destrucción, no sólo por sus divisiones profundas en dos facciones contendientes, comunista y socialdemócrata, sino porque ambas facciones habían demostrado claramente su incompetencia para resolver los problemas fundamentales de Alemania bajo la República de Weimar. Los comunistas se desacreditaron por su manifiesta incapacidad para comprender

la naturaleza real del peligro nazi y por su disposición, en su momento, a colaborar con los nazis para oponerse a los socialdemócratas; mientras que el Partido Socialdemócrata, en su intento por "salvar a la República", había cedido repetidas veces a las fuerzas de la reacción y había permitido que su posición fuera desastrosamente minada por repetidas transacciones y concesiones. Estas tendencias se habían manifestado claramente aun antes de que la gran depresión dejara al país postrado económicamente, facilitando a los nazis el aprovechamiento de un amplio y heterogéneo volumen de descontento y desilusión que finalmente los llevó al poder. Después del colapso, era fácil ver que estuvo fuera de las posibilidades del movimiento obrero alemán, en las condiciones de 1933, la resistencia victoriosa contra los nazis. No obstante, fue un severo choque para los socialistas en otros países que los socialistas alemanes, poderosos en una época, hubieran permitido que su movimiento fuera aniquilado sin intentar un solo golpe en su defensa.

Estando Alemania e Italia completamente fuera de acción para todo género de socialismo, la fuerza efectiva del socialismo mundial quedó encerrada en límites muy estrechos. La Internacional Laborista y Socialista fue desde 1933 poco más que una federación de escasa cohesión de los partidos inglés y francés con los de algunos pequeños Estados de la Europa occidental; y, de estos partidos, el francés había perdido el *status* de principal partido de la clase obrera, asumido ahora por los comunistas, y el inglés había sufrido recientemente una terrible derrota en las elecciones generales de 1931. La socialdemocracia se había eclipsado casi totalmente de la Europa oriental y totalmente de la Unión Soviética; y, fuera de Europa, casi había desaparecido en los Estados Unidos y no había logrado echar profundas raíces en el continente americano. Tampoco existían partidos socialistas efectivos en Asia ni en Africa; y en Australasia, aunque el laborismo era poderoso como fuerza política, el socialismo era un pequeño ingrediente en su constitución y no existía una disposición a hacer causa común con el socialismo de la Europa occidental. Inclusive los considerables avances socialistas en los Países Escandinavos y la preeminencia de los elementos socialistas en el movimiento republicano español eran una escasa compensación del retroceso de la socialdemocracia que la victoria nazi en Alemania claramente provocó.

El comunismo no estaba en una situación mucho mejor. El Comintern estaba, en efecto, totalmente dominado por los rusos y había sufrido una derrota aparentemente decisiva en China. De todos los partidos comunistas fuera de la Unión Soviética sólo el partido francés tenía alguna importancia y su poder para afectar el curso de los acontecimientos en Francia parecía casi nulo. Los partidos comunistas claudicaban en la Europa oriental y los partidos embrionarios de América

Latina tenían aún poca importancia; en los Estados Unidos, las pequeñas facciones contendientes de comunistas no contaban más que el débil y desacreditado Partido Socialista. No era nada nuevo, por supuesto, que el socialismo constituyera sólo un débil movimiento minoritario en casi todo el mundo fuera de la Europa occidental; pero hasta entonces, a pesar de su debilidad, había parecido avanzar y ganar nuevos miembros, mientras que en 1933 parecía ir perdiendo terreno en casi todas partes. Aun en Austria, donde los socialistas habían llevado a cabo la más valiente lucha contra la reacción, era rechazado gradualmente y tenía que hacer frente a una nueva y formidable amenaza con el triunfo del nazismo en Alemania.

El retroceso mundial de la causa socialista fue, por supuesto, favorable a la supervivencia del capitalismo; pero hay que repetir que el capitalismo no fue el factor principal en ese retroceso. En efecto, jamás en su historia el prestigio del sistema capitalista en todo el mundo había estado tan bajo como en 1933. Éste era el caso principalmente en los Estados Unidos, donde la responsabilidad de la gran depresión se atribuyó absolutamente a las grandes finanzas norteamericanas y el radicalismo social, aunque no el socialismo, avanzó con una rapidez sin precedentes bajo la presión de la bancarrota general y el desempleo en masa. En Gran Bretaña, la derrota del gobierno laborista en 1931 llevó consigo sin duda la victoria de las fuerzas capitalistas; pero, aun allí, la depresión disminuyó el prestigio capitalista. Finalmente, en Alemania, aunque Hitler se olvidó del aparente radicalismo económico del nazismo en sus primeras etapas y convirtió al capitalismo alemán en su aliado para destruir al movimiento obrero, la victoria esencial no fue de los capitalistas sino del nacionalismo racial que lanzó al país a una lucha esencialmente militarista por el poder mundial, lucha en la que el capitalismo salió beneficiado sólo al precio de subordinar sus ambiciones de ganancias a las imperativas demandas de la agresión racista. En resumen, el fascismo de los treinta, en el que el nazismo alemán desempeñó siempre el papel dominante, no fue en definitiva el "último golpe" del capitalismo en decadencia ni la realización del dominio capitalista en la formación de políticas nacionales e internacionales, sino la expresión de instintos nacionalistas y raciales profundamente arraigados, elevados a su punto de ebullición por la adversidad económica, pero manifestándose predominantemente en impulsos en los cuales los motivos económicos desempeñaban sólo un papel secundario, aunque importante.

CAPÍTULO III

GRAN BRETAÑA

Cuando el Partido Laborista británico fue decisivamente derrotado en las elecciones generales de 1931, la causa principal fue que por primera vez en su historia tuvo que hacer frente a una coalición nacional de sus oponentes. En la mayoría de los distritos hubo duras luchas entre los candidatos laboristas y los de la coalición, al unirse en la oposición al laborismo las tres alas de los liberales. Hubo también una considerable desertión de votantes de los grupos de clase media, que se habían adherido al Partido Laborista en 1929. En general, la votación laborista bajó en 2 millones, mientras que los tories subieron en más de tres millones. Los liberales —incluyendo a todos los grupos— perdieron cerca de 3 millones de votos; los votos en favor del "laborismo nacional" de MacDonald, del Nuevo Partido de Sir Oswald Mosley y de los veintiséis comunistas fueron muy escasos. La votación total fue de un millón menos que en 1929.

En términos de las diputaciones ganadas, las pérdidas fueron mucho más devastadoras. El número de miembros del Parlamento del laborismo oficial bajó de 259 en 1929 al reducido número de 46 en 1931; pero además había seis independientes, de los cuales tres fueron elegidos bajo los auspicios del Partido Laborista Independiente, mientras que, de los otros tres, dos estaban estrechamente asociados al Partido Laborista independiente. El "laborismo nacional" obtuvo 13 diputaciones, con el apoyo de la coalición; el Nuevo Partido, con sólo 24 candidatos de los 400 que había anunciado iba a postular, y los comunistas no lograron un sólo asiento. De los 46 diputados electos por postulación del Partido Laborista, la mitad —23— era candidatos de los mineros y otros 9 candidatos oficiales de los sindicatos. Sólo 13 miembros del Parlamento, algunos de los cuales eran miembros de los sindicatos, salieron adelante como candidatos de los Partidos Laboristas divisionales; y el Partido Cooperativista quedó reducido a un solo representante. Se perdieron en Londres 45 diputaciones laboristas; 39 en Lancashire y Cheshire, 34 en Escocia y 33 en Yorkshire. Wales salió relativamente mejor, con sólo 10 pérdidas de un total de 25 representantes. Las elecciones de 1931 dejaron al Partido Laborista sin un solo representante del Sur de Inglaterra, fuera del distrito de Londres (*Greater hondón*) y con uno solo, Sir Stafford Cripps, en el Oeste. Sólo un ministro del gabinete —Lansbury— conservó su cargo; sus principales lugartenientes en la nueva Cámara de los Comunes eran Attlee

y Cripps. Henderson, Clynes, Dalton, Greenwood, Morrison, Shinwell, Susan Lawrence, Ellen Wilkinson y Margaret Bondfield estuvieron entre los derrotados. Del Partido Laborista Independiente Maxton y Kirkwood volvieron, pero Jowett fue de los derrotados. Webb y Noel-Buxton ya habían pasado a la Cámara de los Lores.

El Partido Laborista sobreviviente quedó, así, escaso de representantes y sus filas se vieron todavía más disminuidas, pocos meses después de las elecciones, con la secesión del Partido Laborista Independiente. Como ya se mencionó en un volumen anterior¹ el Partido Laborista Independiente había comenzado a disentir del Partido Laborista, desde las primeras etapas del gobierno laborista, por la política y la disciplina del partido y pronto llegó el momento en que los miembros independientes del Parlamento se negaron a someterse a las instrucciones del partido y crearon su propia "disciplina" seccional, situación intolerable para los líderes del Partido Laborista. Después de las elecciones, la dirigencia de Maxton acentuó estas tendencias y, en 1932, se produjo el inevitable rompimiento y el Partido Laborista Independiente retiró su afiliación; una minoría, sin embargo, no quiso romper toda relación y trató de encontrar una manera de permanecer dentro del redil del laborismo.

La debilidad del Partido Laborista en fuerza para el debate era paralela a su debilidad numérica. Henderson fue reelecto como máximo dirigente, aunque no tenía representación parlamentaria y estaba fuera de Inglaterra casi todo el tiempo, presidiendo la Conferencia de Desarme, que ya empezaba a dar tumbos hacia su funesto final. En su ausencia Lansbury asumió la presidencia del grupo parlamentario, con Attlee como vicepresidente. Henderson volvió a la Cámara de los Comunes en septiembre de 1933; pero ya, un año antes, había renunciado al liderato, que traspasó a Lansbury.

En general, el efecto inmediato de la derrota de 1931 fue empujar hacia la izquierda al Partido Laborista. Existía la opinión extendida que la caída del gobierno laborista se había debido, en último término, a una "zancadilla" de los banqueros, inspirados por Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, y se había producido la decisión expresa de que el laborismo no se dejara coger nuevamente en las mismas redes. Al mismo tiempo, sin embargo, o cuando menos tan pronto como la conmoción inmediata del desastre perdió cierta intensidad, se efectuaron discusiones *'post-mortem'* donde se sostuvo la opinión de que las causas estaban más allá, en la falta de una política y un programa claramente definidos para el segundo gobierno laborista, y que si el laborismo volvía al poder en algún momento, con o sin una

¹ Volumen VI, capítulo xxi.

clara mayoría, no debía carecer de un programa. Una de estas discusiones condujo a la formación de la Nueva Oficina de Estudios Fabianos a la que nos referiremos más adelante en este capítulo.

Había un acuerdo general de que el Banco de Inglaterra debía ser nacionalizado y sometido firmemente al control de la Tesorería y que el Partido Laborista debía iniciar la formulación de un nuevo programa que lo obligara a una acción socialista definida, comprendiendo la nacionalización de las industrias de combustibles y de energía, incluyendo el carbón y la electricidad, y los servicios esenciales de transporte; se presentarían a la conferencia del partido informes sobre todo esto. Cuando se presentaron los primeros dos informes a la Conferencia de Leicester de 1932, era manifiesta la inclinación hacia la izquierda. El Informe sobre la banca y las finanzas, aunque urgía a la nacionalización del Banco de Inglaterra, no llegaba a proponer la nacionalización de los bancos por acciones, aunque muchos socialistas consideraban la nacionalización de éstos como una base necesaria de la planificación económica. Por una pequeña mayoría se aprobó una enmienda que incluía la nacionalización de esos bancos; el resultado fue considerado una victoria de la recién formada Liga Socialista. La segunda cuestión de controversia se refería a la representación sindical en los consejos de las industrias y servicios nacionalizados. El informe oficial proponía que los consejos se integraran totalmente por representantes del gobierno, lo que fue criticado enérgicamente; pero como, no obstante, el Congreso de Sindicatos no había llegado todavía a una decisión respecto a esto, se archivó la resolución por el momento, posponiéndola para una futura discusión entre los dos organismos.

Entretanto, había señales evidentes de un creciente malestar en el país, especialmente en las regiones más afectadas por la depresión y en las grandes ciudades que sufrían duramente por el desempleo que seguía aumentando después de la formación del gobierno nacional. Una nueva Marcha del Hambre, organizada principalmente por los comunistas, se efectuó en 1932, recibiendo un amplio apoyo laborista; había además gran descontento por las rebajas en los beneficios y en los servicios sociales impuestas por el gobierno. En los dos años siguientes continuaron esporádicamente las marchas y protestas, como las manifestaciones del "ataúd negro" organizadas por Wal Hannington, cuando los desempleados se acostaron en medio de Oxford Street a la hora de mayor tránsito y colocaron un ataúd simulado con un lema que decía "Se le negó el subsidio de invierno". Estas manifestaciones, sin embargo, fueron perjudicadas por la disputa entre los sindicatos y la derecha, por una parte, y los comunistas y la izquierda laborista por otra. En 1933, el Congreso de Sindicatos intentó por fin agrupar a los desempleados en un movimiento oficial bajo los auspicios de los conse-

jos locales de oficios dispuestos a aceptar sus directivas; pero el intento no fue muy entusiasta y tuvo poco éxito frente al Movimiento del Comité Nacional de Desempleados dominado por los comunistas, firmemente establecido en los principales centros industriales.

La Conferencia de Leicester había sido, en general, una victoria para la izquierda. Pero la victoria fue transitoria, porque el propio Partido Laborista estaba dirigido todavía, fuera del Parlamento, por hombres que habían estado muy ligados al gobierno caído y que, antes de su caída, se habían mostrado dispuestos a hacer grandes concesiones a sus enemigos; y no pasó mucho tiempo antes que volvieran a controlar el Partido. La oposición política, aunque activa y verbal, no era de hecho fuerte; después de 1932 estaba integrada, aparte de los comunistas, principalmente por la Liga Socialista y el Partido Laborista Independiente ya separado del laborismo oficial.

La Liga Socialista era de por sí una amalgama de distintas tendencias. A fines de 1930, cuando cobró fuerza la depresión mundial y el Partido Laborista no parecía saber cómo atacarla, un grupo de socialistas, por iniciativa mía y de mi esposa, de C. M. Lloyd del *New Statesman*, H. L. Beales, G. R. Mitchison, W. R. Blair de la Sociedad Cooperativa Mayorista y algunos otros, empezaron a reunirse en Easton Lodge, Essex, casa de campo de la condesa de Warwick, a quien Robert Blatchford había convertido en su juventud a un ardiente socialismo, y organizaron al año siguiente una nueva Sociedad de Estudios y Propaganda Socialista, basada en la adhesión individual. Su apodo de los "renuentes leales" indicaba la relación que ellos concebían con el Partido Laborista; Ernest Bevin fue su presidente y Attlee, Cripps y otros participaron como miembros y organizaron un programa de lecturas y publicación de folletos. Sus primeros miembros eran de diversas procedencias, siendo el más enérgico un grupo de exuniversitarios socialistas, como Hugh Gaitskell, algunos de los cuales participaron en el tercer gobierno laborista.

Poco después, como ya se mencionó, se formó con predominio de los mismos elementos un organismo llamado Nueva Oficina de Estudios Fabianos que, como la propia Sociedad Fabiana se había estancado, pensaba dedicarse a la investigación "con fines determinados", tal como antes lo había hecho la Sociedad Fabiana. Se llamó "Nueva Oficina Fabiana" deliberadamente para destacar la continuidad de la tradición, con el consentimiento del Ejecutivo Fabiano y el impulso activo de Henderson, Hugh Dalton, Leonard Woolf, el experto en cuestiones internacionales y coloniales, W. A. Robson de la London School of Economics y los Webb: Woolf, Robson y el autor redactamos un amplio programa de investigación en tres secciones, internacional, política y económica.

Mi idea original había sido que la Nueva Oficina Fabiana y la Sociedad para la Investigación y la Propaganda Socialistas fueran interdependientes, haciendo la primera la investigación y difundiéndola segunda los resultados; pero este plan nunca se puso realmente en práctica. Porque en el verano de 1932 la minoría del Partido Laborista Independiente, dirigida por E. F. Wise, que se había negado a seguir a Maxton, se acercó a la Sociedad proponiéndole una unificación, con Wise como presidente del nuevo organismo. Después de una larga discusión se aceptó por mayoría, decisión que me pareció poco prudente, aunque la acepté en aquel momento, y la Sociedad para la Investigación y Propaganda Socialistas puso fin a su breve existencia. El resultado más serio fue la renuncia de Bevin, provocada por un gran resentimiento, lo que afectó desde entonces su actitud hacia los intelectuales del movimiento socialista. El nuevo organismo adoptó el nombre de "Liga Socialista" como reminiscencia directa de William Morris; Wise murió un año después de la unificación, ocupando el puesto de presidente Stafford Cripps. Yo había renunciado en la primavera de 1933, considerando que la línea política que adoptaba la Liga, bajo la dirección de Wise, la iba a llevar a un choque directo e infructuoso con el Partido Laborista oficial.

La Nueva Oficina de Estudios Fabianos, como organización independiente, no resultó afectada y siguió realizando su propio programa de investigaciones. Muy pequeña en un principio continuó —con John Parker (elegido para el Parlamento en 1935) como secretario general y yo mismo como secretario honorario— en los treinta, acrecentando sus miembros y su reputación hasta que, en víspera de la guerra, se unió a los restos de la Sociedad Fabiana. Se conservó el nombre de "Sociedad Fabiana", con su tradición de medio siglo, lo mismo que las Sociedades Fabianas locales —reducidas entonces a unas cuantas pero aumentando su número a más de cien durante la guerra— y la afiliación al Partido Laborista; y se añadió un nuevo reglamento (tomado de la Nueva Oficina de Estudios Fabianos) a su constitución, que establecía que no se plantearía ninguna política, ni como resolución ni para darse a la publicidad, en nombre de la Sociedad Fabiana, sino sólo en nombre de los individuos o grupo que la trazara. Este "requisito de auto-renuncia" era de gran importancia; eliminaba todo riesgo de que la Sociedad Fabiana se constituyera en rival u opositora del Partido Laborista y permitía a los socialistas de opiniones ampliamente diferentes asociarse y trabajar dentro de ella. El fruto de esta asociación y de los largos años de trabajo de investigación continuado no sólo puede verse en las listas de folletos, libros e informes publicados primero por la Nueva Oficina Fabiana y después, al comenzar la guerra, por la Sociedad Fabiana, sino en el número de fabianos elegidos para el Par-

lamento en 1945. Más de la mitad del gabinete laborista estaba integrada por fabianos. Muy distinta, como veremos, fue la historia de la Liga Socialista.

En el Partido Laborista Henderson, aunque nominalmente su secretario, no contó mucho después de 1931, debido en parte a su mala salud y en parte a la preocupación por la Conferencia del Desarme. Por esta razón Lansbury siguió siendo el líder del Partido en la Cámara de los Comunes, aunque también él enfermó seriamente a fines de 1933 y no volvió a ocupar su puesto hasta el otoño del año siguiente, llevando Attlee mientras tanto todo el peso de la política del partido con la ayuda de Arthur Greenwood, que había vuelto a salir electo en unas elecciones parciales. Henderson murió en 1935, pocas semanas después que la Conferencia de Brighton, a la que no había podido asistir por encontrarse demasiado enfermo; había designado al secretario en funciones, J. S. Middleton, para sucederlo, en el riguroso entendimiento de que no se postularía para el Parlamento. No hay duda que este intervalo en la dirección, en el Parlamento y fuera, añadió más confusión en una situación ya de por sí oscura.

Porque los acontecimientos descritos habían tenido lugar dentro de un panorama de profunda depresión. El desempleo había sido muy severo en 1932 y 1933 —sobre todo en los centros de astilleros, en la industria pesada y en los yacimientos de carbón— y el gobierno nacional no tenía idea de cómo resolverlo. El arancel general al que recurrió por "receta de su doctor" no podía naturalmente ayudar a las industrias de exportación, que eran las más afectadas. Para los que pudieron conservar sus empleos, o encontrar nuevos trabajos, los efectos de la depresión se mitigaron con la aguda baja que se produjo en los precios de los productos primarios, incluyendo los alimenticios; y, en estas circunstancias, surgió una división entre los trabajadores de las regiones e industrias afectadas por la depresión y aquellos a los que había tocado mejor suerte. Esto impidió una acción conjunta que de otra manera se habría producido, pero ayudó a los sindicatos cuyos miembros habían sido menos afectados a mantenerse en su posición, aunque evitó al mismo tiempo que acudieran solidariamente en apoyo de los desempleados. El gobierno, además de las reducciones a los subsidios de desempleo en 1931, estableció a fines de ese año una Comisión Real para investigar e informar acerca del seguro de desempleo en general y de otras formas de auxilio; y de las deliberaciones de la Comisión surgió la Ley de seguro contra el desempleo de 1934. Esta ley dividía a los desempleados en tres categorías: aquellos cuyas necesidades serían atendidas mediante un seguro de contribuyentes; los que, sin derecho al seguro, necesitaban mayor ayuda de los fondos nacionales y los que no entraban en ninguno de estos grupos o habían agotado sus posibilidades

limitadas en ambos y sólo podían recibir ayuda de la Asistencia Pública sobre una base local, de acuerdo con la Ley sobre la pobreza y sujetos a sus defectos y a las diversas condiciones de un lugar a otro, según la actitud de los Comités de Asistencia Pública locales. Para administrar la segunda de estas formas de ayuda, la Ley creaba una Oficina Nacional de Ayuda a los Desempleados, con instrucciones de determinar la escala de ayuda que se podía impartir. La Oficina dio a conocer esta escala en diciembre de 1934, después que a principios de ese año se habían reintegrado las deducciones hechas en 1931 al empezar la recuperación de la gran depresión. Cuando se publicaron las nuevas escalas, pronto fue evidente que de acuerdo con ellas muchos desempleados obtendrían menos de lo que habían estado recibiendo de acuerdo con las resoluciones hasta entonces en vigor. Se produjo entonces una gran agitación y la Oficina de Ayuda a los Desempleados se vio obligada a retirar la escala propuesta y a reflexionar sobre el asunto. El resultado, en 1936, fue una nueva escala en la cual se modificaba considerablemente la odiada Prueba de Medios de Subsistencia (*CMeans Test*), que había constituido la raíz del problema. Estos cambios restaron fuerza a la agitación de los desempleados, que desde entonces se ocupó más de plantear demandas de acción gubernamental para auxiliar a las áreas más afectadas por la depresión que de las solicitudes de mejor trato para los desempleados. En 1936-37 se organizaron nuevas marchas de hambre en estas regiones, principalmente dirigidas por los comunistas; pero, ante el mejoramiento en las condiciones laborales, atrajeron mucho menos la atención pública. En efecto, por entonces el centro de interés se había trasladado de los asuntos internos a los internacionales —sobre todo, a la lucha antifascista en relación con la agresión italiana en Abisinia y la guerra civil en España.

Este cambio de interés era natural. En 1933 los nazis conquistaron el poder en Alemania y destruyeron el movimiento obrero alemán. Al terminar el año había terminado lo peor de la depresión mundial y Roosevelt puso en práctica sus drásticas medidas conocidas como el "Nuevo Trato". Los precios de los alimentos primarios y de las materias primas mostraban signos de recuperación y las limitaciones de la política arancelaria en un país tan dependiente del comercio exterior como Gran Bretaña se apreciaban más ampliamente. El año 1934 fue definitivamente de recuperación económica y, cuando menos, en Gran Bretaña, de menos tensión económica y política. En la primavera, como vimos, las reducciones a los beneficios sociales puestas en vigor en 1931 se suprimieron. El Partido Laborista, en las elecciones de marzo, obtuvo por primera vez en 1934 una clara mayoría en el Consejo del Distrito de Londres, donde se ha mantenido desde entonces.

Contra estas tendencias favorables hubo algunos sucesos muy desfa-

vorables en el extranjero. En Austria estalló la guerra civil de febrero, donde los socialcristianos de Dollfuss derrocaron a los socialistas austríacos y establecieron su frágil dictadura, sólo para que Dollfuss fuera asesinado en julio y sustituido por Schuschnigg, quien intentó pactar con Mussolini en la esperanza de proteger a Austria contra Hider. En el Lejano Oriente los japoneses instalaron un emperador pelele a la cabeza de un Estado títere, Manchukuo, y procedieron en abril a repudiar el Tratado de las Nueve Potencias regulando la intervención en China. En mayo la dictadura se instauró por un golpe de mano en Bulgaria y, en junio, Hitler efectuó el "baño de sangre", siendo eliminados Rohm y Otto Strasser. Tres meses después, al morir Hindenburg, Hitler se convirtió en presidente de Alemania y quedó en plena libertad para actuar.

Mientras tanto, en Francia, la publicidad del escándalo Stavisky hizo caer al gobierno francés, que fue sustituido por un gabinete más reaccionario presidido por Doumergue. Esto condujo, en julio de 1934, a una decisión de los comunistas y socialistas franceses de formar un Frente Unido y en octubre se efectuó la unión de los sindicatos franceses en la C.G.T. Antes de este segundo acontecimiento, el Frente Unido se había extendido en septiembre de Francia a España, donde fue seguido en octubre por un gran movimiento de huelga; el preludio a la guerra civil. En noviembre, los demócratas de Roosevelt ganaron las elecciones para el Congreso en los Estados Unidos; en diciembre Kirov fue asesinado en misteriosas circunstancias en Leningrado y, en el Lejano Oriente, Japón denunció el Tratado Naval de Washington.

Este año, 1934, fue de avances fascistas en Europa y de creciente amenaza en el Lejano Oriente, pero también de concentración antifascista en Francia y España. En Gran Bretaña los comunistas y el Partido Laborista Independiente aprovecharon la oportunidad para hacer presión en favor de un Frente Unido semejante, pero tropezaron con una decidida negativa del Partido Laborista, que declaró que el único verdadero Frente Unido era el integrado por el mismo Partido, el Congreso de Sindicatos y la Unión de Cooperativas, ya unificados en el Consejo Nacional Laborista y, reafirmando su hostilidad a toda clase de dictadura, hizo hincapié en su fe en "el gobierno democrático, con un sistema electoral libre y una maquinaria parlamentaria activa y eficiente para lograr decisiones efectivas, después de dar oportunidades razonables a la discusión y la crítica". En la Conferencia del partido de ese año, el Ejecutivo del Partido Laborista presentó, además de numerosos informes políticos sobre cuestiones especiales, un nuevo proyecto de declaración de política general, que debía sustituir la anterior *Socialism and the Nation* y que llevaba el título de *For Socialism*

and Peace. La Liga Socialista propuso no menos de 75 enmiendas, variando la política general propuesta por el Ejecutivo. Desafiar así al resto de la asamblea significaba prácticamente que no lograría la enmienda del proyecto de programa sobre ningún punto en particular, levantando al resto de la Conferencia en su defensa. Tengo la seguridad que la Liga Socialista cometió un grave error al hacer esto. Había sido fundada, después de todo, por elementos de izquierda que querían seguir trabajando dentro del Partido Laborista sin romper con este organismo; pero desafiar en conjunto la política del Ejecutivo y, al mismo tiempo, aceptar el Frente Unido con los comunistas frente a la hostilidad del Ejecutivo tenía que hacer intolerable su situación dentro del partido, mientras que algunas de sus proposiciones habrían podido despertar suficiente simpatía si se hubieran planteado por separado, y no como parte de un desafío total, y habrían tenido éxito. For *Socialism and Peace* no era de ninguna manera, en efecto, un documento reaccionario, sino un considerable avance sobre el programa anterior como declaración de los objetivos socialistas. Empezaba estableciendo cinco principios generales que orientarían al partido en la definición de sus objetivos. El primero de los cinco comprometía al partido a trabajar en favor de la paz, desterrando las causas esenciales de las disputas internacionales, mediante la consulta y el arbitraje; renunciando a la guerra como instrumento de política nacional, mediante el desarme y la cooperación a través de la Sociedad de Naciones y con los Estados que todavía no fueran miembros de la Sociedad.² El segundo principio fijaba el objetivo de lograr para todos los miembros de la comunidad un nivel de vida satisfactorio, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. El tercero hablaba de convertir la industria, de una lucha al azar por las ganancias privadas, en una economía nacional planificada tendiente al servicio de la comunidad. El cuarto se refería a la expansión democrática de la educación, la sanidad y otros servicios sociales. Finalmente, el quinto trataba de los impuestos, que deberían ajustarse para sostener y mejorar el aparato nacional de la industria (es decir, para la inversión) y para que el excedente creado por el esfuerzo social se aplicara al bien de todos.

La Liga Socialista desafió estos principios, no porque estuviera en desacuerdo con ellos, sino porque no eran lo bastante explícitos como para constituir un compromiso preciso para el momento de asumir el gobierno. No se pretendía que significaran esto ya que toda la declaración estaba concebida en términos de objetivos a largo plazo, más que como programa de un gobierno en el poder. Incluía, sí, algunas propuestas específicas; pero deliberadamente no se hacía alusión

² La Unión Soviética entró en la Sociedad en septiembre de 1934, después de redactada la declaración.

explícita a cuáles de ellas integrarían el programa de un gobierno laborista en su etapa inicial en el poder. En su sección final era decididamente parlamentario y constitucional, al mismo tiempo que se proclamaba dispuesto a la abolición de la Cámara de los Lores y prometía proceder a la abolición si los Lores obstruían la realización de su programa, advirtiendo además la urgente necesidad de reformas de procedimiento en la Cámara de los Comunes —a las que también se refería un Informe Especial presentado a la Conferencia del partido de 1934. Lo que objetaba la Liga Socialista era, en primer lugar, la ausencia de un programa inmediato definido y, en segundo lugar, la entrega inequívoca a los métodos constitucionales, sin tomar en cuenta los actos que pudieran realizar los opositores del laborismo para derrotar sus medidas. La Liga quería un compromiso indudable de "avanzar decisivamente en un periodo de cinco años hacia una Inglaterra socialista", incluyendo un cambio decisivo en "la base entera de la producción y la distribución de modo que la fuerza de producción sea utilizada para satisfacer las necesidades del pueblo de acuerdo con una economía planificada". Sir Stafford Cripps presentó su enmienda en estos términos. Dalton, por el Ejecutivo, pidió que se retirara la enmienda y prometió otra declaración más corta con el programa inmediato del partido. La Liga se negó a retirarla y fue derrotada por más de diez votos contra uno, después que Herbert Morrison había atacado lo que consideraba el motivo comunista por debajo de la enmienda. No obstante, la Liga persistió y fue igualmente derrotada en otras enmiendas. Finalmente, *For Socialism and Peace* fue aprobado casi sin alteración por la Conferencia: Se añadió a este programa una Declaración especial sobre *War and Peace* (guerra y paz), auspiciada por el Consejo Nacional Laborista. Se refería a un sistema de seguridad colectiva a través de la Sociedad de Naciones y de la O.I.T. Se mostraba favorable a la internacionalización de la aviación civil y de la entrada de la Unión Soviética en la Sociedad de Naciones, al mismo tiempo que se avanzaba paso a paso de acuerdo con los Estados Unidos. Apoyaba la resistencia individual a prestar servicio en cualquier guerra que violara los principios de la Sociedad; pero rechazaba la huelga general contra la guerra como inadecuada frente a la destrucción de los movimientos obreros alemanes e italianos, limitando su compromiso a la política, ya aprobada, de convocar a un congreso especial de sindicatos para decidir la acción a seguir en caso de peligro de guerra. Esta declaración también fue criticada por la Liga Socialista, que consideraba a la Sociedad de Naciones inseparablemente ligada al Tratado de Versalles e incapaz de otra cosa que sostener el *statu quo*. Su enmienda pedía más estrechas relaciones con la Unión Soviética y que los trabajadores de todas partes resistieran la guerra por todos los medios a su alcance, incluyendo

la huelga general. También en este aspecto fue derrotada la Liga Socialista, pero 673 000 votos contra 1 519 000 fueron emitidos contra la Declaración en conjunto por los grupos combinados de izquierda y los pacifistas.

En toda esta cuestión la Liga Socialista representó una intensa reacción al desastre de 1931, insuficiente para hacerla salir del Partido Laborista junto con el Partido Laborista Independiente, pero lo bastante fuerte como para colocarla en decidida oposición al constitucionalismo y la confianza en la Sociedad de Naciones de la dirección del Partido Laborista. En Leicester, en 1932, esta actitud se había extendido lo bastante para permitirle hacer aprobar la resolución que pedía la nacionalización de los bancos por acciones con el apoyo de mineros y ferroviarios. Pero ya en 1934 se había disipado mucho esta reacción izquierdista y la dirección del Partido estaba aún más firmemente en manos de quienes habían sido miembros prominentes del gobierno laborista y habían estado ligados a la política de transacción hasta la ruptura definitiva con MacDonald. El hecho de que la mayoría de los antiguos líderes—entre otros Morrison y Dalton—no estuvieran dentro de la Cámara de los Comunes no impedía esto; porque así tenían más tiempo y energías para dedicarlos a resucitar el partido y dotarlo de un programa más reflexionado que el que había poseído en 1929 o en 1931. La lección de 1931, tal como la entendieron viejos baluartes del laborismo como Morrison, Dalton y Pethick Lawrence, no era que el laborismo debiera abandonar su política de constitucionalismo gradualista, sino que debía prepararse mejor, con un programa factible, para que el próximo gobierno laborista lo pusiera en práctica. Bascaban una clara mayoría parlamentaria, a la ausencia de la cual atribuían los problemas de 1929-31 y no previeron que los partidos burgueses pudieran abandonar el constitucionalismo para obstruirlos ni creían posible obtener una mayoría si llegaban a constituir una amenaza al parlamentarismo. La Liga Socialista, por otra parte, atribuía la caída del Partido Laborista a la decisión de sus oponentes a recurrir a cualquier medio para derrotarlo; estaba segura que esta política se repetiría en caso de una victoria laborista en las urnas y pensaba que una actitud de abierto desafío lograría mayor apoyo que una actitud de transacción. Había, pues, un agudo conflicto de puntos de vista entre la izquierda y la derecha, con la votación en bloque de los sindicatos, después de 1932, en favor del ala derecha contra las propuestas semirrevolucionarias de la izquierda.

Poco después de la Conferencia del Partido Laborista de 1934 éste publicó una serie de informes especiales, referentes a las regiones afectadas por la depresión, que pedían una acción destinada a resolver el estancamiento producido por el desempleo que seguía existiendo en esas

áreas a pesar de la recuperación general. El gobierno presentó un proyecto de ley sobre las áreas especiales estableciendo comisiones para auxiliarlas, pero con facultades muy limitadas, que el Partido Laborista en el Parlamento trató inútilmente de lograr que se ampliaran. La Oficina de Ayuda a los Desempleados hizo público en diciembre su proyecto de condiciones; y la protesta general que provocó unificó a los comités locales de desempleados en una nueva cruzada, ampliamente apoyada por los consejos laborales y las distintas ramas sindicales. El Congreso de Sindicatos, a través del Consejo Nacional Laborista, se unió a las protestas, pero se negó a reconocer al Movimiento Nacional de Trabajadores Desempleados, dirigido por los comunistas; el Partido Laborista rechazó numerosas solicitudes de afiliación del Partido Comunista y el Partido Laborista Independiente. El Partido Comunista, en febrero de 1935, aprobó e hizo pública su nueva línea política, con el provocador título de *For Soviet Britain*. Lloyd George presentó nuevamente un programa de su cosecha, con el lema de *Organising Prosperity* ("Organización de la prosperidad") redactado sin consulta previa con los demás grupos liberales. Quería un Supremo Consejo Económico, dirigido por un pequeño gabinete, para poner en práctica un amplio programa de desarrollo de las principales industrias, todavía de propiedad privada pero con ayuda financiera del Estado en caso necesario y ofrecía colaborar con el gobierno nacional para llevar a cabo este programa. Pero no tuvo repercusión; por el contrario, en junio de 1935, los tories se deshicieron de Ramsay MacDonald y reconstituyeron el gobierno con un gabinete puramente tory, con Stanley Baldwin como jefe del mismo.

En Gran Bretaña los socialistas estaban divididos por cuestiones de política internacional así como por asuntos internos. El Partido Laborista, como hemos visto, se manifestó en favor de una política decidida de seguridad colectiva a través de la Sociedad de las Naciones; pero esto no constituía una clara orientación en cuanto a la actitud que había de adoptarse respecto al rearme. Hasta la campaña de sufragios por la paz de 1934-1935, el Partido Laborista siguió hablando en términos de desarme, a pesar del fracaso manifiesto de la Conferencia del Desarme, que no hacía avance alguno, y a pesar del incumplimiento evidente de las condiciones de desarme del Tratado de Versalles por los nazis. En 1935, sin embargo, el centro de atención era Italia, donde Mussolini hacía sus propios preparativos para la guerra en Abisinia. En la Conferencia de Stressa, en junio de 1935, convocada por la reimplantación en Alemania del servicio militar, no se hizo mención de Abisinia, aunque Laval había hecho un pacto con Mussolini cinco meses antes. El Congreso de Sindicatos de Gran Bretaña se manifestó partidario de tomar medidas para contener al go-

bierno italiano; pero Mussolini, sin sentirse afectado por la amenaza de sanciones de la Sociedad de Naciones, procedió a abrirse paso con sus bombas en Abisinia. Ante esto, se aplicaron de hecho ciertas sanciones económicas por parte de la Sociedad en octubre; pero no eran muy decididas y no impidieron que se despachara petróleo para el uso de las fuerzas italianas en la invasión.

En noviembre de 1935 se efectuaron elecciones generales, donde Baldwin, muy influido por la campaña de los sufragios por la paz, quiso aparecer como campeón de una política de seguridad colectiva a través de la Sociedad de Naciones y logró nuevamente una mayoría. El laborismo obtuvo, por supuesto, representantes, logrando 154 miembros en relación con los 46 de 1931, pero 134 menos que en 1929. En el nuevo Parlamento, los candidatos patrocinados por los sindicatos nacionales estaban en mayoría, pero gran parte de los dirigentes derrotados en 1931 recuperaron sus diputaciones. MacDonald, derrotado por Shinwell en Seaham, fue reelecto en 1935 por las universidades escocesas, pero murió al año siguiente. De los que habían salido del gabinete de 1931, sólo Thomas se mantuvo hasta que renunció en 1936, como resultado de un escándalo por filtraciones del presupuesto. Los liberales independientes, por entonces fuera del gobierno, postularon 161 diputados, pero sólo obtuvieron 21 frente a los 33 de los liberales nacionalistas con apoyo de los tories. Los tories tenían aún, pues, una amplia mayoría y, cuando pasaron las elecciones, presentaron un programa de rearme que no se habían atrevido a hacer público antes a los electores. El Partido Laborista —que hasta entonces, a pesar de su oposición al fascismo, había votado contra los crecientes gastos en armamentos— tenía que decidir ahora si apoyaba o se oponía al programa del gobierno: no podía ya mantenerse en equilibrio apoyando tan sólo armamentos dentro de los límites impuestos y al sumar todas las fuerzas nacionales capaces de oponerse a un agresor y negarse a contemplar la posibilidad de una acción unilateral inglesa. La decisión no era fácil si consideramos la sospecha de que el gobierno quisiera aumentar las fuerzas, no para hacer más efectivas las decisiones de la Sociedad de Naciones, sino como base para llegar a un acuerdo que dejara libres a los agresores para lanzarse contra la Unión Soviética.

Mientras Mussolini continuaba su agresión a Abisinia sin que la Sociedad se lo impidiera, Hitler aseguraba a Occidente que no amenazaba su seguridad y que deseaba honestamente la paz, al mismo tiempo que proseguía su campaña para proteger a la Europa occidental del bolchevismo. Entretanto, en la Conferencia del Partido Laborista de 1935, Lansbury perdió el liderato después de un desenfadado ataque de Ernest Bevin a su pacifismo; y Attlee lo sustituyó. Lans-

bury era, en efecto, muy querido por el ala izquierda; pero su pacifismo le había enajenado la confianza de los antifascistas sin propiciarle la de sus opositores de derecha, y no estaba ya en posición de desempeñar la dirección como era necesario. El desacreditado Acuerdo Hoare-Laval de diciembre de 1935, que aceptaba dejar a Italia en posesión de la mayoría de sus territorios conquistados, despertó tanta indignación popular que tuvo que ser denunciado; pero el deshonor de la política exterior británica no se salvó. En marzo de 1936 Hitler marchó sobre la Renania, rompiendo los Tratados de Locarno y provocando una nueva crisis europea; y en junio comenzó la guerra civil española con la rebelión del general Franco en el norte de África. Esto planteó de inmediato la cuestión de los derechos del gobierno republicano español a comprar armas y recibir ayuda del exterior; y los Estados fascistas pronto empezaron a suministrar ayuda en gran escala a los rebeldes. Los aliados occidentales trataron de contrarrestar esto con un "Pacto de No Intervención", al que se adhirieron los Estados fascistas sin ninguna intención de cumplirlo. El gobierno de Frente Popular de Léon Blum, que había subido al poder en Francia, no estaba dispuesto a actuar sin pleno apoyo de Inglaterra, ante la fuerza de los sentimientos pacifistas en Francia y las poderosas influencias que favorecían un entendimiento con los alemanes; y el gobierno inglés era hostil a los republicanos españoles. Los Estados fascistas pudieron, pues, violar impunemente el Pacto de No Intervención, mientras que la Unión Soviética estaba demasiado lejos para poder brindar una ayuda más que limitada a los republicanos quienes, sin embargo, cayeron progresivamente bajo su influencia.

Ésta era la situación a la que tuvo que enfrentarse la Conferencia del Partido Laborista cuando se reunió en Edimburgo, en octubre de 1936. El Ejecutivo logró la aprobación, en los primeros días de la Conferencia, de una resolución que apoyaba la no intervención, pero insistiendo en que fuera practicada por todos; pero los delegados fraternales españoles pudieron hacer revelaciones tan sensacionales de las violaciones al Pacto por los fascistas que la Conferencia cambió de opinión, envió a Atlee a Greenwood en una misión de protesta ante el gobierno y, a su regreso, aprobó una nueva resolución mucho más esperanzadora para los republicanos. Ya en mayo el Consejo Nacional Laborista había lanzado un manifiesto, *Socialism and the Defence of Peace*, donde declaraba que "el laborismo debe estar dispuesto a aceptar las consecuencias de su política" y que "un movimiento que apoya al sistema de la Sociedad de Naciones no puede abandonarlo en una crisis". Todavía se subrayaba la importancia de la acción de la Sociedad de Naciones, y se expresaba la oposición al rearme unilateral; pero claramente se había producido un cambio desde la completa oposición hasta

el apoyo con reservas a la política de rearme, dejando al Partido Laborista en el Parlamento la tarea de decidir cuándo debía votar en pro o en contra de las proposiciones concretas del gobierno. El Partido Laborista estaba, de hecho, en un dilema entre su decisión de organizar la oposición a los fascistas y su temor de que los armamentos en manos del gobierno tory fueran utilizados, no para preservar la seguridad colectiva sino para lo contrario.

En este dilema, Cripps y la Liga Socialista, así como el Partido Laborista Independiente, adoptaron una línea clara negándose a apoyar el rearme mientras los tories estuvieran en el poder, en tanto que la mayoría del Partido iba progresivamente hacia una política de votación en favor de un incremento de los armamentos a pesar de su desconfianza hacia el gobierno. La Conferencia de Edimburgo votó en favor de la ambigua resolución por una mayoría de más de dos a uno; pero la decisión verdadera fue tomada por el Partido en el Parlamento. Mientras tanto, respecto al problema planteado por la guerra civil española, la actitud de la dirigencia siguió siendo ambigua y se limitó, de hecho, a tratar de que se cumpliera el Pacto de No Intervención. Una delegación de Francia, encabezada por Jean Longuet, llegó a Londres en noviembre de 1936 para averiguar si los ingleses apoyarían a Francia si ésta rompía el Pacto para intervenir de parte de la República; pero sólo obtuvo una escurridiza respuesta por temor a que la intervención condujera a la guerra. Tampoco la Unión Soviética estaba dispuesta a intervenir directamente sin la seguridad del apoyo francés e inglés. La Guerra Civil prosiguió, pues, con creciente intervención de los países fascistas y cada vez la suerte fue más adversa a los republicanos, aunque Madrid logró sostenerse hasta principios de 1939; desde el fin de la lucha siguió una orgía de represalias y la total supresión del movimiento obrero español, que sólo se mantuvo en el exilio —principalmente en México y en Francia.

En julio de 1937 el Consejo Nacional Laborista publicó un nuevo manifiesto, *International Policy and Defence*, que se consideró como una concesión definitiva a la política de rearme, aunque ésta tuviera que ser ejecutada por un gobierno tory. Reconocía que la Sociedad de Naciones "se había vuelto ineficaz" y, aunque postulaba su restauración y la seguridad colectiva en principio, insistía en que un gobierno laborista debería, no sólo defender al país, si volvía al poder en la situación mundial que entonces prevalecía, sino desempeñar su papel en la seguridad colectiva y responder a cualquier intimidación de las potencias fascistas, por lo que no podría renunciar a la política de rearme mientras no hubiera logrado mejorar la situación mundial. Esta política, aunque fuertemente atacada por Aneurin Bevan, que se elevaba rápidamente como una de las principales figuras de la izquierda, fue

suscrita por una proporción de 10 por 1 en la Conferencia del Partido de Boumemouth. Antes, los japoneses habían lanzado su ataque en gran escala al Norte de China y a Shanghai; y la Conferencia aprobó también una resolución que pedía la acción conjunta con los Estados Unidos para poner un alto a la agresión japonesa, mediante presión financiera y económica. El Consejo Nacional Laborista pidió mientras tanto un boicot al Japón; pero, aunque una Conferencia de la Sociedad de Naciones se reunió en noviembre en Bruselas para considerar la cuestión, no se llegó a un acuerdo efectivo. De hecho, mientras se celebraba la reunión, Alemania, Italia y Japón firmaban un Pacto contra el Comintern y renovaban su intento de lograr el apoyo occidental para sus designios contra la Unión Soviética. En esta atmósfera terminó 1937 y se inició el año de Munich.

A principios de la crisis checoslovaca no pocos, inclusive dentro del Partido Laborista, encontraron cierta razón en las demandas sobre los Sudetes y esperaban que los checos pudieran resolverlo sin una rendición definitiva. Pero las negociaciones durante el verano convencieron a la mayoría de que Hitler sólo se contentaría con la destrucción de la fuerza de resistencia de Checoslovaquia para que no pudiera hacer frente a las demandas que pensaba plantear después; y mucho antes de las discusiones de Munich la opinión había variado casi totalmente en favor de apoyar a los checos a cualquier precio. Se intentó establecer un frente común de los movimientos laborista inglés y socialista francés; pero los franceses, divididos por disensiones internas y conscientes de su debilidad, no se decidieron. Por razones técnicas de un cambio de fecha, no hubo Conferencia del Partido Laborista en 1938; pero el Consejo Nacional Laborista preparó y presentó al Congreso de Sindicatos en septiembre una declaración, *Labour and the International Situation: On the Brink of War*, donde se afirmaba que las demandas nazis eran tales que ningún gobierno tenía derecho a recomendar a los checos que las aceptaran y decía que "había llegado el momento de orientarse positiva e incuestionablemente a la defensa colectiva contra la agresión y salvaguardar la paz". "El gobierno británico —añadía— no debe dejar duda en el espíritu del gobierno alemán, en cuanto a que está dispuesto a unirse a los gobiernos francés y soviético para resistir cualquier ataque a Checoslovaquia." Esto se redactó, por supuesto, mucho antes de las últimas etapas de la crisis, y podía interpretarse como si la decisión estuviera condicionada por la participación de Francia y la Unión Soviética. Con esta última no había habido consulta previa y no se había intentado una planificación militar concertada; pero es evidente que el gobierno soviético, que no se sentía suficientemente fuerte como para intervenir por sí solo, es-

peraba las decisiones de Gran Bretaña y Francia y estaba dispuesto a intervenir si estas naciones también lo hacían.

Mucho antes de Munich, había desaparecido todo equívoco de las declaraciones laboristas en Gran Bretaña y era evidente que el laborismo británico, por gran mayoría, era partidario de la defensa de Checoslovaquia, oponiéndose sólo un pequeño grupo de pacifistas absolutos. Habían surgido, sin embargo, muchas agrias disputas internas antes de llegar a la casi unanimidad —especialmente en torno al problema de si el Partido Laborista debía seguir solo, preparándose para unas elecciones generales en las que podía obtener una clara mayoría, o si debía buscar aliados para una inmediata cruzada antifascista, dentro del movimiento obrero, mediante la aceptación de las sugerencias del Partido Comunista, el Partido Laborista Independiente y la Liga Socialista en favor de un frente obrero unido— o si debía ir más allá y solicitar la colaboración de todos los antifascistas en una especie de Frente Popular, al estilo de los creados en Francia y España. El Ejecutivo del Partido Laborista, apoyado por la Conferencia del Partido, se oponía sin excepción a ambas posibilidades, sosteniendo que todos los hombres y mujeres de buena voluntad debían adherirse al Partido como único instrumento posible de otra política y poniendo en duda que cualquier Frente Unido o Popular pudiera obtener mayor o idéntico apoyo popular que el Partido Laborista, tan sólo con una política coherente.

Como hemos visto, la Liga Socialista, en desacuerdo con la dirección del partido sólo en cuestiones de política interna, había sido decididamente derrotada en sucesivas Conferencias del Partido; pero, a partir de 1936, la disputa se trasladó principalmente al campo de los problemas internacionales, especialmente después del estallido de la guerra civil en España. En mayo de 1936 el editor Victor Gollancz, con la colaboración de H. J. Laski y John Strachey, inauguró el Club del Libro de Izquierda que, a través de grupos locales y de una circulación regular de libros de izquierda, principalmente de temas internacionales, pronto empezó a ejercer una amplia influencia, especialmente entre los miembros más jóvenes del movimiento laborista y entre la *intelligentsia*.

De los dos teóricos del Club del Libro de Izquierda, el más joven, John Strachey (n. 1901), se había destacado en principio como partidario de la reforma monetaria y, como miembro laborista del Parlamento, había apoyado a Oswald Mosley, en cuyo Nuevo Partido participó al fundarse, aunque lo abandonó casi de inmediato. En 1931 perdió su representación parlamentaria y su actitud política se inclinó cada vez más hacia la izquierda. Sus discursos y escritos atraían mucho a la juventud; en especial *The Coming Struggle for Power* (1932),

centrado en los problemas de las clases y del poder, que lo convirtió en uno de los apóstoles más eficaces del Frente Unido contra el fascismo.

Desde el punto de vista del pensamiento socialista, no obstante, el más importante de los patrocinadores del Club del Libro de Izquierda fue Harold Laski (1893-1950), profesor de teoría política en la London School of Economics y, desde 1937, miembro (electo por los Partidos Laboristas locales) del Ejecutivo del Partido Laborista, donde fue generalmente el líder de una minoría disidente. No era comunista, a pesar de que estaba dispuesto a colaborar con los comunistas; el Ejecutivo, en efecto, con mucha habilidad lo designó orador en las Conferencias del Partido contra resoluciones emanadas de fuentes comunistas, y sus discursos fueron muy eficaces. Se había dado a conocer como escritor desde la publicación de su primer libro, un tratado académico sobre teoría política (*The Problem of Sovereignty*, 1917) y se había forjado una reputación en los Estados Unidos y en Inglaterra, ejerciendo durante algunos años como profesor en Harvard, Yale y otras universidades norteamericanas —donde, en una ocasión, se buscó un serio problema al apoyar abiertamente a los trabajadores en huelga. También había participado activamente en el movimiento en pro del sufragio femenino y fue uno de los editorialistas del *Daily Herald* de Lansbury antes de la primera Guerra Mundial. En los veinte fue miembro activo de la Sociedad Fabiana y, en 1926, ocupó la cátedra vacante de Graham Wallas en la escuela de economía. Comenzó como socialista moderado, pero se inclinó progresivamente hacia la izquierda después de ocupar la cátedra y participó cada vez más activamente en el Partido Laborista. En su condición de maestro y conferencista ejerció gran influencia sobre los estudiantes, de los cuales se ocupaba enormemente; y, como tenía gran número de discípulos del extranjero, de las dependencias británicas y de otros países, su influencia se extendió por todo el mundo, especialmente durante los años de depresión. En 1925 había publicado su conocida *Grammar of Politics* y, en 1927, un volumen, *Communism*, para la Home University Library, que señaló su aparición como pensador de izquierda. A partir de entonces sus libros sobre política al día tendieron cada vez más a la propaganda y se sintió la influencia de Karl Marx, aunque siempre quedó una fuerte huella del utilitarismo, independientemente de su adhesión a los conceptos marxistas. Escribió también mucho en tono de crítica descriptiva sobre los Estados Unidos, basado en parte en su experiencia personal y en parte en los contactos con sus numerosos amigos y discípulos norteamericanos. Como figura prominente del Club del Libro de Izquierda desempeñó, naturalmente, un papel principal en los movimientos en favor de un Frente Unido o Popular; pero, aunque fue aliado de los comunistas en estas campañas, no abandonó la aguda crítica de las tácticas

comunistas y conservó su posición dentro del Partido Laborista y en su Ejecutivo cuando sus colaboradores más cercanos, Cripps y Aneurin Bevan, fueron expulsados del Partido.

Gran parte del éxito del Club del Libro de Izquierda, en los treinta, se debió al ardiente apoyo de los comunistas y simpatizantes que no sólo aportaron el material para muchas de sus publicaciones sino que formaron con entusiasmo círculos destinados a difundir sus libros y su revista mensual. Pero Víctor Gollancz, el fundador, como otros muchos, no pudo aprobar el Pacto Nazi-Soviético y, al faltar el apoyo comunista el Club, a pesar de un resurgimiento temporal cuando Hitler invadió a Rusia que unificó nuevamente a comunistas y socialistas, fue desapareciendo gradualmente.

Casi al mismo tiempo que la fundación del Club el *Reynolds's News*, periódico dominical que, tras una larga historia como órgano radical, había pasado a ser propiedad del movimiento cooperativista, inició la propaganda hacia una cruzada popular contra el gobierno y en favor de la causa antifascista. Mientras tanto, el Ejecutivo del Partido Laborista efectuaba una campaña contra la Liga de la Juventud Laborista que, como organismo semiindependiente, reclamaba el derecho a criticar a la dirección del Partido y elaboraba un "programa inmediato" para complementar *For Socialism and Peace*, determinando con mayor exactitud lo que haría un futuro gobierno laborista, con una mayoría parlamentaria detrás en su primer periodo de gobierno. El *Labour's Immediate Programme* apareció en mayo de 1937 y fue ratificado por la Conferencia del Partido en octubre. Decía poco en cuestión de política exterior, pero comprometía al Partido a nacionalizar el Banco de Inglaterra (aunque no los bancos por acciones), la industria del carbón, las principales empresas del transporte, con excepción de las marítimas, y los suministros de gas y electricidad. Proponía también medidas para facilitar la adquisición de la tierra con fines públicos, pero no la nacionalización general de la tierra, y la reorganización de la agricultura británica y de los suministros de alimentos, días festivos con salario para todos los trabajadores, una semana estándar de trabajo de 40 horas, con algunas excepciones y salarios más altos, que se fijarían en cooperación con los sindicatos y el Partido Laborista Independiente. Se prometían también mejores medidas de seguridad social, incluyendo pensiones para la edad avanzada, un servicio médico más eficaz y la abolición de la Prueba de Medios de Subsistencia. En lo internacional sólo reafirmaba la política de seguridad colectiva de la Liga, incluyendo la internacionalización de las fuerzas aéreas y se comprometía al sostenimiento de fuerzas armadas adecuadas "para defender nuestro país y cumplir nuestras obligaciones como miembros de la Comunidad Británica y de la Sociedad de Naciones" y a establecer un Ministerio de Defensa. Era

un programa sustancial, no muy lejano a lo que el gobierno laborista de 1945 iba realmente a poner en práctica. Pero las elecciones generales para las que estaba destinado no se efectuaron y no establecía orientación alguna para resolver los problemas inmediatos del laborismo en la oposición.

Antes de publicarse *Immediate Programme*, el Partido Comunista, el Partido Laborista Independiente y la Liga Socialista habían publicado su *Unity Manifestó* de enero de 1937 firmado, entre otros, por Cripps y Laski, por Jack Tanner del Sindicato Amalgamado de Mecánicos, Arthur Horner de los mineros, Maxton, Jowett, Pollitt y Tom Mann. El Manifiesto difería de las declaraciones del Partido Laborista principalmente por su tono militante y el hincapié en la lucha contra el imperialismo en la India y las colonias, así como por la insistencia en que no había que esperar a las elecciones generales, sino lanzarse de inmediato a la lucha, especialmente en el frente interno y mediante un pacto claro con Francia y la Unión Soviética para la defensa de la paz. El Ejecutivo del Partido Laborista pronto respondió al *Unity Manifestó* expulsando a la Liga Socialista y declarando que la afiliación a la Liga era incompatible con la adhesión al Partido Laborista. La Liga se disolvió entonces, dejando a sus miembros individuales como miembros del Partido, a no ser que se les expulsara individualmente. Pero el Ejecutivo del Partido, en otro manifiesto publicado en mayo, pidió a sus miembros que se abstuvieran de toda actividad conjunta con el Partido Comunista o el Partido Laborista Independiente y que se ajustaran a las propias proposiciones del Partido, es decir, al *Labour's Immediate Programme*, recién publicado.

Disuelta la Liga Socialista, se redujo la campaña de unidad a los comunistas y el Partido Laborista Independiente y a algunos miembros de la Liga que participaron como individuos. Éstos formaron, al mismo tiempo, un Comité de miembros del Partido simpatizantes de la unidad que, a su vez, fue pronto proscrito por el Ejecutivo del Partido Laborista. El Ejecutivo había proscrito también todas las resoluciones favorables a la unidad enviadas a la Conferencia Anual por organismos afiliados, sosteniendo que la cuestión ya se había discutido y no podía debatirse nuevamente antes de los tres años, según los reglamentos vigentes. Esto significaba que la única manera de combatir la decisión abierta para los exmiembros de la Liga era pedir la revisión del Informe del Ejecutivo; y cuando se reunió en octubre la Conferencia, Cripps planteó esto en su nombre, sosteniendo que la prohibición del Ejecutivo al Comité de Unificación de miembros del partido era absolutamente inconstitucional. Fue secundado por Laski y le respondieron Clynes y Herbert Morrison, quienes advirtieron que el Ejecutivo había sido, hasta ese momento, muy tolerante y no quería imponer la

uniformidad por disciplina colectiva pero se vería obligado a hacerlo si persistían los rebeldes. Morrison pidió a los rebeldes que, después de habérseles permitido obrar con toda libertad, se olvidaran de las diferencias y permanecieran en el Partido como "buenos camaradas". Se efectuó entonces la votación, primero directamente respecto a la expulsión de la Liga Socialista y después acerca del Frente Unido y en ambos casos la revisión fue derrotada por grandes mayorías, contra minorías de 300 000 a 400 000 votos. La Conferencia de 1937, sin embargo, enmendó la Constitución del Partido, añadiendo dos miembros al Ejecutivo que serían designados por los partidos locales y estableciendo que, en el futuro, éstos debían elegir a sus miembros en vez de que la Conferencia en general los designara. El primero de estos cambios, no obstante, se aprobó por escasa mayoría: 1408000 contra 1134 000 votos, mientras que el segundo fue aprobado por una proporción de tres a uno. La fecha para futuras conferencias fue variada también de octubre hasta Pentecostés, para evitar que siguiera tan rápidamente al Congreso anual de sindicatos. Ésta es la razón de que no hubiera Conferencia del Partido laborista en 1938, cuando la transacción de Munich.

Estos acontecimientos pusieron fin al Frente Unido, aunque la propaganda en su favor prosiguió. En 1937-38 fue sustituido por el Frente Popular, intento de promover una unificación general de los antifascistas, incluyendo a los miembros del Partido Liberal y quizás inclusive a algunos conservadores disidentes. Este movimiento, fuertemente apoyado por *Reynolds's News* y su director, S. R. Elliot, en forma de una Alianza Unida por la Paz, fue suscrito por el Partido Cooperativista, sólo para ser rechazado en junio de 1938 por el Congreso Cooperativista, que ostentaba la jurisdicción definitiva en el cooperativismo. El movimiento del Frente Popular nunca logró organizarse con éxito en escala nacional; pero cobró forma en numerosos movimientos locales y logró, en noviembre de 1938, que el liberal de izquierda Vernon Bardett fuera elegido miembro del Parlamento por Bridgwater, en una lucha abierta con un tory por una curul que siempre había pertenecido a los tories. Entró al Parlamento como "progresista independiente". Los partidarios del Frente Unido se oponían todavía al rearme con Chamberlain en el poder, mientras que los partidarios del Frente Popular lo favorecían, insistiendo en que un gobierno de la izquierda no podría resistir a los dictadores a no ser adecuadamente armado.

La victoria de Bardett en Bridgwater y otras candidaturas del Frente Popular se produjeron después de la crisis de Munich y, en gran medida como respuesta a ésta, Cripps, miembro todavía del Ejecutivo del Partido Laborista, intentaba ahora asumir la dirección del Frente.

Circuló entre los miembros del Ejecutivo un memorándum en favor de la creación de un Frente Popular abierto a todo grupo de oposición y pidió una reunión del Ejecutivo para considerar sus proposiciones. Se efectuó la reunión y fueron rechazadas por 17 votos contra 3; pero Cripps, sin aceptar la derrota, hizo circular ampliamente su memorándum, bajo los auspicios de un Comité Nacional de Peticiones creado al efecto. El Ejecutivo del Partido exigió que retirara públicamente su memorándum y que reafirmara su lealtad a la Constitución del Partido. Cripps se negó y el Ejecutivo lo expulsó entonces del Partido y, cuando prosiguió la campaña a pesar de su prohibición, procedió a otras expulsiones, incluyendo a Sir Charles Trevelyan y Aneurin Bevan. Cripps anunció su intención de apelar a la Conferencia del Partido contra su expulsión, pero se le advirtió que, no siendo ya miembro, no tenía derecho a ser escuchado. Esto levantó un clamor tan grande que el Ejecutivo retrocedió y aceptó que los delegados decidieran si debía ser oído o no. Cuando se reunió la Conferencia, en Pentecostés, una pequeña mayoría votó en favor de escuchar a Cripps pero se enajenó muchas simpatías haciendo un discurso legalista en el que defendió su derecho a actuar como lo había hecho en lugar de subrayar las diferencias reales con la política del Ejecutivo y el intento de revisar el Informe del Ejecutivo fue derrotado por una votación de cinco contra uno, obteniendo Cripps sólo poco más de 400 000 votos.

Éste fue, de hecho, el fin del movimiento en pro del Frente Popular. Por entonces había terminado la guerra civil española con la caída de Madrid en marzo de 1939; los alemanes habían marchado sobre Praga y aniquilado el Estado checoslovaco y los italianos se habían apoderado de Albania. Neville Chamberlain, en marzo, había cambiado de actitud otorgando una garantía extraordinaria a Polonia y otros Estados de la Europa oriental —extraordinaria en el sentido que, después de la caída de Checoslovaquia, Gran Bretaña no tenía posibilidades de acudir en su ayuda y porque se otorgó sin consultar a la Unión Soviética. Las negociaciones en Moscú se prolongaron, en efecto, hasta mayo, pero por entonces era claro que la Unión Soviética había renunciado a toda esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio con Occidente. Maxim Litvinov, que había hecho todos los esfuerzos posibles por vigorizar el sistema de la Sociedad de Naciones, salió del cargo; y Stalin comenzó a ocuparse de la posibilidad de un pacto con los nazis, que preservara a la Unión Soviética dejando a Hitler manos libres en Occidente y permitiera a los nazis y la Unión Soviética dividir Polonia entre ambos.

Inmediatamente, el Pacto Nazi-Soviético planteó un difícil problema a los comunistas occidentales. Durante años habían procla-

mado la causa del antifascismo y pedido a los gobiernos y a los pueblos una resistencia activa al mismo. Ahora, súbitamente, tenían que tragarse sus propias palabras o exponerse a la expulsión del redil comunista. Muy pocos escogieron el segundo camino; pero la mayoría de los dirigentes estaban tan comprometidos a sostener la razón de la Unión Soviética en toda ocasión que prefirieron el primero. En Gran Bretaña Harry Pollitt publicó primero un folleto donde solicitaba apoyo para una guerra antifascista y, cuando se le desautorizó y fue depuesto de su cargo como secretario del Partido Comunista, aceptó la disciplina del partido y renunció a sus palabras. Bastantes comunistas de filas, sin embargo, salieron del Partido; y la defección fue aun mayor entre los intelectuales "compañeros de viaje" que en su mayoría eran antes que nada antifascistas y en segundo lugar simpatizantes del comunismo. La secesión hubiera sido mucho mayor si no hubiera sido evidente muy pronto que las "democracias occidentales" estaban midiendo sus golpes en vez de hacer un decidido esfuerzo por derrotar a Hitler. 1939-1940 fue el periodo de la "phoney war", que sólo terminó cuando Francia fue abatida y Gran Bretaña tuvo que escoger entre continuar la lucha virtualmente sola o aceptar la derrota que no pocos consideraban inevitable.

El pueblo inglés escogió pelear. Chamberlain salió del poder, aunque todavía gozaba del apoyo de una mayoría de los conservadores. Winston Churchill lo sustituyó a la cabeza de una coalición en la que el Partido Laborista se encargó principalmente del "frente interno" y, con Ernest Bevin como Ministro del Trabajo y de Servicios Nacionales, de la movilización nacional. Churchill vetó el planteamiento de cuestiones políticas y laborales controvertibles, rechazando inclusive el intento de los laboristas de suprimir o, en todo caso, de modificar la Ley Sindical de 1927, aprobada como represalia de los tories después de la huelga general. Pero esto no comprometió ni conmovió seriamente la alianza. Mientras duró la guerra, Churchill, conservando la dirección y la voz decisiva en los asuntos internacionales, dejó las cuestiones internas a los ministros laboristas, que no se mostraron insatisfechos con la división del poder. Sabían, en todo caso, que podían confiar en que Churchill no cedería ante Hider; y eso era lo que más les importaba, lo mismo que a la mayoría de sus partidarios.

Durante la guerra, el Partido Laborista no constituyó una amenaza electoral para los conservadores; pero desde 1941 se dedicó activamente a poner al día su programa. El proceso empezó con una declaración de política general, *The Old World and the New Society*, publicada en 1942 y aprobada en términos generales en una resolución presentada por H. Laski en la Conferencia de ese año. Esta declaración,

como las anteriores, desde *Labour and the New Social Order* hasta *For Socialism and Peace*, no fue redactada como programa electoral y no indicaba precisamente lo que haría un gobierno laborista si volviera al poder. Era más bien una declaración general de objetivos a largo plazo, vigorosamente redactada y definitivamente socialista por su tono. Comenzaba con una afirmación de la necesidad de una completa victoria sobre los dictadores fascistas y una reestructuración de las fuerzas mundiales contra la agresión, que el pueblo de los países derrotados tendría que respetar y aceptar. Señalaba el apaciguamiento y la dictadura fascista como males de una sociedad capitalista no planificada y pedía la "producción planificada para el consumo de la comunidad" como la condición esencial de la libertad. Solicitaba el mantenimiento de los controles establecidos durante la guerra en la etapa de transición de la posguerra, así como la ocupación plena y el ordenamiento del mercado bajo la propiedad y el control del Estado. Los cuatro puntos que destacaban eran la ocupación plena, la reconstrucción de Inglaterra a un nivel como el que merecían sus ciudadanos, la extensión amplia de los servicios sociales y la educación para una comunidad democrática. En estos puntos se limitaba a generalidades, dando por supuestos los detalles elaborados en anteriores declaraciones políticas sobre cuestiones particulares. Prestaba mucha mayor atención que otras declaraciones generales anteriores a los asuntos internacionales, señalando a Inglaterra un papel de dirección democrática en la Europa de la posguerra. En relación con la India era algo equívoca, declarándose en favor de la autonomía, pero no de la independencia; y en relación con las colonias no prometía la independencia inmediata, aunque denunciaba todas las formas de discriminación racial y se manifestaba en favor del fideicomiso como base del gobierno colonial. Finalmente subrayaba la necesidad de llegar, antes de terminada la guerra, a un claro entendimiento con los Estados Unidos y la Unión Soviética, aparentemente sin comprender cuán difícil resultaría tal entendimiento doble. En general era un documento directo y aun incitante, aunque tenía serias debilidades y omisiones.

Las omisiones se remediaron en cierta medida en la larga serie de informes especiales redactados por el Comité de Reconstrucción del Partido Laborista en los años siguientes, debidos en gran parte a la labor continuada, e iniciada mucho antes de la guerra, de la Nueva Oficina de Estudios Fabianos y la reorganizada Sociedad Fabiana, a las que ya hemos hecho referencia. El estrecho lazo de unión entre el Partido y la Sociedad aseguró que no sólo eran estudiados los informes y folletos publicados por la Sociedad por miembros del Comité y sus subcomités, sino que había fabianos activos entre esos miembros, desempeñando el papel tradicional de la Sociedad de consejera, crítica y redactora de proyectos. En 1944 el Comité había emitido catorce in-

formes, referente cada uno a un terreno político especial con gran detalle que formaban, junto con los demás informes redactados y aprobados antes de la guerra —cuando menos en las cuestiones internas— un fundamento plenamente adecuado para un futuro gobierno laborista. El tratamiento de los problemas internacionales era mucho menos cuidadoso; y no se estudió ampliamente el comercio exterior, aunque era evidente que en ese terreno habrían de surgir problemas muy difíciles. Había, sin embargo, mucho material para que el Ejecutivo pudiera seleccionar llegado el momento de redactar un programa más corto de acción inmediata. Este programa apareció en abril de 1945, con el título *Let Us Face the Future* y se convirtió, de hecho, en el manifiesto electoral del Partido Laborista ese año. *Let Us Face the Future*, aunque comenzaba y terminaba con párrafos bastante generales acerca de las aspiraciones internacionales, se refería principalmente a los asuntos internos. "La nación —decía— quiere alimentos, trabajo y hogares"; y a continuación determinaba cómo resolvería el Partido Laborista esas demandas. Un gobierno laborista, prometía, aseguraría la ocupación plena y una alta producción "mediante buenos salarios, servicios y seguro sociales, y con impuestos que afectaran menos a los grupos de menor ingreso". Controlaría las rentas y los precios, así como la locación de la industria y planificaría la inversión a través de una Oficina Nacional de Inversiones. Pondría fin a la depresión de las regiones más afectadas y nacionalizaría el Banco de Inglaterra "armonizando" el funcionamiento de otros bancos con las necesidades públicas. Socializaría las industrias de combustibles y de energía, el transporte por tierra, las industrias del hierro y del acero y prohibiría las prácticas restrictivas del comercio, colocando a los monopolios bajo control estatal. Pensaría en las casas antes que en las mansiones y en los productos necesarios por encima de los suntuarios en todo el campo de la producción; planificaría la agricultura para obtener mayor producción de productos alimenticios de calidad y mantendría los nuevos servicios establecidos durante la guerra, incluyendo los restaurantes y fondos municipales y el suministro de leche barata para las madres y los niños. Sostendría el nivel de precios de los productos alimenticios contra las fuerzas inflacionistas. Crearía un Ministerio de Vivienda y Planeación —uno de los pocos puntos del programa que el gobierno laborista no llevó a efecto—; establecería un Servicio Sanitario Nacional abierto a todos e introduciría una amplia legislación de Seguro Social. Implantaría "más amplias y rápidas facultades de adquisición de la tierra para fines públicos, con una justa compensación sujeta a una tasa por mejoramiento". Pondría en vigor, plenamente, la Ley Educativa de Buder, ya promulgada.

Todo esto era suficientemente directo y específico, pero en lo internacional no se prometía nada específico excepto la formación de una

organización internacional para mantener la paz, basada en la colaboración permanente de Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos, en unión de Francia, China y otros países que hubieran contribuido a la victoria común. Nada se decía de las relaciones con otros movimientos laboristas y socialistas, ni acerca de los problemas de la democracia en la Europa de posguerra y en el resto del mundo. Sin duda, era difícil precisar estos puntos; pero la ligereza con que fueron tratados o simplemente olvidados era un mal presagio. La verdad es que el Partido Laborista salió de la guerra sin una política exterior claramente definida y pronto habría de sufrir las consecuencias cuando el poder estuvo en sus manos. Pocos, sin embargo, comprendieron esto cuando las elecciones de 1945, en relación con las cuales *Let Us Face the Future* fue una declaración muy eficaz.

CAPÍTULO IV

EL SOCIALISMO FRANCÉS

La depresión de los treinta afectó a Francia más tarde que a otros países, principalmente porque la estabilización del franco en 1928 por Poincaré se había hecho a un nivel lo bastante bajo como para que las exportaciones francesas adquirieran considerable ventaja en el mercado mundial. Por el contrario, las exportaciones francesas eran en gran medida de productos de lujo y, por tanto, fueron especialmente afectadas por la caída en la demanda, es más, Francia dependía considerablemente del turismo, que se redujo también seriamente. No obstante, la baja tasa de cambio del franco dio cierto respiro a Francia aunque, incluso dejando aparte la depresión mundial, las finanzas francesas estaban en un estado de confusión extrema y había un gran descontento social.

Las elecciones de 1928 habían entregado el triunfo a Poincaré y a los partidos del llamado centro —es decir, los republicanos más conservadores. Después de la renuncia de Poincaré, asumió el poder una serie de gobiernos de corta duración, algunos de ellos radicales, pero la mayoría del centro y la derecha, presididos por Briand, Tardieu, Steeg, Chautemps y Pierre Laval, quien estaba en el gobierno cuando se efectuaron las siguientes elecciones en 1932. Éstas dieron por resultado una victoria de la izquierda, incluyendo a los radicales, que de hecho estaban agudamente divididos entre un ala izquierda comandada por Daladier y un ala derecha cuyas figuras principales, eran Caillaux y Malvy. En cuanto a los socialistas, Léon Blum había declarado antes de las elecciones que estaba dispuesto a asumir el poder si su partido resultaba el mayoritario. Pero esto no ocurrió, aunque obtuvieron 129 diputaciones en la nueva Cámara de Diputados, contra 157 radicales y sólo 14 comunistas, que habían decidido presentarse aislados a las elecciones con el lema de "clase contra clase" y habían sido derrotados en la segunda vuelta, donde socialistas y radicales habían actuado en general conjuntamente contra la derecha. Estos dos partidos, sin embargo, no llegaron a un acuerdo en torno a un programa común, condición para que los socialistas aceptaran participar en el gobierno; y los radicales asumieron el poder sin la participación socialista, con excepción de Paul-Boncour, quien se separó de su partido para ser Ministro de la Guerra y luego Primer Ministro, cuando Herriot renunció al no poder inducir a la Cámara a seguir haciendo los pagos por deudas de

guerra a los Estados Unidos, después que las reparaciones de Alemania quedaron definitivamente suprimidas en la Conferencia de Lausana.

Paul-Boncour y su sucesor Chéron no permanecieron mucho tiempo en el gobierno. Les sucedió Daladier, quien hizo nuevas ofertas a los socialistas para que participaran en el gobierno, pero no logró tampoco llegar a un acuerdo con ellos. Los socialistas estaban, sin embargo, muy divididos entre sí, ya que una minoría considerable sostenía que era necesario revivir el *Cartel des Gauches* (Cártel de las izquierdas) para combatir la creciente ola de fascismo en el país y defender a la República contra sus enemigos. Los partidarios más prominentes de este punto de vista eran el antiguo dirigente de la derecha socialista, Pierre Renaudel, el alcalde de Burdeos, Adrián Marquet y el apóstol de una economía planificada, Marcel Déat, de Auvernia. Estos partidarios de la unidad republicana, sin embargo, no lograron convencer a la mayoría del partido, sobre todo porque Daladier había incluido en sus medidas para combatir el déficit presupuestal un proyecto para reducir los salarios de los empleados del gobierno, los que constituían uno de los más fuertes elementos del Partido Socialista. Los disidentes, a pesar de todo, persistieron en su actitud y publicaron un manifiesto, al que siguió su exclusión del partido. Formaron entonces un partido propio, neo-socialista, que atrajo a cerca de 20 000 miembros de los 130 000 del viejo partido.

Durante este periodo, en 1933, después del golpe de Hider en Alemania, pero más claramente copiado del fascismo italiano que del alemán, el movimiento antirrepublicano en Francia cobraba rápidamente proporciones amenazadoras fuera del Parlamento, al menos en París. A la cabeza de este movimiento estaban principalmente dos organizaciones —los *Camelots du Roi*, inspirados por la realista *Action Française*, dirigida por Charles Maurras y Léon Daudet y la *Croix de Feu*, originalmente una organización de excombatientes, encabezada por el coronel De la Rocque. Ambas organizaciones, y algunas otras, como las *Jeunesses Patriotes*, se dedicaron a hacer manifestaciones violentas y disturbios en los que se afirmaba que la policía colaboraba en cierta medida. Se añadió combustible a las llamas al revelarse el escándalo de Serge Alexandre Stavisky, estafador al que ya se habían hecho acusaciones en 1927 pero que nunca había sido sujeto a juicio, hasta que el *affaire* de la emisión fraudulenta de bonos en Bayeux se dio a la publicidad en diciembre de 1933. Se decía que Stavisky, que se suicidó después de revelado el escándalo, había recibido protección en altos círculos políticos, incluyendo la de un ministro radical, Dalinier. En el Parlamento, la derecha hizo presión para que se hiciera una investigación a fondo del escándalo, que Chautemps, todavía Primer Ministro, rechazó. La agitación pública se enardecía entonces y Chau-

temps renunció, siendo sustituido por un nuevo gabinete presidido por Daladier, quien recrudesció el problema deponiendo de su cargo al Prefecto de policía de París, Jean Chiappe, vivaz corso de opiniones de extrema derecha, en cuyo despido insistían los socialistas como condición para apoyar al gobierno de Daladier.

El gobierno, con la ayuda socialista, estaba seguro de una mayoría parlamentaria; pero esa mayoría no era suficiente ya para protegerlo de la violencia de las ligas fascistas. El 6 de febrero de 1934, cuando Daladier presentaba el informe oficial en nombre del gobierno ante la Cámara de Diputados, una gran multitud se congregó del otro lado del río, en la margen derecha, e intentó atravesar el puente y ocupar la Cámara. Fueron rechazados, pero con dificultad, y los daños fueron considerables. El mayor, sin embargo, fue el que sufrió el prestigio de la República. Daladier renunció y Doumergue, expresidente de la República, lo sustituyó a la cabeza del llamado gobierno de "unión nacional". En efecto, la derecha había vuelto al poder.

Tras los desórdenes provocados por la derecha el 6 de febrero se produjo una ola de huelgas, huelgas cortas a modo de demostración pero no por ello menos importantes y exitosas. Los trabajadores franceses estaban divididos por entonces en movimientos sindicales rivales—los que estaban organizados, ya que la mayoría no lo estaba—: la antigua C.G.T., independiente pero aliada en la práctica a los socialistas, y la C.G.T. Unitaria, dirigida por los comunistas y subordinada al Partido Comunista. Pero los acontecimientos del 6 de febrero y el movimiento de huelga condujeron a un movimiento de reunificación entre las facciones contendientes, que se consumó por fin en enero de 1936 y fue acompañado de un aumento sensacional en el número de miembros a cerca de cinco millones a fines del año. Hubo un movimiento paralelo de colaboración política entre los partidos socialistas y comunistas. Moscú había tenido que cambiar por fin su línea ante los sucesos de Alemania y el Partido Comunista francés, que había atacado con vehemencia a los socialistas en 1933 por su apoyo a los gobiernos radicales, siguió la nueva orientación del Comintern y empezó a pedir a toda voz la unidad, no sólo con los socialistas sino con cualquiera dispuesto a participar en la causa antifascista. Un pequeño partido, llamado primero Socialista-Comunista y después Partido de la Unidad Proletaria, que se había separado de los comunistas en 1923 para unirse con otros grupos disidentes, había tratado durante algunos años de unificar a los partidos obreros rivales, pero sin resultado. El dirigente de este tercer grupo era Paul Louis, historiador del socialismo francés; pero nunca alcanzó la fuerza necesaria para elegir más que unos cuantos diputados, aun en las elecciones decisivas de 1936. Los sucesos de febrero de 1934, sin embargo, indujeron al Par-

tido Socialista a aceptar las sugerencias de los comunistas en favor de un Frente Unido; y en su Congreso de Boulogne, el Partido Socialista trazó un programa según el cual estaba dispuesto a participar en un Frente Popular antifascista, que incluyera a comunistas y radicales. Este programa incluía la disolución por ley de las ligas fascistas, la nacionalización de la banca y los seguros y de las grandes industrias sujetas al control de los monopolios, la reducción de la semana de trabajo a cuarenta horas, el reconocimiento general de los derechos de negociar los contratos colectivos, y el establecimiento de un control gubernamental sobre los precios del trigo y de la carne, así como un impuesto progresivo sobre el capital y otras reformas radicales.

Mientras tanto, al escándalo de Stavisky había sucedido, el 21 de febrero de 1934, el descubrimiento del cadáver de Albert Prince, alto funcionario judicial ocupado de la investigación. Los asesinos nunca fueron descubiertos; pero se extendió ampliamente la versión de que Prince había sido asesinado y se le habían robado documentos de vital importancia, para evitar la revelación de hechos que habrían incriminado a altos personajes políticos. No había prueba de esto, pero era la opinión más extendida en el momento. Las comisiones especiales, creadas por Doumergue para investigar el asunto Stavisky en sus implicaciones políticas, descubrieron cierta corrupción, complicando a algunos diputados y a un sector de la prensa, pero exonerando a las altas figuras contra las cuales se habían hecho acusaciones. Doumergue, por su parte, presentó proposiciones destinadas a aumentar los poderes del Primer Ministro y el gabinete, a expensas de la Cámara de Diputados. Propuso que los diputados cedieran al gabinete la facultad de presentar proyectos de gastos y que el Presidente, aconsejado por el Primer Ministro, tuviera facultad para disolver el Parlamento sin necesidad de consentimiento del Senado, la poderosa Segunda Cámara donde los radicales y sus aliados inmediatos poseían una cómoda mayoría.

Las proposiciones de Doumergue eran demasiado fuertes para que los radicales integrantes de su gobierno de "Unidad Nacional" las aceptaran; y en noviembre de 1934 el gabinete se vio obligado a renunciar. Fue sustituido por el centrista Pierre-Étienne Flandin, cuya misión era mantener controladas a las ligas fascistas y defender el franco, que había permanecido ligado al oro desde que Gran Bretaña suprimió el patrón oro en 1931. Éste era un problema de solución cada vez más difícil a medida que los efectos de la depresión mundial afectaban gradualmente a Francia y obligaban a una creciente política deflacionista. Los precios de los alimentos, en especial, bajaron mucho en el mercado mundial; y los franceses comprendieron que una cosa era fijar

por ley un precio mínimo al trigo y otra cosa lograr que lo aceptaran los agricultores que no podían vender el grano al precio oficial. Para complicar la situación, ya bastante compleja, surgió un amplio movimiento de descontento campesino, dirigido por el político conservador Dorgères, mientras que en las ciudades los *Croix de Feu* de De la Roque, con la colaboración de los *Camelots du Roi* y otras ligas fascistas, mantenían interminables disturbios. Stavisky fue pronto olvidado; pero se elevó un gran clamor en torno a los arrogantes poderes de los grandes bancos y especialmente del Banco de Francia, de propiedad privada, considerado como el instrumento de las "doscientas familias" que, según se decía, dominaban los asuntos económicos de la República y eran responsables de la política deflacionista de sucesivos gobiernos que actuaban en su nombre. Al mismo tiempo existía un fuerte sentimiento público contra una nueva devaluación del franco, que Poincaré había estabilizado en la quinta parte de su valor oro anterior a la guerra en 1928. Los franceses, que constituían una nación de pequeños atesoradores, no querían que sus ahorros perdieran una vez más su valor. De hecho, deseaban cosas inconsistentes: altos precios para los agricultores, un bajo costo de la vida y el mantenimiento del franco en el valor fijado en 1928. Y los diputados no estaban dispuestos, de ninguna manera, a cubrir el déficit de las finanzas públicas aceptando mayores impuestos. El gobierno no podía resolver la situación, a no ser mediante préstamos, que lo entregaban en manos de los acreedores y lo hacían entrar en conflicto con el Banco de Francia, que favorecía como remedio posible la restricción y la deflación. Flandin renunció también, incapaz de hacer frente a la situación; le sucedió el exsocialista Pierre Laval, ahora decididamente aliado de la derecha, quien cedió a las propuestas del Banco de Francia e instituyó una política definida de deflación.

La formación del gabinete de Laval fue la señal para nuevos estallidos de violencia fascista y el Frente Campesino de Dorgères lanzó una huelga de pago de impuestos contra el gobierno. La izquierda pedía a gritos la disolución de las ligas fascistas, acusando al gobierno de indebida complacencia a su favor. Laval, ante la defección de los radicales, a los que necesitaba para integrar mayoría, prometió actuar contra las ligas. Se aprobó un proyecto de ley que ilegalizaba las organizaciones militarizadas y daba facultades al gobierno para disolverlas y castigar como crimen la incitación al asesinato o a la violencia. La nueva ley fue, en gran medida, eficaz. Se cortaron las alas a los *Croix de Feu* que se convirtió en simple órgano electoral del ala derecha. El peligro de un golpe de Estado fascista llegaba a su fin, si es que había existido realmente. Pero la posición política de Laval

no era menos precaria ya que todavía tenía que hacer frente a las crecientes protestas contra la deflación y el Banco de Francia y la situación internacional era cada vez más peligrosa. La principal idea de Laval, en este momento, era dividir a Alemania e Italia aplacando a los italianos; éstos, aparte de sus objetivos en Abisinia, se oponían vigorosamente a las ambiciones de Hider en Austria. En julio de 1934 había fracasado un intento de golpe nazi en Austria, aunque había reportado el asesinato del dictador austríaco, Dollfus. Laval quería ganarse a Italia de parte de Francia y eso suponía dejar a los italianos manos libres en Abisinia. Por el momento, pareció lograrlo; en su visita a Roma, en enero de 1935, Laval negoció con Mussolini numerosas cuestiones importantes incluyendo, en efecto, la no intervención en el conflicto de Abisinia. Laval creía que, en esto, podía contar con el apoyo inglés.

La Sociedad de Naciones no había intervenido contra Japón en Manchuria y Laval consideraba que eran escasas las perspectivas de una acción de la Sociedad contra los italianos, especialmente con el antecedente de que los ingleses se habían opuesto a la entrada de Abisinia en la Sociedad de Naciones y habían negociado con Italia en 1925 sus respectivas esferas de influencia en ese país. Pero en Gran Bretaña, seriamente afectada por el fracaso de Manchuria, 1935 era el año de los Sufragios por la Paz y de las elecciones generales en las que el Partido Laborista intentaba remediar el desastre de 1931; y el gobierno británico no podía arriesgarse a hacer caso omiso del Convenio de la Sociedad de Naciones mientras no hubieran pasado las elecciones. El Secretario del Exterior británico, Sir Samuel Hoare, se mostró partidario de ejercer sanciones contra Italia; y Francia, al parecer, tenía que escoger entre continuar su política de acercamiento a Italia o lograr el apoyo británico. Pero el gobierno británico, aunque pedía sanciones de la Sociedad de Naciones contra Italia, se contentaba con medidas ligeras que no obstaculizaban seriamente la invasión de Abisinia y no intentó cortar el suministro de petróleo a los italianos —una medida que habría sido efectiva de inmediato y habría significado para Mussolini la necesidad de retirarse y admitir la derrota o entrar en guerra con las potencias de la Sociedad lanzándose totalmente al campo de Alemania. Además, en diciembre, el Secretario del Exterior británico visitó París y negoció con Laval el plan Hoare-Laval, según el cual se permitía a Italia anexarse una parte considerable de Abisinia y obtener derechos económicos sobre el resto del país. Este plan, publicado en París inmediatamente después del triunfo de los conservadores en las elecciones generales, produjo tal clamor en Gran Bretaña que Hoare se vio obligado a renunciar y Edén lo sustituyó como Ministro del exterior. Las sanciones ligeras prosiguieron; pero no impidieron que

Mussolini consumara la conquista de Abisinia en desafío a toda sanción, mientras la preocupación de Francia y Gran Bretaña con los asuntos de Italia dio a Hider la oportunidad de marchar sobre la Renania desmilitarizada en marzo de 1936, violando así definitivamente el Tratado de Versalles y enfrentando a los franceses con la presencia de fuerzas alemanas inmediatas a la frontera.

La marcha de Hider sobre Renania fue, en efecto, un paso decisivo en el camino hacia la guerra mundial. En combinación con la debilidad de la política de la Sociedad de Naciones respecto a Italia forzó a los italianos a una alianza con Alemania y trajo consigo el desplome de la estructura de las alianzas francesas en Europa. Hider, tras la remilitarización de Renania, presentó un Proyecto de Paz que constituía, de hecho, un intento de separar a Inglaterra y Francia y asegurar el aislamiento de ambas respecto a la Unión Soviética. Las potencias de Locarno replicaron con otro plan, rechazado por Hitler, quien anunció que haría nuevas proposiciones después de realizar un plebiscito en Alemania —lo que hizo, logrando por supuesto una aplastante votación en su favor. Presentó entonces un Plan de Paz revisado, con los mismos fines que el primero, pero subrayando más la revisión que Alemania esperaba de los tratados existentes si aceptaba participar en la Sociedad de Naciones como miembro en igualdad de derechos. Los ingleses no rechazaron directamente el plan de Hitler, pero solicitaron más explicaciones, mientras que los franceses respondían con un ambicioso plan propio. En julio de 1936 el gobierno inglés invitó a Francia, Bélgica, Italia y Alemania a una Conferencia en Londres para discutir el plan de Alemania; pero la iniciativa no prosperó e Italia cayó cada vez más en la órbita de Alemania, especialmente cuando Hitler firmó en julio de 1936 un acuerdo con Austria garantizando no interferir en sus asuntos internos en el entendimiento de que se consideraría un Estado alemán —un acuerdo que no tenía mayores intenciones de cumplir que las demás promesas de mantener la paz.

Por entonces un nuevo peligro había aparecido en la Europa occidental con el estallido de la guerra civil en España. En julio de 1936, el general Franco levantó el estandarte de la rebeldía en el Marruecos español y hubo levantamientos militares contra el gobierno republicano en muchos lugares de España. El gobierno español trató de comprar armas en el extranjero, para sustituir las ocupadas por los insurgentes, y los rebeldes, por su parte, buscaron ayuda de las potencias fascistas, que se mostraron prestas a otorgarla. Francia e Inglaterra, sin embargo, retrocedieron ante el peligro de una guerra europea provocada por el conflicto español y se dispusieron a negociar con Italia y Alemania —así como con la Unión Soviética— un llamado Pacto de No Inter-

vención según el cual se abstuvieron de prestar ayuda al gobierno republicano, mientras las potencias fascistas hacían caso omiso de sus promesas y enviaban hombres y armas en ayuda de Franco, desafiando el Pacto.

En Francia, mientras tanto, la situación había cambiado dramáticamente con la formación del Frente Popular de socialistas, comunistas y radicales y su absoluta victoria en las elecciones generales de abril-mayo de 1936. El 14 de julio de 1935, el advenimiento de la nueva alianza de la izquierda francesa había sido anunciado por enormes manifestaciones donde los comunistas, siguiendo la nueva línea de Moscú, participaron ardientemente. A esto siguieron negociaciones formales para una acción común; y el 11 de enero de 1936 los partidos de la izquierda publicaron el programa aprobado de su *Rassemblement Populaire*. Este programa incluía leyes todavía más restrictivas contra las ligas fascistas, leyes que obligaban a los periódicos a revelar la fuente de sus recursos económicos, un fondo nacional para subsidiar a los desempleados, la reducción de las horas de trabajo sin reducción de los salarios, una revaloración de los precios de los productos agrícolas sin un aumento en el costo de la vida —suponiendo que el intermediario era responsable del abismo entre los precios al por mayor y los precios de venta al detalle— y una reforma del sistema tributario para evitar la evasión de impuestos por las clases ricas.

Con este Programa aprobado, los partidos de izquierda acudieron a las elecciones generales. El hecho de que iban a ganar era un resultado previsto; pero la naturaleza de su victoria significó un gran cambio en la distribución del poder, aunque la izquierda, que había ganado las elecciones anteriores en 1932, sólo obtuvo cerca de 30 asientos más. Lo significativo fue que, mientras los radicales perdieron casi tantas diputaciones como ganó la izquierda en conjunto, los comunistas, ayudados ahora por el pacto electoral, lograron el doble de votos que en 1932 obteniendo 72 diputados contra los 12 de aquel año. Los socialistas, con dos millones de votos y 146 diputaciones triunfaron también, pero mucho menos espectacularmente. Se convirtieron, sin embargo, en el partido mayoritario y correspondió a su líder, Léon Blum, formar el nuevo gobierno, que los comunistas acordaron apoyar, aunque se negaron a participar en él. Blum integró, en consecuencia, un gobierno de ministros socialistas y radicales y se dedicó a poner en práctica, no el socialismo al que se oponían decididamente los radicales, sino el programa aceptado como plataforma electoral. Una minoría de los socialistas, encabezada por Marceau Pivert y Zyromski y apoyada por la Federación del Sena del Partido, se oponía a estas transacciones con la burguesía, pero fueron pasados por alto.

La subida del gobierno de Blum, al mismo tiempo que en España estallaba la guerra civil, fue saludada en Francia por un gran estallido de huelgas, donde participaron trabajadores no organizados y sindicados. En una región tras otra los huelguistas ocuparon las fábricas, para evitar que los patronos emplearan esquirols para romper las huelgas; pero no intentaron, como los huelguistas italianos en 1920, sostener la producción. Simplemente se instalaron y desafiaron a la policía a desalojarlos mientras sus condiciones —menores horas de trabajo, más altos salarios y plenos derechos de contratación colectiva— fueron debidamente reconocidos. Blum, por su parte, se negó a actuar para desalojarlos, sabiendo la fuerza de los sentimientos populares. Convocó a los patronos en su despacho del Hotel Matignon y los indujo a firmar los acuerdos de Matignon, según los cuales aceptaban elevar los salarios y conceder plenos derechos de contratación colectiva, quedando la determinación de los detalles a ser ajustada por acuerdos específicos de cada industria o establecimiento. Promulgó además leyes que establecían la semana de cuarenta horas y las vacaciones pagadas. Los patronos, atemorizados por las huelgas y la fuerza de los sentimientos populares, no se sintieron en posición de resistir. Cedieron, aunque la industria francesa, con la mayoría de su equipo anticuado y con altos costos de producción, estaba en mala situación para hacer frente a las nuevas cargas que se le imponían. La izquierda había obtenido una notable victoria, más aún en el terreno laboral que en el político; y los trabajadores se afiliaron rápidamente a los sindicatos.

Los Acuerdos de Matignon y la semana de cuarenta horas eran verdaderas victorias de la clase obrera; también lo eran, por el momento, los aumentos de sueldos de 12 a 15 % que los patronos se vieron obligados a otorgar y la política de obras públicas que el gobierno implantó para "crear nuevas fuentes de trabajo. Pero pronto surgieron problemas respecto al cumplimiento detallado de los acuerdos, al recobrar los patronos la sangre fría, y los precios empezaron pronto a subir obstinadamente a pesar de la prohibición del gobierno hasta que los aumentos de salarios quedaron cancelados por el alto costo de la vida. Además, el gobierno tenía aún agudas dificultades económicas, por la necesidad de mantener el franco en la paridad existente mientras fuera posible. Los campesinos fueron conciliados con la creación de una Oficina del Trigo facultada para estabilizar los precios del trigo convirtiéndose en único comprador de las cosechas de los agricultores; pero esto también costaba dinero y acrecentaba las dificultades financieras del gobierno. El gobierno de Blum nacionalizó efectivamente el Banco de Francia, aboliendo su Consejo de Regentes y asumiendo la designación del Gobernador; pero esto no le facilitaba

la evasión de sus problemas financieros. Por fin en 1936, a pesar de sus promesas, tuvo que devaluar el franco fijando una nueva tasa de cambio más baja después de obtener promesas de Gran Bretaña y los Estados Unidos de no aprovecharse; pero no se atrevió a ir lo suficientemente lejos como para tener un largo respiro. En menos de un año después de la subida al poder del Frente Popular, Blum anunciaba la necesidad de una "pausa" para consolidar los beneficios obtenidos —beneficios que, de hecho, ya se estaban perdiendo—, y se hizo evidente para sus partidarios y para sus enemigos que el gobierno estaba, efectivamente, en franca retirada. En junio de 1937 Blum tuvo que solicitar al Parlamento plenos poderes para su gobierno, después de la renuncia de dos expertos financieros nombrados con el objeto de aconsejarlo, en la esperanza de apaciguar a las clases inversionistas. Las considerables reservas de oro de Francia habían ido desapareciendo rápidamente y los especuladores en el país y en el extranjero habían acaparado mucho oro. El Senado, que desde un principio se había mostrado muy crítico de la política del gobierno y la había aceptado sólo por la fuerza de la opinión popular, veía ahora su oportunidad y rechazó la demanda de Blum de facultades especiales. Blum renunció entonces y el primer gobierno de Frente Popular llegó a su fin en junio de 1937. Fue sustituido por un segundo gobierno, presidido por el radical Chautemps, en el cual aceptó participar Blum; pero el ímpetu de 1936 había terminado y no podía esperarse de alguien como Chautemps ningún nuevo avance.

Blum, mientras permaneció en el poder, se había aferrado a la política de no intervención en España, a pesar de las fuertes protestas comunistas, tanto porque tenía que seguir la orientación de Inglaterra como porque la única alternativa parecía implicar el riesgo de una guerra europea, que quería evitar a todo precio. Los campesinos, se le decía siempre, no lucharían por España; y, de hecho, tampoco lo haría una gran parte de la población en general. El ala derecha francesa era favorable a Franco —no sólo los fascistas franceses, sino también muchos católicos, aunque de ninguna manera todos—, y a la burguesía, en general, no le importaba en absoluto el conflicto español. Se difundían absurdas historias de atrocidades cometidas por los republicanos españoles —y algunas verdaderas también— así como de las atrocidades de los españoles de derecha y sus mercenarios moros; pero, sobre todo lo demás, había un deseo de paz, casi a cualquier precio. El pacifismo era muy fuerte en el Partido Socialista, donde la conservación de la paz era un artículo de política tradicional, apoyado con frecuencia por la invocación del gran nombre de Jaurés, a quien Blum admiraba ardientemente. Iba contra la naturaleza de Blum

convertirse en un líder bélico y contra las raíces del Partido Socialista aceptar la necesidad de una guerra salvo, en todo caso, como último recurso.

Probablemente Blum no lamentó en absoluto abandonar el cargo de Primer Ministro en junio de 1937, cuando ya era evidente, no sólo que las potencias fascistas no cumplían el Acuerdo de No Intervención, sino que pronto Hider plantearía nuevas demandas que pondrían en peligro la paz. Chautemps era un político acostumbrado a encabezar gobiernos efímeros, que no hacían nada y que caían tan pronto como podían ser sustituidos por figuras de mayor fuerza y era improbable que hiciera algo grave mientras estuviera en el poder. Lo que hizo —o más bien su Ministro de Finanzas, Georges Bonnet— fue devaluar nuevamente el franco, que bajó entonces a una proporción de 130 en relación con la libra esterlina; y después eliminar a los socialistas de su gobierno y formar un gabinete puramente radical a principios de 1938. Menos de tres meses después Chautemps renunció de modo que, cuando Hitler marchó sobre Austria y se anexó ese país, Francia, en una crisis política, no tenía gobierno. Luego un segundo gabinete de Blum sustituyó al de Chautemps; pero el daño ya estaba hecho y Austria incorporada al Reich alemán sin otra reacción que ineficaces protestas de Londres. En Gran Bretaña, Anthony Edén había renunciado al cargo de Ministro del Exterior en febrero de 1938, en protesta contra la política de "apaciguamiento" de Neville Chamberlain, y Lord Halifax lo había sustituido. Era ya evidente que Hitler tenía proyectadas nuevas demandas y que Checoslovaquia sería probablemente la próxima víctima de sus atenciones. Checoslovaquia era casi el único aliado que le quedaba a Francia y el gobierno de Blum otorgó plenas seguridades de que Francia cumpliría sus promesas de prestar ayuda en caso necesario. Pero en abril el gobierno de Blum cayó de nuevo y otro gabinete de coalición de radicales y socialistas se había formado, presidido por Daladier. En mayo de 1938 Gran Bretaña y Francia advertían conjuntamente a los checos la necesidad de hacer grandes concesiones por la causa de la paz. La Misión Runciman a Checoslovaquia se envió en julio y se hizo evidente que los checos estaban en serio peligro de ser abandonados por sus aliados occidentales. La Unión Soviética prometió ir en su ayuda si Francia y Gran Bretaña hacían lo mismo; pero en ambos países occidentales el "apaciguamiento" tenía, definitivamente, la prioridad.

Así siguieron las cosas hasta la Conferencia de Munich a fines de septiembre de 1938, en la cual Chamberlain y Daladier hicieron finalmente la ignominiosa cesión de Checoslovaquia a Hider. Por entonces, el Frente Popular en Francia estaba muerto, aunque su mayoría parla-

mentaría permaneciera intacta y estuviera en el poder un gobierno radical. Los franceses podían sostener que el único camino que le quedaba era seguir la línea británica y que primero la Misión Runciman y después las visitas de Chamberlain a Berchtesgaden y Godesberg en septiembre, habían demostrado sin lugar a dudas cuál sería esa línea mucho antes de la reunión de Munich. Esto era cierto, en efecto, dada la situación existente en 1938. La cuestión era determinar si los franceses hubieran podido evitar el surgimiento de esa situación tratando de colaborar más estrechamente con la Unión Soviética después de firmado el Pacto Franco-Soviético de 1935 y puesto que la Unión Soviética era ya miembro de la Sociedad de Naciones en los años que siguieron. Sin duda habrían podido hacer mucho más; pero no deja de ser pertinente observar que, en el intervalo, la Unión Soviética, lo mismo que Francia, había atravesado una gran crisis interna después del asesinato de S. M. Kirov en diciembre de 1934. El Pacto Franco-Soviético habría tenido, en todo caso, muchos enemigos inveterados en Francia; pero estas enemistades se fortalecieron mucho con las dudas acerca de la confianza que podía depositarse en las fuerzas armadas soviéticas y en sus jefes con quienes habría que entablar las negociaciones. Litvinov, en el Ministerio del Exterior soviético, hacía sin duda lo posible por llevar a la Unión Soviética a una colaboración más estrecha con la Sociedad de Naciones en una política de resistencia a la agresión fascista; pero era dudoso hasta qué punto contaba su autoridad y qué línea estaba dispuesto a adoptar Stalin. El Comintern y, bajo su dirección, los partidos comunistas de Occidente habían alterado indudablemente su política. El lema de "lucha de clases" había sido suprimido y en su lugar se habían concentrado los esfuerzos para atraer hacia los Frentes Populares antifascistas a todos los que pudieran ser inducidos a participar. El Partido Comunista francés, en particular, había adoptado una política patriótica de carácter extremo, apelando no sólo a los sindicatos católicos y a los socialistas, sino también a la clase media que, se dijo, se salvaría aliándose al proletariado si se unificaba con éste contra las "doscientas familias" y toda la banda de monopolistas explotadores e intermediarios que se cebaban a costa de ellos y de los trabajadores. En efecto, los comunistas franceses superaban a los socialistas con sus incitaciones a una alianza antifascista lo más amplia posible. Porque mientras, respecto a los socialistas, era difícil para los comunistas no interpretar el "Frente Unido" como un movimiento y partido únicos, altamente disciplinados bajo su control centralizado —lo que suponía la absorción total del Partido Socialista—, en relación con los aliados políticos no pertenecientes a la clase obrera no tenían semejantes pretensiones y consideraban posible preconizar una

cooperación limitada que dejara a esos aliados en libertad, cuando menos por el momento, de seguir su propia línea.

Así, las negociaciones de unidad entre socialistas y comunistas que prosiguieron en forma intermitente, acompañadas de muchas recriminaciones mutuas, en estos años se efectuaron con propósitos encontrados. Los comunistas querían que el Partido Socialista se asociara a ellos, confiados en que podrían, con su concentrada energía y determinación, establecer su control sobre un Partido unificado; mientras que los socialistas, que rechazaban toda noción de "centralismo democrático" y dictadura de un partido pero comprendían la fuerza de los sentimientos populares en favor de una acción unificada, favorecían una colaboración entre los dos partidos que dejara a ambos intactos. Fueron numerosas las discusiones acerca de si debía considerarse en primer término la unidad de organización o la acción común inmediata; pero, en realidad, era una disputa entre partidarios de la asimilación de los dos partidos y partidarios de una colaboración temporal de tipo federal. Nunca existió la posibilidad de que el Partido Socialista decidiera entrar al Partido Comunista o unificarse con éste en un solo partido, lo que lo expondría a la penetración comunista como había sucedido a consecuencia de la fusión entre la C. G. T. y la C. G. T. U. en el terreno laboral. Pero había que hacer algo para asegurar una acción antifascista unificada; y los comunistas, mientras seguían haciendo presión por la unificación total de las fuerzas obreras, estaban dispuestos, si esto no podía lograrse, a ir más allá que los socialistas en la creación de un amplio Frente Popular abierto a todos los que quisieran participar.

El antagonismo entre las Internacionales rivales a las que pertenecían ambos partidos franceses contribuyó también a frustrar las negociaciones de unidad cuando fueron reanudadas después de la creación del Frente Popular. Los socialistas acusaron a los comunistas de intentar imponer las pretensiones del Comintern y de insistir en la obediencia a sus dictados, mientras los comunistas pedían a los socialistas garantías de que aceptaban como deber el acudir en defensa de la Unión Soviética. Los socialistas estaban disgustados con los comunistas por haberse negado éstos a participar en el primer gobierno de Blum, mientras que los comunistas, comprometidos a apoyar al gobierno pero permaneciendo fuera del mismo, podían aprovechar el crédito de sus realizaciones positivas mientras criticaban libremente sus errores. No había grandes simpatías entre Maurice Thorez, el dirigente comunista, y Paul Faure, quien asumió el papel principal en las negociaciones por parte de los socialistas. Las relaciones mejoraron en los primeros meses del primer gobierno de Blum, pero se deterioraron rá-

pidamente cuando éste se vio envuelto en dificultades y cuando Blum pidió primero una "pausa" y después empezó a batirse en retirada.

El gobierno de Blum fue empujado, sin duda, por la marcha de los acontecimientos, después de asumir el poder, mucho más allá de lo que habría ido por sí solo. La gran ola de huelgas que acogió su aparición lo obligó a poner en vigor de inmediato la semana de cuarenta horas y a forzar a los patronos a firmar los Acuerdos de Matignon cuando, sin duda, habría preferido adoptar una estructura más elástica de horas de trabajo y reducir los aumentos de sueldos a límites más estrechos; porque tiene que haber sido consciente de que la industria francesa difícilmente podía soportar las cargas que se le imponían, especialmente por la reducción general de las horas de trabajo y de que se producirían enormes complicaciones en torno a la introducción de la nueva semana de trabajo y a la aplicación concreta de las disposiciones de negociación de los contratos colectivos como derecho estatuido. Los comunistas, por otra parte, no vacilaban respecto a estas cuestiones, su objetivo era obtener las máximas concesiones de inmediato; porque sabían que los patronos, si se les daba tiempo, se recuperarían del pánico y ofrecerían creciente resistencia a las demandas obreras. Los comunistas no habían sido los principales responsables de las huelgas que, en general, fueron un estallido espontáneo de los sentimientos populares; pero estaban en la mejor posición para aprovecharlas y presionar al gobierno para que hiciera las mayores concesiones posibles. Francia pasó súbitamente, de hecho, a una nueva estructura de las relaciones laborales para la que no estaba preparada en absoluto. El sindicalismo había sido muy débil en el periodo de su división en dos o tres movimientos rivales y contendientes y la contratación colectiva sólo se había efectuado limitadamente. De pronto se hizo casi general y numerosos patronos que jamás habían tratado con un sindicato tuvieron que hacerlo por vez primera. Por el momento tenían que soportarlo y conceder la semana de cuarenta horas y las vacaciones remuneradas. Pero no les gustaba nada todo esto y tan pronto como empezaron a recobrase del pánico, la primera idea de muchos fue recuperar lo perdido. Tenían, en efecto, verdaderos motivos de queja —un gran aumento de los costos de producción, sin un plazo para adaptarse a ello. Especialmente indignados estaban los pequeños patronos con lo que les había caído como resultado de negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y las grandes empresas organizadas en la Gran Confederación de la Producción Francesa, sin consultar con ellos. Como resultado de las huelgas, los sindicatos extendieron considerablemente su influencia y se crearon *comités d'entreprise*, dominados por ellos, en la mayoría de las fábricas importantes. Pero quedaron

muchas pequeñas empresas donde no se efectuó organización alguna; y la aplicación de los Acuerdos de Matignon a esas empresas fue el origen de muchas dificultades, desde el principio.

Las importantes concesiones de salarios otorgadas como consecuencia de las huelgas quedaron pronto nulificadas por el aumento de los precios, que el gobierno no podía controlar efectivamente. Los trabajadores se encontraron con salarios reales que no resultaban mejores que los de antes y aun eran más bajos, aunque todavía gozaban de las ventajas de las vacaciones pagadas y de la semana de trabajo más corta. Al principio se fueron al campo para gozar de sus vacaciones; pero pronto, ante la subida de los precios, muchos buscaron trabajos complementarios para equilibrar sus ingresos y los sindicatos tuvieron que intervenir para controlar esta tendencia en vista de la escasez de trabajos. En un principio, como vimos, el gobierno trató de emprender un ambicioso proyecto de obras públicas para crear nuevas fuentes de trabajo; pero estaba muy escaso de dinero y las reservas de oro se desvanecían rápidamente por la exportación o por el atesoramiento en el mismo país. Vincent Auriol, Ministro de Finanzas de Blum, había prometido mantener el valor del franco; pero, cuando pedía préstamos, se veía obligado a ofrecer el pago a un valor oro fijo y, cuando tuvo que devaluar el franco después de todo, sus intentos de aprovechar para el Estado los beneficios del oro atesorado fracasaron y los atesores los conservaron para sí. El Senado que, como ya vimos, había cedido al principio frente al sentimiento popular, sólo estaba en espera del momento propicio para cortar las alas del gobierno; y, al negar a Blum las facultades especiales que solicitaba —y que enseguida otorgó al radical Chautemps—, hizo caer al gobierno. De hecho era imposible que el Frente Popular cumpliera sus promesas o respondiera a todas las demandas de los trabajadores sin importantes cambios estructurales en la economía en general, acerca de los cuales no estaban en absoluto de acuerdo los radicales; porque el Partido Radical, aunque tenía un ala izquierda, era en general un partido muy conservador —el más profundamente aferrado de todos al *laissez-faire* en lo económico y el más firme partidario de la empresa privada. Sus miembros eran, en general, de la pequeña burguesía y de un sector de los campesinos; y a este partido no le agradaron en absoluto las concesiones hechas en un principio a la clase trabajadora urbana. No rompió formalmente su alianza con los socialistas; pero estaba decidido a no ir más allá en el terreno económico. Los radicales querían el laicismo y eran sólidos oponentes a las pretensiones de la Iglesia católica; pero no les satisfacía nada una situación que los obligaba a ponerse al lado de los obreros contra los pequeños patronos y no sólo contra los grandes.

La *expérience Blum* estaba, pues, condenada a la frustración desde un principio, porque era un intento contradictorio —de atacar a los grandes financieros y monopolistas, pero no a la gran mayoría de pequeños patronos y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de la clase obrera. Tenía que satisfacer también a los campesinos, que se habían mostrado muy descontentos desde hacía algún tiempo. Pero era imposible encontrar una manera de subir los precios de los productos agrícolas sin permitir que, al mismo tiempo, se elevara el costo de la vida. La Oficina del Trigo y las demás instituciones destinadas a ayudar al campesino lo ayudaron, en efecto, pero perjudicaron al público consumidor al mismo tiempo. No obstante, el Frente Popular no podía evadir estas contradicciones porque había prometido prestar ayuda al hombre común sin atacar a las clases beneficiarias de un capital, excepto a los muy ricos; pero, sin ese ataque, las reformas intentadas tenían que poner a la economía en un trance todavía mayor.

¿Qué le sucedía a la economía francesa que ni siquiera podía soportar las más moderadas reformas productivas? Sufría, en primer lugar, de una crónica inestabilidad en sus finanzas públicas, debida en parte a la considerable evasión de los impuestos, especialmente por las clases ricas y los campesinos y, en parte, a que la Cámara de Diputados no quería fijar los impuestos necesarios para regularizar la situación. Se había producido un intervalo de recuperación después de la estabilización del franco por Poincaré en 1928; pero cuando la depresión mundial afectó a los franceses se habían liquidado esas ventajas y los déficit presupuestales habían vuelto. Además, Francia tenía que hacer frente a dificultades económicas y financieras al mismo tiempo. Los capitalistas, en vez de invertir su dinero para poner al día los medios de producción, preferían la especulación cuando las cosas parecían marchar bien y el atesoramiento, en el país o en el extranjero, cuando los tiempos eran malos; y los que ahorraban se aferraron al valor oro del franco cuando se sobrevaluó después de la devaluación en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Los que tenían ahorros perdieron con la devaluación de Poincaré más de las cuatro quintas partes del valor nominal de sus francos y no querían que volviera a sucederles lo mismo. El gobierno de Blum se vio apesadado entre los deseos antagónicos de sus amigos, los asalariados, y las demandas de los consumidores, con quienes también quería estar en buenos términos, de precios más bajos o al menos no más elevados. No había manera, sin embargo, de satisfacer a unos y otros, especialmente para un gobierno que necesitaba pedir prestado y, en consecuencia, tenía que contentar a los que tenían dinero para prestar. El gobierno se aferró al valor fijo del franco mientras pudo, a expensas de sus recursos que se fueron desvaneciendo; y

cuando fue obligado a la devaluación actuó a medias, sin atreverse a devaluar lo suficiente para ampliar sus posibilidades de acción. En otras naciones, los resultados del experimento de Blum eran contemplados con profundo interés. Inevitablemente, se le comparó con el Nuevo Trato revolucionario de Roosevelt. Pero la situación francesa difería ampliamente de la norteamericana, en cuanto que las causas de la depresión procedían principalmente del exterior y no podían atacarse con medidas puramente internas —en todo caso, no con las medidas que podía aprobar el Frente Popular. En menos de un año, el Frente Popular estaba en plena retirada, incapacitado para suprimir la semana de cuarenta horas, pero incapaz también de evitar que quedaran canceladas las concesiones de aumento de salarios por la elevación de los precios y que su programa de obras públicas se paralizara por la falta de medios para sufragar los gastos.

¿Qué había que hacer, pues? El Frente tenía una clara mayoría en la Cámara de Diputados y sus miembros no querían, de ninguna manera, entregar a la derecha el poder obtenido en las elecciones de 1936; porque la derecha francesa era decididamente reaccionaria y hostil a la República. Las ligas fascistas, aunque habían sido legalmente disueltas, seguían actuando con nuevos nombres. Los *Croix de Feu* de De la Rocque se negaron a convertirse en un partido político y a postular candidatos para las elecciones de 1936 pero se mantuvieron como una grande e impresionante organización de fuerzas hostiles a la concepción misma de la democracia política y un peligro potencial, si no real, para el régimen republicano. Tenía que haber un gobierno que representara nominalmente a los vencedores de 1936; y cuando los colaboradores de Blum se mostraron inestables, la única posibilidad era un gobierno dirigido por los radicales, con los socialistas dentro del gobierno o apoyándolo desde afuera —ya que sin el apoyo de los votos de los dos grupos en la Cámara no podía sobrevivir ningún gobierno. Se intentaron ambas alternativas: Blum participó en el gobierno de Chautemps y luego Chautemps siguió en el gobierno sin Blum; pero los socialistas siguieron apoyando al gobierno con sus votos, aun cuando no estaban de acuerdo con él —porque de otra manera no habría habido un gobierno capaz de reunir una mayoría parlamentaria. Pero el Frente Popular, aunque formalmente seguía existiendo, había perdido su espíritu inclusive antes de la renuncia de Blum en 1937. La base de su unidad era negativa: sabía contra qué pero no en favor de qué estaba. Para llevar adelante el espíritu de 1936 era indispensable como fuerza impulsora un nuevo movimiento de entusiasmo fuera del Parlamento; pero las medidas adoptadas bajo esta presión exterior no podían hacerse efectivas dentro del marco del orden existente. El go-

bierno de Blum, mientras duró la presión, abarcó más de lo que podía conservar una vez aflojada la presión y sus sucesores bajo la dirección radical no tuvieron otra política que sostenerse de cualquier manera posible y esperar que sucediera lo mejor.

Ésta era la posición en los asuntos internos. Internacionalmente el panorama era todavía más difícil. El Frente Popular se había formado con un mandato para combatir el fascismo en el país y en el exterior, pero también para preservar la paz. Pero, ante las actitudes de Mussolini y Hitler, era imposible conservar la paz si no se transigía una y otra vez con las demandas fascistas.

Además, en estos años críticos existía la úlcera de la guerra civil española. Fue una desgracia para el gobierno de Blum que el inicio de esa lucha coincidiera con la subida al poder del Frente Popular, porque la guerra de España levantó fuertes pasiones en ambos bandos. Para las potencias fascistas y sus simpatizadores era otro golpe a las pretensiones de democracia y una oportunidad para extender el dominio fascista, no sólo a otro país, sino a uno que completaría el rodeo de Francia y la expondría al peligro de una guerra en tres frentes. Para muchos católicos era una guerra de la Iglesia para la restauración de sus privilegios que les habían sido arrebatados por los republicanos y que estaba en continuo peligro de sufrir nuevas indignidades. Por el contrario, para muchos radicales y socialistas era una batalla por el laicismo —por el Estado secular contra los curas y por la República contra la monarquía. Para comunistas y socialistas por igual era una guerra de la clase obrera contra sus enemigos burgueses y feudales, una guerra de la izquierda contra la derecha donde un Frente Popular estaba oponiéndose a una combinación de fuerzas reaccionarias. Para los fascistas era parte de la lucha contra el "materialismo" y por la afirmación del espíritu nacional: mientras que para los comunistas era exactamente lo contrario. Al principio, parecía un hecho que, de acuerdo con el derecho internacional, el gobierno republicano debía gozar de plena libertad para comprar armas para su defensa; pero pronto se comprendió que si se suministraban armas al gobierno, aunque fuera mediante pago al contado, nada impediría a las potencias fascistas de auxiliar al general Franco, a pesar de su *status* de rebelde y que, si se otorgaba libremente ayuda a ambos bandos, había el peligro de que la guerra se extendiera hasta que las grandes potencias se pelearan entre sí directamente sobre el suelo español. Se temía también que, si se ayudaba libremente a todos, las potencias fascistas se lanzaran mucho más intensamente a la lucha, como amenazaba Mussolini desde un principio.

En Francia, como en Inglaterra, las historias de atrocidades come-

tidas fueron desde un principio diseminadas insidiosamente por los periódicos, que destacaban en su mayoría las referentes a los republicanos y, en especial, las dirigidas contra la Iglesia. Aunque Franco era indudablemente un rebelde, que utilizaba las tropas moras contra un pueblo cristiano, casi toda la clase alta y la clase media estaba de su parte y dispuesta a creer las historias de atrocidades atribuidas a los bárbaros analfabetos que, según se afirmaba, constituían la espina dorsal de la República. En estas circunstancias, era difícil oponerse a los que sostenían que, si no podía apoyarse abiertamente a Franco, se aislara el conflicto para evitar cualquier interferencia exterior que pudiera provocar una extensión del mismo. Así nació la idea de un Pacto de No Intervención, que impidiera a las potencias fascistas ayudar a Franco al mismo tiempo que se dejaba al gobierno republicano defenderse por sí solo. El supuesto —o al menos el supuesto aparente— era que las potencias fascistas observarían dicho Pacto si llegaran a firmarlo; y sobre este supuesto franceses e ingleses estaban dispuestos a negar al gobierno español su indudable derecho legal a comprar armas para su defensa. La Unión Soviética, preocupada con sus grandes juicios por traición, aceptó también participar, con la precaución de declarar que cumpliría la no intervención en la medida en que la cumplieran los demás y no más allá. Sobre este entendimiento el Pacto de No Intervención fue firmado por las cinco potencias más afectadas. Como era de esperarse, el único efecto respecto a los países fascistas fue, no evitar la intervención, sino hacer que tomara, en lo posible, una forma tal que permitiera negar su existencia.

En Francia e Inglaterra los principales amigos de los republicanos españoles eran los comunistas quienes, a lo largo de la lucha, protestaron contra la farsa de la No Intervención y pidieron una unificación general de la izquierda en favor de la causa de la República. Tenían para esto el apoyo de la gran mayoría de intelectuales y de la juventud estudiosa en ambos países; y la lucha española se convirtió en el punto de unificación de los antifascistas de toda especie, excepto los socialdemócratas ortodoxos que veían en ello un medio de los comunistas para seducir nuevos miembros y permanecieron tibios cuando no se opusieron positivamente a los movimientos creados al efecto en ayuda a España y para reclutamiento de voluntarios para luchar allí. Para los franceses, por supuesto, la cuestión española era mucho más cercana y más inminente que para los ingleses, porque España estaba en la frontera de Francia y Francia no podía añadir otro enemigo entre sus vecinos. Pero inclusive en Inglaterra los aspectos intelectuales y emotivos de la lucha española ejercieron una honda influencia que pervive aún hoy en los espíritus jóvenes e impresionables de entonces.

En España, tanto como en Austria y Checoslovaquia, la política de "apaciguamiento" traicionó a la causa antifascista, en parte por falta de simpatía hacia los republicanos, pero mucho más por una tendencia a ceder en cualquier plano con la esperanza de evitar la guerra —o quizás de persuadir a Hitler para que lanzara sus fuerzas contra Rusia más que contra Occidente. Es una vergonzosa historia para cualquier socialista culpable de connivencia con lo que sucedió pero hay que reconocer que era muy difícil para los franceses actuar sin poder contar con el pleno apoyo británico y que la principal responsabilidad corresponde, pues, no a los socialistas ingleses —aunque les toque parte de culpa— sino al gobierno de Chamberlain.

Esto en cuanto a los acontecimientos en España, analizados más detalladamente en otro capítulo. Hay que plantear ahora qué sucedió en los treinta, en Francia, respecto al pensamiento socialista. La respuesta, me temo, es que muy poco se produjo; porque en las continuas polémicas entre socialistas y comunistas no surgió casi nada nuevo. Como en otros países, el Partido Comunista sufrió repetidas divisiones, algunas veces por expulsión de un grupo recalcitrante y otras por una secesión. Estos procesos alternos se habían producido desde los veinte, cuando el Partido Comunista francés se apoderó de la maquinaria del antiguo Partido Socialista; y los comunistas franceses habían estado casi continuamente en malos términos con el Comintern, que reclamaba el derecho no sólo de determinar en Moscú la política que ellos debían seguir sino de decidir por encima de ellos mismos quiénes debían ser expulsados o retirados de sus cargos y quiénes designados para los puestos de autoridad dentro del partido. Una y otra vez, al precio de repetidas secesiones y expulsiones, el Partido francés había acatado las órdenes del Comintern, sólo para darse cuenta que la nueva dirección no complacía a Moscú más que la anterior y para tener que sufrir una nueva tanda de disciplina del Comintern.

Lo sorprendente en tales circunstancias era que, aunque los cambios en la composición del partido y la fluctuación del número de miembros era muy grande, el Partido Comunista francés siempre se las arregló para alistar pronto nuevos miembros en sustitución de los perdidos. Prescindió por turno de los sindicalistas, culpables de federalismo y autonomismo sindical; de los trotskistas, doriotistas y otros grupos pero, aunque no pudo hasta 1936 elegir más que un pequeño grupo para la Cámara de Diputados —en parte porque se aisló de los arreglos electorales con otros partidos—, pudo conservarse como un núcleo vivo y enérgico de militantes y obtener una recompensa notable de su participación en el Frente Popular de 1936. Muchos de los que se separaron del Partido Comunista entraron pronto al Partido

Socialista y otros lograron mantenerse unidos por muchos años en un Partido Socialista-Comunista propio.¹ Pero a través de todas las vicisitudes el partido se mantuvo como un grupo poderoso, proletario en su mayoría, con su fuerza principal en la ciudad de París y sus alrededores y en el Norte antiguamente guesdista, pero con células de fábricas en muchos de las mayores industrias en toda Francia.

En el Partido Comunista, Maurice Thorez pronto se reveló como gran líder. Había sido minero y era descendiente de mineros originarios del baluarte socialista del Norte: había trabajado en las minas desde los doce años de edad. Siguiendo fielmente la dirección de Moscú a través de todas sus variaciones, evitó las sucesivas purgas y permaneció a la cabeza del Partido —como hoy, al menos formalmente.

Thorez no es un pensador político de nota. Es un militante obrero que creció en una de las más fuertes regiones socialistas de Francia y heredó la tradición de Jules Guesde, devoto seguidor del marxismo socialdemócrata y admirador de la socialdemocracia alemana. Los guesdistas del Norte entraron en su mayoría al Partido Comunista en el Congreso de Tours de 1920 y permanecieron leales al partido en todas sus vicisitudes sucesivas. Thorez, demasiado joven para haber experimentado la influencia directa de Guesde, inició su vida adulta como comunista de los pies a la cabeza y destacó como dirigente por su capacidad como orador y su origen proletario, ya que Moscú insistió enérgicamente en que el partido francés fuera dirigido por obreros y no por intelectuales, acerca de los cuales —especialmente en Francia— tenía profundas sospechas como factores de indisciplina y demasiado amantes de la libertad individual.

Mientras tanto el Partido Socialista, reconstituido después de la división con el apoyo de casi todos los diputados socialistas, aunque no de los miembros de fila del viejo partido, se recuperó gradualmente de su derrota en Tours, pero nunca logró recobrar su antigua posición como *el -partido* de la clase obrera. Estaban, de hecho, muy divididos entre sí y, como los comunistas, experimentaron numerosas divisiones y secesiones. El principal problema dentro de las filas socialistas era el grado de colaboración que debía practicarse con los partidos burgueses de izquierda —en especial con los radicales— tanto en las elecciones como en la Cámara. Hasta el momento del Frente Popular, la gran mayoría de miembros del partido se opuso a la participación en un gobierno burgués; pero, aparte de esto, muchos favorecieron las alianzas electorales, especialmente en la segunda vuelta cuando eran indispensables, y el apoyo desde afuera a los gobiernos burgueses de izquierda.

Así los socialistas, en los treinta, se dedicaron a adaptarse a las

¹ Véase vol. vi, p. 36.

condiciones variables y les quedaron pocas energías para gastarlas en las cuestiones fundamentales del socialismo. Como los comunistas seguían fielmente las variables líneas dictadas desde Moscú, sin intentar elaborar por sí mismos su política, era escaso el pensamiento socialista de importancia si no se cuenta a los neosocialistas, quienes pronto se salieron del movimiento socialista, algunos para detenerse en la etapa de la planeación económica pero otros, como Déat, para pasarse a la derecha francesa y convertirse, llegado el momento, en partidarios de Vichy después de la caída de Francia en 1940. Algunos ex comunistas sufrieron una evolución semejante —principalmente Doriot, quien había participado activamente en las negociaciones de unidad de 1933, pero quedó excluido del Partido Comunista al año siguiente y fundó su *Parti Populaire Français* en 1936. Después se convirtió en virulento fascista y su Partido Popular acogió a muchos de los más violentos miembros de los *Croix de Feu*, junto con otros matones y pandilleros de diversa especie. En 1944 huyó a Alemania, donde murió ese mismo año —según se dijo, por una bomba aliada. Déat, por su parte, sobrevivió hasta 1955, después de huir a Alemania cuando la liberación de Francia y de convertirse en miembro del "gobierno" de Sigmaringen. Después de la guerra se acercó a la religión y se retiró a un monasterio en Italia, donde vivió sin ser molestado hasta su muerte. Después de haber sido en sus primeros años un planificador, cuando la ocupación, se convirtió en decidido fascista y antisocialista dentro del ala izquierda fascista, al estilo de Otto Stasser en relación con la política social. Otro "neosocialista", Marquet, de Burdeos, llegó a ser el primer Ministro del Interior de Pétain en 1940 y fue amigo íntimo de Pierre Laval. De los tres, Doriot fue con mucho el más desacreditado y Déat el más inteligente. Todos se habían alejado considerablemente del movimiento obrero al terminar los treinta.

Entre los dirigentes ortodoxos del Partido Socialista no hubo ningún pensador socialista notable. Blum era un ferviente discípulo de Jaurés. Hizo algunas contribuciones al pensamiento francés acerca de la organización del gobierno y la administración y logró poner en práctica algunas de sus ideas al reorganizar los departamentos del gobierno cuando fue Primer Ministro; pero esto difícilmente puede considerarse una contribución distinguida al pensamiento socialista. Blum era un intelectual judío de gran cultura y profundamente dedicado a la causa socialista; pero no era una figura enérgica ni un gran hombre. Más eminente como pensador socialista fue el clásico estudioso académico, Alexandre Bracke, cuyo verdadero nombre era Desrousseaux (1861-1955), que fue el más conocido intelectual marxista francés, además de ser editor de Herodoto y Sófocles. También él admiraba profundamente a Jaurés,

cuyos pasos siguió; pero no puede decirse que haya sido un pensador socialista original. El nieto de Marx, Jean Longuet, líder de la minoría francesa durante la primera Guerra Mundial, murió en 1938 pero ya mucho antes había estado alejado de esas actividades. Tampoco fue nunca un teórico importante. Pierre Renaudel, su gran rival que acabó separándose para unirse a los neosocialistas, había muerto mucho antes, en 1934. Los más jóvenes, como Jules Moch y André Philip, quienes serían importantes después de 1944, apenas se habían dado a conocer en los treintas. En general, la contribución francesa al pensamiento socialista en la década de preguerra fue prácticamente nula.

CAPÍTULO V

LA GUERRA CIVIL EN ESPAÑA

En España el dictador Primo de Rivera renunció en enero de 1930. Su sucesor, el general Dámaso Berenguer, ocupó el cargo por un año y luego cedió su puesto al almirante Aznar quien fijó las elecciones municipales para abril de 1931, para efectuar después las elecciones generales. Los resultados de las elecciones municipales nunca se revelaron totalmente; pero recayeron en favor de los partidos republicanos, que habían entrado en agosto de 1930 en el Pacto de San Sebastián. En diciembre de ese año se había producido un levantamiento republicano, sofocado por la fuerza, y los líderes juzgados por alta traición y condenados, para ser liberados de inmediato. Después que las grandes ciudades eligieron todos candidatos republicanos a pesar de la compra de votos generalmente utilizada en las elecciones españolas, el Comité republicano, encabezado por Niceto Alcalá Zamora, conservador católico que se había enemistado con las autoridades, pidió la abdicación del rey ante los sentimientos nacionales dominantes. Alfonso XIII se negó a abdicar, pero aceptó suspender el ejercicio de sus poderes y abandonar España "para abstenerme de cualquier suceso que pueda arrastrar a mis compatriotas a la guerra civil". Los republicanos quedaron dueños del país y organizaron las elecciones de unas Cortes Constituyentes que habrían de decidir el futuro gobierno. Las elecciones, efectuadas en junio de 1931, dieron como resultado una enorme mayoría para los partidos republicanos, pero su mayoría de 315 de un total de 466 diputados era una mezcla de conservadores, liberales, radicales de varios tipos y autonomistas de Cataluña y de otras provincias que querían la autonomía provincial, con poquísimos socialistas de derecha y de izquierda. Los anarquistas y sus partidarios fueron aconsejados en el sentido de que se abstuvieran de votar, pero probablemente muchos votaron a pesar de todo. Por supuesto, quedaron sin representación en las Cortes.

Al inaugurarse la República los grandes problemas fundamentales eran tres: la reforma agraria, la disminución de la autoridad excesiva en manos de la Iglesia y las demandas de Cataluña y de los vascos de autonomía regional dentro del Estado federal español. El más urgente de estos problemas era el de la Iglesia, acerca del cual el Primer Ministro Alcalá Zamora difería claramente de la mayoría de sus colegas, con el resultado de que él y el republicano conservador Miguel Maura

renunciaron al gobierno en octubre, después que se habían efectuado numerosos ataques físicos contra las iglesias y que el gobierno había decidido poner en vigor diversas medidas contra la Iglesia católica. El gobierno se reconstituyó con Manuel Azafia, líder del ala izquierda republicana; pero en diciembre los radicales de derecha, bajo la dirección de Alejandro Lerroux, siguieron a los conservadores en la oposición a la nueva política social del gobierno. Mientras tanto, las Cortes habían redactado la nueva Constitución de la República, expresión plena de una democracia parlamentaria, junto a un ataque directo a los privilegios de la Iglesia católica. De acuerdo con sus cláusulas sobre la religión, que provocaron la renuncia de Alcalá Zamora, la Iglesia quedó separada del Estado y se suspendieron los pagos al clero de los fondos públicos. Las órdenes religiosas que rindieran obediencia a una autoridad "distinta a la legítima autoridad del Estado" serían disueltas y sus propiedades confiscadas; las demás órdenes religiosas tendrían que registrarse y las propiedades que pudieran poseer se limitarían a sus necesidades legítimas; y se les prohibía a todas ellas dedicarse a la industria, el comercio y la educación. Éste era un golpe especialmente a la orden de los jesuitas, que poseía enormes propiedades y se dedicaba ampliamente a empresas comerciales y, en un plano más general, un golpe contra el control eclesiástico sobre la educación, que hasta entonces era absoluto.

Las demás cláusulas de la nueva Constitución establecían una legislatura de una sola Cámara, electa por sufragio universal y voto secreto para un periodo no mayor de cuatro años —otorgándose a las mujeres, por igual que a los hombres, el derecho de voto y el de ser elegidas—, grandes innovaciones en un país muy atrasado, que costarían muy caro a los republicanos en las elecciones de 1933. Pero al principio la tendencia hacia la izquierda era fuerte. El nuevo gobierno de Azafia, ya sin los conservadores ni los radicales de derecha, tenía una marcada tendencia hacia la izquierda, pero todavía dentro de los límites del radicalismo burgués y pequeño-burgués, con muy pocos socialistas en su composición e inclusive en las Cortes. El Presidente, según la nueva Constitución, debía ser designado por un colegio electoral integrado por las Cortes y un número igual de personas elegidas especialmente para la ocasión; este Colegio escogió a Alcalá Zamora para la presidencia porque, a pesar de sus diferencias con el gobierno y las Cortes por cuestiones religiosas, era considerado un buen republicano y se pensaba que su nombre gozaba de amplio prestigio en el país y en el extranjero.

Las Cortes, una vez promulgada la Constitución, procedieron a tratar los tres grandes problemas. En el primer año pusieron en vigor una Ley Agraria (1932) que establecía la expropiación, con compen-

sación, de algunas de las vastas propiedades rurales, en su mayoría no cultivadas, de los nobles y su distribución a los campesinos hambrientos de tierras. Esta ley creaba también un Instituto de la Reforma Agraria, con representación de los patronos y los trabajadores rurales, para efectuar los cambios proyectados en la tenencia y distribución de la tierra. Las Cortes promulgaron también un Estatuto de Autonomía para Cataluña, por el cual se devolvía a la Generalidad catalana los poderes que le habían sido arrebatados por la dictadura —facultades para controlar los servicios de policía, la educación y otras actividades diversas— y se hacía al catalán, junto al castellano, idioma oficial de la región catalana.

De estas medidas pasó el gobierno, al año siguiente, a la legislación que ponía en práctica las cláusulas religiosas de la Constitución, que apenas habían sido más que declaratorias. La Ley de Credos y Congregaciones Religiosas prohibía la enseñanza por miembros de órdenes religiosas una vez terminado ese año, dando un golpe directo a todas las escuelas religiosas, aunque el gobierno no contaba con suficientes escuelas y maestros laicos para sustituirlas y resolver el problema enorme del analfabetismo existente, especialmente en las zonas rurales. El Presidente, a quien la Constitución no dejaba otro recurso que firmar la ley, pospuso la firma hasta el último día posible. Mientras tanto, en abril, las elecciones municipales habían resultado abiertamente contrarias al gobierno, siendo electos muchos conservadores y enemigos de la República; y, en las elecciones generales efectuadas ese mismo año, los partidos republicanos de izquierda tuvieron mala suerte, quedando reducidos a 99 diputaciones en las nuevas Cortes, mientras que los partidos de derecha obtenían 207 y los de centro 167 —es decir, que triunfaba el ala derecha republicana. Azaña cayó y fue sustituido por una serie de gabinetes de corta vida con Lerroux y otros líderes de centro a la cabeza, que no sólo paralizaron la legislación de izquierda sino que hicieron lo posible por evitar el cumplimiento de las leyes ya promulgadas.

Ésta era la situación parlamentaria de 1931 a 1933 y después de 1933. Pero en España lo que ocurría en el Parlamento era sólo una pequeña parte de lo que estaba aconteciendo realmente. No había tradición de gobierno parlamentario, en un sentido real, y no existía una disposición a obedecer a las Cortes en la nueva situación más que en la vieja. Las fuerzas que habían expulsado al rey y creado la República no eran parlamentarias: tenían sus raíces en el descontento de las masas y encontraban expresión en amplios movimientos populares, especialmente entre los trabajadores y campesinos. España, con excepción de una gran parte de Cataluña y una pequeña porción de

la región vasca en torno a Bilbao, era en general un país agrícola profundamente pobre, dominado por vastas propiedades rurales pertenecientes a los nobles o a la Iglesia y en su mayoría cultivadas por los métodos más primitivos, cuando no permanecían incultas. Grandes extensiones se mantenían sin cultivar porque los dueños se negaban a cultivarlas o a permitir que lo hicieran los campesinos desposeídos; y otras regiones, como Galicia, estaban ocupadas por exiguas parcelas donde apenas podían vivir los hacinados habitantes. Había relativamente pocas regiones prósperas en las provincias vascas o en los valles de los ríos en el Este —alrededor de Valencia, por ejemplo—; y en Cataluña los *Rabassaires*, que ocupaban la tierra de cultivo mediante una relación de tenencia semifeudal, compartiendo las cosechas con sus terratenientes, se habían organizado bajo la dirección de Francisco Layret y de su sucesor Luis Calvet, en alianza con la Esquerra, partido de la burguesía catalana de izquierda, dirigido primero por el coronel Francisco Maciá y después de su muerte por Luis Companys. En otras regiones, mientras tanto, especialmente en Andalucía, el proletariado rural estaba sujeto a la influencia anarquista o semianarquista y estaba acostumbrado a estallar cada cierto tiempo en salvajes revueltas locales, fácilmente sofocadas porque cada región actuaba aislada de las demás.

En las ciudades y dondequiera que hubiera industrias, grandes o pequeñas, había sindicatos; pero éstos estaban divididos en diversos movimientos independientes entre sí. El más numeroso era la C.N.T. —la Confederación Nacional del Trabajo— principalmente bajo influencia anarquista y dirigida por anarquistas cuya fuerza mayor radicaba en Cataluña, donde superaba considerablemente a los demás movimientos por el número de sus miembros. La C.N.T. se mantenía al margen de la política de partidos y favorecía cierto comunismo libertario muy diferente del comunismo centralizador del Partido Comunista. Sus líderes, anarquistas definidos o no, coincidían en la oposición al Estado y en favorecer la reconstitución de la sociedad sobre una base de comunas locales libres, federadas sin rigidez, con la autoridad fundamental en manos de las localidades libres. De hecho, la C.N.T. estaba dividida interiormente entre anarquistas y sindicalistas —estos últimos tomando como modelo a la C.G.T. francesa en su gran época, mientras que los anarquistas seguían las ideas de Bakunin y Malatesta y estaban en más estrecho contacto, hasta la victoria fascista, con las ideas italianas que con las francesas. La C.N.T. en 1931 era un organismo grande, pero sin mucha cohesión por su repudio de la autoridad centralizada. En los primeros años de la Revolución rusa de 1917 había simpatizado con el Comintern y la Internacional Roja de Sindicatos, pero desde entonces había sido repelida por la insistencia comunista en

la disciplina centralizada y la subordinación de los sindicatos al partido. Su dirigente más conocido era Ángel Pestaña y, después de su rompimiento con los comunistas, permaneció decididamente en la izquierda, como partidario del sindicalismo revolucionario, aunque Pestaña y un sector se alejaron tanto de sus principios antipolíticos que crearon dentro de ella una especie de Partido Sindicalista. En la práctica se entregó totalmente a la causa de la Revolución.

Mientras la C.N.T. predominaba entre los trabajadores de Cataluña y era poderosa en otras regiones, Madrid era el baluarte del principal movimiento sindical, la U.G.T. —Unión General de Trabajadores— estrechamente asociada al Partido Socialista. Su dirigente era Francisco Largo Caballero, quien había aceptado un cargo de consejero bajo el gobierno de Primo de Rivera, pero se inclinó rápidamente hacia la izquierda después de la Revolución y, por algún tiempo, actuó muy cerca de los comunistas después del estallido de la rebelión de Franco. La U.G.T. era una organización mucho más disciplinada que la C.N.T., en relación con la cual se situaba claramente más a la derecha, negándose con frecuencia a participar en las huelgas generales que constituían un arma familiar de los trabajadores españoles, aunque algunas veces colaboraba en ellas con la C.N.T. Además de Madrid, la U.G.T. era la principal fuerza en Bilbao y entre los mineros de Asturias, que integraban su ala izquierda; pero tenía poca fuerza en Cataluña —casi ninguna en Barcelona— aunque reunían considerable apoyo entre los mineros del sur de España y logró reclutar un gran número de nuevos miembros después de la Revolución, inclusive en partes de Cataluña no controladas por la C.N.T. En su ala derecha se encontraba Julián Besteiro, quien llegó a ser su presidente. Su núcleo en Cataluña estaba integrado principalmente por empleados de los servicios públicos, así como por otros trabajadores no manuales.

Fuera de estos organismos había numerosos sindicatos que no estaban afiliados a ninguno, desde los *rabassaires* de la Esquerra en Cataluña hasta los llamados sindicatos "libres", que eran, en realidad, Organizaciones de rompehuelgas formadas por matones y creadas por los patronos y, después de la Revolución, un pequeño grupo de sindicatos comunistas llamado Confederación General de Trabajadores Unitarios —C.G.T.U.— que después se unió a la U.G.T., aunque algunas de sus secciones se separaron para unirse a la C.N.T., en las regiones donde ésta predominaba. Había también sindicatos totalmente aislados de la política; y había o llegó a haber algunos asociados con otros partidos políticos de la clase obrera —como el P.O.U.M. Pero la gran mayoría de trabajadores organizados se dividían entre la U.G.T. socialista y la

C.N.T. anarcosindicalista y no había posibilidad de movimiento unificado excepto cuando podían actuar juntas.

En 1931, entre los partidos políticos de la clase obrera, el Partido Socialista llevaba la delantera. Los comunistas eran pocos y sin mucha importancia y se habían dividido en numerosos grupos: leninista, stalinista, trotskista y otros; pero ejercían poca influencia. El Partido Socialista, con su principal centro en Madrid, era partidario de la centralización, aunque tenía que hacer concesiones a las demandas catalanas, vascas y demás de tipo autonomista. Era el viejo partido marxista de su fundador Pablo Iglesias, quien había dedicado su vida a luchar contra los anarquistas y su comunismo libertario y había muerto a una edad madura en 1925, dejando a Largo Caballero en Madrid y al vasco Indalecio Prieto como sus principales dirigentes. Entre ambos no había muy buenas relaciones; Largo Caballero encabezaba la U.G.T., pero Prieto dirigía en Bilbao su sección local. El tercer partido obrero de cierta importancia —el P.O.U.M., Partido Obrero de Unificación Marxista— no se creó hasta 1935, cuando surgió de una fusión entre el Bloque Obrero-Campesino de Joaquín Maurín y la izquierda comunista de Andrés Nin. Desde entonces su fuerza principal radicó en Cataluña, lo mismo que la del P.S.U.C. —*Partit Socialista Unificat de Catalunya*— constituido también en 1935 por una fusión entre los principales núcleos de socialistas y comunistas de esa región.

El Partido Socialista español tenía una querella tradicional con los anarquistas que procedía desde la época de la Primera Internacional. La principal organización anarquista, F.A.I. —Federación Anarquista Ibérica—, no estuvo formalmente constituida hasta 1927 y siguió siendo un organismo ilegal hasta el estallido de la rebelión en 1936. Antes de 1927 los anarquistas españoles habían trabajado individualmente o en pequeños grupos, y principalmente en relación con la C.N.T., donde ejercían gran influencia, aunque los anarquistas "puros" desconfiaban entre ellos mismos de sus tendencias sindicalistas y, más aún, de cualquier signo de disposición a aliarse con algún partido político. Los anarquistas, como grupo, no eran primordialmente terroristas, aunque algunos ponían bombas de cuando en cuando. Constituían un grupo excepcionalmente intelectual de teóricos libertarios, que creían en la capacidad innata de las masas y eran agudamente hostiles, no sólo a "Dios y el Estado", los dos fantasmas de Bakunin, sino a todo tipo de burocracia o centralización —inclusive a cualquier funcionario remunerado o, en todo caso, a los que recibían un sueldo mayor que el salario de un obrero— y a cualquier forma de organización autoritaria dotada de poder coercitivo. Esta actitud los colocaba en abierta oposición al Partido Socialista y su aliada, la U.G.T., así como a todos los

partidos burgueses y, por supuesto, a los comunistas —quienes cobraron importancia sólo con el estallido de la Guerra Civil.

Encontramos, pues, en 1931, una situación extremadamente confusa y confundiente. La República no fue instaurada por socialistas o comunistas, sino formalmente por una amplia coalición de conservadores, liberales, radicales de muchas clases y, de hecho, por el formidable aunque informe movimiento popular. La profunda impopularidad del rey le dio al principio el apoyo de una gran parte del ejército, incluyendo al general Sanjurjo, que pronto había de levantarse en armas en su contra. La participación de la clase obrera provino no de la política parlamentaria, sino de grandes olas de huelgas que el nuevo gobierno no se habría atrevido a reprimir aunque lo hubiera deseado; y los trabajadores rurales participaron en grandes motines de protesta acompañados en algunos casos por la ocupación de la tierra. Estas manifestaciones se produjeron entre los trabajadores de la industria en gran escala de Cataluña y Bilbao y entre los mineros; pero también surgieron en multitud de empresas de pequeña escala de industria artesanal y en numerosas ocupaciones de prestación de servicios: camareros, peluqueros, empleados y otros semejantes. Los líderes surgían local y espontáneamente, siguiendo los sindicatos, más que dirigiendo el movimiento popular. La C.N.T. estaba, de hecho, ampliamente controlada por los anarquistas y sus sindicatos se lanzaron enérgicamente a la lucha, pero también los sindicatos de la U.G.T., a pesar de sus estrechas relaciones con el Partido Socialista, fueron arrastrados por el impulso general, que se extendía más allá de las filas de las federaciones sindicales rivales. Éstas lo aprovecharon afiliando nuevos miembros en gran escala y fueron impulsadas a actuar conjuntamente para presionar en favor de sus demandas comunes; y los políticos, gustáales o no, tuvieron que ceder ante ellos y reconocerlos como representantes de las fuerzas populares más allá de la fuerza parlamentaria.

Una de las grandes dificultades de la República fue que las fuerzas políticas que había llevado al poder no correspondían a los sentimientos populares. Azaña, de hecho, era un decidido radical de fuertes simpatías hacia la izquierda, pero no tenía trazada una clara política económica ni una actitud respecto al movimiento obrero. Se sentía satisfecho de atacar a la Iglesia y las órdenes religiosas y de poner en práctica la autonomía catalana con su Estatuto, pero mucho menos de tratar con los grandes terratenientes y menos aún de tener que resolver las demandas laborales. Su posición se dificultaba aún más por haber coincidido su llegada al poder con la gran depresión mundial que afectó a la balanza de pagos de España y fue seguida rápidamente por la toma del poder hitlerista en Alemania. En un momento muy incon-

veniente hubo que hacer grandes concesiones que la economía española, al parecer, no podía permitirse; el nuevo gobierno no elaboró una política que adaptara la economía a estas concesiones. En tales circunstancias era natural que perdiera mucho de su popularidad inicial. Los ataques espontáneos a la religión, las quemas de iglesias que ocurrieron en muchas regiones, enajenaron la voluntad de muchos católicos que habían adoptado al principio el lado de la República; y las huelgas recurrentes eran impopulares entre muchos de sus partidarios burgueses. Primero Alcalá Zamora y luego Lerroux y sus radicales se habían pasado a la oposición al gobierno antes de terminar 1931; y la concesión del sufragio a la mujer, cualesquiera que fueran sus efectos a largo plazo, tenía que actuar, en un futuro inmediato, en favor de la Iglesia.

Además, la distribución de la tierra y la reforma de la educación que descansaba en bases seculares eran cuestiones muy complejas, en las cuales el éxito no podía ser rápido o, en todo caso, había que efectuarlo por medios constitucionales. Había que formar maestros y construir escuelas; y era una enorme tarea establecer a los campesinos sin tierras en las grandes propiedades y mejorar las condiciones de los que ya ocupaban alguna tierra —generalmente demasiado escasa para poder vivir de ella, salvo en una extrema pobreza— como arrendatarios o propietarios. La cuestión podía avanzar más rápidamente si los campesinos podían ocupar la tierra sin esperar la sanción legal; estos actos se produjeron esporádicamente en algunas regiones. También hubo ocupaciones de escuelas religiosas, para abrir nuevas escuelas sin esperar que el gobierno lo hiciera; pero estos actos no podían aportar el gran número de maestros nuevos que hacían falta.

Ya en agosto de 1932 la República tuvo que hacer frente a la primera revuelta militar de derecha. El general Sanjurjo se levantó en Sevilla, pero pronto fue aplastado sin necesidad de una gran pelea y no recibió el apoyo de los principales núcleos de enemigos de la República. Su golpe fue prematuro y mal planeado: después fue sentenciado a muerte pero se le perdonó después que dos millones de personas firmaron una petición pidiendo merced. Los republicanos constituyeron una fuerza policiaca armada, las guardias de asalto, para defender a la República; pero, en otros aspectos, las cosas siguieron como antes. La vieja guardia civil se mantuvo, aunque no se podía confiar en ella y prosiguió en general con los mismos métodos brutales para tratar al pueblo.

Se efectuaron entonces las elecciones de 1933, con la decisiva derrota de los partidos republicanos de izquierda. En los dos años siguientes un gobierno tras otro hicieron lo posible, en la medida de su audacia, por deshacer los previos errores cometidos en dos años sin llegar a poner

fin, totalmente, a la República. Gil Robles organizó su unión de partidos de derecha, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y José Antonio Primo de Rivera, hijo del ex dictador, su Falange Española con un organismo auxiliar militante, las Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalistas. La Renovación Española de Calvo Sotelo, decididamente monárquica, se modeló principalmente al estilo del fascismo italiano. Todos estos organismos y otros muchos de derecha atacaban abiertamente a la izquierda y a los llamados gobiernos "centristas" que habían sustituido a Azaña después de las elecciones. Querían empujar a estos gobiernos cada vez más a la derecha y acabar por sustituirlos; pero sabían que su momento no había llegado todavía.

La República siguió tambaleándose con dificultades crecientes. En el otoño de 1934 estallaron rebeliones en Cataluña y Asturias. La señal fue la caída del gabinete de Samper y la formación de un nuevo gabinete con Lerroux, que incluía ministros de derecha procedentes de la CEDA de Gil Robles. En Cataluña existía una situación muy confusa, con una aguda disputa entre la Generalidad de Companys y el gobierno de Madrid con tropas de Madrid en Barcelona, la propia Esquerra dividida entre los separatistas de *Estat Català* de Doñeas y los partidarios de Companys, una alianza de trabajadores socialistas y comunistas y de sindicatos agrupados contra Doncas, y la Federación Anarquista Ibérica perseguida por Doncas y por la policía de la Generalidad. En este estado de cosas se produjo un movimiento insurreccional, en medio del cual Companys, presionado por Doñeas, proclamó "el Estado catalán dentro de la república federal española" —un lema que no contentó a nadie y atrajo sobre él todo el peso de la fuerza militar del castillo de Montjuich, mientras los trabajadores pedían en vano, demasiado tarde, armas para resistir. Contra una oposición esporádica y mal armada, los soldados ocuparon los principales edificios y Companys se vio obligado a rendirse. La Generalidad fue privada de sus facultades y Cataluña volvió a quedar bajo la reaccionaria autoridad del nuevo gabinete de derecha de Madrid.

La revuelta de Cataluña fue una tragicomedia; lo que sucedió en Asturias resultó sencillamente una tragedia. Los mineros asturianos constituían la sección más sólidamente organizada del proletariado español y, en 1934, casi el único sector donde los comunistas conservaban una fuerte posición y estaban estrechamente aliados a otros grupos y partidos. Apoyados por una secuencia de alianzas de trabajadores locales, de diversa integración política pero coordinadas por una alianza regional en Oviedo, los trabajadores asturianos se rebelaron contra el gobierno y ocuparon Oviedo y otras ciudades. De inmediato se concentraron contra ellos nutridas fuerzas militares; y los obreros estaban

desesperadamente escasos de armas y todavía más de municiones. Inexorablemente las fuerzas del gobierno los cercaron y vencieron su dispersa resistencia, sofocando la revuelta con tal extrema brutalidad que conmovió profundamente a quienes se enteraron. Miles de víctimas fueron asesinadas y muchos miles enviadas a campos de concentración donde fueron tratados brutalmente. Sin duda, ellos habían cometido atrocidades antes de ser derrotados; pero las represalias se efectuaron en una escala mucho mayor.

Después de las revueltas de Cataluña y Asturias, se extendieron los arrestos de los dirigentes republicanos. Azaña y Companys fueron arrestados y enjuiciados como rebeldes. La derecha parecía triunfante sobre sus enemigos de la izquierda; pero no podía gobernar sin el apoyo de los partidos centristas, que sostenían el equilibrio del poder en las Cortes pero eran igualmente incapaces de sostenerse sin el apoyo de Gil Robles y la extrema derecha. De hecho, lo que sucedió después de los acontecimientos de 1934 fue un rápido vuelco de la opinión popular hacia la izquierda, junto con la determinación de la izquierda de hacer un esfuerzo para olvidar sus querellas internas y recuperar el control de las Cortes que había perdido en 1933. En torno a Azaña —la figura más popular de la izquierda— el Frente Popular empezó a integrarse y prepararse para las elecciones generales de 1936.

En el Frente Popular constituido para ir a las elecciones entraron los socialistas y comunistas, los republicanos burgueses de izquierda, los autonomistas catalanes y vascos, los sindicalistas de la U.G.T. y otros pequeños grupos. La C.N.T. apolítica no participó en el Frente, pero por primera vez no giró instrucciones a sus miembros para que se abstuvieran de votar; e incluso los anarquistas de la Federación Ibérica fueron arrastrados al movimiento. Cuando se celebraron las elecciones, en febrero de 1936, los partidos de izquierda obtuvieron una sonada victoria. Con 256 asientos tenían una mayoría de 39 sobre la derecha y el centro unidos. La derecha tenía 165 asientos y los partidos del centro sólo 52, mientras que en 1933 habían sacado 167. La izquierda estaba, pues, en posición, constitucionalmente, de promulgar la legislación que le pareciera conveniente; pero las fuerzas reales liberadas por su victoria estaban mucho más fuera de las Cortes que dentro de éstas. Dentro, la nueva mayoría utilizó su fuerza para deponer a Alcalá Zamora de su cargo de Presidente de la República; y, en mayo de 1936, Azaña fue electo en su lugar. Casares Quiroga se convirtió en Primer Ministro, pero pudo hacer poco para influir el curso de los acontecimientos. Una vez más, como en 1931, hubo huelgas y trastornos en casi todas partes, acompañados de un nuevo estallido de quemas de iglesias y ataques a las órdenes religiosas, que se habían reconstituido conside-

rablemente en los dos años de reacción. Hubo también numerosas ocupaciones de tierras por los campesinos y un quebrantamiento general de las fuerzas de la ley y el orden. Ambos bandos cometieron asesinatos, entre otros el de Calvo Sotelo, líder fascista monárquico, que era el más decidido y formidable enemigo de la República.

Ésta era la situación cuando, en julio de 1936, el general Franco levantó, en el Marruecos español, el estandarte de la rebeldía armada y se dispuso a invadir España con la ayuda de la Legión Extranjera española y un ejército de moros. Tropezó con cierta dificultad para transportar sus fuerzas desde África, ya que la marina se había mantenido en su mayoría al lado de la República —aunque la muerte de la mayoría de sus oficiales la incapacitó casi para hacer algo por el bando republicano. Pero hubo levantamientos militares en muchos lugares de España, aunque no en todo el país, y Franco consiguió transportar sus fuerzas a Cádiz, en parte por aire. En Madrid y Barcelona, sin embargo, fracasaron los levantamientos militares, cuando los soldados se negaron a obedecer a los oficiales y fraternizaron con el pueblo.

No entra en mis planes hacer una vez más el relato narrado con tanta frecuencia de la guerra civil española en sus aspectos militares. Sólo me preocupan aquí sus aspectos políticos. Al principio hubo cierta disposición del lado republicano a subestimar la seriedad del peligro, especialmente una vez que Madrid, Barcelona y Valencia se mantuvieron contra el intento de rebelión militar. Pero pronto se apreció plenamente la seriedad de la rebelión, especialmente después de la caída de Toledo en septiembre de 1936 y del avance de los ejércitos rebeldes casi hasta Madrid en los últimos meses del año. Málaga fue tomada también en el invierno de 1936-37 y, en el verano de 1937, los rebeldes se adueñaron del País Vasco, incluyendo Bilbao y Santander. Al año siguiente, avanzando hacia el Este, los rebeldes penetraron en Cataluña y, al llegar al Mediterráneo, dividieron a la España republicana. Mientras tanto, Madrid estaba sitiada y el gobierno se retiró a Valencia. Los republicanos se sostuvieron con decisión en el Ebro, de julio a noviembre de 1938, pero se vieron obligados a evacuar Cataluña en febrero de 1939. Al mes siguiente, la caída de Madrid después de una larga y heroica resistencia puso fin a la guerra civil. La victoria de Franco fue por fin completa. Azaña había renunciado a su cargo de Presidente después de la evacuación de Cataluña; Negrín, el último Primer Ministro republicano, huyó al exilio.

Al estallar la rebelión en julio de 1936, Casares Quiroga renunció al cargo de Primer Ministro y se formó un nuevo gobierno con el republicano moderado Martínez Barrio, con el objeto de atraer el apoyo de los moderados a la causa republicana. Pero las Cortes se negaron

a aceptar a Martínez Barrio y Azaña se vio obligado a aceptar a José Giral como Primer Ministro en un gabinete que no era en absoluto socialista, sino mucho más de izquierda que el propio Martínez Barrio. Los constitucionalistas —o más bien aquellos a quienes convino por el momento aparecer como tales— afirmaron que esto destruía las bases constitucionales del gobierno, porque la Constitución otorgaba al Presidente el derecho exclusivo de designar al Primer Ministro; pero, como Azaña continuó en la presidencia, el argumento pareció perder fuerza. Azaña fue, sin embargo, desde este momento, simplemente un figurón, descansando el poder real en los sucesivos gabinetes —o en las masas, de la cual eran virtualmente los títeres. En todo caso, el periodo de Giral en el cargo fue corto: en septiembre fue sustituido por Largo Caballero, dirigente del Partido Socialista y de la U.G.T. Largo Caballero estaba por entonces en la izquierda del Partido Socialista, favoreciendo la alianza con los comunistas, quienes habían acrecentado regularmente su fuerza desde que había empezado a llegar ayuda de la Unión Soviética. Cuando el sitio de Madrid comenzó, el gobierno trasladó su sede a Valencia e intentó fortalecerse ampliando su base para incluir representantes de los sindicalistas, que habían renunciado por el momento a su actitud apolítica frente a las necesidades de la guerra. Ésta fue una gran concesión por parte de los líderes de la C.N.T.; pero inclusive muchos anarquistas comprendieron entonces la urgencia de reunir todas las fuerzas disponibles en defensa de la República.

Pero, a pesar de la unión aparente de las fuerzas obreras en torno al gobierno de Largo Caballero, había todavía grandes divisiones en las filas del movimiento obrero. En los primeros meses de la guerra civil el poder real había caído en manos de los comités locales de trabajadores, controlados principalmente por los anarquistas o integrados por representantes de todas las organizaciones locales de trabajadores y el ejército estaba integrado esencialmente por milicias de trabajadores identificadas en general con un partido o sindicato determinado. La República necesitaba crear un nuevo ejército, adecuadamente entrenado y disciplinado; pero los diversos organismos que controlaban fuerzas de milicianos no se decidían a cederlas, a pesar de su evidente deficiencia militar, ni a aceptar la necesidad de un cuerpo regular de oficiales que sustituyera a los jefes electos de los diversos grupos. Tanto el suministro de armas como el entrenamiento de un ejército disciplinado eran problemas especialmente difíciles. Según el derecho internacional, el gobierno español tenía todo el derecho a comprar armas en el extranjero para sofocar un levantamiento interno y, en el caso de Francia, su derecho a hacerlo estaba apoyado en un tratado. Francia, además, tenía un gobierno de izquierda —el del Frente Popular— del que se podía esperar que estuviera de todo corazón en

favor del gobierno español. Sin embargo, el derecho a comprar e importar armas se negó a los republicanos españoles y, tras cierto tiempo, se prohibió a los voluntarios de Francia y Gran Bretaña acudir a España para unirse a las Brigadas Internacionales. Debemos preguntarnos ahora cómo se produjo tan sorprendente situación.

La explicación, por supuesto, está en la situación de la política europea cuando se produjo la rebelión. Italia acababa de ganar la guerra en Abisinia y las sanciones de la Sociedad de Naciones contra Italia eran levantadas. Se había avanzado mucho en las negociaciones para establecer un "Eje" entre Berlín y Roma. En Francia, el gobierno de Blum acababa de subir al poder y tenía profundas preocupaciones en cuanto a los asuntos internos. En Inglaterra los tories, después de ganar las elecciones de 1935, estaban firmemente instalados en el poder y el Partido Laborista había renunciado virtualmente a su oposición al rearme. En relación con España no hubo duda, desde un principio, del apoyo de los países fascistas a los rebeldes, que habían estado en estrecho contacto con Alemania e Italia antes del levantamiento. Francia temía una guerra en sus fronteras, donde Alemania e Italia intervendrían seguramente del lado fascista, mientras que la Unión Soviética, partidaria ahora de la política de Frentes Populares contra el fascismo haría lo posible por ayudar al gobierno republicano. ¿No era la mejor política tratar de evitar todo esto negociando un acuerdo general que dejara a los españoles solos para dirimir la lucha entre ellos, sin ayuda del exterior de ninguno de los dos lados? Esta política tenía sus ventajas, si hubiera sido realmente practicable y si las potencias fascistas la hubieran puesto en práctica.

Como primer paso, Blum apeló al gobierno inglés, que se manifestó altamente favorable. La Unión Soviética también estuvo de acuerdo, a condición de que los otros países hicieran lo mismo y que el pacto fuera cumplido por todos. Italia y Alemania también aceptaron nominalmente y los países pequeños siguieron fácilmente el ejemplo de las grandes potencias. Veintisiete países firmaron el Pacto, incluyendo Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y la Unión Soviética así como el vecino totalitario de España, Portugal. Todos firmaron; pero mientras que Francia y Gran Bretaña cumplieron en general el Pacto y lo hicieron cumplir a sus subditos, la intervención alemana e italiana siguió casi sin control. Sólo Italia envió grandes ejércitos a luchar en suelo español al lado de los rebeldes; pero los alemanes enviaron municiones y ayuda técnica y suministraron aviones de guerra de inestimable valor para los ejércitos rebeldes. Ambos países ayudaron a Franco a bloquear los puertos republicanos, aunque Franco casi no poseía armada, y se entregaron a la piratería en alta mar contra las embarca-

ciones que llevaban armas o provisiones a la España republicana. Por otra parte, la Unión Soviética, cuando comprendió que el Pacto no era cumplido por las potencias fascistas, ayudó a los republicanos con suministros mientras pudo, pero nunca en una escala suficiente para equilibrar los actos de las potencias fascistas.

En estas circunstancias, la derrota de los republicanos era inevitable a largo plazo, aunque lucharan muy valientemente. Durante algún tiempo las Brigadas Internacionales, que lucharon bravamente en defensa de Madrid y sufrieron muchas pérdidas de vidas, contribuyeron a diferir esa derrota. Las Brigadas Internacionales estaban integradas por contingentes de muchos países, incluyendo Francia e Inglaterra; pero el núcleo estaba compuesto por socialistas y comunistas exilados de países que los fascistas ya habían dominado, especialmente Alemania e Italia. Había también rusos, no sólo del Partido Comunista, sino de grupos que habían disputado con éste y se habían convertido en los más virulentos críticos de Stalin. Porque la Unión Soviética, que recientemente había publicado el proyecto de nueva Constitución de Stalin era conmovida, cuando se produjo el levantamiento español, por profundos problemas internos surgidos de los grandes juicios por traición y se había producido un fermento que los comunistas oficiales hacían lo indecible por apaciguar.

La No Intervención fue desde un principio una farsa y casi todo el mundo lo sabía. Pero los franceses y los ingleses se aferraron a ella como parte de su política común de "apaciguar" a los dictadores, en la esperanza de diferir la guerra o de inclinarla hacia el Este y no hacia Occidente; y los republicanos españoles fueron las víctimas. Por un momento pareció que el gobierno de Largo Caballero había logrado una gran base de unión entre las fuerzas republicanas; pero tras la fachada de la unidad, cada sector actuaba para sí y, especialmente, no había una coordinación efectiva de los diversos frentes bélicos. La desunión permanente fue utilizada por los comunistas —por entonces una fuerza creciente y firmemente colocada contra todos los que intentaran presionar en favor de la revolución social antes de terminarse la guerra. Los comunistas se habían convertido decididamente, de hecho, en una influencia de derecha en los problemas españoles.

En la propia Rusia, la Revolución había pasado a su etapa definitivamente stalinista de insistencia rígida en la conformidad absoluta a la política oficial del Partido y de violenta denuncia de todos los sospechosos de desviación de la línea del Partido. Se había extendido la práctica de denunciar a casi todos los desviacionistas como "trotskistas", simpatizaran o no con el exilado Trotsky. En relación con España, esto significaba que los comunistas oficiales eran agudamente hostiles a los

disidentes comunistas, españoles o extranjeros, que habían ido a España a participar en la defensa de la República. También los colocaba en aguda oposición a los "libertarios" de la C.N.T. y la F.A.I. y a todos los grupos favorables a actuar mediante cambios revolucionarios y contra el prejuicio, según ellos, de un esfuerzo bélico unido. En toda España, cuando los patronos eran asesinados o abandonaban en masa sus negocios, los trabajadores habían ocupado las fábricas abandonadas y los campesinos las tierras abandonadas por sus dueños. Todo esto había ocurrido de manera muy diferente de un lugar a otro y de una fábrica a otra. En muchos casos, especialmente en Cataluña, los trabajadores simplemente se habían hecho cargo de las fábricas, habían elegido comités para administrarlas y seguían produciendo como antes, en general sin alterar los niveles de salarios. En algunas áreas rurales los campesinos habían establecido sus comunas libres, aboliendo el dinero y tratando de obtener lo que necesitaban de afuera mediante el trueque. En otras zonas las fábricas y las tierras vacantes habían sido intervenidas por las autoridades municipales u otras autoridades locales y la producción había continuado bajo sus auspicios. Los comunistas se opusieron entonces al sistema de "control de los trabajadores" sobre las fábricas, especialmente cuando se trataba de trabajadores organizados en la C.N.T., llegando a utilizar su influencia para evitar que estas fábricas obtuvieran suministros de materias primas para obligarlas a colocarse bajo control oficial. En Cataluña, la principal zona fabril, donde los trabajadores manuales pertenecían en su mayoría a la C.N.T., y era fuerte la influencia anarquista entre los trabajadores de las fábricas, se produjo una dura lucha entre los comunistas y la C.N.T. o más bien, entre ésta y el *Partit Socialista Unificat de Catalunya*, en el cual se habían mezclado en un solo organismo socialistas y comunistas, que los comunistas habían logrado afiliarse al Comintern. Había por entonces muchos rusos en la España republicana, no como soldados sino como expertos de diversos tipos y como organizadores del frente político. La Unión Soviética no envió contingentes a luchar en España; pero como era la principal fuente de suministros de municiones de la República —municiones que los españoles tenían que pagar—, sus agentes obtuvieron grande y creciente influencia sobre la política republicana. Partidarios decididos de un Frente Popular, incluyendo a los partidos burgueses republicanos lo mismo que a los socialistas, apoyaron al principio al gobierno de Largo Caballero, aun después de la participación de los sindicalistas; pero pronto habían pasado a la oposición y pedían un gobierno que estableciera un control plenamente unificado y pusiera fin a la gran autonomía de que todavía gozaban los comités de trabajadores y los diversos partidos y grupos dentro del

frente común. Acerca de esto lograron más fácilmente llegar a un acuerdo con los republicanos burgueses y el ala derecha del Partido Socialista que con los socialistas de izquierda o la C.N.T., con quienes Largo Caballero trataba de colaborar amistosamente. En especial, estaban decididos a sacar del gobierno a los representantes de la C.N.T. que habían entrado en él y a impedir que los comunistas y los socialistas de izquierda disidentes organizados en el P.O.U.M. lograran entrar. Tenían, además, sumo cuidado en cuanto a las armas enviadas por los rusos, con el fin de que no cayeran en manos de los grupos que ellos objetaban —de tal modo que el frente de Aragón, que dependía de los suministros de Cataluña, se quedó sin armas mientras la C.N.T. fue ahí el grupo predominante. Los rusos tuvieron que luchar contra un fuerte sentimiento racista de los trabajadores españoles, a pesar de los notables servicios prestados por la Brigada Internacional en la defensa de Madrid; pero, a pesar de esto, se abrieron paso rápidamente. El gobierno, ante una inminente derrota si se cortaban los suministros rusos, no podía permitirse una disputa con ellos ni contrariarlos; y tenían de su parte a un número creciente de españoles jóvenes en las regiones ocupadas por los republicanos. Los anarquistas y la C.N.T., mientras tanto, perdían terreno mientras los comunistas y socialistas de derecha ganaban fuerza. Inclusive la U.G.T., aunque sus líderes permanecían leales a Largo Caballero, se pasó en parte a su lado.

En octubre de 1936 las Cortes aprobaron el Estatuto que otorgaba la autonomía a las tres provincias vascas. Los nacionalistas vascos, aunque católicos fervientes, habían sido partidarios de la República contra los rebeldes y ésta era su recompensa. Los rebeldes, sin embargo, los rodeaban en León, Castilla y Navarra, el baluarte carlista; y en el verano de 1937 la región vasca fue dominada. Bilbao cayó en manos rebeldes en junio; Santander en agosto y Gijón en octubre. Esto habría terminado en una ofensiva contra Madrid si una contraofensiva republicana, lanzada por el ejército republicano reorganizado, no hubiera capturado Teruel, en Aragón, en diciembre de 1937. La reconquista de Teruel por los rebeldes, en febrero de 1938, fue el comienzo de la ofensiva que permitió a los rebeldes invadir Cataluña y dividir en dos partes a la España republicana, aislando a Barcelona de Madrid y Valencia, excepto por mar.

Pero, mucho antes de que esto ocurriera, Largo Caballero, acusado de reunir demasiado poder en sus manos y, al mismo tiempo, de hacer demasiado poco para implantar la unidad de administración y de autoridad, cayó y fue sustituido por el exprofesor Juan Negrín, con el apoyo de los comunistas como principales partidarios de la unidad y la centralización. En mayo de 1937, mientras el ataque rebelde al

país vasco estaba en su culminación, la causa republicana fue seriamente perjudicada por una nueva lucha interna en Barcelona.

Es casi imposible determinar en torno a qué giraba el conflicto de Barcelona, tan complejo y confuso era. Como hemos visto, el elemento predominante en el movimiento sindical local era la C.N.T., que tenía estrechas relaciones con la F.A.I. Pero los sindicatos rivales de la U.G.T. también tenían gran número de miembros y estaban ligados al *Partit Socialista Unificat de Catalunya*. Este partido combinado, el P.S.U.C., estaba representado en el gobierno de la Generalidad Provincial, junto con la Esquerra y sus *rabassaires* y otros grupos, incluyendo la C.N.T. La F.A.I. y el P.O.U.M. marxista revolucionario, encabezado por Andrés Nin, estaban fuera del gobierno, además de un organismo llamado Amigos de Durruti, llamada así por el líder anarquista Buenaventura Durruti, muerto o asesinado hacía poco en el frente, desde donde había estado lanzando llamados en favor de la unidad antifascista. La C.N.T., aunque representada en el gobierno, estaba de hecho dividida entre gobierno y oposición. El P.O.U.M. exigía la representación en el gobierno de Cataluña, del que había sido excluido por el P.S.U.C., que sostenía que el P.O.U.M. no respondía a una fuerza coherente. De hecho, sostenía la solidaridad de la clase obrera sin la izquierda burguesa y el control de los trabajadores en las fábricas y tenía una minoría de partidarios dentro de la C.N.T.

Es difícil determinar quién empezó la disputa en Barcelona. Hubo numerosos rumores de que la F.A.I. había planeado un golpe y trataba de apoderarse de la ciudad; pero los dirigentes de la F.A.I. y de la C.N.T. lo negaron e hicieron sucesivos llamados de paz. El comienzo parece haber sido un choque en el edificio de los Teléfonos entre la policía de la Generalidad y los delegados obreros que ocupaban el edificio; pero por este incomprensible accidente, hubo varios días de confusas luchas callejeras entre las fuerzas de la Generalidad y una multitud de miembros de la C.N.T. y del P.O.U.M. La cosa se puso tan seria que hubo que llamar tropas del frente y fue necesario que el gobierno de Valencia enviara policía y soldados antes que la C.N.T. insistiera en que sus miembros volvieran al trabajo. Siguió el arresto de los líderes del P.O.U.M., incluyendo a Nin —quien fue asesinado en la prisión—, y la reconstrucción de la Generalidad para fortalecer el control del P.S.U.C. y la U.G.T. así como de los elementos de la C.N.T. que se habían opuesto al levantamiento.

Los disturbios de Barcelona fueron fatales para el gobierno de Largo Caballero en Valencia, que tuvo que hacer frente a una serie de demandas del Partido Comunista en pro de una dirección central unificada en la guerra, a través de un gabinete efectivamente representativo de

todos los partidos obreros y del Frente Popular, pero suprimiendo el control independiente de cada uno sobre sus propias fuerzas en aras de una organización realmente unificada. Largo Caballero, después de aceptar aparentemente las demandas, presentó un plan de un gabinete presidido por él fundado principalmente en la U.G.T. y la C.N.T., excluyendo a los partidos políticos, como la principal base de unidad. El Ejecutivo de la U.G.T. y la mayoría de los dirigentes de la C.N.T. lo apoyaron; pero los partidos se opusieron con vehemencia y tuvo que renunciar. Los ministros de la C.N.T. también se retiraron y se constituyó un nuevo gobierno con Negrín a la cabeza para realizar la tarea de unificación. Sus principales ministros eran Giral, partidario de Azaña, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Prieto, el dirigente rival de los socialistas, a cargo de la reorganización militar. Había en total tres socialistas, dos comunistas, dos radicales de izquierda, un nacionalista vasco y un catalán de la Esquerra —una pequeña mayoría socialista-comunista en un gabinete esencialmente de Frente Popular, que tomó seriamente su tarea, hizo lo que pedían los comunistas y procedió rápidamente a reorganizar las cosas sobre la base de un control unificado y fuertemente centralizado. Pero era demasiado tarde para extraer la victoria de la derrota, especialmente cuando los alemanes aprovecharon la ocasión para intensificar su intervención con el bombardeo naval de Almería el 31 de mayo.

¿Cuál había sido el punto de controversia en la lucha de Barcelona en mayo de 1937? Entre muchas disputas confusas, uno de los puntos a discusión era indudablemente el del "control por los trabajadores". En el célebre decreto catalán de colectivización y control por los trabajadores, emitido en octubre de 1936 y complementado por una orden del mes siguiente, se establecía que la industria debía dividirse en dos clases: colectivizada y privada. En la primera, la responsabilidad de administración estaba en manos de los trabajadores, representados por un Consejo de Empresa; en la segunda, estaba en manos del dueño o administrador, sujeto a la aprobación de un Comité de Control de los trabajadores. Todas las empresas que emplearan más de 100 trabajadores y todas las empresas cuyos dueños las abandonaran o fueran declarados rebeldes, serían colectivizadas y las demás empresas lo serían si las tres quintas partes de los obreros lo deseaban. Los Consejos de Empresas eran elegidos para dos años por todos los trabajadores en asamblea general y eran reelegibles, y responsables ante los trabajadores y ante los Consejos Laborales creados por este Decreto. Eran responsables, en general, de la producción y de los servicios de carácter social. Cada uno elegía un director para ejecutar sus funciones y cada uno incluía un inspector del gobierno para asegurar el cumpli-

miento de la ley. Comités de Control de los trabajadores del mismo upo fueron elegidos en empresas no colectivizadas. Los Consejos Laborales Generales estaban integrados por cuatro representantes de los Consejos de Empresas, ocho representantes sindicales (C.N.T. y U.G.T.) y cuatro técnicos designados por el gobierno. Su tarea era planificar las diversas industrias y sus decisiones eran obligatorias para los Consejos de Empresas.

Ésta era formalmente la ley; pero apenas correspondía a la realidad. De hecho, como vimos, las empresas habían sido colectivizadas o habían permanecido tal como estaban sin ningún patrón uniforme, sino variable, de acuerdo con las diferentes actitudes y política de los trabajadores afectados o de los partidos y sindicatos a los que pertenecían. En un extremo estaban los sindicalistas y cooperativistas que simplemente se habían apoderado del control de sus fábricas; en el otro, las empresas pertenecientes y controladas por el gobierno con cierta participación sindical. La F.A.I. se manifestó en diciembre en favor de la completa socialización, para impedir que surgieran las irregularidades al apropiarse los obreros de los excedentes en cada empresa; pero ni la F.A.I. ni la Generalidad estaban en posición de imponer un régimen común. La C.N.T. favoreció el Decreto como medio de poner orden en el caos, mientras la U.G.T. lo criticó por su ambigüedad en el aspecto financiero y por su ineficacia, sosteniendo que no eran los mejores hombres capaces de organizar la producción sino los más conocidos demagogos los que salían electos en los Comités. En efecto, el Decreto era una transacción entre los sindicalistas, que querían el control de los trabajadores y objetaban la centralización burocrática y los comunistas y socialistas de derecha, a los que no les interesaba el control por los trabajadores y sí evitar que degenerara en beneficios corporativos sobre la base cooperativista en las fábricas. En esta contienda, el P.O.U.M., como la F.A.I., se puso del lado sindicalista pero, por supuesto, se oponía lo mismo que la U.G.T. y los comunistas a la busca de las ganancias de carácter cooperativo. Muchos sostenían que el ideal era salarios iguales para todos; pero muy pocos creían que fuera posible de inmediato. Los contrarios de la busca de utilidades querían que todas las ganancias se entregaran a un Banco Central Industrial para ser utilizadas en la ayuda a industrias incapaces de cubrir sus gastos o necesitadas de dinero para invertir; pero las consecuencias financieras del Decreto quedaron peligrosamente vagas.

En la práctica, sin embargo, en Cataluña y otros lugares, las exigencias de la guerra conducían a la centralización del control industrial en manos del gobierno y alejaba el establecimiento del control por los trabajadores.

En Cataluña, después de mayo de 1937, el control por los trabajadores fue sustituido en gran medida por la administración individual, bajo la responsabilidad del gobierno, en las fábricas de guerra; y los comunistas y sus aliados se salieron con la suya a expensas de la C.N.T. y los sindicalistas. Los anarquistas no participaron directamente, ya que muchos de ellos eran casi tan opuestos a la coerción de los individuos por los Comités de fábrica como por el Estado. Pero su influencia desapareció también bajo el nuevo orden de disciplina centralizada y subordinación de todo a las necesidades bélicas.

A través de las complejas luchas de los años posteriores a la victoria electoral republicana de 1936 se desarrolló una dura batalla en el frente ideológico. Como siempre en la política española, la batalla era menos entre la derecha y la izquierda como tales que entre centralistas por una parte y libertarios por la otra. Así, los comunistas, que crecieron como fuerza a medida que la guerra proseguía, estaban unidos al centro y la derecha socialistas dirigidas por Prieto en favor de la unificación del control contra los sindicalistas y la C.N.T. y contra el P.O.U.M. que se consideraban la izquierda, con la misión de llevar la Revolución a una etapa plenamente proletaria. Largo Caballero, que había sido considerado como miembro del ala izquierda del Partido Socialista contra Prieto y se había mostrado dispuesto a colaborar con la C.N.T. y con la unificación de los movimientos de las Juventudes Socialistas y Comunistas, se vio destronado cuando se manifestó en contra de las medidas de unificación general que amenazaban minar su influencia personal. La F.A.I., teóricamente en la extrema izquierda pero animada por un alto idealismo que no sabía de transacciones, acudió, en nombre de la unidad, en defensa del control centralizado contra las tendencias divisionistas y perdió la mitad de su influencia sobre la C.N.T. Los radicales de izquierda burgueses, partidarios de Azaña y Martínez Barrio, no hicieron ninguna contribución teórica importante, pero apoyaron la tesis de la unificación en aras de la eficacia bélica. Lo mismo hizo en su mayoría la Esquerra, contra su facción catalana separatista, enquistada en las filas del Estat *Català* dirigido por Doncas. El P.O.U.M., sin duda, tenía pretensiones de constituir la "verdadera" izquierda, partidaria del avance inmediato del Frente Popular a la República de los trabajadores, sobre bases puramente proletarias; pero, lejos de unificar a los trabajadores, sólo los dividió más. Por otra parte, apenas tenía fuerza fuera de Cataluña, donde estaba en total desacuerdo con todos los demás sectores. Su líder más eficaz, Joaquín Maurín, había sido apresado en territorio rebelde en Galicia, a donde había ido de paseo antes del estallido: nunca volvió a saberse de él. Su segundo, Nin, era mucho menos eficaz

como dirigente y, como ya vimos, fue arrestado y asesinado en la prisión después del levantamiento en Barcelona de mayo de 1937.

Entre los socialistas las figuras más notables eran Largo Caballero, secretario de la U.G.T., hasta su caída e Indalecio Prieto, el asturiano que representaba a Bilbao en las Cortes y era la figura principal entre los socialistas vascos. Prieto era por naturaleza e instinto un centrista, si no derechista; pero su capacidad de organización y su fe en la centralización lo hicieron aliarse a los comunistas en la lucha contra Largo Caballero, con quien casi nunca estuvo de acuerdo. Era una fuerte personalidad y un notable orador, pero siempre moderado en su posición general. Aunque era empleado, en un principio, había logrado identificarse con los tercios trabajadores de Bilbao y crearse una fuerte posición a pesar de su supuesto origen burgués y de la deuda de gratitud que lo ligaba al gran industrial vasco Horacio Echevarrieta. De los demás líderes socialistas, Julián Besteiro, presidente de la U.G.T., era decididamente moderado; Luis Araquistáin, principal teórico del partido, salió del gobierno con Largo Caballero; Álvarez del Vayo era especialista en asuntos extranjeros y estuvo mucho tiempo en París durante la guerra civil y, finalmente, Juan Negrín era un profesor universitario de medicina, llamado para encabezar el gabinete cuando Largo Caballero salió del gobierno. Había sido ministro de Finanzas en el gabinete de Largo Caballero y era un experto en cuestiones económicas. Entre los comunistas, eran figuras importantes Juan Hernández, ministro de Educación en el gabinete de Negrín y Vicente Uribe, ministro de Agricultura, lo mismo que el dirigente comunista José Díaz. Germinal de Souza era secretario de la F.A.I. y Mariano R. Vázquez de la C.N.T. Juan Comorera dirigía el *Partit Socialista Unificat de Catalunya* y Juan Casanovas, *Estat Català*, nominalmente adherido a la Esquerra dirigida por Luis Companys.

Se acusó a los comunistas de dominar al gobierno republicano en una medida cada vez mayor y, en cierto sentido, era cierto. No sólo era la Unión Soviética, después del incumplimiento de la No Intervención, el único gobierno al que podían acudir los republicanos en busca de ayuda, aparte del distante México, sino que las demandas de la guerra civil exigían la centralización de las fuerzas republicanas y el control de las autoridades independientes que numerosos grupos contendientes reclamaban: y la centralización, con una rígida disciplina, era la política esencial del Partido Comunista bajo Stalin. Los comunistas oficiales no encontraban ningún obstáculo que se opusiera a la centralización y sí mucho en su favor; porque su misión, de acuerdo con la nueva política de Frentes Populares del Comintern, era establecer una liga antifascista unificada, con el mayor número posible

de participantes y bajo su dirección, para luchar por la derrota del fascismo exclusivamente. Estaba en contra de su política complicar la cuestión luchando por el socialismo al precio de aflojar la unidad antifascista o de obstaculizar el esfuerzo bélico; estaban seguros de que el socialismo —y el comunismo— seguirían a una derrota del fascismo, mientras que nada en absoluto podía lograrse sin vencer al fascismo. De modo que no deseaban imponer sus propias demandas, en oposición a los demás partidos del Frente Popular, más de lo necesario para el establecimiento de una unidad de acción. Primero había que ganar la guerra, decían, y después se considerarían otras cuestiones. Pero dividir al pueblo antes de ganar la guerra era ser culpable de sectarismo criminal, por valiosos que fueran los objetivos de los culpables de ello. Algunos de los objetivos de los sectarios no eran, sin embargo, valiosos en su opinión. Los comunistas no aprobaban el control de los trabajadores en las fábricas, que consideraban una ilusión pequeño-burguesa de libertad. Tampoco les interesaba el libertarismo idealista-individualista de la F.A.I., que consideraban contrario a la disciplina y la unidad de clase. Podían aliarse a los radicales de izquierda de Azaña o a la derecha socialista mucho más fácilmente que a los sindicalistas o al P.O.U.M. Éstos constituían, en efecto, sus mayores enemigos, porque denunciaban continuamente la degeneración burocrática de la Unión Soviética bajo Stalin y porque comprendían a disidentes comunistas que se habían desprendido del stalinismo para pasar a una aguda oposición.

En cuanto a los socialistas, su mayor concentración de fuerza había estado siempre en Madrid; y Madrid y las provincias eran, en gran medida, enemigos naturales. Madrid era partidaria en general de la mayor centralización posible, en el mismo sentido que Cataluña demandaba naturalmente toda la autonomía que fuera factible —y algunas veces más— cuando *Estat Català* tuvo el poder. La Esquerra era, en todo caso, un partido federalista, no deseoso de separarse del resto de España ni de crear un Estado independiente de Cataluña, pero que exigía una plena autonomía interna dentro de una flexible unidad federal e incluía a un considerable sector que quería la plena independencia. Companys, su líder, planteado el problema, aceptó la ayuda del gobierno español para someter a los insurgentes de Barcelona; y la mayoría de los republicanos catalanes aceptaron su autoridad. Pero Barcelona, aunque llegó a ser la capital última del gobierno republicano, nunca estuvo en buenas relaciones con Madrid, del que sospechaba, por supuesto, designios siniestros de centralización; y aun después de la derrota de los federalistas y separatistas extremos en 1937 la tensión persistió.

En cuanto al país vasco, es sorprendente a primera vista que los nacionalistas vascos, lo mismo que los socialistas, jugaran su suerte con la República, aunque fuera como consecuencia de las promesas de autonomía vasca, que fueron debidamente cumplidas por Prieto a pesar de su apoyo general a un sistema centralizado. En parte su decisión se debió a la proximidad de los navarros carlistas, que se pusieron de parte de los rebeldes, y a la hostilidad tradicional entre Navarra y las provincias vascas. Y, en parte, a la fuerza del socialismo en Bilbao y a la influencia de la vecina Asturias, todavía baluarte izquierdista a pesar de la dura represión de la izquierda después de la rebelión de 1934. Pero apenas habían obtenido el estatuto de autonomía de la República cuando las provincias vascas fueron invadidas por los rebeldes y puestas fuera de la pelea.

La guerra civil española, cuando empezó en 1936, era esencialmente una guerra entre españoles o, al menos, entre españoles republicanos y rebeldes auxiliados por moros y por la Legión Extranjera española. Pero a medida que progresó se convirtió más y más en una guerra internacional peleada en suelo español y en los mares que rodean a España por fascistas y antifascistas de muchos países. Primero los italianos y después los alemanes enviaron municiones, y en el caso de Italia todo un ejército para apoyar a los rebeldes; la Unión Soviética respondió suministrando municiones, pero no soldados. Sin embargo, llegaron hombres dispuestos a pelear de muchos países para integrar las Brigadas Internacionales: de Italia y Alemania, Francia y Gran Bretaña, de hecho, de casi todos los países. Las Brigadas Internacionales fueron por un tiempo casi la única fuerza luchando efectivamente del lado republicano, hasta que, por fin, se inició el entrenamiento de un ejército republicano unificado demasiado tarde para ser de efecto decisivo. Las Brigadas Internacionales desempeñaron el papel principal en la defensa crítica de Madrid y se distinguieron por su heroica conducta frente a la escasez de suministros necesarios, a pesar de los grandes esfuerzos que hicieron los antifascistas o, en todo caso, un sector de ellos por enviarles ayuda desde Francia y Gran Bretaña. Fue un notable logro del Frente Popular como movimiento internacional; pero en Inglaterra fue obstaculizado por el rechazo de la mayoría del movimiento laborista a la estrategia de Frente Popular y, en Francia, por la adhesión al Pacto de No Intervención y su cumplimiento unilateral después de reconocido su incumplimiento por los fascistas.

En las circunstancias existentes en Inglaterra, la ayuda a España se convirtió en la demanda de los comunistas y de los izquierdistas que colaboraron, mientras el movimiento sindical oficial y el Partido Laborista permanecían al margen y en desaprobación, menos pensando en España que en sus temores de verse mezclados con los comunistas. Des-

pues de la caída del gobierno de Blum se produjo en Francia una situación semejante, con los comunistas virtualmente fuera de los restos del *Front Populaire* y en creciente oposición a los gobiernos que trataban de deshacer su labor. Así el Frente Popular en España se mantuvo sólo a base de un gobierno apoyado por radicales, socialistas y comunistas que actuaron en una continua y estrecha alianza hasta el final. Esto se debió en parte al carácter extremadamente reaccionario de la mayoría de los partidos españoles, incluyendo a los radicales de derecha de Lerroux, que no dejó otra alternativa a los radicales de izquierda; pero también se debió en parte a que los comunistas y los socialistas estaban decididos a no disputar con sus aliados burgueses, para no debilitar así su fuerza en el país y en el extranjero. Si los comunistas controlaron cada vez más la situación española se debió menos quizá a la dependencia de los republicanos de los suministros rusos o a un deseo por parte de los comunistas españoles de manejar el coto que porque su política era la más adecuada a la situación cuando ésta se hizo cada vez más desesperada en vista de las actitudes sectarias de los grupos rivales. Esto no quiere decir que los comunistas se comportaran bien en España y sus opositores mal; porque no hay duda que los comunistas llevaron a absurdos extremos sus antagonismos con los sindicalistas y los llamados "trotskistas" y que fueron excesivamente brutales y autoritarios en sus métodos. Además, antes de terminar la guerra, la Unión Soviética había dejado casi de enviar suministros y la influencia comunista había dado claras señales de debilitarse.

Se ha dicho con frecuencia que los españoles, por su intenso individualismo y particularismo, son incapaces del esfuerzo unido necesario para consolidar una Revolución. Su capacidad para hacer revoluciones se ha demostrado repetidamente, pero una cosa es derrocar a un gobierno impopular y otra es sustituirlo por otro régimen viable. Los españoles derrocaron fácilmente a Alfonso XIII en 1931 y de inmediato se dedicaron a las tareas constructivas que tenían por delante. Pero al principio su nuevo gobierno no pudo gobernar al país mucho más que el anterior al que sustituía y numerosos grupos y facciones asumieron la autoridad y tuvieron que ser contentados por el gobierno que cedía ante ellos. No obstante, en dos años el gobierno de Azaña había ido bastante adelante, al precio de perder un considerable núcleo del apoyo inicial y de sufrir una dura derrota en 1933. Siguiéron después los dos años de gobiernos llamados centristas, que deshicieron todo lo que pudieron de la obra de sus predecesores y dieron la oportunidad a la extrema derecha de reorganizar sus fuerzas en la CEDA de Gil Robles y, fuera de las Cortes, en organizaciones decididamente fascistas mucho más derechistas que incitaban abiertamente a sus miembros a la violencia. En esta situación se produjo la victoria electoral del Frente Popular a principios

de 1936, seguida por un despliegue de violencia de la izquierda que compitió con la de los fascistas y, tras unos cuantos meses, por el llamado a la guerra civil.

Hasta entonces, la izquierda había estado unida contra la CEDA y los fascistas; pero resultaba menos fácil determinar *en favor* de qué estaba unida. Estaba constituida más bien por una serie de grupos de presión, que actuaban separadamente por sus propios fines, que por un movimiento positivamente organizado. Era fácil para los políticos llegar a acuerdos verbales sobre la autonomía vasca o catalana y aun acerca del papel de los sindicatos, aunque ni lo uno ni lo otro eran problemas sencillos. Pero era mucho más difícil para el gobierno inducir a sus partidarios a tenerse confianza entre sí o a unificar las fuentes de poder bajo su mando. Cada partido y cada grupo tenía sus propias milicias y las facciones que controlaba, así como su organización faccional independiente, celosa de cualquier interferencia; y el gobierno trató de actuar asegurándose la ayuda de grupos rivales sin unificar sus cabezas. Semejante estructura hacía absolutamente imposible la constitución de un ejército republicano capaz de enfrentarse a los fascistas en igualdad de condiciones en la lucha abierta ni de lograr una adecuada coordinación de suministros, que cada facción quería apropiarse para utilizarlos por su cuenta. Así, aunque los sindicalistas y el P.O.U.M. desconfiaban justamente de la centralización staliniana, oponerse a ello en las circunstancias de la guerra civil era invitar a la derrota. No había, en efecto, otra alternativa; y, aunque se pueda simpatizar con muchas de las aspiraciones del P.O.U.M., tratar de realizarlas en la situación bélica de 1937 era, en el mejor de los casos, una tontería y demostraba una incapacidad de análisis realista que no puede menos que condenarse. Fue condenada, de hecho, por la mayoría de los republicanos españoles, quienes veían la necesidad de concentrar todos los esfuerzos en la guerra y de posponer las disputas ideológicas hasta después de la victoria. Pero esta aceptación del sentido común se produjo demasiado tarde.

Estar de acuerdo con los comunistas en este problema crucial no es negar que fueran difíciles compañeros para los demás republicanos—inclusive para los que estaban de acuerdo con ellos en esta cuestión. Porque es característico de los comunistas defender a la Unión Soviética en todo momento y no reconocer que pueda haber algún error de ella o de su política; y tales defensas eran especialmente difíciles en el momento de los juicios por traición en la Unión Soviética—cuando Kamenov y Zinoviev y otros exdirigentes bolcheviques eran sentenciados a muerte y cuando se hacían acusaciones de la mayor gravedad contra los más conocidos generales del ejército soviético. Los comunistas españoles, como los demás, se sentían satisfechos de sí mismos y despreciaban

todo lo demás. A pesar de todo, dadas las circunstancias, su política principal fue sin duda correcta.

En cuanto a Largo Caballero, su falta no era estar errado sino carecer de la fuerza para poner en práctica lo que consideraba correcto. Era esencialmente un dirigente sindical, cuyo instrumento era la U.G.T., pero que veía la necesidad de acomodarse entre ésta y la C.N.T., que la superaba de lejos en número en Cataluña y el Sur, aunque se quedaba muy a la zaga en Madrid y en el Norte. Quería que la U.G.T. y la C.N.T. trabajaran en estrecha unión y estaba dispuesto a hacer considerables concesiones para lograrlo —de hecho, suficientes como para exponer el propósito de unidad que lo guiaba. Como socialista, tendía a favorecer la centralización y al principio pareció estar en el ala derecha contra la izquierda de la C.N.T. Así se fue inclinando progresivamente hacia la izquierda llegando a convertirse en líder de la izquierda socialista contra Prieto y Besteiro. Llegó a Primer Ministro como izquierdista, pero fracasó en el cargo porque no estaba dispuesto a imponer su autoridad a los extremistas de izquierda que querían mantener sus demandas de grupo. Finalmente fue eliminado de su cargo a la cabeza de un gobierno predominantemente socialista-sindicalista por otros socialistas más de derecha que estaban de acuerdo con los comunistas en el problema fundamental del control unificado. Hay que recordar también que estaba viejo y cansado —tenía 67 años en 1937— cuando fue eliminado de su cargo.

La lucha española, a pesar de toda su incoherencia, se hizo símbolo de la lucha contra el fascismo para muchos jóvenes de finales de los treinta. Ante la podrida situación de "apaciguamiento" en Francia y Gran Bretaña, se entregaron generosamente a la causa española. Muchos perdieron sus vidas luchando en Madrid como miembros de las Brigadas Internacionales. Algunos, como George Orwell y algunos dirigentes del Partido Laborista Independiente, se desilusionaron amargamente con los acontecimientos de Cataluña y se pusieron del lado del P.O.U.M. contra los comunistas en el conflicto que allí se planteó. Pero la mayoría de los simpatizadores extranjeros no estaban en ánimo de criticar: simplemente apoyaban a los españoles en armas contra el fascismo, mientras Francia e Inglaterra vacilaban ante el peligro fascista e inclusive simpatizaban a medias con Hitler y Mussolini como enemigos de la izquierda. España se convirtió en el principal foco del generoso idealismo de los jóvenes; y los que tuvieron esa experiencia —hombres y mujeres— no la olvidarán fácilmente. En Inglaterra fueron los grandes días del Club del Libro de Izquierda, con Harold Laski y John Strachey como coeditores. Aunque no lograran arrastrar a la mayoría de los sindicatos y del Partido Laborista con ellos, desempeñaron un papel en la preparación de la opinión socialista para la guerra que estallo en medio

del colapso del "apaciguamiento" de 1939; y, a diferencia de los comunistas, los demás no cambiaron con la firma del Pacto Nazi-Soviético, sino que permanecieron en la línea antifascista cuando los desastres de 1940, hasta que los comunistas volvieron a esta posición cuando Hider atacó a la Unión Soviética en 1941. El laborismo inglés y el francés no dieron a los republicanos españoles el apoyo debido; pero la izquierda inglesa puede felicitarse porque, en este caso al menos, hizo lo que pudo.

CAPÍTULO VI

EL ECLIPSE DEL SOCIALISMO AUSTRIACO

Los años treinta constituyeron un periodo de eclipse del movimiento socialista austríaco, todavía incompleto aunque bastante pronunciado con Dollfuss y Schuschnigg y virtualmente completo después de la invasión nazi y la anexión del país en 1938. En efecto, como vimos en el volumen anterior de este estudio, el retroceso de los socialistas se había iniciado ya en 1927. En ese año, la violencia de las fuerzas irregulares del Heimwehr, toleradas y positivamente alentadas por el gobierno de ese siniestro eclesiástico, el doctor Seipel, habían llegado a su culminación: un jurado había absuelto a algunos miembros del Heimwehr acusados, con pruebas incontrovertibles, de los asesinatos cometidos durante los choques de Schattendorf, en el Burgenland. Las absoluciones habían despertado fuertes sentimientos de animosidad entre los trabajadores y grandes núcleos de manifestantes habían marchado por el centro de Viena y, al hacerles frente la policía, habían incendiado el Palacio de Justicia. La manifestación fue inesperada, sin que los dirigentes socialistas o sindicales tuvieran nada que ver con ella, de modo que las fuerzas militarizadas de los obreros, el Schutzbund, no habían sido llamadas para preservar el orden. La gran multitud estaba, en su mayoría, desarmada; pero la policía, inferior en número, tras la sorpresa inicial, concentró sus fuerzas y recurrió a enérgicas medidas para dispersarla y en el siguiente tiroteo indiscriminado resultaron muertos 85 manifestantes o simples curiosos y más de mil heridos. Esta maniobra indignó aún más a los obreros. El canciller Seipel era favorable en todo al Heimwehr, cuyos jefes amenazaban continuamente con destruir la República democrática con un levantamiento armado; y Seipel, aunque en espera de su momento, no ocultaba su determinación de acabar con la Constitución democrática. Los socialistas estaban firmemente atrincherados en Viena, a la que controlaban, y eran fuertes en otras ciudades industriales; pero tenían muy poco apoyo en los distritos rurales y parecían condenados a una minoría permanente en el Parlamento Nacional frente a las fuerzas combinadas del Partido Social-Cristiano —su mayor rival— con sus aliados del Heimwehr, la Liga Campesina y los nacionalistas pan-germanos. El Partido Social-Cristiano incluía elementos dispuestos a actuar bajo el sistema parlamentario, pero estaba cada vez más dominado por Seipel, enemigo declarado de la democracia y que había hecho pública su intención de destruir a los socialistas y reformar las instituciones austríacas de acuerdo con un nuevo modelo

en el cual la autoridad de la Iglesia quedara efectivamente restaurada.

Los socialistas, después de la matanza de julio de 1927, se vieron obligados a reflexionar seriamente sobre el camino a tomar. Sus dirigentes nada podían hacer: los sentimientos de sus partidarios eran demasiado fuertes. La cuestión consistía en resolver si había llegado el momento de recurrir a la fuerza, ellos también, desencadenando la guerra civil. Pero la determinación no les acababa de convencer, y preferían algún otro camino para evitarlo, siempre que no fuera la rendición. En los primeros días de la República, cuando estaban en el poder y sus opositores se habían retirado, los socialistas habían hecho grandes esfuerzos con el fin de crear un nuevo ejército leal a la Constitución republicana y lo consiguieron por un tiempo. Pero desde 1920 habían quedado fuera del gobierno federal —aunque seguían controlando Viena, que tenía el papel de un Estado autónomo dentro de la Federación—; y, después de su caída del poder, los gobiernos federales controlados por los social-cristianos deshicieron en gran medida su labor a este respecto, sustituyendo a los funcionarios que ellos designaron por otros en cuyo apoyo podían confiar. Los socialistas estaban seguros de que el ejército, como en 1927, apoyaría a Seipel contra cualquier intento de levantamiento; y el *Schutzbund* republicano, aunque nutrido en número, estaba mal armado y poco habituado a la pelea, mientras que los soldados irregulares del *Heimwehr* estaban mejor armados y tenían pocos escrúpulos. En estas circunstancias la posibilidad de una derrota si los socialistas intentaban levantarse en armas era grande; por lo que los líderes buscaban una alternativa que demostrara, de todos modos, una voluntad activa tan fuerte como para evitar que una parte de sus simpatizantes tomaran las cosas en sus propias manos. Se decidió, pues, convocar a una huelga general —a la que respondieron en forma masiva—, pero era obvio que no podía durar mucho. La huelga general debía obligar al gobierno de Seipel a renunciar o convertirse en un movimiento revolucionario; de otro modo fracasaría. Seipel, comprendiéndolo así, confiaba quizá en que los socialistas no recurrirían a un levantamiento armado, por lo que simplemente dejó que la huelga siguiera su curso, negándose a hacer ninguna concesión; y los huelguistas volvieron al trabajo sin haber logrado nada. Seipel, hombre de fuerte temple y gran decisión, consiguió fortalecer su control sobre el Partido Social-Cristiano y seguir colaborando estrechamente con los jefes del *Heimwehr*. El Partido Socialista, mientras tanto, empezó su política de comedimiento, en un intento de transacción que terminaría en su destrucción, como fuerza abierta, en la lucha de 1934.

Otra razón para que los socialistas consideraran, en 1927, que un serio descalabro era mejor que recurrir a las armas era la difícil situación internacional austríaca, incluso antes de la depresión mundial y la

subida al poder de los nazis en Alemania. La República austríaca no era, en lo económico, una sociedad viable; se veía en la necesidad de buscar la ayuda de la Sociedad de Naciones y aceptar su control económico. Los socialistas sabían que si recurrían a las armas provocarían una fuerte desaprobación de las potencias de la Sociedad de Naciones y que, aunque ganaran la guerra civil, tendrían que enfrentarse a extremas dificultades para alimentar después a la población. Los reaccionarios austríacos acostumbraban hacer acusaciones desmesuradas contra los socialistas austríacos, tachándolos de marxistas dispuestos a someter al país a un régimen comunista, y tanto se aferraban a esta idea los estadistas extranjeros que un régimen socialista austríaco hubiera encontrado su más firme oposición, sobre todo si surgía de la guerra civil.

Por supuesto, los socialistas austríacos no eran de ninguna manera comunistas ni simpatizadores del comunismo, que contaba con un apoyo insignificante por parte de los trabajadores austríacos. El Partido Comunista austríaco nunca había sido tan fuerte como para ganar un solo asiento en el Parlamento o provocar una ruptura importante en las sólidas filas de la social-democracia austríaca. El Partido Social-Demócrata tenía un ala derecha y un ala izquierda y ésta, dirigida por Otto Bauer, era en general la que más influía en la elaboración de su programa. Sin embargo, era simplemente fantasioso considerar como cripto-comunistas a Bauer o a Deutsch. Como hemos visto, el Partido austríaco apoyaba fuertemente a la Internacional "Dos y media", que tenía su sede en Viena. Se negó a suscribir las declaraciones de la Segunda Internacional rival acerca de que la democracia, o mayoría parlamentaria, se considerara en toda circunstancia como presupuesto indispensable para el avance del socialismo e insistió en que podían darse condiciones, al menos en determinados países, que justificaran la dictadura del proletariado como único camino para los socialistas. Favorecía, contra la Segunda Internacional y el Comintern, una Internacional única que incluyera a social-demócratas y comunistas y sostuvo, sin éxito, la lucha en favor de una tal unidad mientras hubo la más mínima esperanza de lograrla. Pero los socialistas austríacos habían utilizado su breve estancia en el poder para establecer en Austria una República parlamentaria plenamente democrática y no un sistema soviético, sin duda con la esperanza de obtener una mayoría, pero además porque lo consideraban justo, auténtica y sinceramente. En esto actuaron como partido unido, con el apoyo de sus dos alas. Habían insistido, ciertamente, en que dentro de la República federal así constituida a pesar de su limitado tamaño y población, Viena, su baluarte, debía gozar del *status* de una unidad dentro del todo federal, con grandes facultades autónomas en los campos social y laboral; y habían comprendido que la posibilidad de

obtener una mayoría socialista en todo el país tendría que depender de su capacidad para lograr cierto apoyo entre los campesinos, esperanza que, en los primeros años de la República, no parecía irracional. Algunos elementos del Partido Social-Cristiano, con su gran contingente campesino, aceptaban la democracia parlamentaria y estaban dispuestos a colaborar en la práctica con los socialistas para gobernar al país sobre esa base. Por otro lado, los socialistas esperaban que la política campesina trazada por Otto Bauer lograra un número apreciable de nuevos miembros. Todavía abrigaban estas esperanzas en 1927, aunque por entonces tanto el Partido Social-Cristiano —bajo la influencia de Seipel— como la Liga Campesina eran mucho más reaccionarios y favorables a las demandas antidemocráticas de la Iglesia Católica. Aparte de estos partidos políticos debían enfrentarse a la creciente amenaza del Heimwehr, dirigido en general por miembros de la vieja aristocracia y por exoficiales del ejército imperial, el que desde un principio se había proclamado enemigo del sistema democrático, al que amenazaba abiertamente con derrocarlo por la fuerza. Había habido constantes choques, de creciente violencia, entre unidades del Heimwehr y núcleos obreros; choques que fueron cada vez más amenazadores cuando el Heimwehr comenzó a organizar marchas y manifestaciones en ciudades donde los socialistas eran el partido predominante y cuando el gobierno se negó a prohibirlas, así como a proteger a los distritos obreros contra los actos de violencia que pudieran producirse.

El Heimwehr, a pesar de sus constantes declaraciones acerca de que intentaría destruir la República democrática por la fuerza, nunca se aventuró realmente a un levantamiento armado. Probablemente lo detuvo su inferioridad numérica, la falta de un sólido apoyo social-cristiano y, en parte, el sentimiento de que el ejército de la República —aun después de ser en gran medida depurado de jefes socialistas— obedecería las órdenes de sofocarlo, en caso de que lo intentaran. Pero, en 1927 el Heimwehr pudo seguir conservando las armas que ya tenía y obtener otras nuevas, mientras que el Schutzbund socialista se veía expuesto a constantes cáteos en busca de armas, que eran confiscadas en grandes cantidades por la policía. A pesar de estas incursiones policíacas, gran número de armas permanecían ocultas en poder de los socialistas; pero el aumento de esos cáteos impidió seriamente al Schutzbund la formación de nuevas reservas. Seipel actuó siempre en estrecho contacto con Starhemberg y los demás del Heimwehr, utilizándolos como medio para lograr un apoyo más completo de los social-cristianos y de la Liga Campesina a su política contrarrevolucionaria.

Seipel, en esta etapa, no quería suprimir la República democrática por la fuerza de las armas, sino promover una revisión de la Constitución que eliminara los elementos democráticos y los sustituyera por lo

que él consideraba la "verdadera" democracia. En especial, quería que se ampliaran los poderes del presidente, quien hasta entonces no había sido más que un figurón, para convertirlo en supremo gobernante del país, con derecho exclusivo a designar o despedir a los ministros y con la facultad de gobernar por decreto en ausencia del Parlamento. Seipel favorecía también una revisión del sistema de votación para dar representación a grupos e intereses especiales y no a las mayorías numéricas, al estilo de los proyectos de Vogelsang de un Estado corporativo donde las demandas de la Iglesia fueran más atendidas. Entre estas ideas y la adhesión socialista a la democracia parlamentaria no había posibilidad de entendimiento; pero tanto Seipel como, todavía más, sus sucesores, negociaron continuamente con algunos socialistas para llegar a una transacción que supusiera ciertos sacrificios a los socialistas en nombre de la unidad nacional. Danneberg, secretario del Partido Socialista y miembro prominente de la derecha, era generalmente el principal participante en estas negociaciones, casi siempre privadas pero nunca con perspectivas de éxito durable.

Seipel permaneció en el poder como canciller por sólo un año y medio, después de los sucesos de 1927. Renunció entonces y fue sustituido por un miembro menos intransigente del Partido Social-Cristiano, pero siguió dirigiendo la política detrás de bastidores. Se presentaron de nuevo proyectos de enmienda a la Constitución y una vez más se invitó a los socialistas a "transigir". En esta ocasión, en 1929, de hecho lo hicieron en cierta medida. Una de las proposiciones de Seipel había sido que el presidente de la República, en vez de ser escogido por el Parlamento, fuera electo directamente por todo el pueblo. Los socialistas aceptaron esto ahora, a condición de que el cambio no se aplicara a las próximas elecciones —que fueron de hecho las últimas— sino en lo sucesivo. Se descartaron todos los demás cambios, porque constitucionalmente era imposible enmendar la Constitución excepto con una mayoría de las dos terceras partes del Parlamento —imposible de lograr sin los socialistas.

Los socialistas superaron, así, la crisis de 1929; pero pronto habrían de venir nuevos problemas. En 1929, Schober, director de policía de Viena, y responsable en gran medida de los tiroteos de 1927, ocupó la cancillería y negoció la transacción con los socialistas en torno a la reforma de la Constitución. Después, se dedicó a negociar una Unión Aduanal con Alemania, que pronto fue vetada por los franceses. El *Anschluss* —unidad total con el Reich alemán— había sido parte del programa socialista desde 1919, pero había quedado específicamente prohibida por el tratado de paz, que exigía de Austria permanecer independiente. Los contactos entre los movimientos socialistas alemán y austríaco eran sin embargo muy estrechos —el propio Kautsky y Rudolf

Hilferding eran de origen austríaco— y en la nueva Austria casi toda la población era alemana por su idioma y sus sentimientos culturales. Alemania, en esta época, era todavía el país de la República de Weimar, y el nazismo, aunque ganaba terreno, aún no era más que un movimiento de oposición; de modo que la Unión Aduanal —o el *Anschluss*— parecía todavía posible sobre una base de parlamentarismo democrático, que se fortalecería en Austria si participaba en el Reich como Estado o país miembro. Pero ante el veto francés, apoyado por otras potencias que habían firmado el Tratado con Austria, nada pudo hacerse.

Poco después, el gobierno de Schober cayó por una disputa entre el gobierno y el Heimwehr, que había tratado de quitar el control de los trabajadores ferroviarios a los socialistas y había exigido la designación de un administrador general de los ferrocarriles que se uniera a ellos en la campaña. Schober se negó a hacer la designación propuesta, por ciertos episodios en el pasado de la persona en cuestión, y, por ello, fue depuesto y sustituido por su vicescanciller, Karl Vaugoin, fuerte partidario del Heimwehr. Schober intentó entonces formar un grupo intermedio entre católicos y socialistas, con base en los partidos pequeños, y logró suficiente apoyo como para privar a Vaugoin de su mayoría parlamentaria, a pesar del hecho de que el propio Seipel aceptó entrar en su gabinete como Ministro de Relaciones Exteriores y que los dos jefes del Heimwehr, incluyendo a Starhemberg, ocuparon cargos en el mismo. El gobierno no quería arrostrar las elecciones, en las cuales no tenía perspectivas de éxito contra Schober ni los socialistas; pero éstos amenazaron con recurrir a las armas si se hacía un intento de gobernar sin Parlamento. El gobierno se vio obligado a efectuar elecciones, de las que resultó sin mayoría. El Heimwehr, luchando como partido independiente, sólo obtuvo 8 asientos poniendo en descubierto su debilidad. El gobierno de Vaugoin renunció y fue sustituido por un gabinete social-cristiano más moderado; pero el Partido Social-Cristiano, que había sufrido grandes pérdidas en las elecciones, estaba por entonces en estado de desintegración. Tenía todavía gran apoyo campesino; pero sus dirigentes, incluyendo a Seipel, habían hecho tantas transacciones al tratar de aliarse con el Heimwehr que su situación era desesperadamente ambigua, mientras que Schober, quien se había comprometido a no reformar la Constitución sin usar medios constitucionales, poseía suficiente apoyo como para constituir un obstáculo absoluto al objetivo de Seipel —que era, por encima de todo, la destrucción de los socialistas como medio de restablecer el poder de la Iglesia.

Seipel, reconociendo el *impasse* y furioso con Schober, tomó la decisión de entrar en un gobierno de coalición con los socialistas, a los que se había comprometido a destruir: el mismo Seipel sería canciller y Bauer vicescanciller. Pero semejante coalición no era ni remotamente

posible y los socialistas rechazaron de inmediato la oferta. Esto sucedía en la primavera de 1931 y la oferta se hizo al producirse el colapso del Credit Anstalt, el gran banco austríaco controlado por los Rothschilds, que se había topado con dificultades al verse obligado a tomar a su cargo el reaccionario Boden Credit Anstalt, que se había desplomado hacía algún tiempo. La caída del Credit Anstalt, que tuvo repercusiones mucho más allá de Austria, señaló el serio comienzo de la depresión económica mundial. Austria había sufrido, desde 1918, un fuerte desempleo permanente como consecuencia de la pérdida de antiguos mercados en los Estados de la Sucesión del Imperio Austro-húngaro. El primer acto de los socialistas después del establecimiento de la República había sido proveer un sistema de legislación social y laboral que incluía el subsidio del Estado a los desempleados; Viena había utilizado sus considerables facultades legislativas para asegurar la intervención del Estado en varios aspectos, especialmente en el control de las rentas y la construcción de viviendas subsidiadas para arrendatarios obreros. Estas medidas de seguridad social, que gozaron de cierto apoyo entre los elementos más avanzados del Partido Social-Cristiano, no habían podido ser suprimidas por la mayoría antisocialista aunque ésta había hecho lo posible por dificultar las cosas en el campo financiero para Viena. Pero el golpe económico que afectó a Austria en 1931 y prolongó sus efectos casi sin respiro por varios años fue de inusitada severidad y debilitó seriamente la fuerza de negociación de los sindicatos, aunque no perdieron su control sobre los trabajadores industriales de la mayor parte del país. Sólo una gran empresa industrial, la Alpine Montan-Gesellschaft, pudo aprovechar la oportunidad para desintegrar los sindicatos socialistas entre sus empleados y reorganizarlos en sindicatos "blancos" adheridos al Heimwehr. Esta compañía fue comprada después por capitalistas alemanes quienes, al subir Hitler al poder en 1933, transfirieron esos sindicatos "blancos" a la dirección nazi dotando así a los nazis austríacos de su primer núcleo obrero importante.

El objetivo de Seipel al ofrecer una coalición a los socialistas era complicarlos, en nombre de la unidad nacional, en drásticas medidas destinadas a hacer frente a la crisis económica —reducciones de salarios, sobre todo a los empleados públicos, entre los que se encontraban los ferroviarios; reducciones en los beneficios de servicios sociales, especialmente los prestados a los desempleados, y así sucesivamente. Si los socialistas hubieran aceptado participar en la aplicación de semejante programa habrían sido acusados, inevitablemente, de traicionar a los trabajadores y habrían perdido mucho apoyo popular. Pero no tenían oportunidad de poner en práctica un programa propio, aunque lo hubieran tenido; porque todo intento de formar un gobierno socialista minoritario habría unificado de inmediato a todos los demás partidos

para provocar su derrota. En cambio, sucedió que una serie de débiles gabinetes socialcristianos se mantuvieron en el poder sin una mayoría y que, en este proceso, la democracia austríaca fue desapareciendo gradualmente.

Desde este momento, sin embargo, un nuevo factor comenzó a cobrar considerable importancia en la política austríaca: el rápido auge del nazismo como corriente de opinión pública. En las elecciones regionales y municipales efectuadas en casi toda Austria en abril de 1932 los nazis, que todavía no habían subido al poder en Alemania, hicieron una súbita aparición como fuerza poderosa en la política austríaca. Sus grandes éxitos se lograron a expensas no de los socialistas, que conservaron sus posiciones, sino de los socialcristianos, que en Viena perdieron la mitad de sus diputaciones en favor de los nazis, y de un sector del Heimwehr que transfirió su adhesión del fascismo austríaco al alemán. Desde ese momento dos formas agudamente hostiles del fascismo lucharon por el poder en Austria, igualmente decididas a derrocar a la República democrática pero comprometidas, la una, a mantener la independencia de Austria bajo un régimen reaccionario dominado por representantes del antiguo ejército imperial, las clases terratenientes y los banqueros y financieros de Viena, y la otra al *Anschluss* con Alemania, que en enero de 1933 quedó controlado por los nazis. Contra estas dos fuerzas estaban los socialistas, que siempre habían apoyado el *Anschluss*, pero que empezaban a pensar de otra manera respecto a esa unión cuando ésta comenzó a significar el sometimiento de Austria a una Alemania nazi, en lugar de la participación con autonomía en la República de Weimar. Dudosamente situado entre las fuerzas antagónicas estaba el Partido Social-Cristiano —sus restos— que se había aliado al Heimwehr con Seipel, pero que estaba constituido en su mayoría por campesinos sin una visión clara de la política nacional, excepto un horror sistemáticamente cultivado hacia los socialistas que, según se les decía, eran bolcheviques decididos a arrebatarles su tierra.

En esta fecha, 1932, Seipel —el archiopositor de los socialistas— murió y los socialcristianos tuvieron que buscarse un nuevo líder para sustituirlo. Seipel, en el poder o fuera de él, había sido indudablemente el hombre fuerte de Austria por muchos años, siguiendo una tortuosa política de intrigas con sólo dos objetivos claros: la destrucción absoluta del Partido Socialista y el régimen democrático impuesto por éste al Estado austríaco y la resurrección del poder y la influencia, en la política y en toda la vida nacional, de la Iglesia católica. Ambos objetivos fueron plenamente suscritos por el hombre que lo sucedió, el doctor Engelbert Dollfuss, quien ocupó la cancillería y logró integrar un gabinete con una mayoría de un solo voto en el Parlamento, de tal modo que quedaba incapacitado para promulgar una legislación seria-

mente controvertible. Los católicos, para asegurar su mayoría básica, tenían que apoyarse en el grupito de parlamentarios del Heimwehr. Pero el apoyo del Heimwehr en el país se veía seriamente mermado ya por el avance del nazismo austríaco; fuera del Parlamento, la alianza con los restos del Heimwehr, encabezados por Starhemberg y el comandante Fey, quizá aseguraba más opositores que simpatizantes. Dollfuss, sin embargo, como hijo devoto de la Iglesia católica y decidido enemigo de la democracia, adoptó con entusiasmo los proyectos de reforma a la Constitución de Seipel inclinándolos más abiertamente que Seipel a una versión decididamente clerical del fascismo, basada en una estructura de "estamentos" en lugar de la representación parlamentaria. Dollfuss era hijo ilegítimo de un campesino y, mediante la ayuda económica que se le prestó al descubrir en él una promesa intelectual, se abrió paso hasta la Universidad de Viena. Como no quería ser sacerdote, hizo carrera como funcionario en organizaciones católicas y pronto llegó a secretario de la Cámara de Agricultura de la Baja Austria y a ser un reconocido experto socialcristiano en cuestiones campesinas. Estuvo, al principio, en el ala más democrática del movimiento campesino, pero luego se había pasado a la derecha, principalmente influido por Seipel, convirtiéndose en exponente decidido de las ideas autoritarias. No era quizás, por naturaleza, un dictador, aunque llegó a serlo por un tiempo; pero amaba el poder y estaba decidido a llevar adelante la lucha contra los socialistas por todos los medios a su alcance.

No tenía mucho tiempo en el gobierno cuando se presentó una inesperada oportunidad para prescindir de una vez por todas del Parlamento austríaco. Su gobierno, muy necesitado de dinero ante la crisis económica, decidió pagar los salarios de los ferroviarios, que eran empleados del Estado, en tres plazos, en lugar de hacerlo a principios de mes. Los ferroviarios convocaron a una huelga de dos horas como protesta formal; y el gobierno aprovechó la ocasión para proceder a despedir en masa a los miembros activos del sindicato. Presentado el problema al Parlamento, el gobierno fue derrotado por un voto, pero luego se descubrió que uno de los socialistas no había votado con su propia boleta sino que, por error, lo había hecho con la de su vecino. Surgió entonces una gran disputa en torno a si la votación era o no válida; y, en el curso de la discusión, el orador oficial parlamentario socialista Karl Renner renunció y fue seguido por su colega católico —el primer vicepresidente. El segundo vicepresidente, un nacionalista, vio la oportunidad y renunció también de modo que no quedaba nadie autorizado por la Constitución para convocar a la Cámara. El gobierno, contento de encontrar una salida al *impasse* parlamentario, sostuvo la opinión de que no podía convocarse nuevamente a la Cámara pero que, como no había sido disuelta ni suspendida, seguía existiendo nominalmente.

Esta curiosa situación se produjo el 4 de marzo de 1933, pocos días después del incendio del Reichstag en Berlín y un día antes que Hider obtuviera una sonada mayoría en las elecciones generales de Alemania. El problema de los ferrocarriles se había visto envuelto con el asunto Hirtenberg —en torno a unas armas que los ferroviarios habían contribuido en forma capital a descubrir. El asunto se refería a una fábrica de armas en Hirtenberg que, según se demostró, producía rifles para exportarlos a Hungría, violando los tratados de paz y en contra de la política oficial del gobierno austríaco. Se supo entonces que la mayoría de las armas en cuestión no se fabricaban en Hirtenberg, sino que se importaban de Italia para su envío a Hungría, no con el fin de ser utilizadas allí, sino para entregarlas a los rebeldes croatas que proyectaban un alzamiento contra Yugoslavia. Los italianos, en muy malas relaciones con los yugoslavos, las habían enviado a Hirtenberg para reacondicionarlas antes de mandarlas a Croacia; y Mussolini, afectado por la revelación, se mostraba decidido por el momento a ayudar en lo posible a la destrucción de los socialistas austríacos que, quizás, lo hubieran pensado dos veces antes de dar a la publicidad el asunto si por anticipado hubieran sabido todo lo que iba a implicar.

La renuncia de Renner, hecha en el calor del momento, fue sin duda un error táctico; porque no previó que los dos vicepresidentes de la Cámara fueran a crear, al seguir su ejemplo, un *impasse* constitucional con el Parlamento incapacitado para funcionar. La consecuencia, en efecto, fue convertir a Dollfuss de canciller de una República formalmente democrática en dictador. Se convirtió en dictador menos porque él mismo lo deseara que porque no pudo ver otra alternativa. Había entonces no dos sino tres fuerzas predominantes en Austria que peleaban por el poder político: los socialistas, que conservaban su fuerza pero sin progresar en nada; la alianza de los socialcristianos y el Heimwehr de Dollfuss, que perdía mucho terreno, y los nazis, que ya habían absorbido a la mayoría de los antiguos nacionalistas o pan-germanistas y a una parte del Heimwehr y avanzaban rápidamente en todo el país. Ninguno de estos tres grupos podía obtener una mayoría bajo un sistema parlamentario, pero no había posibilidad alguna de que dos de ellos se unieran contra un tercero. Entre Dollfuss y los socialistas el abismo era demasiado grande; y, además, una alianza con los socialistas habría significado unificar a Italia y Alemania en una actitud hostil a la independencia de Austria. Una alianza con los nazis, dispuestos a borrar a Austria como Estado independiente no era ya posible desde el momento de la victoria de Hitler en Alemania. Quedaba sólo una dictadura socialcristiana, aunque se había demostrado que los socialcristianos y el Heimwehr juntos reunían menos de la tercera parte de la fuerza electoral en la República.

La dictadura de Dollfuss dependía totalmente de que Alemania e Italia se mantuvieran desunidas en su política respecto a Austria, como lo estaban de hecho. Hitler había expresado hacía tiempo su intención de absorber a Austria en el nuevo Reich pangermano, mientras que Mussolini no quería que las fuerzas alemanas dominaran el Paso de Brennero, con acceso directo a Italia. Dollfuss en consecuencia confiaba en el apoyo italiano para su especie peculiar de fascismo católico, que difería radicalmente del nazismo y del fascismo italiano en tanto que no descansaba en el apoyo de un partido de masas. No era ni remotamente parecido al papel del partido del Führer o del Duce en Alemania e Italia. Había, por el contrario, una vuelta a las ideas de Vogelsang de un Estado cristiano sobre la base de "estamentos" (*Stände*), pero con la diferencia que mientras Vogelsang había manifestado sus ideas como medio de evitar el desarrollo de la industria y las finanzas en gran escala, su sucesor reunía parte importante de su apoyo entre los grandes industriales y banqueros, así como entre los aristócratas supervivientes del antiguo régimen imperial. El sistema que Seipel y Dollfuss favorecían era, de hecho, radicalmente inadecuado a las necesidades de una sociedad moderna, donde la Iglesia había perdido completamente el control sobre los trabajadores industriales y un considerable sector del campesinado, y los *Stände* en los que se proponía organizar a la población ocupada, sin atender a las barreras de clases, no podían responder a ninguna realidad. Dollfuss sabía que no podía esperar constituir su estructura de "estamentos" si no lograba quebrar totalmente la fuerza de los sindicatos, que eran la espina dorsal del Partido Socialista; por ello, se dedicó a poner en juego todos los medios a su alcance para atacarlos. Tenía, sin embargo, que pelear una batalla continua en dos frentes —contra los nazis y contra los socialistas— y sabía que el Partido Social-Cristiano no lo apoyaba en absoluto en forma solidaria, sino que incluía un movimiento sindical católico que también tendría que desintegrar, así como muchos políticos campesinos que no sin reservas apoyaban su alianza con el Heimwehr.

Por entonces el Heimwehr, convertido en partido del gobierno, era un obstáculo principalmente para los socialistas —aunque tenía también sus choques con los nazis. Dollfuss hizo considerables esfuerzos por satisfacer a los nazis, especialmente con fuertes medidas dirigidas contra los socialistas, pero luego se convenció de la inutilidad de intentar un acuerdo con un partido totalmente inclinado al *Anschluss* y a la aceptación de Hitler como "líder". Los nazis, en efecto, respondieron a las insinuaciones de Dollfuss con una campaña de bombas y violencia, que lo obligó a tomar medidas represivas en su contra. Su ataque principal siguió dirigiéndose, no obstante, contra los socialistas, para ocupar

el gran número de armas que todavía estaban en manos del Schutzbund a pesar de los cáteos y ocupaciones que ya se habían efectuado. Estos registros se intensificaron entonces y culminaron con la ocupación de las oficinas del Partido Socialista en Linz, en febrero de 1934. Los socialistas de Linz decidieron dar la batalla sin esperar el permiso de la central del partido en Viena; y, desde Linz, el levantamiento se extendió a otras regiones, aunque no a todo el país. En Viena el comité central del partido, al conocer las noticias, decidió por mayoría de un voto convocar a una huelga general, lo que no resultaba de ninguna manera un paso positivo en vista del desempleo existente. Una parte del Schutzbund de Viena recurrió a las armas, pero sólo una parte. La huelga fue un completo fracaso. La sección del Schutzbund que participó en el levantamiento luchó durante cuatro días, pero perdió toda posibilidad de triunfo cuando el gobierno introdujo a la artillería. Sufrieron severos daños el Karl Marx Hof y otras grandes manzanas de edificios departamentales para obreros construidos por la municipalidad de Viena; y los que participaron en la pelea demostraron gran heroísmo. Sin embargo, no tenían ninguna posibilidad de salir victoriosos. El comandante Fey, que dirigía las operaciones en su contra, comenzó a fusilar a los que había tomado prisioneros, incluyendo por lo menos a un hombre gravemente herido. Después que siete rebeldes fueron colgados sin juicio previo, se puso fin a esta práctica después de serias protestas de las potencias extranjeras.

Aunque la mayoría de los socialistas no habían participado en el levantamiento, el Partido Socialista y los sindicatos fueron acusados como culpables. El Partido fue disuelto y sus oficinas ocupadas; y los sindicatos socialistas sufrieron la misma suerte. Los principales dirigentes, excepto los de la extrema derecha, pasaron a la clandestinidad o al exilio.

Otto Bauer escapó a Checoslovaquia y se radicó en Brno, desde donde trató de sostener su propaganda. Deutsch, el jefe del Schutzbund, también escapó al extranjero. Pero la disolución del partido y de los sindicatos no extinguió ni al uno ni a los otros. El partido encontró nuevos dirigentes que prosiguieron con su labor de propaganda en la clandestinidad y siguieron contando con la adhesión de la gran mayoría de trabajadores industriales contra Dollfuss y los nazis; y los sindicatos socialcristianos, a los que se permitió sostenerse temporalmente mientras eran absorbidos en una nueva y amplia organización controlada por el gobierno, se convirtieron en centros de reunión de ex-miembros de los sindicatos socialistas y negociaron de buena fe cuestiones inmediatas de salarios y condiciones de trabajo. De esta situación surgió la llamada "Unión Unificada" o *Einheitsgewerkschaft* que, aunque basada original-

mente en los sindicatos católicos, se convirtió progresivamente en una organización obrera sujeta a una presión socialista creciente.

Más grave para los socialistas fue el desplazamiento del gobierno de la ciudad de Viena, que fue retirado del Consejo elegido, donde los socialistas tenían una gran mayoría y entregado a un Comisionado que giró órdenes inmediatas de cese a todas las obras municipales de construcción de viviendas. En algunos aspectos se intentó ganar el favor de los trabajadores vieneses, especialmente designando a un socialcristiano progresista, el doctor Ernst Winter, como vicealcalde. Pero Winter, aunque sus opiniones personales eran bastante avanzadas, siguiendo la tradición de Lueger, respecto a los servicios sociales, tenía poco poder de acción y pronto fue sustituido.

En los meses que siguieron al levantamiento, Dollfuss, presionado por los jefes del Heimwehr, prosiguió la venganza contra los socialistas aunque algunos de sus ministros y partidarios no dieron muestras de mucho celo para poner en práctica sus medidas más extremas. Entre sus críticos se encontraban el doctor Schmitz, nuevo alcalde de Viena, el doctor Winter y el Ministro de Justicia, doctor Von Schuschnigg, que favorecían una política más suave. Fue entonces que se produjo, en julio de 1934, el intento de golpe de Estado nazi. Bandas armadas de nazis tomaron la Cancillería y una estación de radio para anunciar a través de ésta que Dollfuss había renunciado y que Rintelen, uno de los principales partidarios de los nazis, había ocupado su lugar. En la Cancillería los conspiradores encontraron a Dollfuss y lo capturaron, siendo herido de muerte por uno de sus captores y detenido sin tener acceso a un sacerdote ni a un médico. Pero, mientras tanto, las fuerzas del gobierno habían rodeado la Cancillería y no había señal de que se hubiera extendido el levantamiento en favor de los nazis. El comandante Fey, que se declaró cautivo, negoció las condiciones de la rendición y la Cancillería fue abandonada. Pero ya por entonces Dollfuss había muerto. Hay dudas acerca de si Fey prometió a los conspiradores un salvoconducto si se rendían. Ellos así lo afirmaron y él lo negó pero, en todo caso, la promesa no se cumplió. Algunos nazis prominentes fueron ahorcados pero no hubo represalias en masa. Además del intento de golpe en Viena, hubo levantamientos nazis en Carintia y en Estíria que fueron sofocados tras dura lucha. Muchos de los insurgentes se retiraron a través de la frontera a Yugoslavia, que ya era aliada estrecha de Alemania.

Una razón del fracaso del golpe nazi fue que las fuerzas armadas del gobierno se mantuvieron firmes contra los nazis y que en Viena éstos tenían muy poco apoyo popular. Otra razón, probablemente más efectiva para limitar la extensión de la revuelta, fue que Mussolini

ordenó la marcha de dos divisiones italianas hacia la frontera, en el Paso de Breñero. Hider había integrado una Legión Austríaca compuesta por nazis refugiados de Austria y este grupo armado fue acercado a la frontera austríaca listo para atravesarla. Pero Hitler, cuando se enteró de los movimientos de tropas italianas, reflexionó. El rearme alemán estaba aún en su primera etapa y se le aconsejó no arriesgar una contienda con Italia que pudiera producir una inmediata guerra europea. En consecuencia, envió nuevamente a la Legión Austríaca a la Prusia oriental, abandonando a su suerte a los nazis austríacos.

La muerte de Dollfuss produjo una importante modificación de la política del gobierno austríaco. Su sucesor, Von Schuschnigg, era miembro de la baja nobleza del Tirol, devoto cristiano, hombre de ideas bastante avanzadas sobre los problemas campesinos y, por sus gustos personales, un aristócrata. No tenía nada en común con los "duros" como Starhemberg y Fey ni con la perspectiva general del Heimwehr; y, aunque era por supuesto antisocialista, no sentía urgencia por perseguir y aniquilar a los que predicaban la doctrina socialista. Por tanto, aunque mantuvo la dictadura de Dollfuss —sin tener, de hecho, otra alternativa— la suavizó mucho y no trató de detener el renacimiento de los sindicatos a través del *Einheitsgewerkschaft*. Schuschnigg era, en efecto, un exponente del caballero a la vieja usanza, de la antigua Austria, en su manifestación menos reaccionaria; y lo que buscó por encima de todo, desde 1934, era una vida tranquila. Pronto despidió de su gobierno primero al comandante Fey y después al príncipe Starhemberg, sin provocar serios problemas. De hecho, reconoció con ello que el Heimwehr y los nazis habían perdido mucho de su apoyo y que lo que deseaban los hombres razonables era sobre todo que se les dejara en paz. No había, sin embargo, en la Austria de 1934 la clase moderada de aristócratas que sirviera de apoyo a un gobierno como el que Schuschnigg habría querido implantar. Sólo podía sostenerse como cabeza de un pequeño e independiente Estado cristiano mientras sus dos peligrosos vecinos, Alemania e Italia, no se pusieran de acuerdo —o más bien mientras Mussolini estuviera dispuesto a protegerlo contra Hitler. Pero tan pronto como los dos grandes dictadores llegaron a un acuerdo, el colapso de Austria como Estado independiente era absolutamente inevitable una vez que Hider se decidiera a actuar.

En este momento, 1934-1935, los franceses hacían los mayores esfuerzos por mantener desunidas a la Alemania nazi y la Italia fascista e inclusive por incluir a Italia en un Frente Anti-Nazi basado principalmente en Francia e Inglaterra. Para ello era necesario apaciguar a los italianos permitiéndoles hacer la guerra a Abisinia y que se la anexaran, totalmente o en parte, como territorio para los colonizadores italianos.

Pero un ataque a Abisinia sería una violación directa y abierta del Convenio de la Sociedad de Naciones, especialmente porque Abisinia había sido aceptada como miembro de la Sociedad. Esto no detuvo a Laval, quien consideraba que valía la pena soportar la agresión de Italia para asegurar su apoyo contra los alemanes. Pero el Pacto Hoare-Laval, entre las Secretarías del Exterior inglesa y francesa, produjo tal estallido de protestas en Inglaterra que Sir Samuel Hoare (después Lord Templewood) se vio obligado a renunciar y la sociedad tuvo que considerar la aplicación de "sanciones" contra los italianos por invadir Abisinia. Después de muchas discusiones, se aplicaron algunas sanciones; pero las potencias de la Sociedad evitaron cuidadosamente aplicar la única sanción que habría sido efectiva: el embargo de los suministros de petróleo a las fuerzas armadas italianas. Esta sanción fue evitada porque Mussolini declaró abiertamente que la consideraría de hecho como una declaración de guerra.

Aunque la Sociedad de Naciones vaciló en cuanto a las sanciones, su intervención a medias en la guerra de Abisinia bastó para lanzar a Italia en brazos de la Alemania nazi y sirvió de base al Eje Roma-Berlín y al Pacto contra el Comintern. Italia, que había estado subsidiando el Heimwehr, retiró su ayuda; y resultó evidente que Hitler podía destruir a la República austríaca cuando se le antojara. De hecho esperó hasta marzo de 1938. Por entonces el rearme alemán había avanzado mucho más y era ya obvio que Francia e Inglaterra no estaban dispuestas a una acción que detuviera la agresión nazi y que pudiera implicar el peligro de una guerra. Hitler preparaba ya su ponzoñosa campaña contra Checoslovaquia, con la cual Austria había estado por algún tiempo en muy amistosas relaciones. De hecho, sólo se trataba de decidir qué país atacarían primero los nazis —Austria o Checoslovaquia— y Hitler decidió someter primero a los austríacos, ahora que la protección italiana había sido definitivamente retirada. Schuschnigg veía lo que le esperaba a su país, aunque no podía saber por anticipado cuándo se produciría precisamente el ataque. Entonces, en febrero de 1938, Hitler llamó a Schuschnigg a Berchtesgaden y le ordenó hacer al nazi austríaco Von Seiss-Inquardt Secretario del Interior, mostrándole las órdenes que se girarían a las tropas alemanas de marchar sobre Austria si Schuschnigg no obedecía, lo que se vio obligado a hacer. Schuschnigg volvió entonces a Viena y reflexionó acerca de si podía hacerse algo para salvar al país. Estaba absolutamente descartado que él pudiera resistir a los nazis con sus propios recursos y las únicas fuentes que quedaban de resistencia potencial eran el Heimwehr y el movimiento obrero proscrito y disperso. El Heimwehr, con el cual había disputado Schuschnigg, era obviamente una caña rota y la única esperanza estaba en un acuerdo con los trabajadores. Se entablaron discusiones con los

delegados de las fábricas y pocos días antes del fin se efectuó una gran conferencia de los obreros con el consentimiento del gobierno, que se comprometió a la defensa de Austria. Así, como último recurso, los católicos que habían tratado durante tanto tiempo de borrar al movimiento obrero tuvieron que llegar a un acuerdo con el mismo como la única fuerza capaz de organizar la resistencia en gran escala. Schuschnigg, sin embargo, sólo actuó a medias y, al apelar a los trabajadores, no hizo promesas de que su gobierno lucharía hasta el fin si podían evitarlo. En los últimos días de la independencia de Austria, las calles de Viena se llenaron de entusiastas manifestantes socialistas. Schuschnigg decidió hacer un plebiscito para que se emitieran opiniones en pro o en contra de la independencia y esta decisión probablemente precipitó el golpe. El 11 de marzo de 1938 los nazis marcharon sobre Austria y esa misma noche Schuschnigg renunció sin ningún intento de resistencia. Estaba seguro de que no había ninguna oportunidad cuando Hitler, desafiando el consejo de sus generales, dio la orden de marchar. Tenía razón porque los trabajadores tenían en ese momento muy pocas armas y estaban obviamente incapacitados para resistir un ataque de fuerzas regulares.

Así llegó a su fin la República austríaca en 1938, para reconstituirse sólo a fines de la segunda Guerra Mundial, en una situación de ocupación conjunta que obligó a los socialistas a entrar en un gobierno de coalición y a permanecer en el gobierno hasta la hora actual, cuando Austria, evacuada por las fuerzas de ocupación, ha aceptado un papel de neutralidad en el conflicto europeo. Pero las agrupaciones en torno a los partidos son muy distintas hoy que en los treinta. La violenta antidemocracia de Seipel y del Heimwehr ha desaparecido; los socialistas, reconociendo su incapacidad para obtener una mayoría independiente, se han conformado a vivir al lado de un Partido Social-Cristiano que no quiere ya destruir la democracia parlamentaria sino que la acepta como único sistema factible, dadas las circunstancias. Los socialistas que, como hemos visto, nunca fueron los revolucionarios que decían sus opositores, sino que siempre tuvieron una fuerte ala derecha constitucionalista encabezada por hombres como Renner y Danneberg, se han adherido en masa al constitucionalismo. Se ha renunciado al intento de encontrar un austro-marxismo a medio camino entre la izquierda y la derecha. El Partido austríaco es hoy un partido de reforma social, como en general siempre lo fue; pero ya no descansa sobre una base teórica propia. Algunos de sus antiguos dirigentes —Friedrich Adler entre ellos— viven todavía pero ya no militan y, de los hombres más jóvenes que militaron antes de 1934 y todavía hoy se muestran activos, puede citarse a Oscar Pollak de la *Arbeiterzeitung* y Julius

Braunthal, retirado recientemente de la secretaría de la Internacional Socialista. En su mayoría, sin embargo, los viejos líderes han muerto y otros nuevos, mucho menos preocupados por la teoría, los han sustituido. El austro-marxismo, término tanto tiempo oprobioso para los anti-socialistas austríacos y para los comunistas que lo acusaban de basarse en los fundamentos teóricos del idealismo kantiano o del empirio-criticismo de Mach, ha desaparecido totalmente como doctrina viviente, ajustada a las condiciones actuales. Los socialistas austríacos, no obstante, han dado más de una vez claras demostraciones de su resistencia y capacidad de supervivencia, inclusive cuando los años de opresión nazi que empezaron en 1938. Siempre, en mi opinión, abrigaron reservas y se mostraron intensamente reacios a creer que hubiera llegado el momento en que la resistencia armada fuera la única política con posibilidades de éxito —tanto más cuanto que las posibilidades de éxito siempre fueron escasas. Pero, mientras el gran movimiento socialista alemán se dejó aplastar en 1933 sin responder siquiera con un golpe, los socialistas austríacos —o, al menos un sector importante de ellos— resistieron con las armas en 1934 y se consideró en general, a pesar de su derrota y del carácter bastante reducido del levantamiento, que habían salvado el honor del socialismo en uno de sus más sombríos momentos.

LOS PAISES ESCANDINAVOS Y FINLANDIA

En el periodo entre las dos guerras mundiales la socialdemocracia escandinava recibió grandes elogios, de los socialistas moderados y de los anti-socialistas más moderados, por la implantación con éxito de un "camino intermedio" entre el socialismo y el capitalismo. De hecho, esto significó que los socialdemócratas en los tres principales países escandinavos —Dinamarca, Suecia y Noruega— después de aprovechar la oportunidad creada por la guerra para introducir el sufragio universal —incluyendo el voto para la mujer— y la implantación de reformas democráticas en la estructura política, hicieron de estos cambios la base de medidas de gran alcance de seguridad social e impuesto progresivo, así como de otras reformas, de modo que los sindicatos, que habían aumentado considerablemente el número de sus miembros y su influencia, quedaron en buena posición para eficaces negociaciones colectivas de los contratos de trabajo. A fines de los veinte no se había realizado mucho, realmente, en el terreno de las reformas sociales porque, en la década de los veinte, los socialdemócratas todavía eran minoritarios en los distintos Parlamentos —aunque, a pesar de ello, habían integrado gobiernos socialdemócratas de corta duración. Paradójicamente, los principales triunfos de los socialistas se lograron durante la desastrosa depresión mundial que se desencadenó en 1931 y al mismo tiempo que la victoria nazi en Alemania a principios de 1933.

¿Cómo sucedió esto, no en un solo país sino en cierta medida en los tres —aunque sobre todo en Suecia, donde se sostuvieron ininterrumpidamente en el poder, con sólo un breve intermedio, de 1932 hasta el estallido de la segunda Guerra Mundial? Indudablemente una razón fue que Suecia estaba en una situación económica mucho más favorable que la mayoría de sus vecinos. Aunque el desempleo aumentó agudamente en Suecia y provocó fuertes demandas de medidas de auxilio a los desempleados, no se produjo nada parecido a la devastación que sufrieron otros muchos países. En efecto, las exportaciones se sostuvieron relativamente bien, ya que consistían principalmente en pulpa de madera y papel, que se mantuvieron con una relativa buena demanda, y otros productos forestales, además del hierro de muy alta calidad producido en el norte del país —y para este producto los programas de rearme de los treinta crearon, sobre todo en Alemania, una salida casi inagotable, a pesar de la dificultad de obtener el pago de los ale-

manes. Las importaciones suecas consistían, en general, de materias primas no elaboradas o semi-elaboradas para uso industrial ya que Suecia importaba pocos alimentos y escasos productos industriales terminados, que se fabricaban con gran variedad en el país. Hubo ciertamente, en las primeras fases de la depresión mundial, una aguda caída del comercio sueco con Alemania, debida principalmente a las dificultades de la balanza de pagos alemana. Pero, con el auge del nazismo, esta tendencia se invirtió con la alta demanda alemana de mineral de hierro en bruto, hierro y productos del acero que Suecia podía suministrar. Los suecos, pues, no salieron muy perjudicados de la depresión y fueron los más capacitados para combatirla puesto que Suecia tenía altas reservas de oro y una balanza de pagos muy favorable, pudiendo gastar dinero en obras públicas para crear fuentes de trabajo sin tropezar con dificultades en su balanza de pagos. El gobierno socialista sueco pudo, de hecho, dar una clara demostración de la efectividad de la política de obras públicas como medio de acción contra el desempleo cuando otros gobiernos, menos favorablemente colocados, declaraban su incapacidad en este respecto o inclusive, como en el caso de Gran Bretaña, negaban que pudiera ser efectiva, con el pretexto obviamente falso de que un aumento en la ocupación creado por organismo., estatales sería simplemente cancelado por una caída semejante en las fuentes de empleo privadas, de modo que la situación general no mejoraría. Puede ser punto de discusión si los suecos habrían podido actuar como lo hicieron si su balanza de pagos hubiera sido menos favorable y sus exportaciones más afectadas por la depresión que como sucedió en realidad; pero esto no les resta crédito por haber sido los primeros en considerar las crisis económicas no como "actos de Dios", que el Estado no podía hacer nada por mejorar, sino más bien como oportunidades de acción. Ernst Wigforss, su Ministro de Finanzas, fue el responsable en gran medida de la política que se siguió y hay que considerarlo un precursor de lo que hoy es la forma ortodoxa de acción gubernamental, que sostiene el nivel de ocupación en vez de buscar una salida deflacionista.

Aparte de todo esto, las principales realizaciones de los gobiernos socialistas suecos se efectuaron en el campo de la seguridad social. Suecia era ya un país donde los ricos eran pocos y la pobreza absoluta relativamente escasa, excepto en el lejano Norte. Los niveles de vida en las ciudades eran altos y gran parte de la población rural estaba integrada por pequeños, pero prósperos, agricultores que tenían bastantes intereses comunes con los trabajadores industriales. Los trabajadores agrícolas, que estaban en peor situación, no eran muy numerosos. Había una gran clase media de profesionistas y artesanos, con

un nivel de vida ligeramente superior al de los trabajadores calificados, y organizados con ellos en el poderoso y amplio movimiento de las cooperativas de consumo que, bajo la hábil dirección de Albin Johansen, habían declarado la guerra a los monopolistas que trataban de explotar a los consumidores y habían entrado en competencia directa con ellos en la venta al por mayor y al detalle y en la producción, especialmente en el campo de la fabricación de focos eléctricos y de máquinas registradoras, pero también en otros campos más amplios. Este movimiento de las cooperativas de consumo sostenía una estricta neutralidad política y no estaba en absoluto ligado oficialmente al Partido Socialista. Pero generalmente pertenecían al movimiento los hogares de familias socialistas y los lazos informales entre ambos movimientos eran muy estrechos. La *Kooperativa Forbundet*, conocida como "K. F.", que servía a las cooperativas como organismo de venta al por mayor y de producción y como organismo central de política y propaganda, estaba fuertemente arraigado en todas las ciudades y penetraba también en las áreas rurales. Pero los agricultores tenían sus propias organizaciones cooperativas, especialmente para la venta de leche y otros productos alimenticios de calidad y estas cooperativas funcionaban, en general, en armonía con la K. F.

Los socialistas, cuando llegaron al poder, no mostraron mucho celo por la nacionalización. Había ya un sector considerable de empresas públicas incluyendo, además de los ferrocarriles, las minas de hierro, un número importante de bosques del Estado e industrias forestales y más de las dos terceras partes del suministro de electricidad basado en la energía hidráulica para consumo público o más de la mitad si se incluyen en el total las empresas generadoras de energía para su uso propio. Cualquier intento de nacionalizar la tierra habría tropezado con una formidable oposición de los agricultores, pequeños y grandes; y la fuerte posición del movimiento cooperativista prácticamente excluía toda extensión de la actividad estatal a la esfera del comercio al por mayor o al detalle. Tampoco los trabajadores industriales presionaban fuertemente en favor de la nacionalización ya que, sólidamente organizados en una organización sindical muy centralizada, podían negociar en condiciones de igualdad con los patronos. En los treintas la gran huelga general sueca de 1908 se había olvidado y había numerosos antecedentes de negociación pacífica de salarios y condiciones de trabajo. Pero no todos estaban satisfechos con los resultados: la dirección sindical centralizada fue acusada de seguir una política indebidamente acomodaticia, que traicionaba los intereses de los obreros. Pero, en los treintas, el sindicalismo de izquierda estaba en decadencia, aunque aún alcanzaba cierta importancia entre los trabajadores forestales: en la

industria el organismo central, la L.O., u Organización por Regiones, poseía un control casi indiscutible.

Los gobiernos suecos, mucho antes de llegar al poder el Partido Social-Demócrata, se había preocupado mucho de la seguridad social. El seguro de compensación a los trabajadores había sido obligatorio para los patronos desde 1901; el seguro obligatorio por enfermedad y vejez se implantó en 1913 y, desde la primera Guerra Mundial, la actividad del Estado en el campo de los servicios sociales se había extendido casi ininterrumpidamente. En Suecia, sin embargo, el Estado no actúa generalmente solo, sino en conjunción con autoridades locales y organismos voluntarios y pocos de los servicios prestados en los treinta eran absolutamente gratis para los beneficiarios que, en general debían pagar una parte del costo —aunque en muchos casos esta parte era pequeña. Además, muchos de los servicios prestados son de base voluntaria, limitados a los que se suscriben por su propia voluntad, generalmente a través de alguna sociedad que está total o parcialmente bajo control del Estado o es totalmente independiente del Estado —cuando menos, aparte de recibir de éste subsidios. Así, aunque en 1919 se presentó el proyecto de un seguro obligatorio de salud no se promulgó ninguna ley estableciéndolo y el seguro de salud fue administrado por diversas sociedades registradas de beneficencia patrocinadas por la Oficina de Pensiones del Estado y con subsidios estatales. A fines de los treinta, más de un millón de personas pertenecían a esas sociedades, de una población total de todas las edades poco mayor de 6 millones y medio de habitantes. En 1931 el proyecto se consideró nuevamente para crear dos tipos de sociedades, una local y una central, perteneciendo cada persona asegurada a una sociedad de cada tipo. La sociedad local era responsable de asistencia médica, tratamiento hospitalario y subsidio por enfermedad durante un periodo limitado, después de lo cual la sociedad central se hacía cargo de todo con asistencia médica por duración ilimitada y tratamiento en hospitales, en caso necesario, por dos o tres años. Se cobraban, sin embargo, cuotas para cubrir parte del costo del tratamiento médico y podían hacerse deducciones, dentro de ciertos límites, de la cantidad de subsidio por enfermedad para cubrir esas cuotas. A diferencia del seguro contra enfermedades, el seguro contra invalidez y por vejez había sido obligatorio desde 1913 y estos servicios eran administrados a través de comités locales de pensiones coordinados por una Oficina Real de Pensiones ligada al Ministerio de Asuntos Sociales. La contribución anual en 1937 iba de \$ 10.50 a \$ 35.00 (moneda mexicana) y consistía en el 1 % de los ingresos del contribuyente hasta este máximo. La pensión, pagadera a los 67 años o por incapacidad total, era de \$ 122.50 más el

10 % de la contribución total anual del miembro. Se pagaban también pensiones suplementarias a personas cuyos ingresos totales estaban por debajo de cierto nivel. El Estado y la municipalidad cubrían los costos extras de este pago suplementario. Había también un plan especial de pensiones —conocido como "Plan Personal de Pensiones"— según el cual los empleados no manuales contribuían a un Fondo, administrado por representantes de muy diversos intereses y sujeto a supervisión del Estado. Este plan, que comenzó en 1915, se modificó en 1929.

El seguro de desempleo tenía, en Suecia, una base voluntaria aunque era subsidiado por sociedades de beneficencia constituidas por los sindicatos. A mediados de los treinta abarcaba sólo cerca de 100 000 personas. La principal medida para remediar el desempleo adoptaba la forma de obras auspiciadas por las autoridades locales y a las personas que trabajaban en estas obras se les pagaba a una tasa mucho más baja que la de los trabajadores no calificados empleados regularmente. Desde 1924 una Comisión Estatal para el Desempleo había sido responsable de la política de obras públicas del Ministerio de Asuntos Sociales. Las obras emprendidas, que tenían que ser de un ritmo intenso de trabajo y en la práctica se concentraban principalmente en la construcción de caminos, eran de tres clases: las que estaban directamente en manos del Estado, las realizadas por autoridades locales con ayuda financiera del Estado y las financiadas totalmente por autoridades locales. La ayuda pecuniaria se otorgaba sólo cuando no podían crearse fuentes de trabajo. Este sistema funcionó bastante bien mientras el desempleo no fue grave y en los veinte una tercera parte de los desempleados registrados se dedicaron a este tipo de obras, mientras que cerca de un 10 % o menos recibieron ayuda pecuniaria. Pero con la depresión la proporción de los empleados bajó agudamente, mientras que el número de los que recibían ayuda pecuniaria subió rápidamente. Ésta era la situación cuando, en 1932, el Partido Social-Demócrata obtuvo más del 40 % de los votos para la Segunda Cámara en las elecciones generales y pudo formar gobierno, aunque no con una clara mayoría sobre los demás partidos. Estas elecciones se efectuaron en medio de la depresión mundial y la plataforma electoral giró principalmente en torno a las medidas para resolverla. Los socialdemócratas compartían la objeción de los demás partidos de dar ayuda pecuniaria salvo como último recurso; pero objetaban también el sistema de trabajo en obras de auxilio con tasas de salarios menores que las sindicales y pedían, en vez de ello, una "política de obras públicas" que creara fuentes de trabajo en condiciones y niveles estándares de trabajo y salarios, cubriendo los costos en caso necesario mediante préstamos. Esto significaba repudiar la opinión ortodoxa de que el presupuesto debía equilibrarse cada año

y sustituirla por la noción de un déficit presupuestal en los años malos compensado en los años de prosperidad por un excedente. Sin una mayoría definida en el Parlamento, los socialdemócratas no podían poner en práctica plenamente su política; pero pudieron implantar una política activa de obras públicas, para la cual se contrataba la mano de obra dentro de las tasas existentes de salarios y las condiciones establecidas de trabajo y elevar el nivel de los salarios en las obras de auxilio hasta equipararlo con las tasas de salarios por trabajos no calificados. El presupuesto estaba desequilibrado; pero se proyectó cubrirlo en los años siguientes mediante impuestos especiales y así se hizo. Así, Suecia a partir de 1933 se enfrentó a la depresión, no mediante la deflación monetaria, sino compensando la disminución en la inversión privada, aumentando la inversión en las empresas públicas y manteniendo así el nivel de ocupación hasta que las condiciones excepcionales de la depresión llegaron a su fin. Como hemos visto, esto podía hacerse fácilmente porque las exportaciones suecas se mantuvieron bien a pesar de la depresión y la balanza de pagos era sólida; pero hay que acreditar la participación del Partido Social-Demócrata y de Wigforss, su Ministro de Finanzas, por su capacidad para guiar a Suecia a través de la depresión con menos efectos adversos que los experimentados por otros países que intentaron hacerle frente por métodos ortodoxos deflacionistas. Los socialistas suecos tenían la ventaja de haber elaborado su política por anticipado, de modo que sabían exactamente lo que hacían y no necesitaron improvisar los métodos desde el principio hasta el fin: el éxito que tuvieron fue una respuesta suficiente a sus críticos. En los años subsiguientes cubrieron el dinero en efectivo que habían obtenido por préstamos para hacer frente a la crisis, insistiendo en el mantenimiento de los impuestos a un nivel que permitiera esto. No permitieron, sin embargo, que la inversión pública volviera a bajar a su nivel anterior a medida que la inversión privada se recuperó, ya que deseaban extender permanentemente el campo de la inversión pública para realizar proyectos de necesidad nacional. Se contentaron con tratar de mantener la inversión total, pública y privada, en un nivel que pudiera sostenerse sin nuevos préstamos para cubrir los gastos de capital en los años prósperos.

El efecto de esta política fue reducir la necesidad de ayuda pecuniaria a los desempleados y que las obras de auxilio, a diferencia de las obras públicas propiamente dichas, se redujeran a una importancia secundaria. Además, el nivel de los impuestos se mantuvo alto, en vez de bajar con el fin de la depresión, para reunir fondos para el mejoramiento de los servicios sociales, especialmente en la reforma de las pensiones de 1937.

El gobierno socialdemócrata de 1932 y los años siguientes era un gobierno minoritario que gozaba del apoyo del Partido Agrario. Después de las elecciones generales de 1936, en las que los socialdemócratas aumentaron su fuerza obteniendo cerca del 46 % del total de votos, el Primer Ministro socialista, Per Albin Hansson, formó un nuevo gobierno que incluía a miembros del Partido Agrario además de socialistas, asegurando así una clara mayoría. El cambio a una coalición no tuvo, sin embargo, efectos notables en la política y el nuevo gobierno procedió a legislar para mejorar las pensiones, implantar el seguro por desempleo, las vacaciones pagadas y otras muchas reformas sociales, pero no intentó avanzar hacia el socialismo poniendo en práctica medidas dirigidas contra la empresa privada. Cuando estalló la Guerra Mundial en 1939 su intención era permanecer neutral, pero había tomado algunas medidas destinadas a asegurar sus defensas ante la creciente tensión. Cuando comenzó la guerra, Suecia conservó su neutralidad pero se vio obligada a hacer considerables concesiones a Alemania, especialmente después de la invasión alemana a Noruega y Dinamarca. En las elecciones generales de 1940 los socialdemócratas mejoraron aún más su situación, logrando una clara mayoría del total de votos emitidos y una mayoría parlamentaria absoluta; cuando la guerra terminó, se formó nuevamente un gobierno exclusivamente socialdemócrata encabezado por Hansson, al que sucedió a su muerte en 1946, en el cargo de Primer Ministro, Tage Erlander. Hansson había estado en el gobierno prácticamente sin interrupción de 1932 a 1946, presidiendo gabinetes socialistas o de coalición. Dirigente, en sus años de juventud, del Movimiento de la Juventud Socialista, se había convertido en una figura altamente respetada y popular como sucesor de Branting y en 1928 había sido designado jefe del partido. Sin pretensiones y muy recto, había sabido mantener unido al partido y había colaborado con Ernst Wigforss para poner en vigor la política contra la crisis en 1932 y las medidas subsecuentes de reforma social. Era justamente el dirigente adecuado para los socialistas suecos, con sus programas de medidas avanzadas de reforma social, que representaban al gran núcleo de consumidores pobres y de clase media más que al proletariado con un sentido exclusivista o de lucha de clases.

El socialismo sueco, tal como existía en los treinta —y de hecho como existe hoy— es esencialmente reformista y no se inspira en sentimientos de antagonismos de clase. La estructura de la sociedad sueca conduce naturalmente a una alianza entre pequeños agricultores y trabajadores industriales y a una considerable comunidad de puntos de vista entre los trabajadores calificados y los niveles más bajos de las profesiones, que no están muy separados de aquéllos por los niveles de

vida. Se han producido, por supuesto, agudos conflictos laborales en Suecia, especialmente cuando la huelga general de 1908, en la cual el movimiento sindical estrechamente coordinado entró en conflicto con el organismo central patronal y sufrió una seria derrota. Pero desde entonces, excepto en raras ocasiones, sindicatos y patronos han aprendido a coexistir en términos favorables y a ajustar los salarios y las condiciones de trabajo mediante procesos estrechamente coordinados de negociación colectiva. La gran fuerza del movimiento cooperativista, con su neutralidad política y su preocupación general por los intereses de los consumidores, afecta considerablemente la política de los socialistas, ya que éstos no pueden permitirse un desacuerdo con las cooperativas que, en su mayoría, favorecen sus medidas de reforma social, pero no son entusiastas de la socialización. Los socialdemócratas constituyen teóricamente un partido marxista pero hay escasas señales de esto en su actitud respecto a los problemas económicos y no muestran ni deseos ni intenciones de proceder a atacar, en general, al capitalismo como sistema. Su actitud es, de hecho, el reflejo de una situación social real que la mayoría de ellos consideran insatisfactoria en sus rasgos generales, pero susceptible de ser modificada por reformas parciales. A principios de los veinte habían logrado el apoyo electoral de una tercera parte de la votación total en unas elecciones efectuadas bajo el sufragio universal, implantado en 1919, y en 1924 habían aumentado su participación en el total de los votos a un 40 %, permaneciendo en ese nivel o superándolo en lo sucesivo, con excepción de un retroceso transitorio en 1928, cuando bajaron a un 38 %. Pero sólo una vez, en 1940, han logrado una mayoría absoluta sobre todos los demás partidos para bajar nuevamente después a un 46 % en las sucesivas elecciones generales. A la izquierda del partido oficial ha habido siempre grupos disidentes; pero nunca han sido lo bastante grandes como para constituir una amenaza importante a su influencia. Si el socialismo no significara más que un Estado benefactor acompañado de un grado considerable de planificación económica, la socialdemocracia sueca podría considerarse un modelo de partido socialista y, en efecto, muchos así la consideran. No es fácil determinar de qué otra forma habría podido actuar, ventajosamente, que como lo ha hecho en lo esencial. El nivel de vida de la clase trabajadora sueca es uno de los más altos de Europa y, a falta de una clase realmente grande de gente muy rica, no hay el incentivo económico para efectuar cambios sociales radicales.

DINAMARCA

Dinamarca, donde la estructura social es también ampliamente democrática y el nivel de vida alto, compartió en su socialismo de los treinta

muchas características comunes con el de Suecia. Desde su formación en 1920 Dinamarca estuvo gobernada por una coalición de socialistas y liberales hasta la invasión alemana de 1940 cuando era Primer Ministro el socialista T. Stauning; y este gobierno siguió una política muy semejante de legislación de beneficio social. En Dinamarca, como en Suecia, después de la implantación del sufragio universal, los socialdemócratas atrajeron fácilmente más de la tercera parte del total de votos y en 1935 habían aumentado su participación al 46 %. No pudieron lograr, sin embargo, una mayoría absoluta sobre todos los demás partidos y permanecieron en coalición con los radicales que, en general, estaban de acuerdo con ellos en cuanto a la política social. Dinamarca se distinguía de Suecia en que el cooperativismo, aunque muy fuerte en ambas, era más poderoso en Dinamarca como movimiento campesino, aunque las cooperativas de consumo estaban también muy arraigadas, especialmente en las ciudades. Se parecía, por otra parte, a Suecia en su alto nivel de vida y tenía una más fuerte tradición radical en el campo, de modo que la alianza entre socialdemócratas y radicales correspondía a una comunidad real de sentimientos e intereses. Los socialistas daneses, como los suecos, formaban teóricamente un partido marxista; pero en la práctica eran muy poco influidos por las teorías marxistas que habían adoptado. De ideas fuertemente pacifistas habían llegado al extremo en el desarme unilateral en los treinta; y, cuando Hitler violó el pacto de neutralidad que había firmado con Dinamarca el año anterior e invadió su territorio en 1940 no estaban en situación de resistir y dejaron que los alemanes ocuparan Dinamarca sin pelear. Pero antes de ser invadidos habían realizado un extenso programa de reforma social. La medida más importante fue la Ley de coordinación del seguro social presentada por el Ministro socialista de Asuntos Sociales, K. K. Steincke, en 1933. Esta ley unificó las anteriores bajo el control de una oficina pública en cada región y extendió considerablemente el campo de la intervención estatal. Se promulgaron después otras leyes, incluyendo una que establecía las vacaciones pagadas, puesta en vigor en 1938. Se dieron pasos hacia el mejoramiento de las relaciones laborales, a través de la negociación colectiva conciliatoria. El sistema de conciliación por el Estado en las disputas laborales, iniciado originalmente en 1910, se extendió en 1934 y ha tenido mucho éxito en la evitación de paros cuando expiran los contratos colectivos y hay necesidad de renovarlos.

En países como Dinamarca y Suecia, aunque no hay mucho campo para partidos verdaderamente reaccionarios, y los partidos de la izquierda tienen casi segura una mayoría combinada mientras actúen unidos, se ha hecho evidente la dificultad para los socialistas, por mucho que

adapten su política para lograr un gran apoyo popular, de lograr una mayoría absoluta de todos los votantes en apoyo al Partido Socialista. Suecia la logró sólo una vez, en 1940, para perderla luego aunque no por mucho margen; pero parece como si el socialismo democrático constitucional pueda llegar fácilmente a una proporción de fuerza electoral que dificulte o inclusive haga imposible la constitución de un gobierno estable sobre la base de una coalición antisocialista, pero incapace también al Partido Socialista para gobernar sin el apoyo de un partido burgués cuando menos, como el Agrario en Suecia o el Radical en Dinamarca. Esto se debe menos, en mi opinión, a que los votantes marginales hagan objeciones a los programas socialistas o lo intenten hacer en el futuro inmediato que al hecho de que existe una reserva a la identificación con los objetivos socialistas a largo plazo y a la asociación con el nombre mismo de socialismo. Los agricultores en especial no son fácilmente atraídos a un partido socialista aunque éste manifieste su intención de respetar la propiedad privada de la tierra y de proteger a la agricultura contra los peligros de la fluctuación de los precios mundiales. Los grandes agricultores, sin duda, se oponen generalmente a la política socialista y a los objetivos socialistas más remotos; pero inclusive los pequeños agricultores, que favorecen la legislación social, no son atraídos fácilmente al campo socialista aunque los partidos controlados por ellos estén dispuestos a aliarse a los socialistas contra los partidos reaccionarios. Así surge en estos países —donde el proletariado industrial y los pequeños agricultores son fuertes pero ni unos ni otros lo suficiente como para gobernar por sí solos— el tipo de política democrática que se concentra en la consolidación del "Estado benefactor" y en la aplicación del impuesto progresivo como medio de redistribución de los ingresos y de evitar grandes diferencias de riqueza, excluyendo todo intento de suprimir la empresa privada dedicada a obtener utilidades o de nacionalizar la propiedad de industrias y servicios excepto cuando parece recomendable la nacionalización u otra forma de control estatal —por ejemplo, mediante la empresa cooperativa— por defectos especiales de un monopolio o por ineficacia o porque surja naturalmente como consecuencia de la planificación estatal para la evitación del desempleo. Pero inclusive la ampliación de la propiedad nacionalizada apoyada en estas razones puede posponerse o no efectuarse si se considera que puede acarrear la pérdida del apoyo marginal. A medida que estos Estados se convierten en "Estados benefactores", con amplia prestación de servicios sociales por el Estado, resulta más difícil para sus partidos socialistas elaborar más avanzados programas de reforma sobre estas líneas. La misma dificultad puede presentarse, de hecho, a otros "Estados benefactores" cuando se han

puesto en práctica las reformas sociales de mayor alcance y más espectaculares; pero tiende a surgir antes, allí donde los límites de la acción factible son fijados por la necesidad de acción conjunta de trabajadores industriales y agricultores.

NORUEGA

Noruega tiene, en muchos aspectos, una historia del movimiento laborista muy distinta que la de Suecia o Dinamarca. En el volumen anterior vimos cómo, bajo la influencia de Martin Tranmael, el Partido Laborista noruego entró primero en la Tercera Internacional en 1919 y después se separó rápidamente por no querer aceptar las órdenes de acción de Moscú. Ni Tranmael ni la mayoría de sus partidarios fueron nunca comunistas, tal como se entendía el término en Moscú. Cuando participaron en el Comintern, este organismo apelaba al apoyo no sólo de los comunistas, sino también, explícitamente, de los sindicalistas industriales y los izquierdistas de todo tipo, en la esperanza de que, si se podía lograr que entraran al Comintern, aceptarían la dirección que los comunistas querían imponer a todos. Vimos que la afiliación a Moscú produjo una división y la formación por los críticos de un Partido Social-Demócrata independiente de derecha, que se unió nuevamente a la mayoría después de roto el vínculo con Moscú. A la inversa, el rompimiento del vínculo condujo a la formación de un Partido Comunista minoritario, directamente afiliado al Comintern, pero sin muchos miembros. En estas circunstancias, el Partido Laborista noruego permaneció al margen de la nueva Segunda Internacional y su sucesora, la Internacional Laborista y Socialista. Los socialdemócratas disidentes se adhirieron a esta última; pero la afiliación terminó cuando se unieron nuevamente al Partido Laborista noruego en 1927; y el organismo unificado se mantuvo fuera de la Internacional Laborista y Socialista hasta 1938, cuando finalmente se afilió. En 1927 el partido unificado logró cerca del 37 % de los votos emitidos en las elecciones generales y volvió a ser el partido mayor en el Parlamento, pero todavía sin una mayoría absoluta. Llamado a formar un gobierno presidido por su dirigente Christian Hornsrud, aceptó, pero en lugar de tratar de encontrar la base de una mayoría en la transacción manifestaron su intención de poner en práctica de inmediato un programa plenamente socialista y se vieron obligados a renunciar a los pocos días por la ola de oposición que levantó su declaración. A pesar de esto y del pequeño retroceso que sufrieron en las elecciones generales de 1930, cuando los votos socialistas bajaron al 31 %, se recuperaron en 1933, en el climax de la depresión mundial, con un 40 % de votos como partido mayor y aceptaron nuevamente formar gobierno, esta vez presidido por un nuevo

líder, Johan Nygaardsvold, que estaba todavía en el poder cuando los alemanes invadieron Noruega en 1940 y fue entonces Primer Ministro en un gobierno de coalición que abandonó el país y se estableció en Londres, hasta que pudo regresar en 1945. Nygaardsvold abandonó entonces el gobierno y fue sucedido en el cargo de Primer Ministro por el antiguo secretario del Partido Laborista, Einar Gerhardsen, que había vuelto de un campo de concentración alemán después de la derrota de los nazis.

Antes de subir al poder Nygaardsvold en 1934, el Partido Laborista noruego había elaborado un programa especial para la crisis, cuyo primer punto era el mantenimiento de la ocupación plena. Cuando el gobierno laborista subió al poder, lo peor de la crisis mundial había pasado y era más fácil encontrar recursos para un programa ambicioso de legislación social. Ésta siguió las mismas líneas que en Suecia y Dinamarca, pero con una mayor parte de la administración en manos de organismos locales y mayor diferencia de un lugar a otro. El gobierno, sin una mayoría independiente, dependía del apoyo de uno o más de los partidos burgueses y, de hecho, fue apoyado en todo el periodo que se prolongó hasta 1940 por los agraristas, partido de los agricultores grandes y medianos o por los liberales, que tenían buenos antecedentes en el terreno de la legislación social o por ambos, quedando sólo los conservadores en una oposición permanente.

En los años veinte, Noruega había sido fuente de continuos conflictos laborales, con muchas huelgas que las asociaciones patronales y los sindicatos pelearon duramente. Pero en 1934 esta querella constante llegó a su fin con la concertación de un acuerdo general entre ambas partes, que establecía la negociación colectiva regular y la solución pacífica de las diferencias; y este acuerdo funcionó normalmente en los años siguientes, produciendo un cambio considerable en las actitudes de ambas partes y facilitando mucho la labor del gobierno laborista en el campo de la legislación social. Noruega se tranquilizó, en efecto, tanto como Suecia y Dinamarca; las teorías de izquierda que habían influido tanto en los veinte perdieron terreno gradualmente, aunque Tranmael siguió activo como periodista y propagandista y conservó mucho de su influencia.

FINLANDIA

En los treinta Finlandia no compartió, en absoluto, la calma de estos tres Estados escandinavos. Después de la renuncia del gobierno socialdemócrata minoritario de Tanner en 1927 surgió el formidable movimiento de Lapps, o lapuano, dirigido específicamente contra el marxismo y adicto a métodos de violencia que en ciertos momentos recordaron

los terribles días de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil el Partido Comunista finlandés había quedado proscrito, aunque sus miembros trataron de actuar a través de partidos legales en oposición a los socialdemócratas e infiltrarse en los sindicatos, que lograron en gran medida colocar bajo control comunista. El gobierno de Tanner había sido afortunado en la liberación de los que estaban todavía detenidos por delitos cometidos durante la Guerra Civil, pero no había podido promulgar un cuerpo considerable de leyes sociales. El gabinete antisocialista que lo sustituyó no mostró ningún interés en suprimir a los lapuanos ni en limitar sus excesos; y las cosas fueron de mal en peor hasta que, en 1932, a un intento de golpe de Estado lapuano siguió la supresión legal del movimiento. En los años de la depresión mundial hubo duras luchas laborales. El viejo movimiento sindical, que había quedado controlado por los comunistas, fue desintegrado y una nueva Federación Sindical, fundada en 1930, se fortaleció gradualmente en los años siguientes. Los socialdemócratas, que habían perdido cierto terreno ganado por los comunistas, tuvieron éxito en las elecciones generales de 1933, obteniendo 12 asientos y aumentando el total de su representación parlamentaria a 78; y también prosperaron en las siguientes elecciones de 1936. Después de las elecciones presidenciales de 1937 entraron, con los agraristas, en un gabinete de coalición presidido por A. K. Cojander. Este gobierno estaba en el poder en 1939, cuando estalló la guerra europea. Los finlandeses, que habían entrado en 1932 en un Pacto de No Agresión por doce años con la Unión Soviética, se declararon neutrales; pero la Unión Soviética les exigió concesiones territoriales con el objeto, principalmente, de proteger a Leningrado contra un ataque alemán y, al negarse los finlandeses a ceder, invadieron Finlandia con fuerzas que pronto se revelaron superiores. Los aliados occidentales, para ayudar a Finlandia, trataron de influir en los suecos para que permitieran a las fuerzas aliadas atravesar Suecia para dirigirse a Finlandia; pero los suecos, decididos a mantenerse al margen de la guerra, negaron el permiso y los aliados no pudieron aportar una ayuda efectiva. Los finlandeses, por tanto, tuvieron que aceptar la derrota y la guerra terminó a principios de 1940 con la cesión por Finlandia de las regiones de Carelia reclamadas por los rusos y de Viborg y Hango. Durante la guerra los rusos reconocieron y trataron de imponer un gobierno títere comunista, presidido por el viejo dirigente comunista Otto Kuusinen; pero este intento fue abandonado una vez restablecida la paz. Los finlandeses, por su parte, resentidos contra los rusos y sin contactos efectivos con Occidente, se vieron fuertemente presionados a llegar a un acuerdo con la Alemania nazi y, en 1941, permitieron a los alemanes utilizar su territorio

como base para el ataque a la Unión Soviética. Las fuerzas finlandesas pudieron recuperar todo el territorio cedido en 1940 y penetrar considerablemente en territorio soviético. Los alemanes trataron de inducir al mariscal Mannerheim, que había asumido la jefatura de la nación, a avanzar sobre Leningrado; pero éste se negó y mantuvo a sus tropas cerca de la antigua frontera anterior a 1939. Cuando la guerra empezó a resultar negativa para los alemanes, las fuerzas rusas avanzaron nuevamente y recuperaron Viborg, viéndose obligados los finlandeses a solicitar un nuevo armisticio, que se concertó en 1944. Según este armisticio, Finlandia cedía nuevamente el territorio objeto de disputa en Carelia, Viborg y Porkkala (en vez de Hango) y aceptaba pagar fuertes reparaciones, que equivalían a cerca del 10 % del ingreso nacional, por un periodo de seis años. Después de la guerra los socialistas cayeron de nuevo en serias disensiones y su dirigente, Vaino Tanner, fue depuesto por algún tiempo acusado de ser "responsable de la guerra" y de haberse colocado al lado de los alemanes contra la Unión Soviética. Conservó su puesto en la dirección del movimiento cooperativo y después fue llamado nuevamente al poder por los socialdemócratas, que mantuvieron una actitud de fuerte hostilidad a los comunistas y sus partidarios. Estas disputas, sin embargo, se salen de los límites de esta historia, que debe detenerse en el momento del estallido de la guerra, en 1939.

ISLANDIA

Finalmente, en Islandia el Partido Social-Demócrata se formó en 1916 y ha estado representado en el Althing (Parlamento) desde 1921. Fue dirigido por Jan Baldinsson hasta su muerte en 1928 y después por Stefán Jóhr Stefansson hasta 1952 y, hasta 1940, fue presidido por un Ejecutivo conjunto con los sindicatos, que en ese año crearon su propia central. En 1930 un sector se separó para formar un Partido Comunista, que no atrajo mucho apoyo; pero en 1938 hubo una división mucho más seria, en el curso de la cual el ala izquierda, incluyendo a muchos dirigentes sindicales, se unieron a los comunistas para formar el Partido Socialista Unificado del Pueblo, como representante del Frente Unido Antifascista. Este nuevo partido formó la única oposición cuando, en 1939, los socialdemócratas entraron en una coalición con los conservadores y progresistas al estallar la guerra. En las elecciones generales de 1942, el Partido Socialista Unificado del Pueblo obtuvo más votos que los socialdemócratas y eligió 10 miembros para el Althing de un total de 52; pero en las elecciones de 1946 los dos partidos socialistas quedaron casi iguales, obteniendo los socialdemócratas 9 miembros y el Partido Unificado 10. En 1934, antes de la divi-

sión, los socialdemócratas habían obtenido más del 20 % de los votos emitidos mientras que en 1942 apenas alcanzaron poco más del 14%, llegando a cerca del 18 % en 1946 para descender después a un 16 %. Los dos partidos socialistas reunían, así, entre ambos cerca de la tercera parte del total de votos a principios de los treintas. Ambos se declaraban marxistas pero uno interpretaba el marxismo en términos de socialdemocracia y el otro, en la situación inmediata, en términos de lucha unificada contra el fascismo bajo la dirección proletaria.

CAPÍTULO VIII

BÉLGICA, HOLANDA Y SUIZA

Bélgica es uno de los países de la Europa occidental donde los socialistas estuvieron, en los treintas, en posición de ser el mayor partido en el Parlamento, pero sin obtener la mayoría absoluta, de modo que sólo podían formar gobierno en alianza con los social-cristianos o los liberales y no podían constituir una oposición poderosa cuando estos dos partidos se unían en su contra. En la práctica, el Partido Laborista belga alternó entre la oposición y la participación en gobiernos de Unión Nacional. En los veintes, de 1925 a 1929, constituyeron el mayor partido y participaron en un gobierno de Unión Nacional con los socialcristianos y después con otros grupos, pero en las elecciones de 1929 perdieron terreno y volvieron a la oposición. La crisis mundial afectó duramente a Bélgica y condujo a otro gobierno de Unión Nacional en el cual Vandervelde, De Man, Spaak y Arthur Wauters participaron. En total hubo entre 1919 y 1940 no menos de 19 gabinetes belgas, 9 de los cuales representaron a todos los partidos, 7 fueron católicos y liberales y 2 católicos y socialistas. Los liberales, que siempre constituyeron el más débil de los tres partidos, eran profundamente antisocialistas, mientras que los católicos incluían un ala izquierda, basada principalmente en los sindicatos cristianos, que simpatizaba con muchos aspectos del programa laborista, originalmente adoptado en el Congreso de 1894 y reafirmado por el Congreso de 1923.

En 1938, cuando murió Vandervelde, después de dirigir por mucho tiempo el Partido Laborista, lo sucedió como presidente del Partido Henri de Man que, a principios de los treintas, había presentado su *Plan du Travail*, que fue adoptado por el Partido Laborista y por el Congreso de Sindicatos. En este *Plan*, De Man partía de un intento de revisar la doctrina predominantemente marxista del Partido, planteando un proyecto para la realización inmediata de una economía mixta de socialismo y capitalismo —cubriendo el primero el crédito y la banca, los servicios públicos y las industrias monopolistas y el segundo otras industrias, que deberían quedar bajo propiedad privada, pero con un control y coordinación estatales planificados. De Man destacaba el hecho de que, dadas las condiciones modernas, el proletariado propiamente dicho no podía comprender una mayoría de la población total: había que apelar, por tanto, al apoyo no sólo del proletariado, sino también de otros sectores que podían agruparse contra los financieros

y monopolistas que dominaban el panorama dentro de las condiciones existentes. En *Plan du Travail*, que era esencialmente un documento tendiente a combatir la crisis y a encauzar la recuperación de la depresión existente, despertó considerable interés fuera y dentro de Bélgica. Planteado y adoptado originalmente por el Partido Laborista belga en 1933, fue el tema principal de una Conferencia Internacional celebrada en Pontigny, Francia, al año siguiente y fue traducido al inglés y publicado por la Sociedad Fabiana en 1935. Era, todavía en 1940, el programa inmediato del Partido Laborista belga y había constituido la base, en los años intermedios, de un intento de este partido de llegar a un acuerdo con el ala izquierda del partido católico, dirigida por Van Zeeland, aunque en 1936 una huelga general convocada por el Partido y los sindicatos obligó al gobierno a promulgar una ley que establecía la semana de cuarenta horas. Pero cuando los alemanes invadieron Bélgica en 1940 De Man, creyendo que aquéllos habían ganado la guerra, disolvió el partido y permaneció en Bélgica como consejero del rey bajo la ocupación nazi, perdiendo por ello su influencia sobre los socialistas belgas, cuyos líderes huyeron en su mayoría a Inglaterra durante la guerra para regresar después y reconstruir el partido, como Partido Socialista belga, en 1945, readoptando la Declaración de Principios de 1894, sin ningún cambio. Los belgas volvieron así a su vieja política de plena independencia respecto a los demás partidos y estuvieron nuevamente en posición de obtener una mayoría, pero no absoluta, del electorado reanudando el conflicto con el Partido Social-Cristiano por el predominio, mientras los liberales conservaban su posición como tercer partido, que sostenía el equilibrio del poder.

A fines de los treintas, esta distribución de los tres partidos había sido rota en cierta medida por el surgimiento de los rexistas dirigidos por Degrelle y de un Movimiento Nacional Flamenco. Ambas agrupaciones adoptaron una orientación fascista y colaboraron con los alemanes en los años de ocupación de 1940 a 1944. Perdieron así a la mayoría de sus partidarios y en la etapa de posguerra carecieron de importancia. Los comunistas, que habían sido relativamente poco importantes en los treintas, lograron elegir 23 miembros (ganando 14 asientos) en las elecciones generales de 1946, que dieron a los católicos 92 diputaciones, 69 a los socialistas y 16 a los liberales en comparación con las cifras de 1919 que fueron de 73 católicos, 70 socialistas y 34 liberales. En los treintas Bélgica se mantuvo a la zaga de otros países —especialmente los escandinavos— en la prestación de servicios sociales y en los niveles de vida; pero después de la guerra mejoró mucho. Las mujeres no votaron hasta las elecciones de 1949 cuando, como consecuencia, la votación socialista bajó a menos del 30 % del total,

sólo para recuperarse a más del 35 % al año siguiente. En 1954 se acercaba al 39 % y, en 1958, bajó a poco más del 37 %.

El *Plan du Travail* de De Man, se esté o no de acuerdo con él, fue indudablemente una importante contribución al replanteamiento de la doctrina socialista en los treintas. Redactado bajo la influencia de la gran depresión y dentro del espíritu de la democracia parlamentaria, fue un intento de encontrar una salida a la crisis económica y de lograr la ocupación de los desempleados oponiéndose a la política negativa de deflación y poniendo a financieros y monopolistas frente a la mayoría de las clases medias, incluso los pequeños patronos, para que éstos se unieran a los socialistas en una campaña común contra los grandes capitalistas. Sobre la base de esta alianza, la estructura de la banca y el crédito debía colocarse bajo la propiedad y el control del Estado, que se extendería también a las industrias y servicios controlados por monopolios capitalistas. En otras industrias se respetaría la propiedad privada y serían administradas por sus propietarios, sometidas al control y coordinación auspiciados por el Estado que fueran necesarios, en interés público, en cada caso particular. De Man, que era muy inteligente, con amplia experiencia adquirida en los Estados Unidos y Alemania, así como en Bélgica, no creía en el próximo colapso del capitalismo ni en una próxima revolución proletaria; tampoco creía que, con el sufragio universal, el proletariado pudiera esperar en llegar a constituir pronto una mayoría del electorado en general, para implantar el socialismo por medios pacíficos. Creía, por otra parte, que la crisis económica mundial podía ser resuelta con éxito si se empleaban los métodos correctos, en cada país, y que para este fin era indispensable para los socialistas encontrar aliados. Pensaba que en Bélgica estos aliados podrían lograrse atrayendo al ala izquierda del partido católico, que incluía a muchos católicos sindicalistas, a una coalición con los socialistas; pero le parecía que esto sólo podría realizarse si los socialistas aceptaban que las industrias y empresas menores quedaran en manos privadas, sujetas a control sólo en la medida necesaria para establecer una planificación coordinada y teniendo en cuenta la dependencia de todas las empresas en un sistema crediticio plenamente socializado. El *Plan* destacaba el papel clave del crédito en la economía nacional y la necesidad de una política de crédito expansionista que sólo el Estado podía suministrar. Aun en el caso de industrias y servicios que fueran nacionalizados, subrayaba la importancia de evitar métodos burocráticos de control y proponía, por tanto, que los servicios públicos se entregaran a corporaciones en gran medida autónomas, que los administrarían en nombre de la comunidad en general. Todo el énfasis del *Plan* se concentraba en la importancia del control por encima de la propiedad y se conside-

raba que el cumplimiento de la mayoría de las empresas con los requisitos fijados por el Estado se aseguraría mediante el control, aun sin nacionalización.

De Man no logró su objetivo principal de obtener amplio apoyo de la clase media para el Partido Laborista belga ni de dividir o ganar al partido católico o su sector sindical. En efecto, en los años inmediatos de la década de los treinta la perspectiva de una mayoría socialista independiente disminuyó más aún ante el surgimiento de los movimientos nacionalistas rexista y flamenco, aunque éstos constituirían más bien una amenaza a los católicos que a los socialistas. Mientras tanto, en lo internacional, el *Plan du Travail* ejerció una influencia importante en otros países similarmente afectados por la depresión económica y con pocas o ninguna perspectiva de lograr una mayoría socialista. Esto se aplicaba especialmente a los Partidos Socialistas holandés y suizo, que elaboraron sus planes o programas contra la crisis copiados en general del de De Man, menos explícitos en su aceptación de una economía mixta como la mayor esperanza de recuperación económica. En Francia, las ideas de De Man atrajeron especialmente a los neo-socialistas que se agruparon en torno a Déat, Marquet y Renaudel y después se separaron del Partido Socialista como grupo desviacionista de derecha, pero no consiguieron arrastrar sino a un pequeño grupo de sus miembros, la mayoría de los cuales prefirieron buscar un Frente Unido con los comunistas y se adhirieron llegado el momento a *l'expérience Blum*. De Man nunca fue nazi pero, como hemos visto, se dejó comprometer tanto, en 1940, en la creencia de que los nazis habían ganado la guerra, con los invasores de su país y se alejó tanto de sus antiguos compañeros de partido que perdió toda su influencia y no pudo regresar a su país una vez que éste fue liberado. En sus escritos posteriores, después de la guerra, intentó exonerarse de la acusación de colaboracionismo y escribió algunas cosas interesantes sobre la amenaza a la civilización representada por el desarrollo de la producción en masa y la subordinación de la personalidad que suponía. Pero estos trabajos últimos recibieron poca atención, por el descrédito personal en que había caído durante la guerra. Todavía permanecía en el exilio, en Suiza, cuando pereció en un accidente automovilístico en 1953.

HOLANDA

En Holanda, el Partido Social-Demócrata hizo pocos progresos en los treinta, cuando sólo recibía menos de la cuarta parte de la votación total en las elecciones generales. Después de la ocupación alemana se reconstituyó uniéndose a diversos grupos como el Partido Laborista holandés en un intento de abarcar a los distintos sectores de la opinión

progresista y logró 29 diputaciones en las elecciones de posguerra. Ya en los treinta había modificado considerablemente su política en un intento de lograr el apoyo de elementos no proletarios y de buscar una salida a la crisis económica; pero ante la oposición católica y protestante, no logró abrirse paso. La división por razones religiosas se extiende a los sindicatos además del partido, ya que existen movimientos sindicales católicos y protestantes. Se intentó unirlos después de la Liberación de 1944-45; pero no se logró, aunque se llegó a acuerdos de cooperación entre éstos y los sindicatos socialistas e independientes que duraron hasta 1954, cuando los católicos les pusieron fin.

El socialismo holandés, como ya vimos,¹ ha sido siempre un movimiento muy moderado. Se han producido varias escisiones del partido original por parte de la izquierda, incluyendo la de Edo Fimmen en 1932 —que se vio obligado después a abandonar este grupo para conservar su posición en el movimiento sindical como líder de la poderosa Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Pero estas secesiones de la izquierda han tenido poco efecto sobre el núcleo principal del partido que, después de la muerte de Troelstra en 1930, siguió un camino sin ambiciones y en general poco afortunado, atendiendo más a las cuestiones inmediatas de reforma social que a las cuestiones de principios socialistas, pero sin poder ejercer —por su situación minoritaria— una gran influencia siquiera en el terreno que había escogido. Los sindicatos socialistas constituyeron sin duda, en los treinta, la mayor de las cuatro facciones en las que se dividía el sindicalismo holandés; pero no representaban una mayoría absoluta de los trabajadores organizados y ni ellos ni el Partido Social-Demócrata estaban en posición de hablar con seguridad en nombre de una clase obrera unificada.

SUIZA

Ya vimos, en el volumen anterior,² cómo los socialistas suizos, después de decidir adherirse al Comintern y de una revisión de su programa para incorporar referencias aprobatorias al sistema soviético y la dictadura del proletariado, cambiaron de línea y volvieron a adherirse al socialismo democrático, después de un rompimiento por el cual su ala izquierda disidente se separó para entrar al Partido Comunista suizo, que nunca tuvo el apoyo de más de un pequeño y cada vez más mermado sector de la clase obrera suiza. El Partido Social-Demócrata controlaba en los treinta menos del 30 % del total de votos emitidos en sucesivas elecciones generales. En 1935, muy afectado

¹ Véase vol. VI, pp. 59 ss.

² *Ibidem*, pp. 56 ss.

por la elevación del nazismo en Alemania, revisó drásticamente su programa, manifestando su apoyo a la defensa nacional y los créditos necesarios para este fin y suprimiendo las partes de su programa referentes al sistema soviético y la dictadura. Limitó además sus ambiciones inmediatas a la implantación de una economía planificada y la nacionalización de las industrias controladas por monopolios capitalistas, manifestándose favorable a un programa avanzado de seguridad social. En 1943 revisó una vez más su programa y contribuyó con un Primer Ministro socialista al gobierno nacional que permaneció en el cargo hasta 1953, cuando salió en señal de protesta contra las tendencias reaccionarias del gobierno. En 1955 obtuvo el 28 % de los votos y solicitó que se otorgaran dos ministerios en el gobierno nacional, pero al rechazar su demanda los partidos burgueses, decidió permanecer en la oposición.

Durante la depresión de los treinta los socialistas suizos fueron de los partidos que formularon programas especiales para combatir la crisis, demandando un esfuerzo nacional para combatir el desempleo e introducir una economía planificada. Aunque la línea del Partido Socialista suizo era vehementemente antifascista, rechazó todas las insinuaciones para formar un frente común contra el fascismo con los comunistas, prefiriendo aliarse con grupos antifascistas más de derecha, como los Jóvenes Campesinos y las organizaciones de burócratas. Después de participar en la Unión de Viena, se afilió a la Internacional Laborista y Socialista en 1923.

ANÁLISIS GENERAL

Estos tres partidos socialistas tienen, pues, historias diferentes pero con resultados muy semejantes ya que los tres acabaron por romper con sus izquierdas que, en su mayoría, se afiliaron entonces al Partido Comunista —muchos de ellos sólo para separarse más tarde. Los tres elaboraron programas de emergencia cuando la crisis económica mundial e intentaron, con ello, apelar a otros grupos sociales además del proletariado. En el caso de Suiza el Plan Socialista fue sometido después a un referéndum, pero sólo el 43% de los votantes estuvieron a su favor. En ningún caso lograron con estos planes los partidos socialistas las mayorías que deseaban ni siquiera consiguieron minar seriamente el apoyo que reunían sus rivales burgueses. Los tres resurgieron temporalmente con mayor fuerza de la prueba de la segunda Guerra Mundial, durante la cual dos de estos países fueron ocupados por los fascistas. Pero se reveló cierta tendencia a retroceder después a una posición en la cual, aunque siguieran siendo los partidos más fuertes individualmente en sus respectivos países, había pocas posibilidades de que se convirtieran en mayorías absolutas o pudieran formar

gobiernos, independientemente del apoyo de otros partidos. Pudieron indudablemente, dentro de esta situación, lograr avances sustanciales en el terreno de la legislación social y un mayor reconocimiento de los derechos de negociación colectiva, pero no intentar una reconstrucción de gran alcance del sistema económico-social. Aun en cuanto al Estado benefactor permanecieron muy a la zaga de los logros realizados por los socialistas escandinavos, lo mismo que respecto a la proporción de votos que lograron atraer en su apoyo. Esto se debió principalmente, en dos de los casos, a la fuerza sostenida de los partidos con base religiosa, especialmente los católicos y en el tercero —el de Suiza— al mayor tamaño y solidaridad de la clase media y a la fuerza de los católicos que, en 1943, eligieron 43 miembros para el Parlamento Federal, mientras los radicaldemócratas obtenían 47 y los socialdemócratas 56, constituyendo así el partido mayor, pero todavía lejos de alcanzar una mayoría.

CAPÍTULO IX

LA EUROPA ORIENTAL

En la Europa oriental el periodo de los treinta fue de lucha clandestina y creciente represión. Uno tras otro, estos países implantaron dictaduras auspiciadas por los reaccionarios; y los restos del movimiento socialista tuvieron que refugiarse en la clandestinidad. En general, estas condiciones favorecían a la izquierda y especialmente a los comunistas, que actuaban mucho mejor clandestinamente que los socialdemócratas, quienes en su mayoría aceptaron una tolerancia muy limitada otorgada por los regímenes reaccionarios o se trasladaron al extranjero y perdieron todo apoyo en sus países. De todos los países de la Europa oriental, sólo Checoslovaquia escapó de la dictadura derechista hasta 1938, sólo para ser invadida entonces por los nazis y ver cómo sus instituciones democráticas eran destruidas. En otros lugares se establecieron en diversas fechas condiciones dictatoriales más o menos absolutas, cuando no existían ya con anterioridad. Algunas de estas dictaduras presentaron cada vez más un carácter fascista, principalmente bajo la influencia alemana, fundadas en movimientos de masas de nacionalismo y antisemitismo reaccionarios mientras que, en otros casos, nunca fueron realmente fascistas, sino que dependían de una alianza entre la vieja aristocracia y la clase capitalista en ascenso, como en Hungría y, en gran medida, en Polonia.

Los países de la Europa oriental eran todavía, en los treinta, predominantemente agrarios, pero pueden dividirse en dos grupos: aquellos en donde la propiedad de la tierra estaba ampliamente distribuida entre pequeños agricultores y otros en donde las grandes propiedades rurales permanecían todavía en su mayoría indivisas en manos de los grandes terratenientes. En los Balcanes predominaban las pequeñas propiedades rurales, como en Bulgaria y Serbia, o se habían establecido después de 1918, como en Rumania. En Hungría y Polonia, por otra parte, los grandes dominios rurales prevalecían todavía, ya que la distribución de la tierra se había paralizado por completo —como en Hungría— o se hacía a paso de tortuga como en Polonia. En Bulgaria los intereses agraristas, organizados en plan de masas por Stambolisky, habían sido aplastados en las luchas de 1923 y no pudieron levantar cabeza efectivamente aunque permanecieron como movimiento de masas en la clandestinidad.

Las economías de la Europa oriental fueron muy afectadas por la depresión mundial, que repercutió seriamente sobre los precios de los

productos agrícolas y afectó a las industrias de altos costos que estaban en proceso de establecerse. Los gobiernos reaccionarios hicieron poco por ayudar a los campesinos pobres en su desgracia e incluso los movimientos de cooperativas, que no hicieron mucho por alentar, beneficiaban principalmente a los campesinos ricos. En general, la productividad agrícola no avanzó ante la absoluta incapacidad de la mayoría de los campesinos para aplicar métodos mejores e incluso resultó perjudicada, hasta cierto punto, cuando se dividieron las grandes propiedades rurales. Los países balcánicos sufrían especialmente una grave superpoblación rural en relación con sus niveles de eficacia productiva, aunque su población era pequeña en comparación con la Europa occidental. La producción de trigo por hectárea cultivada equivalía a poco más de la tercera parte de la de Dinamarca y había muchos más habitantes en el campo de los que podían emplearse regularmente. La industria, aunque se había desarrollado muy rápidamente hasta la depresión, no constituía una fuente de ocupación suficiente como para aliviar sustancialmente la superpoblación de las regiones rurales. Además, los pequeños agricultores y trabajadores rurales sin tierras estaban en su mayoría desorganizados, y a los sindicatos y partidos socialistas, cuando se permitía su existencia no clandestina, se les impedía firmemente organizarse o afiliar miembros en las aldeas y sólo existían en las ciudades, sin mucho apoyo, y en algunos casos nulo, salvo entre los artesanos sobre los cuales ejercían una influencia no fácilmente suprimible. Los partidos campesinos, que en los años veinte mostraron tendencias claramente burocráticas, habían sido desplazados o se habían vuelto cada vez más reaccionarios a medida que su dirección sufrió infiltraciones de otras clases. Casi todos habían sido dirigidos desde un principio por intelectuales más que por verdaderos campesinos y, a medida que estos países cayeron bajo gobiernos dictatoriales, su realidad como movimientos campesinos fue cada vez más mermada. En los treinta, en la Europa oriental en conjunto, más de las dos terceras partes de los campesinos eran pequeños propietarios cuyas parcelas no les bastaban para mantener a sus familias de modo que algunos de sus miembros tenían que buscar empleo en las fincas mayores o en las ciudades. Esta situación habría podido remediarse sólo con medidas a largo plazo de educación técnica, crédito rural abierto a los campesinos pobres, construcción de caminos y ferrocarriles e industrialización planificada. Pero los gobiernos en el poder no se inclinaban a poner en práctica tales medidas; y, en todo caso, las condiciones para la industrialización eran muy desfavorables en los treinta debido a la desaparición de la inversión extranjera y a que los capitalistas nacionales no querían incurrir en los riesgos de invertir para los pequeños mercados internos que constituían la población de escasos recursos. En vez de intentar el estímulo del des-

arrollo agrícola o industrial, los gobiernos recurrían a más y más medidas represivas, considerando toda demanda de reforma rural o industrial como una forma de bolchevismo y persiguiendo inclusive a las sociedades cooperativas que intentaban proveer a las necesidades de los campesinos pobres.

En Checoslovaquia, el más altamente industrializado de los países de la Europa oriental, donde menos de la mitad de la población total dependía directamente de la tierra para vivir, el gobierno parlamentario se sostuvo hasta que los alemanes destruyeron el Estado checoslovaco en 1938-39. Pero en los treinta la clase obrera se mantuvo muy dividida en dos facciones, la comunista y la socialdemócrata, que nunca llegaron a ser lo bastante fuertes como para asumir el gobierno después de la escisión en 1920. El Partido Agrario solo o en coalición permaneció, pues, a la cabeza del gobierno en todo este periodo. Los socialdemócratas habían sido duramente derrotados por los comunistas inmediatamente después de la escisión, pero después habían recuperado cierta fuerza, aunque nunca suficiente para ejercer su influencia anterior. El Partido Agrario checo era en un principio un partido de agricultores relativamente acomodados; pero en los treinta se convirtió en el partido de la clase capitalista checa, sustituyendo al Partido Nacional-Democrático de Kramář, demasiado conservador en las cuestiones sociales. Los socialistas checos mientras tanto, alternaban la participación en gabinetes predominantemente agraristas y la oposición al gobierno, pero no estaban en posición de influir sobre la política nacional en gran medida ante la división de las fuerzas obreras en partidos rivales. En la parte eslovaca del Estado checoslovaco los campesinos eran mucho más pobres y más atrasados que en Bohemia y Moravia y recibían mucho más la influencia de la Iglesia Católica. En general apoyaban al Partido Popular eslovaco dirigido por un sacerdote, el padre Hlinka, que tendía fuertemente hacia el fascismo. Mientras tanto los comunistas checoslovacos, tras un periodo de agudos conflictos internos y repetidas disensiones con el Comintern en los veinte, se plegaron a la dirección del Comintern, pero nunca llegaron a ser lo bastante fuertes para constituir una amenaza efectiva al predominio de los agraristas en el país. Fueron, por supuesto, liquidados temporalmente cuando los nazis controlaron el país en 1938-39; pero los dirigentes se refugiaron en Rusia, de donde regresaron con las fuerzas rusas al terminar la segunda Guerra Mundial. Habían estado acompañados en el exilio por muchos dirigentes socialdemócratas, incluyendo a Zdanek Fierlinger, que fue Primer Ministro en un gobierno de coalición controlado por los rusos y permaneció a la cabeza del país hasta el golpe comunista de 1948.

Mientras tanto, en Polonia, Pilsudski había tomado el poder mucho antes mediante el golpe presidencial de 1926 respecto al cual los so-

cialistas adoptaron, al principio, una actitud indecisa. Después se colocaron en la oposición y en 1928 eligieron 65 miembros para el Sejm, sólo para perder la mayoría de ellos en las elecciones de 1930, cuando bajaron a 23 dadas las condiciones de terrorismo en que se celebraron entonces las elecciones. En 1933, todavía en medio del terrorismo, lograron la elección de 41 miembros; pero muchos de sus dirigentes fueron arrestados y encarcelados bajo acusaciones de amenazar el derrocamiento por la fuerza del gobierno. Los comunistas fueron proscritos, pero lograron elegir algunos miembros al Parlamento como representantes de su organismo legal, el Partido Obrero-Campesino. Dos años después, en 1935, el Sejm fue disuelto y se celebraron elecciones de acuerdo con una nueva ley que prohibía todos los partidos de oposición. En lo sucesivo, los socialistas prosiguieron con su oposición fuera del Sejm pero lograron poco, antes que el país fuera ocupado por alemanes y rusos en 1939. Participaron activamente en el movimiento de resistencia durante la guerra, especialmente en Varsovia; y muchos miles de militantes socialistas encontraron la muerte, siendo ejecutados por los nazis. Los rusos entretanto ejecutaron, en 1942, a dos líderes socialistas, Henry Ehrlich y Viktor Alter, que habían desempeñado papeles activos en el movimiento de resistencia y liquidaron además a los dirigentes de los comunistas polacos que habían buscado refugio en la Unión Soviética. Reformaron entonces el Partido Comunista polaco con nuevos dirigentes más dispuestos a obedecer sus órdenes y lograron instalar en el poder a este nuevo partido cuando los nazis fueron expulsados.

En Hungría, mientras tanto, el Partido Socialista carecía de fuerza y era ineficaz después de la derrota de 1919. La dictadura de Horthy, que se estableció entonces, nunca fue realmente fascista, porque no descansaba en el apoyo de un movimiento de masas animado por una ideología fascista, sino que era más bien una dictadura de las viejas clases dominantes fuertemente inspirada por ideas nacionalistas y anti-democráticas. Toleró, pues, la existencia de un Partido Socialdemócrata en el entendimiento de que éste no intentara hacer propaganda en las regiones rurales. No suprimió tampoco, totalmente, a los sindicatos de trabajadores urbanos. El movimiento socialista se hizo, sin embargo, casi por completo inefectivo: en 1939 sólo pudo elegir cinco miembros de un total de 323 a la Cámara Baja del Parlamento húngaro. Los comunistas, que se hallaba fuera de la ley, mantenían la agitación a pesar de la represión, pero muchos de sus dirigentes sufrieron largas penas de prisión. Entre ellos se encontraba Matías Rakosi, que había participado en el corto gobierno comunista de Béla Kun en 1919. De vuelta a Hungría procedente de Rusia en 1924, fue capturado y permaneció en prisión durante dieciséis años, hasta que fue intercambiado en 1940

para convertirse después en uno de los líderes de la nueva Hungría comunista creada por las fuerzas rusas después de la primera Guerra.

En los países balcánicos se instalaron dictaduras en fechas diversas, en Rumania, donde el Partido Comunista había sido suprimido ya en 1924, los socialdemócratas eran bastante tolerados aun después del establecimiento de la dictadura del rey Carol en 1938. Después fueron liquidados por los nazis que, en 1940, obligaron a Carol a abdicar e instalaron en el poder a la Guardia de Hierro fascista, que sería desplazada al año siguiente, después de demostrar obviamente su incompetencia y ferocidad, por el general Antonescu. La dictadura de Carol, mientras duró, tenía todos los aderezos de un movimiento fascista, pero carecía del apoyo de masas y se mostró bastante firme al suprimir a la Guardia de Hierro, a cuyos dirigentes arrestó Carol en 1938 y los fusiló "cuando intentaban escapar" ese mismo año.

En Yugoslavia, donde los socialdemócratas habían sido puestos fuera de la ley ya en 1921 y perseguidos en lo sucesivo, lo mismo que los comunistas, la socialdemocracia había dejado de ser una fuerza efectiva mucho antes de los treinta y la gran mayoría de los trabajadores seguía la orientación clandestina del Partido Comunista, que experimentó diversos cambios de dirección y orientación antes de su reorganización en 1937 por Josip Broz, Tito, quien contribuyó a que el partido recuperara mucho de su pérdida popularidad en los dos años siguientes y se convirtió en el jefe de la resistencia yugoslava a los alemanes durante la guerra.

Cuando el Partido Comunista había sido proscrito en 1921 su más conocido dirigente era Simón Marković, crítico enérgico del nacionalismo que se oponía a las demandas de autonomía nacional de los diversos grupos del país como actitud burguesa que no interesaba a los comunistas —por esta postura le pidió cuentas el Comintern en 1922. Durante algunos años se produjo entonces una aguda lucha de facciones dentro del Partido Comunista yugoslavo, que había trasladado fuera del país su oficina central y sus dirigentes y celebró varias conferencias en el extranjero. En 1926 Stalin, a través del Comintern, lanzó un fuerte ataque a los comunistas yugoslavos por su actitud respecto a la cuestión nacional y el partido alteró entonces su tono e hizo una declaración en apoyo de la autodeterminación nacional; pero las luchas de facciones continuaron. De 1926 a 1928 hubo muchas huelgas contra las malas condiciones que sufrían los trabajadores yugoslavos; pero esto no arregló las cosas, ya que fueron sofocadas sin piedad y los dirigentes en el exilio perdieron el contacto con los trabajadores dentro del país. En 1928 el Comintern dirigió una Carta Abierta a todos los miembros del partido yugoslavo, refiriéndose a sus tendencias fraccionalistas; y el Partido, en su Conferencia de Dresde en ese año

depuso a sus dirigentes de derecha y de izquierda y designó un nuevo líder, Djuric Djakovic, que fue asesinado por la policía al año siguiente. De 1929 a 1931, después del establecimiento de la dictadura real, hubo una época de tenor policiaco, durante la cual perecieron muchos comunistas; y los líderes restantes, encabezados por Ratko Martinovic, huyeron de nuevo al extranjero, desde donde fomentaron levantamientos armados en Yugoslavia que fueron sofocados sangrientamente y que dieron como resultado la desintegración casi total del partido. Empezó a revivir en 1932 cuando el Comintern instaló una nueva directiva temporal encabezada por Milán Gorkic, siendo depuestos de sus cargos Martinovic; y su grupo. Al año siguiente se empezaron a reconstituir las células e inclusive organizaciones regionales comunistas en el país y, en 1934, el Partido Comunista era lo bastante fuerte como para celebrar una Conferencia del pleno en Yugoslavia, que confirmó la dirección de Gorkic". Pero en 1936 Gorkic, acusado de entablar relaciones demasiado estrechas con la izquierda burguesa, tuvo una disputa con la mayoría del Comité Central del Partido. Ese mismo año la dirección organizadora fue transferida al partido en Yugoslavia, mientras la dirección política quedaba en manos de Gorkic en el extranjero; pero en 1937 Gorkic fue desplazado de su puesto dirigente y restableció todo el control del partido en territorio yugoslavo, surgiendo Tito como líder principal. Siguió entonces una rápida liquidación de los llamados elementos fraccionalistas, incluyendo a los acusados de trotskistas o anarquistas, y Tito ganó inmediato ascendiente sobre un nuevo partido monolítico que siguió la línea del Comintern tratando de conseguir apoyo para un frente común antifascista bajo la dirección del Partido Comunista, que cobró gran fuerza a medida que aumentaba la presión alemana sobre Yugoslavia. Los comunistas yugoslavos mandaron un contingente a luchar en la Guerra Civil española y manifestaron su disposición, en 1938, a enviar voluntarios a luchar en ayuda de los checos cuando la crisis de Munich. Durante estos años los comunistas yugoslavos lograron indudablemente establecer su ascendiente como la principal fuerza de oposición en el país. En las elecciones de 1938 el Partido Popular de Croacia, creado en 1937, se alió a la Coalición Democrática Croata contra el gobierno, aunque esta política fue condenada por la mayoría de los comunistas yugoslavos que hubieran preferido la postulación de sus propios candidatos. En general, los comunistas eran más débiles en Croacia que en otras regiones del país, excepto Macedonia, donde el líder local, Sarlo, fue expulsado en 1941 por negarse a unirse a los guerrilleros de Tito en la resistencia armada a los invasores fascistas y sus partidarios dentro del país.

El hecho de que Tito asumiera la dirección en 1937 fue, de hecho, el resultado de una reafirmación por los comunistas en Yugoslavia de

su derecho a determinar la política a seguir, después que los líderes anteriores habían fracasado en su intento de imponer su orientación desde el exilio. En Croacia el Partido Campesino, originalmente radical en su política y dispuesto a aliarse con los trabajadores urbanos, cayó cada vez más después del asesinato de Stefan Radie en 1928 en manos de hombres de negocios e intelectuales de clase media croatas. Maéek, su nuevo dirigente, era abogado y surgió en el partido un ala derecha profascista opuesta a la izquierda radical, mientras el centro intentaba mantener un precario equilibrio entre izquierda y derecha como principal exponente del nacionalismo croata contra la centralización servia del reino yugoslavo. El ala izquierda, por otra parte, dirigida por el profesor Dragoliab Jovanonic propugnaba una política radical de reforma social y buscaba en vano una alianza con los campesinos servios.

En Bulgaria el ala moderada de los agraristas, dirigida por Gidev, participó en la coalición liberal de Malinov en 1931. Pero con el advenimiento de la dictadura en 1934 todos los partidos fueron proscritos y empujados a la clandestinidad. Los comunistas, sin embargo, lograron mantener su organización clandestina, especialmente, en las ciudades, y ganar simpatía popular para la política de Frente Popular. Así, en Bulgaria y Yugoslavia, había en 1939 un Partido Comunista potencialmente fuerte listo para asumir el poder mientras la socialdemocracia, con excepción de unos cuantos pequeños partidos en el exilio, había dejado de existir prácticamente como fuerza organizada.

En Grecia, el Partido Comunista que se desarrollaba principalmente en los centros industriales —el Pireo, Salónica y Cavala— en los treinta sostuvo temporalmente una posición clave entre los grupos republicano y realista, igualmente divididos, aunque por supuesto era mucho más pequeño que cualquiera de éstos. En el Parlamento de 1935 obtuvo 15 asientos. Supuestos temores al comunismo sirvieron de excusa para la dictadura de Metaxas en 1936, bajo la cual el Partido sufrió severa represión, pero logró mantener su control sobre los trabajadores organizados y conservar cierto apoyo entre los intelectuales —sobre todo porque ni los partidos burgueses ni la dictadura habían intentado siquiera resolver los urgentes problemas sociales del país.

Así, en los treinta, la socialdemocracia había desaparecido excepto en Checoslovaquia donde recuperaba parte del terreno perdido antes en favor de los comunistas y, en cierta medida, en Polonia, donde todavía oponía cierta resistencia a la dictadura fuera del Parlamento. El comunismo, por otra parte, aunque proscrito en todos estos países, seguía gozando de considerable apoyo y de hecho iba ganando terreno a pesar de su proscripción, en los años inmediatamente anteriores al estallido de la guerra, cuando menos en los países balcánicos, en todos los cuales

era tradicionalmente más fuerte que los socialdemócratas, quienes, en varias ocasiones, se habían comprometido demasiado con los organizadores de los golpes dictatoriales. Sólo en tres países —Polonia, Hungría y Rumania— el antisemitismo se había convertido en una cuestión importante; fue, por supuesto, favorecido por los alemanes al máximo de sus posibilidades y desempeñó un papel importante en la creación de movimientos fascistas locales —especialmente los que surgieron al estilo alemán. Porque en Italia el escaso número de la población judía impidió que el antisemitismo influyera mucho mientras que en Polonia, Hungría y Rumania el antisemitismo tenía raíces tradicionales y se inflamó con la depresión general que afectó a estos países lo mismo que a otros en los años que siguieron a 1930. A la depresión se debió, en efecto, por la detención de la afluencia de capital extranjero y la reducción de los precios agrícolas a un nivel bajísimo, el surgimiento de las dictaduras y la dura persecución a los partidos obreros y a los sindicatos; porque el hambre producía un descontento de masas tal que los gobiernos burgueses no podían mantenerse en el poder por medios constitucionales y las clases propietarias tendían a recurrir a la fuerza.

Se puso de moda, especialmente a fines de los treinta, calificar de fascistas a todos los gobiernos reaccionarios de la Europa oriental, mientras que de hecho algunos de ellos se parecían mucho más por su naturaleza a las viejas dictaduras oligárquicas sin apoyo en movimientos de masas semejantes a los que arrastraba Hitler en Alemania o Mussolini en Italia. Como hemos visto, los verdaderos fascistas de Rumania —la Guardia de Hierro— no subieron al poder sino después de la abdicación de Carol obligado por los alemanes en 1940 y no se sostuvieron mucho tiempo en el poder antes de ser sustituidos por la dictadura militar menos severa del general Antonescu. Tampoco pueden considerarse en un sentido estricto como fascistas las dictaduras de Polonia o de Hungría, carentes como estaban de una ideología con esas características específicas. Eran, no obstante, decididamente antidemocráticas y absolutamente hostiles al socialismo y al comunismo, tendiendo a ver comunismo tras cualquier intento de los trabajadores por organizarse para su propia protección. Tenían también en común con los fascistas un violento antisemitismo, porque en sus territorios había una nutrida población judía que competía con los nacionales, al menos en el caso de los comerciantes, que lo hacían con mucho éxito. Los judíos, además, ocupaban posiciones importantes entre los trabajadores industriales y como dirigentes socialistas y comunistas por lo que resultaba fácil acusar a los judíos de ser los principales responsables de alentar el malestar.

Condiciones como éstas eran muy desfavorables para el surgimiento de un pensamiento socialista constructivo. Los movimientos socialistas y comunistas estaban preocupados por igual con la lucha cotidiana por

la supervivencia. Había, no obstante, algunos pensadores prominentes entre los intelectuales marxistas —especialmente Georg Lukács en Hungría y C. Dobrogeanu-Cherea (o Katz, muerto en 1920) en Rumania— fundador ideológico este último del socialismo rumano como Blagoev lo fue del búlgaro. Pero la naturaleza de la situación no favorecía el surgimiento de un nuevo pensamiento socialista en los treinta, cuando los socialdemócratas estaban fundamentalmente preocupados con la definición de su actitud hacia los dictadores y los partidos comunistas se veían obligados a llevar en general una existencia clandestina bajo continua represión policiaca. Esto no impidió que los comunistas se entregaran a duras luchas de facciones surgidas principalmente de sus relaciones con el Comintern y la variable política de éste; pero nada nuevo surgió de estas luchas, que se refirieron a la política internacional del comunismo más que a la política interna de cada país. La política de Frente Popular adoptada por el Comintern a mediados de los treinta benefició sin duda a los partidos comunistas de la Europa oriental que pudieron, siguiendo esta orientación mientras duró, construir una base más amplia de oposición nacional en esos países y gozaban aún de los beneficios de esta política cuando estalló la guerra en 1939. La mayoría de ellos recibieron con sorpresa el Pacto Nazi-Soviético de 1939; pero la conducta alemana en la invasión y ocupación de sus países les devolvió la influencia que algunos habían perdido temporalmente y las luchas de resistencia de los años de guerra los prepararon para tomar el poder, apoyados por las fuerzas rusas, con excepción de Yugoslavia, en 1944-45. Se establecieron entonces gobiernos de Frente Popular, dominados por los comunistas que lograron forzar a los partidos socialdemócratas, relativamente débiles, a unirse a ellos o a desaparecer si rechazaban esta alianza. Así, el Partido Socialista rumano fue definitivamente liquidado en 1948, después que una convención acordó la asimilación al Partido Comunista y que los dirigentes que se opusieron tuvieron que salir hacia el exilio. Los socialdemócratas yugoslavos fueron igualmente liquidados o empujados al exilio, después de haber apoyado a Mijailovic y no a Tito durante la resistencia. Los checos, con Fierlinger, cayeron en brazos del Partido Comunista; y los polacos mantuvieron sólo un Partido Social-Demócrata nominal en el exilio, mientras los búlgaros seguían la tradición de Blagoev y sus "estrictos" y los socialdemócratas búlgaros, después de participar junto con los agraristas en las elecciones generales de 1946, eran liquidados sin piedad después que todos sus líderes y miembros del Parlamento habían sido arrestados y condenados a prisión o a campos de concentración. Uno de sus dirigentes, Kristin Pastochov, fue muerto en prisión y otro, Sveti Ivanov, murió en un campo de concentración. Los sobrevivientes huyeron al extranjero y después establecieron una sede del partido

en el exilio en Nueva York. Todos los partidos políticos habían sido suprimidos después del golpe de Estado de Kimon Georgiev en 1934 y los sindicatos libres también habían sido abolidos en favor de un nuevo movimiento controlado por el Estado. Pero la actividad política había continuado en la clandestinidad y los socialdemócratas habían convocado rápidamente un Congreso en 1944, al caer la dictadura, y habían participado en el gabinete de coalición que asumió primero el poder. Su principal representante en este gobierno fue Dimitrov Neikov, como Ministro de Economía Nacional, que permaneció en el gobierno cuando los socialdemócratas lo abandonaron en 1945 y entró después al Partido Comunista.

CAPÍTULO X

LOS ESTADOS UNIDOS, EL CANADA Y AMÉRICA LATINA

En los Estados Unidos los treinta fueron la década, no del socialismo, sino de la Gran Depresión y del "Nuevo Trato" del presidente Roosevelt, que puso fin al sindicalismo "blanco" e hizo surgir un movimiento sindical enormemente fuerte con una nueva actitud social y un reconocimiento público que jamás había tenido antes el movimiento obrero norteamericano. Si pudiera identificarse el socialismo con la intervención estatal en los asuntos económicos o siquiera con los grandes adelantos en dirección de un Estado benefactor, habría que considerar a los treinta como una década de avance socialista sin precedentes; pero esta época fue también un periodo durante el cual el movimiento socialista organizado en los Estados Unidos no sólo siguió decayendo sino que casi dejó de existir. En 1938 el Partido Socialista norteamericano había quedado reducido a menos de 7 000 miembros mientras que en 1934 contaba con 23 000; y un año después estaba casi muerto. Tampoco los comunistas norteamericanos, aunque hacían mucho ruido, agrupaban un núcleo considerable de partidarios en la clase obrera, encontrándose sus simpatizantes principalmente entre los intelectuales, y los que se mostraron muy hábiles para agrupar en diversas organizaciones anexas en nombre del antifascismo y la campaña contra la guerra. Los sindicatos que en 1935 se unieron para formar un Comité de Organización Laboral lograron por primera vez afiliarse a la mayoría de los obreros en las industrias de producción en masa —del acero, automóviles, petróleo, etc.— y este nuevo sindicalismo propugnó una política esencialmente diferente a la de la Federación Norteamericana del Trabajo y mucho más parecida a la de los movimientos obreros de la Europa occidental. Pero, mientras en Europa los sindicatos estaban en su mayoría estrechamente aliados e inclusive ligados por su organización a los partidos políticos socialistas, el C.I.O. no tenía esos lazos y, en lugar de intentar la creación de un partido laborista o socialista independiente, tendió cada vez más, a través de su Comité de Organización Política, a ponerse al lado de Roosevelt y los demócratas en apoyo al Nuevo Trato. Mientras que socialistas y comunistas por igual denunciaban al Nuevo Trato como una conspiración para lograr que el sistema capitalista en desintegración se recuperara —lo que era, en efecto, uno de sus aspectos— muchos socialistas que pertenecían además a los sindicatos se vieron obligados a escoger entre las demandas de sus sindicatos de vigoroso apoyo a la política del Nuevo Trato a

través del C.I.O. o la agitación socialista por un "tercer partido", sin perspectivas de éxito y poniendo en peligro los beneficios obtenidos mediante la cooperación con los partidarios del Nuevo Trato. Algunos, como Walter Reuther, ante esta alternativa renunciaron al Partido Socialista. Su dirigente, Norman Thomas, que había obtenido 900 mil votos como candidato presidencial en 1932, sólo pudo lograr 107 mil cuando se postuló de nuevo en 1936.

La depresión mundial de principios de los treinta afectó a los Estados Unidos más catastróficamente que a ningún otro país. La primera advertencia manifiesta de lo que venía fue el colapso de la bolsa de valores de 1929; pero pocos comprendieron la falta de solidez del auge y muchos profetizaron una rápida recuperación y un nuevo avance. Hubo, en efecto, una breve recuperación después de la primera crisis, pero pronto se reinició el descenso con mucha mayor intensidad y se inició una verdadera batalla por obtener capitales "líquidos". La producción y la ocupación en 1932 bajaron casi a la mitad; los salarios se redujeron en forma catastrófica y un banco tras otro cerraron sus puertas. Cuando el presidente Roosevelt subió al poder en la primavera de 1933 todo el sistema económico yacía en ruinas y el prestigio de los financieros norteamericanos había quedado destrozado. El Estado tenía que tomar, evidentemente, medidas drásticas para resolver la situación; pero ¿qué debía hacer? La tradición de la economía norteamericana descansaba en la confianza, en la capacidad de los hombres de negocios para administrar sus propios negocios y en la negativa de que el Estado fuera responsable de mantener el nivel de ocupación. Sólo unos cuantos herejes en el terreno de la economía favorecían la planificación económica en una u otra forma y comprendían que había una relación entre la acción estatal y los niveles de la demanda de bienes y servicios. Casi nadie había vislumbrado que la falta de confianza en los negocios redujera la inversión a casi nada y dejara sin trabajo a los millones de personas que no protegían los servicios sociales. No parece que el nuevo Presidente mismo tuviera una idea clara de lo que había que hacer, aparte de reconocer que debía acudir imperativamente en auxilio de una nación en profunda desgracia. Los recursos a los que acudió eran improvisaciones destinadas a resolver la grave emergencia; no había detrás la clara reflexión de un remedio basado en una comprensión verdadera de la situación. De hecho, algunas medidas como la reducción del valor oro del dólar no tenían sentido en vista de la posición económica internacional de los Estados Unidos. Dos cosas, sin embargo, se necesitaban evidentemente y ambas se pusieron en práctica. Era necesario que, de una manera u otra, afluyera dinero del Estado para elevar el nivel de la demanda total; y era necesario detener las drásticas reducciones de salarios que sólo empeoraban la situación.

Cuando el colapso, una gran parte de la industria norteamericana se negaba todavía a reconocer los derechos de negociación colectiva a los trabajadores que empleaban. En algunas industrias los sindicatos agrupados en la Federación Norteamericana del Trabajo estaban firmemente establecidos y habían obtenido el derecho de negociación colectiva. Pero la Federación Norteamericana del Trabajo había logrado organizar sólo a una minoría de la fuerza de trabajo, integrada principalmente por trabajadores calificados y no había podido organizar efectivamente a las grandes industrias de producción en masa que carecían en absoluto de organización o estaban dominadas por sindicatos "blancos" controlados por los patronos, que los utilizaban como medios para mantener a raya al sindicalismo. Mediante la Ley de Recuperación Industrial —que después fue calificada de inconstitucional por la Suprema Corte, cuando ya había realizado su cometido— el Nuevo Trato creaba una estructura que puso fin abruptamente al proceso de reducción de salarios y precios y, de acuerdo con la Ley de Relaciones Laborales, los trabajadores obtuvieron el derecho legal de formar y participar en sindicatos libres del control patronal y de hacer obligatoria a los patronos la negociación colectiva. Toda la estructura de sindicatos "blancos" y de la llamada "libre contratación" se desplomó y por primera vez en su historia la clase obrera norteamericana en general quedó en libertad para crear sus propios sindicatos y organizarse sin temor a que se invocara al Estado y a la ley para suprimirlos en nombre de la libertad.

Ésta fue una enorme ganancia, que aprovecharía de inmediato a los sindicatos. Las ventajas beneficiaron a los sindicatos afiliados a la Federación Norteamericana del Trabajo y a los que surgían bajo la égida del recién establecido C.I.O. La Federación Norteamericana del Trabajo (A.F.L.), que sólo tenía 2 300 000 miembros en 1933 elevó el total a 3 700 000 en 1938, cuando el C.I.O. tenía 3 millones y medio y cerca de otro millón pertenecía a las Hermandades Ferroviarias y otros sindicatos no afiliados a ninguna central. Además el sindicalismo, que hasta entonces había sido tachado de "antinorteamericano", adquirió con el Nuevo Trato un *status* reconocido del que jamás antes había gozado. Sin embargo, este *status* era todavía precario; porque, cuando la clase capitalista se recuperó del miedo y las condiciones volvieron a acercarse a la normalidad anterior a la crisis, muchos patronos denunciaron en términos directos las mismas medidas que los habían ayudado a recuperarse y empezaron a buscar los medios de volver a sus antiguas actitudes antisindicalistas. Por entonces, sin embargo, los sindicatos se habían arraigado demasiado sólidamente como para ser suprimidos con facilidad y la mayoría de los grandes fabricantes consideraron preferible llegar a acuerdos con ellos en vez de correr el riesgo

de un decidido conflicto laboral. La clase capitalista, a fines de los treinta, tenía todavía una aguda conciencia de su prestigio perdido y sabía que dependía del Estado para sostener su posición, por mucho que le disgustara la mano que le tendía su ayuda.

Los socialistas tenían hasta cierto punto razón cuando afirmaban que el efecto del Nuevo Trato del presidente Roosevelt había sido dar al capitalismo norteamericano una nueva posibilidad de vida. En efecto ¿qué otra cosa podía hacer Roosevelt, sin la alternativa de otra base para la estructura de la sociedad? A pesar de que el descontento social había sido considerable durante la depresión, no se había puesto en cuestión efectivamente al capitalismo y no se habían planteado otras maneras de organizar la vida económica de la nación. Los sindicatos —el C.I.O. y la A.F.L.— favorecían, no un cambio en la base del sistema económico, sino sólo más altos salarios y mejores condiciones de trabajo, unidos a un mayor grado de seguridad social, todo lo cual lo esperaban en parte del Estado pero también de la negociación de "beneficios marginales" ampliando el alcance de la negociación colectiva. Durante la depresión había habido una enorme proliferación de proyectos de mejoramiento social —planes de pensiones, proyectos de cooperativas en cada comunidad y otros muchos—, pero la mayoría de estas ideas desaparecieron cuando la economía se recuperó de lo peor de la depresión y la mayoría aunque no la totalidad de los trabajadores pudieron encontrar nuevamente trabajo. Movimientos como el E.P.I.C.,* organizado por Upton Sinclair en 1933, habían despertado momentáneamente un gran apoyo popular; pero éste había desaparecido rápidamente a medida que el Nuevo Trato produjo sus efectos. Los nuevos Estados Unidos de finales de los treinta eran, en algunos aspectos vitales, muy distintos de los anteriores; pero no eran menos capitalistas, aunque su capitalismo fuera más responsable y más respetuoso de la opinión pública.

Al producirse la depresión el socialismo norteamericano, en común con otros movimientos de descontento, avanzó temporalmente. El Partido Socialista norteamericano, que había descendido a los 7 u 8 mil miembros en 1928, se elevó a 15 mil en 1932 y a 23 mil en 1934, pero decayó nuevamente después de la división de 1936. Su líder más importante, Morris Hillquit, murió en 1933 y no había quien pudiera sustituirlo en la "vieja guardia" del partido. Después de su desaparición, el Partido Socialista norteamericano se convirtió más que nunca en campo de batalla de luchas de facciones entre grupos insignificantes. Hillquit, con cierta reputación como intelectual marxista, era un abogado judío de Nueva York con muchas simpatías en el terreno local. Duramente atacado por los comunistas era, a pesar de lo

* "End Poverty in California" (Fin de la pobreza en California). [E.]

que éstos decían de él, un socialista de izquierda de opiniones avanzadas, tan lejos del ala derecha socialista de demócratas parlamentarios como de los mismos comunistas; pero tenía suficiente prestigio e influencia como para mantener unido al partido. Cuando murió los antiguos líderes —o los que quedaban— perdieron pronto el control. En 1934 la extrema izquierda se apoderó de la maquinaria del Partido Socialista, expulsando a Algernon Lee de la Rand School * y a otros viejos miembros hasta que, en 1936, se produjo una división definitiva y la derecha acabó por separarse. Ese año el Partido Socialista norteamericano y los comunistas entablaron negociaciones para llegar a una acción común; pero las negociaciones se rompieron, principalmente porque la línea del Partido Comunista cambió para apoyar a Roosevelt, al que se oponía vigorosamente el Partido Socialista. En ese mismo año el Partido Socialista pasó por la experiencia de la adhesión en bloque de los trotskistas norteamericanos quienes, encabezados por James P. Cannon y Max Schachtman, habían sido expulsados del Partido Comunista en 1928 y desde entonces se habían mantenido como pequeño partido. Esta fusión fue de corta duración; después de diez meses de coexistencia poco feliz los trotskistas fueron expulsados del Partido Socialista en 1937 y volvieron a constituir su partido independiente. Desde entonces, Norman Thomas fue casi la única figura de cierta eminencia dentro del Partido Socialista; y su política fue casi exclusivamente mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra a todo trance de modo que en los años inmediatamente anteriores a 1941 el Partido Socialista norteamericano era, de hecho, más un partido aislacionista-pacifista que un partido socialista en un sentido positivo. Pero en realidad no importaba qué línea adoptaba el Partido Socialista. Había perdido toda su influencia.

Los comunistas, por su parte, demostraron en todo caso mucha mayor actividad. Como vimos, durante los veinte habían sufrido división tras división, formando cada grupo de disidentes un nuevo partido en franca hostilidad con el partido oficial reconocido por el Comintern. Algunos de estos partidos tuvieron por algún tiempo cierta importancia local; y algunos duraron hasta los treinta —por ejemplo, el Partido Proletario de John Kerache en Detroit, cuyos dirigentes desempeñaron un papel de cierta importancia en la creación del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automovilística. Pero la mayoría de ellos desaparecieron rápidamente o se redujeron casi a la nada, aunque los trotskistas de J. P. Cannon lograron sostenerse en pequeña escala como

* La Rand School era una escuela de ciencias sociales fundada en 1906. La mayor parte de los maestros eran socialistas, aunque fueron invitados también a dar clases algunos pensadores avanzados no socialistas. Prestaba una atención considerable a los problemas organizativos de los sindicatos. [E.]

grupo creador de problemas y la llamada Oposición Comunista, encabezada por Jay Lovestone y Benjamín Gitlow, quienes fueron expulsados del Partido Comunista en 1929, se mantuvo hasta 1940, cuando Lovestone y Gitlow se pasaron definitivamente a las filas anticomunistas. Lovestone llegó a convertirse, en 1947, en secretario de un Comité de Sindicatos Libres creado por la A.F.L. En los veinte el Partido Comunista había quedado dividido en facciones rivales, encabezadas por W. Z. Foster y Earl Browder por una parte y Charles Ruthenberg por la otra, en favor del cual había intervenido el Comintern en 1925, cuando estuvo amenazado de exclusión. Pero Ruthenberg murió en 1927 y, al año siguiente, Cannon y sus partidarios trotskistas fueron expulsados. Luego, en 1929, se produjo la expulsión de Lovestone y Gitlow y la reorganización del Partido Comunista norteamericano bajo instrucciones directas de Moscú. W. Z. Foster, que había abrigado esperanzas de ser designado secretario general del Partido, fue hecho a un lado en favor de su colaborador Earl Browder, quien conservó el puesto hasta que fue desplazado en 1945; y desde 1929 el Partido Comunista norteamericano siguió obedientemente los cambios políticos dictados desde Moscú. Por algunos años esto lo comprometió a una política de "Frente Unido desde abajo" —lo que significaba tratar a los socialistas como los principales enemigos de los trabajadores e intentar desintegrar la organización poniendo en pugna a los miembros de filas contra sus dirigentes. Esta política se sostuvo durante la depresión y la victoria nazi en Alemania y no terminó hasta que fue sustituida, en el verano de 1935, por la política muy distinta del Frente Popular organizada por Dimitrov, nuevo secretario del Comintern. El Partido Comunista norteamericano cambió pronto de línea y se dedicó a propiciar un agrupamiento del pueblo norteamericano en una cruzada antifascista basada en el más amplio apoyo posible. El cambio de línea no mejoró, sin embargo, las relaciones con los socialistas ya que condujo al Partido Comunista a colaborar con el C.I.O. e, indirectamente, a apoyar a Roosevelt y al Partido Demócrata, a los que se oponían fuertemente los socialistas. Los comunistas se infiltraron en numerosos sindicatos del C.I.O. y lograron controlar algunos antes que los dirigentes del C.I.O. se percataran de la naturaleza del peligro y se volvieran contra los que habían sido hasta entonces sus aliados y los expulsaron. Entonces, en 1939, la línea del Partido cambió de nuevo abruptamente con la firma del Pacto Nazi-Soviético, sólo para variar una vez más cuando Hitler lanzó su ataque a la Unión Soviética en 1941.

En términos de política norteamericana, todas estas variaciones significaron poco porque todas las sectas de socialistas y comunistas, en conjunto, eran demasiado débiles para tener una influencia real sobre el curso de los acontecimientos. Si las clases trabajadoras contaron

en la política norteamericana, fue a través del C.I.O. y la A.F.L. y no de las sectas socialistas o comunistas; y el C.I.O. como vimos, se preocupaba más por consolidar las ventajas obtenidas gracias al Nuevo Trato y a incrementar su fuerza como organismo de negociación colectiva que por objetivos más distantes. El Comité de Acción Política del C.I.O. se dedicó con gran efectividad a movilizar la votación sindical en favor del presidente Roosevelt en 1939 y se abstuvo de cualquier intento de formar un tercer partido para participar en la política federal —aunque esto no impidió la creación en Nueva York de un Partido Laborista norteamericano independiente, formado en 1936, que logró ejercer por algún tiempo una considerable influencia en la política local. En 1937-38 los trotskistas dieron amplia publicidad a los dos informes emitidos por una Comisión independiente, presidida por John Dewey, designada para hacer una investigación parcial de las acusaciones hechas contra Trotsky por los comunistas; pero este éxito en el terreno publicitario, aunque contribuyó a desacreditar a Stalin y al Comintern en la opinión norteamericana, no tuvo otra relación con el curso de los acontecimientos políticos. Los grandes acontecimientos sociales en los Estados Unidos a mediados y fines de los treinta simplemente se produjeron al margen de los socialistas: ni socialistas ni comunistas participaron efectivamente en ellos. No obstante, bajo el efecto de la depresión y el Nuevo Trato, la sociedad norteamericana atravesó en estos años por una revolución en las relaciones de clase que, aunque dejó la estructura económica general casi igual en la forma, alteró fundamentalmente su funcionamiento para ventaja de las clases trabajadoras y logró, no el derrocamiento del capitalismo —para sustituir al cual no había otra alternativa— sino su transformación de un sistema de explotación sin escrúpulos, por una fuerza económica no sujeta a regulaciones, en un sistema donde la idea de responsabilidad social había logrado un importante reconocimiento, aunque éste fuera hecho de mala voluntad. Los problemas sociales de los Estados Unidos no se resolvieron y no se han resuelto todavía hoy; pero se estableció un patrón de relaciones sociales mucho más tolerable que pareció susceptible de durar cuando menos mientras el país pudiera evitar una recurrencia de los desastres de 1929 y los años siguientes.

En semejante situación sería vano buscar algún desarrollo importante en el terreno de las ideas socialistas. Los comunistas o bien decían y hacían fielmente lo que les ordenaba Moscú o, rompiendo con la orientación stalinista, se dispersaban en multitud de pequeñas facciones contendientes, totalmente carentes de ideas constructivas. Los socialistas siguieron sin ninguna originalidad los patrones del pensamiento socialdemócrata europeo o, cuando se separaron de éste, se entregaron a luchas de facciones tratando en vano de encontrar una política que los

distiguiera del comunismo y, al mismo tiempo, les permitiera seguir un camino independiente. Su desgracia fue que no había un núcleo considerable de opinión a la que pudieran apelar, porque a los nuevos sindicatos no les interesaban esas cuestiones y se quedaron en sus disputas de facciones sin un público dispuesto a escucharlos. Es verdad que pronto la solidaridad de los sindicatos del C.I.O. empezó a quebrarse. David Dubinsky, después de derrotar a los comunistas que habían controlado por un tiempo su poderoso Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria del Vestido Femenino, se negó a seguir al resto del C.I.O. en una secesión definitiva de la A.F.L. y volvió al redil de ésta. John L. Lewis, el verdadero fundador del C.I.O., disputó con este organismo y con Roosevelt y condujo a sus mineros a una posición de independencia de ambos movimientos rivales. El C.I.O. actuó contra los comunistas dentro de sus filas y expulsó a los sindicatos dominados por los comunistas. No obstante, el núcleo principal del C.I.O. permaneció unido y pudo abrirse paso con éxito en el terreno de la negociación colectiva siendo además un iniciador en el estrechamiento de relaciones con el movimiento sindical internacional. En 1940 los Estados Unidos carecían prácticamente de movimiento socialista pero, al mismo tiempo, las ideas y la política considerada generalmente socialista habían hecho grandes progresos y se había preparado el terreno para una colaboración mucho más estrecha con los movimientos obreros de otros países de lo que hubiera parecido posible unos doce años antes. Cuando, después de la segunda Guerra Mundial, los socialistas y líderes sindicales de la Europa occidental se entrevistaron con Walter Reuther y sus colegas del C.I.O. se entendieron mucho más fácilmente que en anteriores reuniones; y esto no se debió principalmente a que los europeos se hubieran vuelto menos socialistas —si esto había sucedido— sino más bien a que los norteamericanos habían llegado a una etapa en las relaciones sociales y económicas mucho más parecida a la que atravesaban sus colegas europeos que antes del Nuevo Trato.

En el Canadá, donde un Partido Progresista integrado principalmente por agricultores se había desintegrado después de la primera Guerra Mundial por falta de una clara doctrina política, la Gran Depresión de principios de los treinta hizo surgir un nuevo partido, basado en una alianza entre agricultores y trabajadores rurales, con el nombre de Federación Cooperativista del Commonwealth. Este partido se constituyó efectivamente en 1933. Después del colapso de los progresistas en 1925 había surgido en el oeste del Canadá un Partido Laborista Independiente y una Asociación Política Campesina para hacer la propaganda en favor de un nuevo partido opuesto a liberales y conservadores por igual; y en julio de 1932 el Partido Laborista Independiente

efectuó una convención en Saskatoon y trazó un programa político. Al mismo tiempo y en el mismo lugar, los Agricultores Unidos del Canadá, hasta entonces un organismo apolítico, celebró una convención y adoptó un programa político propio. Ambos programas eran casi idénticos y los Agricultores Unidos sugirieron, en consecuencia, que los dos organismos se reunieran para discutir una acción común. El resultado de esta reunión fue la decisión de formar un Partido Obrero-Campesino. Por el momento, el movimiento se limitó casi totalmente a la provincia de Saskatchewan; pero, a instancias del nuevo organismo se reunió una conferencia más amplia, todavía principalmente del oeste del Canadá, en Caligari en agosto de 1932 que decidió lanzar a la Federación Cooperativista del Commonwealth como partido de amplitud nacional con objetivos ampliamente socialistas. Su programa original era, en efecto, muy parecido a los de los partidos socialdemócratas y laboristas de la Europa occidental, salvo que se refería más a la necesidad de que el Estado acudiera en ayuda de los campesinos con medidas destinadas a sostener o establecer una proporción justa entre los precios de los productos agrícolas y los industriales. También propugnaba vigorosamente por una legislación de seguridad social en interés de los muchos a los que la depresión había dejado sin empleo. Al año siguiente, en una conferencia celebrada en Regina, la Federación Cooperativista del Commonwealth lanzó su Manifiesto de Regina que establecía más detalladamente su política. Como medio para poner fin al desastre que había sufrido la economía canadiense bajo el capitalismo, demandaba "una economía planificada y socializada en la cual nuestros recursos naturales y los principales medios de producción y distribución sean poseídos, controlados y administrados por el pueblo". Más específicamente, el Manifiesto solicitaba la socialización de las finanzas y la banca, el transporte y las comunicaciones, la energía eléctrica "y todas las demás industrias y servicios esenciales a la planificación social", la seguridad en la tenencia de la tierra para los campesinos, el fomento de las cooperativas de producción y de consumo y el restablecimiento y sostenimiento de una relación equitativa entre los precios de los productos agrícolas y otros, la reglamentación del comercio exterior a través de Oficinas de Importación y Exportación, un Código de Trabajo que garantizara la libertad de organización, la participación efectiva de los trabajadores en la administración industrial y una legislación de seguridad social de amplio alcance, un servicio de salubridad socializado, la enmienda de la Ley sobre América del Norte Británica para conferir mayores facultades al gobierno del Dominio, la libertad universal de palabra y reunión y la abolición de la discriminación racial y otras formas de discriminación política, la modificación drástica de la estructura impositiva y un programa de emergencia basado en el principio de trabajo o sostenimiento

para todos, una política de gastos públicos en viviendas y otras obras de utilidad y el financiamiento de este programa mediante "el crédito basado en la riqueza nacional".

J. S. Woodsworth, que había sido elegido primero como miembro laborista al Parlamento en 1921, fue designado presidente de la Federación Cooperativista del Commonwealth, que creció rápidamente en el oeste del Canadá en los años siguientes. Sus primeros triunfos electorales se produjeron en 1934, cuando eligió cinco miembros para la Legislatura Provincial de Saskatchewan. La cifra se elevó a 11 en 1938 y, en 1944, la Federación obtuvo 47 de los 52 asientos y asumió el gobierno por una mayoría absoluta bajo la presidencia de C. T. Douglas que todavía está en el poder como Premier provincial. El progreso fue menos rápido en otras provincias; pero la Federación consiguió constituir la amenaza de un tercer partido para liberales y conservadores que alternaron en el ejercicio del poder en el Dominio del Canadá. En la política nacional era, sin embargo, demasiado débil todavía: en 1940 tenía sólo 8 miembros en la Cámara de los Comunes canadiense. Durante la guerra se desarrolló con mucha más rapidez, especialmente en Ontario donde en 1943 logró elegir 34 miembros para la Legislatura provincial y se convirtió en el segundo partido por su tamaño, con más de la tercera parte de las diputaciones. Ya entonces la Federación era el mayor partido de oposición en cuatro provincias canadienses. Cuando Woodsworth murió en 1942 fue sustituido como líder del partido por un maestro de origen inglés, M. J. Coldwell, de Saskatchewan, quien todavía dirige el partido aunque no es ya miembro del Parlamento, por haber perdido su diputación en el derrumbe canadiense de 1958. Entre los elementos que participaron en la formación de la Federación había, además de obreros y campesinos, un grupo notable de intelectuales en torno al profesor F. R. Scott, de la Universidad McGill, que integraban la Liga de Reconstrucción Social y publicaron un informe importante titulado *Social Planning for Canada*. La mayoría de los colaboradores en la redacción de ese trabajo fueron miembros activos de la Federación. Este organismo, desde un principio, destacó especialmente la necesidad de una economía planificada como necesaria para atender con justicia a la ciudad y al campo y mantener armónicamente unidos a los diversos elementos de su composición.

Mientras tanto, en América Latina, con sus grandes recursos no desarrollados y sus luchas continuas entre las aristocracias criollas y una gran variedad de movimientos democráticos y populares dominados por las burguesías nacionales de las ciudades, los movimientos obreros, todavía limitados a pequeñas minorías por la condición subdesarrollada de la industria, se entregaban continuamente a luchas de facciones y permanecían en general aislados de los trabajadores rurales, que cons-

titulan la gran mayoría de la población en casi todos los países del continente. Sólo en la Argentina, el Uruguay y Costa Rica constituían los blancos la mayoría de la población; en los demás países estaba integrada principalmente por indios o negros o por población mestiza. A fines de los treinta, de un total de población de casi 130 millones de habitantes, los indios y los negros alcanzaban cada uno cifras de 16 millones. Cerca de una tercera parte de la población del Brasil estaba constituida por negros: más de la mitad de los habitantes de Guatemala y Bolivia y el 40 % o más en el Perú y el Ecuador eran indios y en México no mucho menos del 30 % eran indios de sangre no mezclada. Sólo la Argentina tenía un nivel de vida comparable con los de los países más desarrollados, pero inclusive sus niveles promedio eran mucho más bajos que los de los países desarrollados de Europa. La industrialización dependía principalmente de la afluencia de capital extranjero, que procedía fundamentalmente de los Estados Unidos, aunque empresas europeas —en especial inglesas— predominaban aún en los servicios de utilidad pública de numerosos países, sobre todo en la Argentina. La penetración norteamericana se concentraba principalmente en América Central, donde la United Fruit Company, apoyada por su gobierno, sostenía una posición muy poderosa y se aliaba generalmente a los elementos más reaccionarios: los grandes propietarios de tierras.

Como hemos visto, Haya de la Torre había fundado su movimiento Aprista en 1924, que apelaba al patriotismo indoamericano trascendiendo las facciones nacionales y en favor de una unión de clases medias, obreros y campesinos contra la penetración imperialista extranjera.¹ Este movimiento había estado en agudo antagonismo con los comunistas, quienes se oponían decididamente a esa unión de clases y trataban de constituir un movimiento proletario unificado controlado por ellos mismos y sujetando a los trabajadores rurales a la dirección del proletariado. Los movimientos socialistas, distintos de los comunistas, no tenían gran fuerza excepto en algunos países, como la Argentina y Chile; pero había núcleos considerables de obreros partidarios de diversas ramas del anarco-sindicalismo al estilo europeo. En México la Revolución, después de su triunfo inicial cuando la primera Guerra Mundial, se había empantanado en una dura lucha con la Iglesia y no siguió adelante hasta que el presidente Lázaro Cárdenas subió al poder en 1934.

Cárdenas, reviviendo el proceso de repartición de las tierras y alentando el desarrollo de las organizaciones obreras, dio gran estímulo al sindicalismo. Morones había fundado la Confederación Regional Obrera Mexicana en 1919 y siguió dirigiéndola en los veinte con moderado éxito; pero en 1936 un abogado de izquierda, Lombardo Toledano, que

¹ Véase el vol. VI, pp. 275 ss.

había comenzado como colaborador de Morones, se convirtió en secretario de la recién formada Confederación de Trabajadores de México y, desde esta posición ventajosa, estableció en 1938 la Confederación de Trabajadores de América Latina que ejerció por algún tiempo una amplísima influencia. Lombardo Toledano negó siempre ser miembro del Partido Comunista; pero indudablemente gozó de su apoyo y trabajó en estrecha asociación con éste, actuando además como consejero de Cárdenas en cuestiones laborales. El Partido Comunista mexicano había sido fundado, originalmente, por el emisario japonés del Comintern, Sen Katayama, en 1922, bajo la dirección de un ciudadano norteamericano, B. D. Wolfe, y había ejercido una influencia menor. Wolfe y el famoso artista Diego Rivera fueron excluidos del Partido en 1930 y, desde entonces, fue un fiel reflejo de la variable política del Comintern, propugnando obedientemente por un Frente Popular después de 1935 y dando su apoyo a las reformas de Cárdenas a pesar de que éste brindó asilo a Trotsky en México, donde fue finalmente asesinado por un emisario de Stalin en 1940. Pero cuando Cárdenas dejó la presidencia y le sucedió Ávila Camacho en 1940, el movimiento revolucionario revivido por Cárdenas perdió su ímpetu y México se dedicó al desarrollo de su economía bajo el predominio burgués. Hubo un considerable desarrollo de la industria y el comercio y en el campo un desarrollo de las fincas grandes y medianas mediante la aplicación de mejores métodos de cultivo. Los ejidos, o comunas de los pueblos, que Cárdenas había desarrollado mucho, perdieron su carácter comunitario y se convirtieron simplemente en pueblos de agricultores con formas de propiedad y control individuales; y pronto los sindicatos empezaron a dividirse en facciones hostiles. Lombardo Toledano perdió poco a poco su influencia, hasta que fue expulsado por fin de la C.T.M. en 1948, conservando su posición a la cabeza de una Confederación de Trabajadores de América Latina apenas más que nominal, que había perdido toda influencia en su país de origen. Incluso en el climax de su influencia, el movimiento sindical mexicano había mantenido un aislamiento casi total de los campesinos, a los que no ayudó en sus luchas contra los terratenientes y la Iglesia —el mayor de todos los terratenientes. Por un tiempo, bajo la presidencia de Cárdenas, los trabajadores urbanos en México —o en todo caso los trabajadores calificados— lograron labrarse una posición ventajosa como aristocracia proletaria; pero desde 1940 perdieron terreno progresivamente, aunque en especial entre los trabajadores petroleros las condiciones siguieron siendo mucho mejores que antes de la nacionalización del petróleo hecho por Cárdenas en 1938.

Así, en la segunda mitad de los treinta, el sindicalismo mexicano fue por un corto tiempo el protagonista en un movimiento de amplitud

continental de los trabajadores industriales de América Latina, sólo para retroceder rápidamente cuando terminó la época de Cárdenas en 1940. En otros países, los movimientos obreros latinoamericanos siguieron un camino diverso pero, en general, perdieron terreno ante el fortalecimiento de los dictadores que eliminaron a la izquierda casi tan pronto como subieron al poder. En Chile, por ejemplo, en junio de 1932, cuando los efectos de la depresión mundial habían levantado un gran descontento popular, hubo por quince días una República definitivamente socialista, encabezada por el coronel Marmaduke Grove, quien derrocó al dictador Ibáñez y amenazó con introducir reformas de gran alcance, pero fue derrocado pronto por un golpe militar. El resultado, sin embargo, no fue una nueva dictadura sino la vuelta al poder de un ex presidente liberal, Alessandri, y una especie de gobierno constitucional bajo el cual se hicieron considerables progresos en el terreno social. La Revolución socialista en Chile fue obviamente prematura y la política de sus ministros era vaga y confusa; pero detrás de ello había un gran núcleo de opinión popular. A pesar de su fracaso, Chile tuvo en los treinta el Partido Comunista más fuerte y sólido de América Latina y pudo sostener además un vigoroso movimiento sindical que preparó el camino para la victoria decisiva del Frente Popular en 1938.

Fuera de México y Chile, el único país de América Latina que a fines de los treinta estaba gobernado por un régimen con cierto derecho a llamarse democrático era Colombia, que gozaba de un largo periodo de gobierno constitucional liberal, que duró hasta 1949. En los demás países de América Latina habían logrado instalarse en el poder una serie de dictadores: Trujillo en la República Dominicana y Getulio Vargas en el Brasil en 1930, Jorge Ubico en Guatemala en 1931, Tiburcio Carias en Honduras en 1933 y los coroneles Toro y Busch en Bolivia en 1937. Mientras tanto en el Perú, el movimiento aprista de Haya de la Torre, fundado en México en 1924, ganó gran influencia a pesar del exilio de su líder hasta la caída de Leguria en 1931 que le permitió regresar a su país donde fue electo Presidente pero fue inmediatamente derrocado por un golpe militar encabezado por Sandoz Carro, quien lo encarceló. Libertado cuando el asesinato de Carro en 1933, reanudó sus actividades pero fue perseguido nuevamente de modo que el movimiento aprista tuvo que continuar su labor clandestinamente, pero conservó suficiente fuerza como para resistir todos los esfuerzos por suprimirlo. Por fin, en 1946, un candidato moderado, Bustamante Rivero, fue elegido Presidente con el apoyo de los apristas y varios miembros del movimiento entraron en el gabinete, pero no lograron hacer mucho frente a la fuerte oposición a su política que oponían los círculos reaccionarios. Este estado de cosas duró hasta

1948, cuando se produjo otro golpe militar seguido de severas medidas contra el movimiento aprista.

Los apristas, como vimos en el volumen anterior de esta obra,² parecieron convertirse por un momento en la mayor fuerza de izquierda, no sólo en el Perú, sino en toda América Latina. Pero en ningún lugar, salvo el Perú, lograron convertirse en movimiento de masas. Los comunistas se le oponían fuertemente, primero porque eran partidarios de una coalición antiimperialista de las clases medias, los obreros y los campesinos para liberar a América Latina de la sujeción a la penetración extranjera, principalmente norteamericana, cuando los comunistas actuaban según el lema de "lucha de clases" e insistían en la necesidad de que el proletariado dirigiera el movimiento revolucionario y después porque, cuando los comunistas adoptaron una política de Frente Popular, ambos movimientos rivalizaron por la dirección de los mismos elementos. Los apristas, cuando los comunistas se les acercaron para solicitar su participación en el Frente Popular antifascista, respondieron que ellos ya constituían un movimiento de Frente Popular al que debían unirse los que no formaban parte para evitar la división de las fuerzas populares. Los apristas se oponían también enérgicamente a los diversos nacionalismos de los distintos Estados latinoamericanos, tratando de sustituirlos por una concepción más amplia de nacionalismo continental que trascendiera las barreras de la raza y el Estado y atrajera a elementos campesinos además de los obreros en la causa común contra los yanquis y sus dirigentes reaccionarios. Cuando el presidente Roosevelt modificó en 1933 la política tradicional de los Estados Unidos de imposición a América Latina y proclamó su política del "buen vecino", el consiguiente relajamiento de las tensiones con los Estados Unidos reaccionó contra la política aprista de hostilidad hacia aquéllos y la corriente de la opinión popular se alejó en parte del antinorteamericanismo para acercarse al nacionalismo de cada Estado individual. Los apristas, fuera del Perú, obtuvieron amplio apoyo entre los intelectuales, pero no entre las clases trabajadoras, a pesar del programa ampliamente socialista que postulaban. De hecho, estaban muy lejos, en sus doctrinas esenciales, de algo que pudiera constituir la base de un movimiento de masas ya que sus proyectos de socialización sobre una base de "internacionalización" tenía necesariamente un tinte poco realista y la masa de trabajadores rurales paupérrimos a los que pretendía atraer era totalmente incapaz de una acción unida en escala continental. Los apristas, además, eran altamente autoritarios por sus métodos y querían constituir un partido estrechamente ligado y sujeto a una fuerte disciplina centralizada imposible de imponer a los elementos ampliamente diversos que ellos trataban de agrupar en apoyo

² Véase vol. VI, pp. 278-9.

a una política común. Los comunistas, hasta 1935, sufrieron la misma desventaja; pero cuando adoptaron en ese año la política de Frente Popular se mostraron mucho más adaptables a las variables condiciones de los diversos países latinoamericanos y mucho más dispuestos a llegar a una transacción con las diversas tendencias nacionalistas. Los apristas, por tanto, perdieron en general en la competencia con los comunistas, excepto en el Perú, donde lograron constituir un movimiento ampliamente apoyado por los indios de los pueblos del campo, a los que apenas habían llegado anteriores intentos de organización. Los comunistas, en su odio hacia el APRA, se mostraron inclusive dispuestos en algunas ocasiones a colaborar con golpes militares putschistas en su contra y esta rivalidad se prolongó sin variación hasta los años de posguerra.

En algunos aspectos hay mucho en común entre la doctrina marxista revisada tal como la propugna en China Mao-Tse-Tung y las ideas de algunos revolucionarios latinoamericanos, aunque éstos no destacan como Mao la distinción entre la "nueva Revolución democrática" que fue su objetivo inmediato y la Revolución socialista que, según creía, le seguiría irresistiblemente. Esta similitud no es sorprendente ya que Mao planteó su doctrina como aplicable no sólo a China sino a todos los países que sufrieran regímenes coloniales o semicoloniales y el problema del papel de la gran masa de campesinos en la Revolución se presentaba en América Latina con las mismas posibilidades que en China. El comunismo latinoamericano, en sus primeras etapas, era principalmente un rompimiento con los partidos socialistas que sólo pensaban en las ciudades, tal como existían en los países relativamente avanzados, como la Argentina, el Uruguay y Chile y tropezó con grandes dificultades para establecer contacto con los campesinos, con los cuales nada tenían que ver estos movimientos socialistas. El Comintern, sin embargo, comprendió pronto que muy poco podía hacerse en América Latina sin el apoyo campesino, y los partidos comunistas, bajo sus órdenes, se dedicaron a establecer bloques unidos de trabajadores y campesinos bajo dirección y control proletarios. Cuando la cruzada anti-imperialista y antiyanqui en especial estaba en su climax, estas tácticas lograron crear movimientos comunistas o dirigidos por los comunistas importantes por un tiempo en algunos de estos países agrícolas. Al principio estos movimientos iban dirigidos contra los capitalistas nacionales y las clases medias lo mismo que contra los extranjeros; pero cuando los comunistas variaron decisivamente hacia el Frente Popular en 1935, resultó necesario reformar estos movimientos para incluir a las clases medias e inclusive a una parte de la clase capitalista nacional. Esto habría podido producir una intensificación de la campaña anti-imperialista; pero al mismo tiempo la política de la "buena vecindad" de Roosevelt contribuía mucho a aminorar el sentimiento antinorteamericano y

de hecho se trasladó el interés del antimperialismo al antifascismo, especialmente bajo la influencia de los acontecimientos de España, que tuvieron como consecuencia la adhesión de la opinión pública a la causa del gobierno republicano español y el estímulo de los sentimientos antinazis y antiitalianos. Los comunistas, en los años inmediatamente anteriores a 1939, se constituyeron en los líderes de una campaña antifascista continental, sólo para cambiar de línea abruptamente, como en el resto del mundo, después de la firma del Pacto Nazi-Soviético en 1939 para adoptar una nueva política antibelicista que tuvo que ser modificada no menos abruptamente cuando Hitler atacó a la Unión Soviética en 1941; el hecho que tan repetidos cambios de política perjudicaran tan poco a los comunistas latinoamericanos se debió principalmente a la lejanía de la lucha europea de las cuestiones que preocupaban fundamentalmente a sus simpatizadores potenciales.

Mao en China, como ya vimos, se convirtió en promotor de un movimiento nacional basado en la unión patriótica de las clases hostiles al imperialismo y, más específicamente, al Japón. Los comunistas latinoamericanos trataron de lograr una unión semejante de clases contra la penetración imperialista, simbolizada en este caso por la dominación y el apoyo yanqui a los elementos más reaccionarios en América Latina. Hasta aquí, ambas políticas eran semejantes; pero en América Latina se complicaba, mucho más que en China, por las diferencias raciales y por las divisiones del territorio en un gran número de Estados soberanos distintos. La dificultad racial, de hecho, no existía en la Argentina y el Uruguay; pero estaba agudamente presente en la mayoría del continente, incluyendo a México, donde creaba barreras definidas entre los trabajadores urbanos, en general de origen europeo, y la gran masa del pueblo, principalmente mestizos y con grandes núcleos de población puramente india o predominantemente negra. Los comunistas hicieron lo posible por ignorar las barreras raciales y proclamar su hostilidad a todas las manifestaciones de discriminación racial; pero esto, aunque resultó positivo en algunos países actuó en su contra en otros, incluyendo México, el Uruguay y la Argentina. No obstante, ejercieron un considerable efecto sobre la opinión aunque en general no lograron traducir su influencia en términos de organización de masas y muchos sindicatos que fundaron o llegaron a controlar sólo tenían una existencia fantasma y carecían de verdadero apoyo de masas. Su influencia intelectual fue mucho más allá de su fuerza organizada porque, como los apristas, presentaban un mensaje estimulante de hostilidad internacional a los elementos reaccionarios y represivos que seguían conservando en casi todos los países las llaves del poder económico y político. Pero, en comparación con los apristas, gozaban de la ventaja de poder aparecer como líderes de un movimiento de clase y como representantes

locales de una fuerza mundial de rebeldía contra la opresión capitalista y feudal. Cuando, a fines de los treintas, apoyaron al presidente Cárdenas en México y contribuyeron a crear, bajo la dirección de Lombardo Toledano, un movimiento sindical destinado a abarcar todo el continente desde su base mexicana, parecieron por un momento a punto de establecer una cruzada continental efectiva dirigida contra el imperialismo. Pero, como hemos visto, este movimiento se desintegró cuando los archimperialistas, los norteamericanos, entraron en guerra con las potencias fascistas; y no fue sino después de 1945 cuando la cruzada antimperialista pudo reanudarse con efectividad.

De todos los países latinoamericanos, sólo la Argentina y el Uruguay, con su población de ascendencia casi totalmente europea, mantuvieron continuamente partidos socialistas calcados de los europeos o mantuvieron formalmente relaciones con la Segunda Internacional antes de 1914. Al lado de estos partidos crecieron movimientos sindicales ligados en parte, en forma flexible, a los partidos socialistas y en parte influidos por el anarco-sindicalismo, como la F.O.R.A. en la Argentina y su contrapartida la F.O.R.U., en el Uruguay. En la Argentina, durante los veinte, la F.O.R.A. y la U.G.T. socialista tenían igualdad numérica; pero en 1929 un nuevo organismo, la C.G.T., absorbió a la U.G.T. y a algunos sindicatos de la F.O.R.A. y asumió una posición predominante, que conservó hasta después de la segunda Guerra Mundial. El Partido Socialista sufrió una secesión del ala izquierda después de la Revolución rusa y el Partido Socialista Internacional, que se separó entonces de la mayoría, se convirtió en Partido Comunista. En 1927 el Partido Socialista sufrió otra secesión, esta vez no de la izquierda, sino de un grupo encabezado por Antonio di Tomaso, que consideraba su política insuficientemente nacionalista; y el Partido Socialista Independiente así formado logró un gran éxito en las elecciones de 1930, cuando obtuvo 109 mil votos y eligió diputados al Parlamento contra 83 mil votos y un solo asiento obtenidos por el antiguo Partido Socialista. Esto sucedía en vísperas de la crisis económica mundial, que afectó duramente a la Argentina y produjo un importante movimiento de huelga, que el gobierno radical trató de sofocar. Este acto, junto con el agudo descontento provocado por la depresión, minó la popularidad del gobierno y en septiembre de 1930 los jefes militares depusieron y encarcelaron al presidente Uriburu. Los socialistas independientes apoyaron el golpe de Estado y votaron por su líder, el general Justo, como candidato a la presidencia, para la que resultó electo por 166 mil votos contra 126 mil en favor del candidato demócrata-progresista, quien recibió el apoyo del viejo Partido Socialista. Después los socialistas independientes perdieron terreno y se entregaron a disputas internas, que

terminaron con la disolución del partido. El Partido Socialista se benefició ampliamente al principio y logró aumentar el número de sus diputados electos a 46; pero, a su vez, se dividió por la cuestión del Frente Popular, planteado por los comunistas, y en las elecciones de 1938 perdió la mayor parte de sus asientos y se vio reducido a 7 diputados. Sufrió además otra división, cuando su Sector Juvenil se separó para formar el Partido Socialista de los Trabajadores, que participó en el Frente Popular dirigido por los comunistas. Después, durante la segunda Guerra Mundial, el viejo Partido Socialista recuperó gradualmente su influencia, pero siguió siendo un grupo minoritario, especialmente en relación con la fuerza creciente del nacionalismo argentino, que surgía con Perón como dirigente principal.

Mientras tanto en el Uruguay los comunistas se habían apoderado del antiguo Partido Socialista en 1920 y lo habían persuadido para que se afiliara al Comintern. Los disidentes formaron un Partido Socialista rival, que en 1931 se adhirió a la Internacional Laborista y Socialista, pero con muy escaso apoyo popular. La crisis mundial llevó en el Uruguay a un golpe de Estado mediante el cual el presidente, Gabriel Terra, se mantuvo inconstitucionalmente en el poder. Emilio Frugoni, el dirigente socialista, se refugió en la Argentina. En 1938, cuando el general Baldoni se postuló como sucesor de Terra, Frugoni se presentó como candidato en su contra pero fue derrotado ampliamente. Baldoni, sin embargo, en vez de seguir la política de Terra de sumisión a los intereses imperialistas norteamericanos, procedió a restablecer las leyes promulgadas por el presidente Batlle hacía veinte años: y recibieron el apoyo socialista por sus medidas. Un reaccionario intentó asesinar a Frugoni en la Cámara, pero no logró su cometido; y el Partido Socialista pudo proseguir libremente con sus actividades, sin la represión que sus semejantes sufrían en otros países.

En el Brasil, donde los comunistas habían sido el grupo predominante entre los trabajadores en los veinte y habían actuado en general clandestinamente como organización ilegal, se formó en 1929 un nuevo Partido Obrero que un año después había logrado la afiliación de 130 mil miembros. En 1934 este partido se adhirió a la Alianza de Liberación Nacional, una coalición formada para oponerse a la actitud cada vez más dictatorial de Getulio Vargas. En el verano de 1935 la Alianza emitió un Manifiesto donde solicitaba una política avanzada de reforma social y pocos meses después declaró una huelga general contra el régimen de Vargas. Vargas logró sofocar la huelga y respondió proclamando la disolución de todos los partidos políticos y el establecimiento de una especie de Estado corporativo, que se sostuvo hasta que Vargas renunció en 1945.

En vista de las amplias diferencias entre los distintos países es imposible hacer afirmaciones generales respecto a los movimientos socialistas en América Latina, no porque cada país siguiera su propio curso sin influencia de lo que ocurría en los demás sino porque las corrientes de opinión, por extendida que fuera su influencia, adoptaban muy diversas formas de acuerdo con el medio en el que tenían que expresarse.

Casi todas las corrientes doctrinales difundidas eran de origen europeo más que latinoamericano; pero en los treinta estas influencias europeas, excepto la de los comunistas, se debilitaron —en particular, la influencia anarcosindicalista, en un tiempo poderosa, que procedía principalmente de España e Italia y en cierta medida de Francia— a medida que afluan menos agitadores de esta tendencia a América Latina desde aquellos países y que considerables sectores se acercaban a los comunistas durante la Guerra Civil española. La socialdemocracia europea era también una influencia en declive, en general por las mismas razones; pero los comunistas experimentaron gran dificultad para que su concepción de una disciplina centralizada de partido fuera aceptada por los latinoamericanos, quienes estaban acostumbrados a formas mucho más flexibles de organización y especialmente a reconstituir sus sindicatos cada cierto tiempo para adaptarlos a las nuevas corrientes del sentimiento popular. El único movimiento de origen americano y de influencia continental era el APRA; pero éste no convenció a los comunistas ni simpatizó al nacionalismo particularista que ganaba fuerza progresivamente en numerosos países, principalmente en la Argentina, donde por un tiempo casi barrió al socialismo.

Cárdenas, en México, también siguió una política basada en las condiciones nacionales y, aunque era primordialmente un reformador agrario, colaboró estrechamente por cierto tiempo con los ambiciosos proyectos de Lombardo Toledano de constituir una organización sindical continental. Pero la Revolución Mexicana, después de Cárdenas, se convirtió cada vez más en un movimiento de desarrollo económico alentando el Estado cada vez más las formas burguesas de desarrollo económico mientras los elementos cooperativistas de los ejidos campesinos se iban perdiendo.

En general, pues, las principales características comunes a los movimientos obreros latinoamericanos eran la inmadurez teórica y la falta de lazos efectivos entre los trabajadores urbanos y los campesinos, que siguieron subsistiendo en general con niveles de vida muy bajos en comparación con los habitantes de las ciudades, de los que quedaban aislados en muchos casos también por barreras de raza y color. Estas barreras fueron rotas progresivamente a medida que avanzaba la industrialización, especialmente en los distritos mineros. Pero excepto en la

Argentina el número de trabajadores industriales era en los treinta muy pequeño en comparación con el de los campesinos que, salvo donde habían sido atraídos por el comunismo o, en el Perú, por el movimiento aprista permanecían todavía desorganizados y con frecuencia eran juguetes en manos de los jefes reaccionarios de la Iglesia católica.

LA UNIÓN SOVIÉTICA DESDE PRINCIPIOS DEL
PRIMER PLAN QUINQUENAL

En el sexto volumen de este estudio la relación de acontecimientos en la Unión Soviética se detuvo en vísperas del primer Plan Quinquenal y de la colectivización en masa de las propiedades campesinas. Vimos entonces cómo Stalin eliminó primero a Trotsky y luego a Zinoviev y Kamenev de sus posiciones en el Partido Comunista y después se lanzó contra Bujarin y la antigua ala derecha. Vimos cómo Stalin logró consolidar su control sobre el partido, convirtiéndose virtualmente en dictador de su política, con una Oficina Política sumisa y un Comité Central dispuesto a hacer su voluntad. Vimos, además, cómo después de aparecer contra Trotsky como opositor a una planificación amplia y un ritmo más rápido de industrialización, Stalin súbitamente cambió de posición y se convirtió en el principal partidario de las medidas que hasta entonces había despreciado; y cómo varió igualmente en la política agraria, lanzando la gran campaña en favor de la colectivización y el ataque a fondo a los llamados "kulaks".

Hay que considerar ahora, con cierto detalle, lo que suponía realmente esta nueva política y cómo fue puesta en práctica. Es cuestión generalmente aceptada que, durante los veinte, después que terminó la Guerra Civil y se implantó la Nueva Política Económica, se había producido un marcado relajamiento de las tensiones internas y el pueblo ruso, aunque todavía muy pobre, había conseguido vivir un poco mejor y bajo un régimen mucho menos estricto que en los años que siguieron a 1917. Stalin, de hecho, no estuvo durante estos años en la extrema derecha del partido. No había hecho eco al consejo de Bujarin a los kulaks de aprovechar la N.E.P. para enriquecerse, ni se había opuesto positivamente a la industrialización. Pero fue contrario a la idea de Trotsky de impulsar el desarrollo industrial al máximo y se colocó contra la tesis de Trotsky de que la única base posible para una economía socialista era la alta producción: una producción mayor de la que podía lograrse con el más avanzado capitalismo y que la única manera de superar el antagonismo entre ciudadanos y campesinos era producir una mayor oferta de bienes industriales para intercambiarlos por los productos del campo. Trotsky, al afirmar esto, había reconocido que la productividad rusa tardaría mucho tiempo en alcanzar a la de los países capitalistas más avanzados y había llegado a la conclusión de que las perspectivas del socialismo en la Unión Soviética

dependían de la extensión de la revolución a uno o más de estos países y que el "socialismo en un solo país" era una política impracticable y contradictoria. Trotsky había atacado a Stalin como traidor a la causa de la revolución mundial al declarar como objetivo practicable el "socialismo en un solo país". Stalin también se esforzó por industrializar a Rusia tanto como consideraba posible; pero, en su disputa con Trotsky, lo había acusado de hostilizar al campesinado presionando demasiado sobre éste a un ritmo muy forzado, sin la afluencia de préstamos de capital del extranjero. Stalin se había aferrado a la N.E.P. y no había querido alentar la lucha de clases en las aldeas en vista de la débil situación de la industria soviética y la dependencia de las ciudades de los suministros agrícolas, especialmente de los campesinos más prósperos. De acuerdo con el Plan Quinquenal, la producción industrial básica de la Unión Soviética creció en una proporción sin precedentes. El carbón, el acero, el petróleo, la electricidad eran producidos en niveles que excedían en mucho a los contemplados en los primeros estadios del Plan, marcados por una gran concentración de la producción de bienes de capital, dando una atención secundaria a los bienes de consumo, al transporte e inclusive a la vivienda, que escaseaba terriblemente en los centros de población en rápido crecimiento. La intención era avanzar lo más rápidamente posible en las industrias básicas, que formaban el fundamento necesario de la fuerza industrial; una vez elevadas éstas a un nivel suficiente, pero sólo entonces, sería posible responder a las demandas de los consumidores de un nivel de vida más alto. No se excluía tampoco de los cálculos que las industrias básicas producirían lo esencial para aumentar la fuerza bélica ni que la primera necesidad era fortalecer lo más posible a la Unión Soviética contra los posibles ataques armados de las potencias capitalistas, que seguramente estarían dispuestas a atacarla.

La situación en la Unión Soviética, antes de la campaña de colectivización agrícola, era sin duda muy precaria e inestable. La rápida industrialización, en la situación existente de la industria, parecía requerir una importación en masa de bienes de capital, que sólo podían pagarse mediante exportaciones muy incrementadas de materias primas —especialmente granos—. Pero la redistribución de las propiedades rurales que siguió a la Revolución había destruido la base de las exportaciones de trigo en la escala anterior a la guerra. La agricultura rusa en los días del Zar había sido en general exclusivamente de subsistencia y las grandes exportaciones procedían principalmente de las grandes fincas capitalistas y no de la mayoría de los agricultores. La Revolución había dividido estas grandes propiedades; y los campesinos que las ocuparon deseaban naturalmente consumir una proporción cada vez mayor del producto en vez de entregarlo para su

exportación o para el suministro de las ciudades. Aun cuando las cosechas eran buenas, el gobierno tenía dificultades para persuadir a los campesinos de que se desprendieran del excedente de granos; y cuando eran malas el excedente para la exportación desaparecía completamente y algunas veces era incluso necesario utilizar el escaso cambio exterior para importar granos del extranjero. Además, si el gobierno recurría a medidas forzosas para presionar a los campesinos, mediante requisiciones o compra a precios demasiado bajos, los campesinos podían responder, no sólo negándose a entregar sus cosechas, sino restringiendo la producción de granos y dejando la tierra inculta o atendiendo a las cosechas con destinos industriales, que se pagaban a mejores precios. En 1926-27 al gobierno le había ido relativamente bien y se había logrado una considerable exportación de granos; pero en 1927-28 hubo una aguda baja en la cantidad de granos que pudo recoger y su capacidad para comprar bienes industriales en el extranjero fue muy reducida, con graves efectos sobre el desarrollo industrial.

La seriedad de la crisis era generalmente reconocida: la cuestión era cómo resolverla. Una política posible era ayudar a los campesinos, ofreciéndoles precios mucho más altos o permitiéndoles vender su producción en mayor volumen en el mercado libre. Esta política, sin embargo, beneficiaría principalmente a los campesinos más acomodados, que poseían una gran parte del excedente, y fortalecería la tendencia ya existente en las aldeas al desarrollo de una economía "kulak" basada en la renta de la tierra por los campesinos más ricos a los más pobres y el empleo creciente de mano de obra asalariada.

El término kulak en la Unión Soviética era, entonces, un término elástico. Originalmente parece haber significado un campesino relativamente acomodado que empleaba mano de obra aparte de su familia. Era, pues, un "explotador" —un capitalista de hecho o en potencia— porque extraía utilidades empleando mano de obra asalariada. Era además, en la mayoría de los casos, un agricultor con tierras arrendadas además de la parcela que le pertenecía —generalmente de una o más parcelas de tierra demasiado pequeñas o demasiado pobres para permitir a los propietarios cubrir sus necesidades de subsistencia. Podía ser, además, comerciante con la producción de otros hombres, comprando el grano que éstos deseaban convertir en dinero y capaz de aprovechar las considerables fluctuaciones de los precios de acuerdo con las estaciones. Pero podía ser un kulak aun sin estas características, si era culpable del pecado de emplear la ayuda inclusive de un solo hombre para su beneficio —cuando menos si lo hacía regularmente y no sólo en época de cosecha—. Pero la definición no era clara; no se sabía con exactitud qué convertía a un campesino medio en un kulak y podía

calificarse de kulak, como veremos, a unos u otros de acuerdo con la política de los que estaban en el poder y de sus vecinos. Los dirigentes soviéticos no estaban dispuestos a estimular la producción permitiendo a los campesinos más prósperos poner condiciones a las ciudades y posiblemente provocar una vuelta del capitalismo; Stalin, hasta 1929, había seguido una línea intermedia, entre Trotsky a la izquierda y Bujarin a la derecha.

Entonces, súbitamente, después de eliminar a sus críticos, Stalin cambió de línea, se declaró en favor de una drástica revisión de las inversiones de capital estipuladas en los primeros proyectos del Plan Quinquenal y se entregó a la gran campaña de colectivización agrícola. En lugar de limitar esa colectivización cuando más al 20 o 25 % de las parcelas en los cinco años siguientes, ordenó que se emprendiera la colectivización a la mayor velocidad posible y envió al campo una multitud de agentes con órdenes de hacer lo que estuviera a su alcance para ponerla en ejecución de inmediato. No hay duda que este cambio de línea se debió a la acumulación de productos en gran escala que los campesinos estaban haciendo. Los campesinos, en especial los más acomodados, se negaban a vender su grano a no ser que se aumentaran considerablemente los precios y las ciudades se encontraban ante la perspectiva del hambre. Una respuesta habría sido conceder los altos precios que los campesinos pedían; otra declarar la guerra a los kulaks y tomar posesión por la fuerza del producto de la cosecha. Pero era necesario evitar una situación en la que los campesinos se unificaran en la lucha contra el gobierno. Había que lograr el apoyo de los campesinos más pobres para la política oficial. Esto podía hacerse, pensaba Stalin, si se les ofrecía la perspectiva de apoderarse de la tierra y ganado de los kulaks, que se reunirían en las nuevas fincas colectivas.

Los dirigentes soviéticos tenían una profunda confianza en la superior productividad de la agricultura colectiva, que posibilitaría medidas en gran escala en la aplicación de maquinaria y la adopción de mejores técnicas de producción. Ya habían tratado de demostrar esto estableciendo, principalmente en tierras vírgenes, grandes fincas del Estado, especialmente dedicadas a los granos; pero sólo habían cubierto así una pequeña parte del total de tierras cultivadas. Los resultados, además, habían sido desalentadores, en gran medida porque habían faltado los agricultores competentes para dirigir tan vastas empresas agrícolas y también en parte porque la industria soviética no podía suministrar la maquinaria necesaria. Esto no había destruido, sin embargo, la fe marxista profundamente arraigada en las virtudes de la agricultura en gran escala; pero se comprendía la imposibilidad de extender con rapidez estas fincas estatales o de transformar las parcelas

individuales en grandes fincas estatales ante la enorme cifra de la población campesina, en relación con el número de agricultores, que emplearían esas fincas. Ya se había extendido con bastante rapidez, no obstante, el cooperativismo en la agricultura, para la compra de implementos agrícolas, para la venta de los productos y el suministro de crédito, aunque no para el cultivo en forma cooperativa; y era seguro que esta experiencia de cooperativismo debía haber preparado a muchos campesinos para una extensión de los métodos cooperativos al terreno de la producción.

En consecuencia, para evitar esta nueva crisis de "tijeras", se decidió emprender un amplio plan de colectivización agrícola sobre la base de cooperativas, estableciendo fincas cooperativas en las cuales se invitaría a los campesinos a reunir sus tierras y su trabajo y a constituir un acervo común de implementos de trabajo y de ganado y aun, si así lo querían, a ir más allá y crear comunas en las que vivirían y comerían en común —aunque se esperaba que la mayoría preferiría no llegar a esto y conservar sus casas y sus condiciones de vida independientes. Los koljoses debían ser, pues, en la mayoría del territorio, más bien *artels* cooperativos, análogos a los *artels* de productores artesanales que ya prevalecían en la industria en pequeña escala, que comunas plenamente constituidas; pero gozarían de todas las ventajas de la producción en gran escala auxiliadas, en lo posible, por el suministro de maquinaria a través de las Estaciones de Tractores, que se fundarían bajo control del Estado. Además, se les daría un buen impulso inicial al permitirseles comenzar con la apropiación de las tierras, ganado e implementos de los kulaks que serían desposeídos por la fuerza y expulsados de sus tierras, negándoseles inclusive la participación como miembros de los koljoses. Se abrigaban grandes esperanzas de que el cambio diera rápidamente como resultado un gran incremento en la producción total y que sería posible lograr esto al mismo tiempo que una disminución considerable del número de personas dedicadas a la agricultura y un aumento de la mano de obra dedicada a la industria.

Algunos de estos efectos se produjeron; otros no. Hubo una gran corriente hacia las ciudades en busca de ocupación en las industrias; porque muchas aldeas tenían mucha más población de la que podía hallar empleo en la tierra salvo en las estaciones más activas del año, y la industrialización, apresurada mediante el Plan Quinquenal, pedía un gran aumento en la fuerza de trabajo dedicada a la industria. Por otra parte, no hubo un rápido aumento en la producción por hectárea de la tierra cultivada y disminuyó enormemente el número de cabezas de ganado. Esto se debió a los métodos adoptados en la colectivización y a la amplia extensión que se dio al término kulak.

Si había que desposeer a los kulaks y apoderarse de sus tierras para formar fincas colectivas, la tentación de inflar el número de aquéllos y de aumentar así la extensión de las fincas colectivas fue obvia y, bajo la presión de las hordas de ardientes jóvenes comunistas que fueron enviados a las aldeas para imponer la colectivización, es indudable que se impuso a muchos que no eran muy favorables a ella y que el término de kulak se atribuyó a campesinos medios que no eran culpables de explotación sino, simplemente, de un disgusto individualista por la reglamentación. El proceso en general debía ser voluntario, sin duda; pero esto no significaba que cualquier campesino pudiera rechazarlo si una mayoría en su aldea, o en un grupo de aldeas eran favorables a la colectivización o podían ser inducidos a votar en su favor mediante la propaganda. Era un hecho que un supuesto kulak no podría oponerse a la decisión de sus vecinos ni, si era considerado kulak, tener siquiera el derecho a participar en esta decisión.

Los que fueron desposeídos, como kulaks, sufrieron terriblemente, como es bien sabido. Sacados de sus tierras como si se tratase de rebaños, sus propiedades fueron confiscadas, y desterrados a remotos campos madereros y a lugares donde se efectuaban proyectos de construcción como los canales gigantes, fueron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud y sometidos a un tratamiento tan inhumano que muchos miles de ellos y sus familias perecieron de manera miserable. Nadie —o casi nadie— demostró compasión por ellos ni se preocupó por averiguar qué les sucedió después de ser expulsados de sus tierras. No parecía importar cuántos morían en medio de tantas dificultades —y cuántas de sus familias con ellos—, porque ¿no eran acaso "enemigos de clase" que, si se les hubiera permitido sostenerse, habrían conducido a la Unión Soviética de nuevo al capitalismo? y ¿tenían estos "enemigos de clase" los más fundamentales derechos? Los comunistas sostenían que no.

El resultado inmediato habría podido preverse. Las desgraciadas víctimas mataban a su ganado antes de entregarlo y el número de caballos, vacas, ovejas, cabras y puercos decreció precipitadamente en la Unión Soviética, provocando una escasez general de leche y de carne.¹ Entre los que fueron expulsados sin escrúpulos, además, había una gran proporción de los agricultores más capaces y adelantados; esto significó que las nuevas fincas colectivas se iniciaron con una grave escasez de personas capaces de prestar servicios competentes de administración y se produjo como consecuencia una racha de ineficacia en la dirección.

Estos efectos marginales de la colectivización precipitada fueron tan desastrosos que Stalin tuvo que emitir su famoso mensaje "El

¹ Sobre la escasez de trigo que se produjo en 1931-32, véase pp. 223-4.

vértigo del éxito", donde pedía un alto, subrayando una vez más que la colectivización debía ser voluntaria y atribuyendo la culpa al exagerado celo de los subordinados en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Cuando se llamó al alto, muchos de los que habían acudido a las fincas colectivas salieron nuevamente y reanudaron la producción individual; y la colectivización fue modificada permitiendo a los campesinos miembros conservar pequeñas parcelas en su posesión y laborarlas aparte de su trabajo en las fincas colectivas y permitiéndoles además conservar como propiedad privada un pequeño número de cabezas de ganado —en el entendido de que no llegarían a convertirse en kulaks. Pero, tras un breve plazo, el proceso de colectivización recobró su ritmo, hasta que la mayoría de las tierras cultivadas de la Unión Soviética quedaron controladas por las fincas colectivas, aseguradas legalmente de que esa forma de tenencia duraría ilimitadamente. La tierra se convirtió así, no en propiedad del Estado soviético, sino en posesión a perpetuidad de los miles de colectividades sobre la base de la propiedad cooperativa; y, como no había suficiente trabajo en estas fincas colectivas para proveer ocupación de tiempo completo a todos los miembros, muchos pudieron dedicar gran parte de su tiempo a sus pequeñas parcelas y al ganado que lograron conservar y otros muchos abandonaron el campo para buscar empleo en las ciudades.

Este movimiento de mano de obra de las aldeas a las ciudades y de la agricultura a la industria era indudablemente positivo para el avance de la producción soviética. Había, por supuesto, un enorme excedente de población en el campo, que requería otra ocupación y la industria, que había sido afectada por un grave desempleo antes de ponerse en vigor el Plan, necesitó pronto esta fuerza de trabajo. En la industria, como en las fincas, había una gran escasez de trabajadores calificados y de expertos y administradores técnicamente entrenados; porque la Unión Soviética estaba todavía en los comienzos de sus amplias actividades en el terreno de la educación y el entrenamiento técnicos. Los inmigrantes de las aldeas eran campesinos no habituados a la disciplina de la fábrica e incapaces de cubrir las capacidades necesarias —al menos no antes de ser entrenados—. Pero se hizo un prodigioso esfuerzo, para apresurar el ritmo del entrenamiento y asegurar que los antiguos campesinos y sus hijos gozaran ampliamente del mismo y tuvieran las mismas oportunidades —cuando no mejores— que las demás clases, con excepción del proletariado industrial, de aprovecharlo. En este aspecto, en todo caso, la Unión Soviética se mostró ansiosa de promover al máximo la formación de un nuevo grupo dirigente integrado principalmente por elementos de origen proletario o campesino y prefirió estos elementos a los que podían ser sospechosos por sus orígenes de clase.

Esta preferencia, sin embargo, fue aunada a una clara variación en la tendencia de los años anteriores al Plan en el sentido de disminuir las diferencias de remuneración y mantener al menos una relativa igualdad económica como objeto socialmente deseable. Stalin, también en esto, se convirtió en el principal exponente de la nueva doctrina, que según él derivaba de Marx. Marx, en su *Crítica al Programa de Gotha*, había afirmado que entre el capitalismo y el comunismo habría un periodo de transición durante el cual la fórmula correcta para la distribución de los ingresos sería no "de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades", si no más bien "de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus servicios", estableciendo así que la desigualdad en la remuneración era adecuada a la etapa de transición. Esta fórmula podía significar evidentemente cosas muy diferentes, según el patrón utilizado para medir los servicios. Porque ¿cómo podrían medirse servicios muy diversos en relación unos con otros? Era sencillo concluir que el trabajo por piezas, más que por tiempo, donde podía medirse así, era la mejor forma de remuneración. Pero eso no contribuía a resolver el problema de los niveles relativos de remuneración a personas dedicadas a oficios totalmente diversos. Aun cuando fuera posible establecer las relatividades justas según los diferentes tipos de trabajadores manuales ¿cómo iban a relacionarse estos salarios a los sueldos de los supervisores, técnicos, gerentes y administradores? En los primeros años de la Revolución, se habían impuesto límites muy estrictos a lo que podían ganar los miembros del Partido Comunista, sin tener en cuenta la importancia de sus trabajos. Marx había elogiado mucho, en efecto, a la Comuna de París por no pagar a los miembros del gobierno salarios mayores que los de los trabajadores, rompiendo así con la idea de que los miembros del gobierno y la administración constituyeran una clase superior de privilegiados apartados de sus súbditos. Pero ¿eran estas prácticas consecuentes con la necesidad urgente de la Unión Soviética de ofrecer el mayor aliento posible para aumentar la producción? ¿No era más bien necesario ofrecer los mayores estímulos posibles al aumento de la producción y a los servicios eficaces? y ¿no suponía esto aumentar más que reducir las desigualdades existentes de remuneración, tanto entre los individuos como entre los grupos? Stalin sostenía que así era y, mucho antes del movimiento estajanovista de 1935, el trabajo por piezas se había extendido considerablemente y los trabajadores rápidos recibían altos salarios por dirigir a sus colegas más lentos. En efecto, el nuevo elemento introducido en el estajanovismo no era el trabajo por piezas en términos altamente favorables para el trabajador rápido sino el suministro de ayuda especial al estajanovista para permitirle concentrar todos sus esfuerzos en su tarea esencial, logrando así hazañas pro-

ductivas que habrían sido totalmente imposibles sin esa ayuda. Además, al lado de la deliberada ampliación de las diferencias de salarios se produjo una modificación de los estrechos límites impuestos hasta entonces a los sueldos de los que desempeñaban trabajos considerados superiores, hasta que empezó a discutirse si la distribución de los ingresos era menos desigual en la Unión Soviética que en los países capitalistas más avanzados. Quedaba por supuesto el hecho de que en la Unión Soviética nadie podía ser dueño de los medios de producción ni hacer fortuna empleando mano de obra asalariada; pero en cuanto a los ingresos percibidos no había de hecho una gran diferencia en la distribución entre la Unión Soviética y la Gran Bretaña, o siquiera los Estados Unidos.

Esto se produjo, no tanto porque Stalin tuviera una preferencia personal por la desigualdad pronunciada, sino porque la política soviética, bajo su influencia, se dirigía casi exclusivamente a la promoción de la más alta producción posible. La tarea de la Unión Soviética, como él la concebía, era primero alcanzar a los países capitalistas más avanzados en la producción total de bienes industriales importantes como el carbón, el acero, el petróleo y la electricidad —y, quizás por encima de todo, los productos químicos— para después dedicarse a superarlos en la producción *per cápita*. Cuando se puso en vigor el Plan Quinquenal, se prometió no sólo un gran aumento en la producción total —al menos en la industria pesada—, lo que se logró en efecto, sino también una baja de los precios que seguiría a la reducción en los costos de funcionamiento debida a una más alta productividad —lo que no se logró de ninguna manera en las primeras etapas. La razón de que esto no se lograra se debió en parte a la necesidad de emplear tanta mano de obra nueva, no habituada al trabajo de fábrica, y tantos supervisores y administradores poco entrenados y también, por otra parte, a que las nuevas plantas industriales tardaban mucho más de lo que se había esperado en estar listas para empezar a producir y que, con frecuencia, cuando una estaba lista, otra, de la que dependía para las materias primas o los componentes no lo estaba aún y había que esperar por ella. Esto es válido, por supuesto, más para el primer Plan Quinquenal que para los siguientes; porque cuando éstos se pusieron en vigor, muchas de las principales dificultades habían pasado y era posible planificar con mayor posibilidad de enfoque realista. En las primeras etapas, sin embargo, los trastornos de la dentición fueron graves; y el aumento en la producción total se logró sólo mediante un gran aumento en el número de la fuerza de trabajo dedicada a la industria. La esperada caída en los costos se evitó también por otros dos factores, estrechamente interrelacionados —un agudo aumento en el presupuesto de salarios, debido en parte a la creciente desigualdad y en

parte al aumento de los precios, y un rápido incremento en la circulación de la moneda. Ésta tenía que aumentar, por supuesto, si se pagaba más en salarios; pero creció más que si sólo hubiera intervenido este factor, a medida que el alcance de la más alta producción posible, casi independientemente del costo, se aceptó como objetivo supremo.

Hemos visto que el Plan Quinquenal, en sus proyectos preliminares, elaborado antes del cambio fundamental de política, era en general muy moderado, proyectando sólo un modesto incremento en la producción industrial. Cada revisión, sin embargo, elevaba sus metas, que subieron aún más cuando se propuso realizarlo en cuatro años en lugar de cinco. Estas primeras metas no se alcanzaron, en su mayoría, ni siquiera en las industrias pesadas, en las que se concentró principalmente el Plan; y en las industrias más ligeras, de consumo, ni siquiera se logró una aproximación a lo proyectado. Porque, aunque el Plan se lanzó en condiciones que parecían altamente favorables, tanto en el país como en el extranjero, de hecho tuvo que hacer frente a diversos factores muy adversos que hubieran podido hacerlo naufragar totalmente. El primero de estos factores fue la depresión mundial, que se produjo con mayor fuerza en relación con los precios mundiales de los alimentos y de muchas materias primas claves. Esta baja modificó drásticamente las condiciones comerciales de la Unión Soviética como exportadora principalmente de materias primas e importadora potencial de bienes de capital. Las importaciones que se proyectaba hacer tuvieron que disminuir para ajustarlas al reducido acervo de cambio exterior; y el desarrollo industrial tuvo que tender al mayor uso de materias primas producidas en el país. A la larga esto puede haber sido una bendición; porque obligó a la Unión Soviética a intensificar la producción de materias primas, que constituían en el país grandes recursos sin explotar. No obstante, por el momento fue un factor considerable para restar rapidez al proceso. En segundo lugar, la ampliación del Plan se había basado en supuestos optimistas acerca de la producción agrícola. Nadie había anticipado la matanza en masa de las cabezas de ganado ni la consecuente escasez de leche y de carne. Pero por encima de todo esto se produjo la desastrosa mala cosecha de 1931-32, que llevó el hambre a Ucrania y otras regiones afectadas y produjo una grave escasez en todo el país. Es verdad que esta terrible calamidad había sido precedida por dos años de cosechas bastante buenas; pero éstas habían sido consumidas y, cuando se produjo el desastre, no había existencias acumuladas para hacerle frente. En las regiones afectadas muchos miles —quizás hasta millones— murieron de hambre. Esto no podía dejar de tener efecto en las ciudades y en la industria; porque los límites a la industrialización eran fijados, en último extremo, por la oferta de productos agrícolas. No es sorprendente que se

hicieran grandes esfuerzos por ocultar al pueblo el desastre y por impedir que lo conociera el resto del mundo ni que se negara con vehemencia, alegando que lo que había ocurrido no era un fenómeno de hambre debido a causas naturales, sino más bien una escasez considerable producida por la oposición deliberada de los kulaks y otros contrarios a la colectivización, que habían hecho lo posible por evitar la siembra en los campos o habían dejado que el grano se pudriera sin recolectarlo. No se negó que, en aquellos lugares donde se suponía que esto había ocurrido, se dejó sufrir a las regiones consideradas culpables de sabotaje sin hacer muchos esfuerzos por aminorar sus sufrimientos, aun cuando muchas personas murieran efectivamente de hambre. Los Webb, por ejemplo, en su obra sobre *Soviet Communism* recurrieron a esta explicación, negando que se hubiera producido una racha de hambre en el sentido corriente de la palabra y afirmando que la resistencia masiva a la colectivización había sido la causa principal de la aguda escasez en Ucrania y otras regiones. Mostraron muy poca compasión por los afectados y acusaron a los líderes nacionalistas, como el ucraniano Mazepa, exiliado en París, de haber contribuido al "hambre" por motivos políticos. Puede ser cierto que la escasez se debiera principalmente, o inclusive en gran medida, a la resistencia de los kulaks y de otros campesinos a la colectivización forzosa; pero ni siquiera esto justifica la insensibilidad con que se trató el problema, ya que la mayoría de la resistencia había sido provocada por la imposición de un proceso que se suponía voluntario.

No obstante, el Plan capeó la tormenta, y la Unión Soviética logró un aumento masivo en su producción de industria pesada, en parte al precio de abandonar sus objetivos en las industrias ligeras y de posponer la mayoría de sus proyectos para el mejoramiento de los ferrocarriles demasiado recargados y para dar vivienda adecuada a los grandes núcleos de nuevos habitantes de las ciudades. El Plan Quinquenal había sido elaborado para posibilitar el mejoramiento en los niveles de vida, aunque a un ritmo menor del que se imprimiría a la expansión de la industria pesada. Pero, de hecho, el suministro de muchos bienes de consumo disminuyó en la realidad, a pesar del creciente número de consumidores urbanos y es dudoso que, para la mayoría del pueblo, los niveles de consumo subieran en absoluto. Como recurso para resolver la crisis, se desarrolló una elaborada estructura de precios diferenciales para diversos grupos de consumidores, dando la preferencia a los trabajadores manuales, a los que se permitía comprar un mínimo de productos esenciales a precios especialmente bajos, mientras otros grupos consumidores tenían asignaciones mucho más bajas o eran obligados a comprar a precios mucho más altos. Estas diferenciaciones en la estructura de los precios impedían determinar en qué medida

subió el costo de la vida durante el Plan Quinquenal; pero no puede negarse que, en las ciudades lo mismo que en el campo, muchos consumidores sufrieron gran escasez. En cuanto a los alimentos, no obstante, se hizo un gran esfuerzo por abrir restaurantes y cafés en las fábricas, donde los trabajadores pudieran comprar comidas bastante nutritivas a precios relativamente bajos; y esto disminuyó considerablemente la presión sobre el proletariado industrial, aunque no contribuyó a ayudar a los campesinos y no hizo mucho por el resto de la población no industrial.

Es sorprendente, cuando se reflexiona retrospectivamente sobre el problema, considerar cuántos economistas confiaban en esos días en que el Plan Quinquenal fracasaría e inclusive que la estructura total de la Unión Soviética se desplomaría casi de inmediato. Recuerdo vivamente haber leído un libro del profesor Von Mises donde declaraba explícitamente que no podía existir una estructura semejante —y mucho menos mantenerse en forma permanente— porque violaba totalmente todos los principios y leyes económicas racionales. El profesor Von Mises entendía por supuesto como "racional" el obedecer a las leyes del mercado —lo que yo no considero en absoluto "racional". Pero la cuestión está en que el profesor Von Mises así lo entendía y no podía creer en la posibilidad de ninguna estructura construida en desafío a estas leyes —y que esta opinión era ampliamente compartida. Los propios dirigentes soviéticos tenían buenas razones para saber que había algunas leyes del mercado que la Unión Soviética no podía evadir. No podía, por ejemplo, importar más de lo que podía pagar con sus exportaciones, a no ser que pudiera convencer a los extranjeros a prestarle el dinero —y sus intentos de persuadirlos de hacerlo mediante concesiones a los mismos habían fracasado ostensiblemente. Cuanto menos creyera en las leyes de la economía de mercado, más estrictamente tenía que observarlas en sus tratos con el extranjero. ¿No se desprendía de esto que también tendría que seguir las en sus procesos internos, reduciendo sus inversiones a lo que podían absorber sus consumidores de inmediato y abandonando así las esperanzas de un rápido desarrollo industrial? En cierto sentido, así era; pero lo que no conseguían ver ciertos economistas era que le quedaba la alternativa de fijar una alta meta de inversión, obligando así a sus ciudadanos a limitar su consumo a lo que quedaba una vez alcanzada esta meta. Los que redactaron el Plan Quinquenal en la forma que adoptó definitivamente actuaron en este espíritu. Asignaron una gran producción de los recursos productivos a proyectos de desarrollo que sólo rendirían un producto diferido en bienes y condenó a sus ciudadanos a vivir lo mejor que pudieran con los bienes de consumo disponibles de acuerdo con el programa de inversiones. La elevación o descenso de los niveles de vida depen-

dería de la capacidad para aumentar la producción al mayor nivel posible en los sectores que carecían casi de capital si éste se dedicaba a las industrias pesadas. A pesar de todo, debía haber suficientes alimentos para mantener a los productores con buena salud; pero no podía dedicarse mucho capital a la agricultura, a pesar de su situación clave en la lucha por el éxito. La esperanza de un aumento en la producción agrícola descansaba en el éxito de la colectivización; pero la colectivización misma requería una gran inversión en maquinaria agrícola —especialmente tractores— sin la que no podría realizarse la agricultura en gran escala. Por algún tiempo no habría suficientes tractores y debía hacerse el mayor esfuerzo para asegurar que los existentes rindieran lo más posible, concentrándolos en Estaciones de Tractores que pudieran utilizarlos al máximo.

Los bolcheviques tenían que enfrentarse, de hecho, a una alternativa capital: tratar de inducir a los campesinos a producir más mediante los estímulos tradicionales —lo que impediría una alta tasa de inversión en la industria y fortalecería considerablemente a los campesinos más acomodados— o agrupar a los campesinos, o a la mayoría de ellos, en sociedades cooperativas para trabajar en común, con la ayuda de la mayor mecanización que pudiera aplicarse, en la esperanza de que la mayor productividad del trabajo colectivo elevaría la producción total y dejaría disponible al mismo tiempo la mano de obra campesina excedente, para dedicarla a la industria. La segunda de estas políticas fue la seleccionada, con el resultado que ya hemos observado. Mucho antes del hambre, el número de familias en fincas colectivas, que había llegado a los 14 millones, se redujo a 6 millones después de las declaraciones de Stalin en "El vértigo del éxito", pero empezó a crecer de nuevo rápidamente y a principios de 1933 había alcanzado nuevamente los 14 millones, o sea el 80 % del total de familias campesinas, con un total de más de 200 mil fincas colectivas que cubrían las dos terceras partes del total de territorio dedicado al cultivo de granos. A éstas había que añadir las fincas del Estado, mucho mayores pero también mucho menos numerosas, que en 1933 empleaban a un millón de trabajadores y cubrían una décima parte del área dedicada al cultivo de granos. Además, éstas poseían más de la mitad del número total de tractores. Las fincas estatales incluían cerca de 500 "fábricas de grano"

gigantescas, como se las llamaba, y un número mucho mayor de pequeñas empresas productoras de cosechas especializadas, como el té, el tabaco o la remolacha, o dedicadas a la cría de ganado. Económicamente, no eran muy eficientes y se criticaba mucho su mala administración; pero reforzaron considerablemente las existencias de grano del Estado en un periodo crítico, aunque en 1932 se afirmó que habían sido establecidas en una escala demasiado enorme para que su administración

fuera eficaz y sin tener en cuenta las consecuencias de utilizar la tierra para la producción continua de un solo producto, como el trigo, de modo que muchas fueron pronto divididas en unidades más fáciles de administrar y se dedicaron a cultivos mixtos o, en todo caso, a la diversificación agrícola mediante un sistema rotativo.

El efecto combinado de las fincas estatales y las fincas colectivas fue, de cualquier manera, el aumento de la cantidad de grano disponible para el mercado, facilitando así la alimentación de una población industrial en rápido crecimiento. Cuando los años de malas cosechas pasaron, la Unión Soviética se elevó definitivamente a una situación en la que estaban asegurados un proletariado industrial rápidamente creciente y los medios de proporcionarle alimentos básicos —aparte de la leche y la carne. Pero, en parte por las modificaciones hechas al primer Plan Quinquenal ante las enormes dificultades, a los consumidores les fue mucho menos bien en otros aspectos. La producción había sido mantenida en el nivel proyectado en las industrias pesadas sólo al precio de recortar aún más las asignaciones de capital ya escasas para el desarrollo de las industrias de consumo, especialmente las textiles; y durante los años críticos la escasez de vestido fue realmente aguda, aunque el suministro de calzado fue mucho mejor. Es posible, no obstante, pasarse sin muchas dificultades con muy poca ropa nueva —pero no sin calzado, especialmente si la calidad es mala y el uso riguroso. En todo caso, ya fuera que los niveles de vida en general se elevaran o descendieran en los años del primer Plan, el pueblo los pasó sin llegar a una situación desastrosa —excepto por supuesto los kulaks y las víctimas del hambre, que no fueron objeto de compasión para nadie— y con una confianza muy crecida en sí mismos y en los altos méritos de la estructura que estaban contribuyendo a crear. La posibilidad de construir el socialismo en un solo país, sin ayuda de ninguno de los países capitalistas, parecía haber sido plenamente demostrada. Todavía no se había realizado; pero se vislumbraba en vías de hecho. No parecía ya necesaria una Revolución mundial —la extensión de la Revolución rusa a Occidente— como condición de éxito. Si se producían acontecimientos en este sentido serían, por supuesto, bien acogidos; pero no todo estaba perdido aunque estos acontecimientos no se produjeran. En un momento había sido artículo de fe común entre los bolcheviques que la Revolución no podía triunfar perdurablemente en la atrasada Rusia a no ser que uno o más de los grandes países desarrollados fuera en su ayuda y el "socialismo en un solo país" había sido desechado como un sueño impracticable. Pero cuando el primer Plan Quinquenal terminó en 1932 esta doctrina estaba fuera de moda. Sólo los "trotskistas" la sostenían, considerando la nueva estructura como inherentemente nacionalista y basando sus esperanzas de socialismo en más

altos fundamentos tecnológicos de los que entraban ya dentro del campo de las posibilidades soviéticas.

El primer Plan Quinquenal no se realizó totalmente, de hecho, en los 4 años y medio en que estuvo en vigor. En el carbón, el acero y el hierro colado la producción fue mucho menos alta que las elevadísimas metas que se habían fijado. La producción de carbón se acercaba a los 65 millones de toneladas, mientras que la meta fijada había sido de 75 millones; el acero no llegaba a los 6 millones contra la cifra proyectada de 10 y el hierro colado alcanzó los 6.2 millones cuando se había planeado una producción de 10. Pero las industrias de bienes de capital en general aumentaron su producción dos veces y media, un poco más que la meta originalmente fijada; y, entre éstas, la de maquinaria mostró un aumento cuádruple —considerablemente más que lo estipulado en el Plan original— y también el petróleo superó la producción proyectada. La electricidad, aunque no alcanzó el aumento planificado, elevó su producción más de dos veces y media.

El rezago del carbón, el acero y el hierro se debió principalmente a demoras en la construcción de nuevas plantas, que no estuvieron listas para iniciar la producción en las fechas debidas. Las industrias de bienes de consumo, excepto las de calzado, sufrieron mucho más por estas y otras desventajas, ya que sus asignaciones de capital y de materias primas se redujeron ante las dificultades con que tropezó el Plan en el país y en el extranjero. Pero la industria de botas y zapatos registró un incremento triple, en parte indudablemente a expensas de la producción artesanal en pequeña escala. Se dijo que la producción industrial total de bienes de consumo había avanzado un 87 %, siendo las más rezagadas las industrias textiles, principalmente por la escasez de algodón y lana.

En general, pues, aunque el Plan Quinquenal no se cumplió totalmente, a pesar de todos los obstáculos se había dado en cuatro años y medio una impresionante demostración de la capacidad productiva soviética. Es verdad que estos resultados sólo se habían logrado mediante un aumento en la fuerza de trabajo mucho mayor del que había concebido el Plan. El número total de asalariados se había doblado, en efecto, mientras que el Plan había contemplado sólo un aumento total del 40 %, incluyendo un aumento de no más de una tercera parte en la industria y el 58 % en la industria y la construcción combinadas. Dehecho, en la construcción la mano de obra se había cuadruplicado, lo cual era una clara indicación de la concentración enormemente grande en la construcción de fábricas y otros proyectos semejantes. Así, la baja productividad continuó, a pesar de la altísima producción total; y, al elevarse agudamente los salarios debido a la escasez de trabajadores en las áreas en expansión, los costos de producción por unidad

fabril eran en la mayoría de los casos todavía muy grandes. Esto puede haber provocado, en efecto, una considerable exageración en los cálculos de los aumentos reales de producción, que debían medirse a los precios de 1926-27, excepto en el caso de los nuevos productos. Éstos se valoraban al costo efectivo cuando se colocaban por primera vez en el mercado —aunque su costo era probablemente alto.

No obstante, aunque las cifras anunciadas de las realizaciones del Plan exageran considerablemente lo efectuado en ciertos campos, sus resultados son a pesar de todo impresionantes, especialmente en relación con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Porque, en 1932, la Unión Soviética se había convertido en "el país sin desempleo", mientras que todos los demás atravesaban diversos grados de depresión —desde los extremos de los Estados Unidos y Alemania hasta los declives relativamente menores en Francia y la Gran Bretaña. Por supuesto, la productividad soviética todavía era baja, según los niveles occidentales; pero la Unión Soviética estaba demostrando la falsedad absoluta de lo que se había predicho tan ligeramente en relación con una economía socialista —su incapacidad para el ahorro— y dedicaba una proporción altísima de su ingreso nacional a bienes de capital que sólo rendirían a la larga en bienes y servicios. Los que tuvieron que reconocer esto de mala gana explicaban, por supuesto, que se debía a la coerción del pueblo por los dictadores del partido y predecían una pronta rebelión de las víctimas descontentas. Entonces, cuando no se produjo la rebelión, explicaron que la tiranía era demasiado fuerte para que pudiera surgir y siguieron denunciando que la Unión Soviética era víctima de una represión masiva por parte de una pequeña camarilla burocrática. Existía mucho descontento entre los campesinos —y no sólo entre los kulaks y las víctimas del hambre— y cierto descontento laboral; pero parece un hecho que, entre los trabajadores industriales, el sentimiento predominante era de orgullo por las grandes realizaciones del régimen y la prodigiosa reconstrucción que se estaba llevando a cabo y que este orgullo hacía más llevadera la escasez de bienes de consumo y evitaba el desarrollo de sentimientos hostiles a la inversión masiva o siquiera a la concentración en las industrias pesadas en detrimento de otros aspectos —tales como la vivienda. El espíritu de estos años demostró claramente que el hombre no vive sólo de los bienes de consumo; y los hombres y mujeres jóvenes que en todo el país predicaban la alta producción y la colectivización estaban impulsados en su mayoría por un auténtico idealismo, aunque fueran también voceros de una burocracia del partido particularmente terca y poco escrupulosa y de su jefe, Stalin.

No parece tampoco que la mayoría de los trabajadores en la ciudad ni en el campo tuvieran conciencia de una situación de opresión. En

muchas fincas colectivas sentían más bien una ampliación de sus facultades, especialmente cuando se habían hecho concesiones de parcelas individuales y ganado y se les había dejado tiempo libre para trabajar por su cuenta. Había también, sin duda, muchos que odiaban las colectivas y lamentaban la pérdida de sus parcelas individuales; pero (con excepción de los kulaks) tenían oportunidad de obtener empleo relativamente bien pagado en las industrias en desarrollo o en las obras de construcción; de modo que su oposición a la colectivización se neutralizaba con el cambio de ocupación. Mientras tanto, para los trabajadores urbanos, viejos y nuevos, había perspectivas de mejoramiento individual a través de la creciente diferenciación de salarios y las mayores perspectivas de promoción; el trabajo industrial gozaba cada vez de mayor prestigio, así como de privilegios reconocidos socialmente que valía la pena gozar —boletos para adquirir comidas baratas en las cocinas de las fábricas y vacaciones gratis o subsidiadas. Sencillamente no podía decirse que la clase obrera soviética fuera un proletariado esclavizado en ebullición por una rebeldía reprimida. Por el contrario, gran parte de ese proletariado se sentía inspirado por un profundo orgullo en lo que estaba haciendo y plenamente dispuesto a aceptar las limitaciones a su libertad de palabra y acción que los dirigentes consideraran necesarias para protegerlo contra la "contrarrevolución". Afirmar esto no es justificar la supresión y mucho menos la crueldad de que fue acompañada; pero sí significa que, en general, no hubo objeciones suficientemente amplias a una u otra como para engendrar poderosas fuerzas de rebeldía. En el campo, cuando pasó el hambre, la mayoría de los campesinos se adaptaron a una colectivización modificada, que daba un área cada vez mayor al esfuerzo individual; en las ciudades las fuentes de ocupación eran suficientes para satisfacer a la mayoría de los productores, sólo los grupos reaccionarios de antiguos burgueses y pequeño-burgueses desalentados tenían razones para quejarse.

Así la Unión Soviética pasó del primero al segundo Plan Quinquenal con una actitud de satisfacción por los éxitos ya logrados y la determinación de consolidar lo que se había ganado y llevarlo adelante lo más posible. Las metas de este segundo Plan, para los años de 1933-37, se fijaron más bajas que las del primer Plan, con una inversión total proyectada en forma descendente, bajando cada año del 24 al 195 % del ingreso nacional y con mayores asignaciones relativas de capital a las industrias de consumo. Se mantenía el acento principal en los bienes de capital, pero un mayor número de estos bienes serían instrumentos para la fabricación de bienes de consumo —husos y telares, máquinas para la fabricación de calzado, para la transformación de alimentos, etc.— y maquinarias para fabricar máquinas o para transformar materias básicas. La tasa anual de crecimiento finalmente establecida

en 1934 era, para toda la industria, de un 165 %, para los bienes de capital del 145 % y para los bienes de consumo del 185 %. De hecho, en el primer año del segundo Plan, las metas no se alcanzaron ni de lejos, llegando el incremento total en la producción sólo al 6 %. Pero en 1934 y 1935 las tasas de crecimiento fueron mucho más altas y aun en 1933 la productividad creció más rápidamente que los salarios, de manera que los costos empezaron a descender. La productividad, en efecto, aumentó considerablemente a medida que las nuevas plantas comenzaron, a veces con retraso, a trabajar. De acuerdo con el Plan, cuatro quintas partes de la producción industrial total correspondería, en 1937, a las nuevas fábricas o a las viejas reconstruidas en el primero o en el segundo Plan. El segundo Plan dejaría a la Unión Soviética en posición de prescindir de la mayoría de la maquinaria importada y la capacitaría para manufacturar sus propias maquinarias en la mayor amplitud posible y aprovechar sus propias materias primas, abriendo a este respecto numerosos campos nuevos. El hule natural, de importación, sería sustituido por el hule sintético; y la ampliación de la industria química soviética emanciparía a la Unión Soviética de la dependencia en los fertilizantes importados.

Lo que todavía quedó rezagado en el segundo Plan fue el transporte —especialmente los ferrocarriles y las carreteras. En éstos se producían embotellamientos, que limitaban seriamente las posibilidades del desarrollo industrial, en especial debido a que la construcción de nuevos y remotos centros industriales aumentaba las distancias que había que salvar para conducir materias primas, alimentos y bienes elaborados, por ferrocarril, hacia sus puntos de destino. Ya se habían emprendido grandes proyectos para la construcción de canales, en general con mano de obra forzada en condiciones de trabajo muy malas; pero la construcción de ferrocarriles y de carreteras recibió escasa prioridad en el primero y el segundo Planes y cada vez se quedaban más rezagados en relación con las tareas que tenían que cumplir. Todavía en 1939, la utilización de cada milla de línea ferroviaria se calculaba en más del doble, en términos del tonelaje cargado, en la Unión Soviética que en los Estados Unidos. No obstante, los artículos eran transportados, aunque no sin graves demoras que reducían la producción de las fábricas y producían escaseces locales, aun cuando en general hubiera suministros suficientes para las necesidades.

Cuando se puso en vigor el segundo Plan, la depresión mundial había alcanzado su culminación y Hitler estaba en vísperas de tomar el poder de Alemania y destruir el movimiento obrero alemán. Pero el Plan fue elaborado, por supuesto, antes de la caída de la República de Weimar y, aparentemente, sin calcular los efectos de semejante acontecimiento. Porque los dirigentes soviéticos, como hemos visto, se equi-

vocaron totalmente respecto a la naturaleza del fascismo alemán e hicieron cálculos absolutamente falsos de los efectos de su subida al poder. No fue sino en 1934 cuando pudieron percibir el peligro fascista en sus proporciones reales. Pero, cuando comprendieron de qué se trataba, cambiaron de línea rápidamente, tanto en su actitud política como en el reajuste de su Plan económico. Políticamente, viraron primero participando en la Sociedad de Naciones, en 1934, y convocando a los partidos comunistas de todos los países a una cruzada común para incitar a los partidos de izquierda a participar en Frentes Populares contra el fascismo; y económicamente reaccionaron modificando su Plan para cubrir mayores gastos en armamentos y en la expansión industrial que pudiera dedicarse rápidamente a la fabricación de suministros bélicos.

Así se produjo un considerable traslado de los gastos para dedicarlos al renglón de armamentos durante el segundo Plan, que se aplicó hasta 1937. Cuando la Unión Soviética elaboró un tercer Plan, que debía comenzar en 1938, la necesidad de esa asignación de los gastos era todavía más urgente. Los gastos presupuestales para la defensa se duplicaron en 1938; y las necesidades de defensa hicieron necesario mantener un alto grado de concentración en el desarrollo de las industrias pesadas y, especialmente, en la construcción de nuevos centros de producción en los Urales y en Asia, fuera del campo de los aviones de bombardeo alemanes. Esta migración de la industria, que empezó en gran escala en 1941 y continuó después, hizo indispensable tomar en serio el problema del transporte por ferrocarril con la construcción de nuevas líneas, el refuerzo y la sustitución de las viejas, y el aumento de los servicios en las terminales y los puntos de conexión. Estos procesos habían comenzado con el segundo Plan, pero se habían ido rezagando. De hecho, el problema del desarrollo ferroviario era insoluble mientras la escasez de acero no hubiera sido superada; porque la construcción de ferrocarriles consume acero en abundancia y sólo al terminar el segundo Plan hubo el suficiente para que pudiera atenderse seriamente este aspecto. En vista de las crecientes demandas de defensa y transporte, las industrias de bienes de consumo tuvieron que adoptar nuevamente un lugar secundario, aunque ahora resultaba más fácil suministrarles maquinaria hecha en las nuevas fábricas. La agricultura también se había quedado atrás ante otras demandas más urgentes; pero esto no parecía muy grave ya que los suministros básicos de alimentos, con excepción de la carne y la leche, ya habían sido asegurados y el número de tractores era adecuado a las necesidades de las fincas estatales y colectivas. En 1937 los más graves males económicos de la nueva estructura económica parecían haber pasado.

No era ésta, sin embargo, la situación real, aparte de las modifica-

ciones requeridas por el programa de defensa, ya que las purgas de 1937 y 1938 afectaron considerablemente a las filas de administradores de las industrias y provocaron en estos años graves defectos en el cumplimiento del Plan. No fue hasta 1940 que se superaron eficazmente las consecuencias de las purgas y apenas se había logrado esto cuando la industria soviética se vio envuelta en el desastre de la guerra y la evacuación en masa de las áreas occidentales tuvo que iniciarse apresuradamente. Pero no pienso referirme a los acontecimientos soviéticos hasta este periodo. Para los fines de este libro, debemos detenernos en la recuperación de 1940-41 respecto a los retrocesos de 1938-39, debidos principalmente a la dislocación resultante de las purgas y a la improvisación de nuevos cuadros administrativos.

Es, en efecto, increíble que la Unión Soviética haya podido resistir y sostenerse como lo hizo en 1941, inmediatamente después de la gran desorganización producida por las purgas. No se sabe exactamente cuántos funcionarios en posiciones clave dentro de la Unión Soviética ni cuántos de sus subordinados resultaron afectados por ellas; pero se ha sugerido que más de la mitad y quizá las dos terceras partes de esas personas fueron ejecutadas, exiladas o cuando menos desplazadas de sus puestos, de modo que en todas las ramas de la administración —civil y militar— hubo que improvisar nuevos dirigentes. Del cuerpo diplomático soviético —embajadores, ministros y consejeros de embajada o legación— las dos terceras partes fueron liquidados, ejecutados o simplemente desaparecidos. La jefatura del ejército resultó afectada con la misma severidad. De ocho oficiales de alta graduación que actuaron como jueces extras en el juicio de Tukhachevsky, en junio de 1937, sólo uno, el mariscal Budenny, sobrevivió a purgas posteriores. Uno de los otros siete murió de muerte natural y seis fueron liquidados. El Comité Central del Partido Comunista electo en 1934 tenía 71 miembros. A principios de 1939 sólo quedaban 21. Tres murieron de muerte natural, uno (Serguei Kirov) fue asesinado, otro se suicidó, 9 fueron reportados como fusilados y los otros 36 desaparecieron. En las principales ciudades más de la mitad de los miembros del Partido Comunista fueron expulsados. En 1934 el Partido tenía más de 2 millones de miembros y 1 200 000 solicitudes de afiliación. A fines de 1937 el número de miembros y de aspirantes sólo llegaba al millón y medio. En el verano de 1938, después que se admitió a medio millón de nuevos miembros y aspirantes, el total no llegaba todavía a los 2 millones.

Las purgas en semejante escala tenían que provocar dislocaciones extremas porque, inclusive entre los que se escaparon de ellas, el efecto tenía que ser muy grande, cuando nadie podía confiar en su vecino y por todas partes se hacían las más absurdas denuncias. Directamente, la principal responsabilidad correspondió al Comisariado del Interior

(N. K. V. D.), al que se había incorporado la OGPU, primero bajo la jefatura de Yagoda y después de Yezhov, quien permaneció en ese cargo hasta diciembre de 1938, pero después de haber perdido mucho de su poder en agosto, cuando Beria fue designado vicecomisario. Fue, en efecto, en agosto de 1938 cuando por fin se dio marcha atrás y, desde entonces, las purgas terminaron y pudo emprenderse seriamente la tarea de reconstruir la desintegrada estructura de la sociedad soviética.

No es fácil determinar, ni siquiera hoy, cuánto había de sustancial en esta vasta destrucción de los que habían sido dirigentes en la gran Revolución de 1917 y en los veinte años siguientes. En un extremo de la cuestión, considero que no puede haber duda de que la supuesta conspiración de Tukhachevsky y los generales fue un hecho, y de que existían preparativos para un golpe militar. En el otro extremo, me parece imposible creer que Trotsky fuera realmente el jefe e inspirador de un movimiento destructivo dentro de la Unión Soviética ni que actuara, en ninguna forma, de acuerdo con los nazis. Trotsky era capaz, sin duda, de conspirar con elementos de oposición dentro de la Unión Soviética para derrocar a Stalin, pero no de fomentar ni identificarse con los actos de sabotaje sin sentido de los que se acusó a los supuestos conspiradores y, por descontado, era en absoluto incapaz de prestarse a los manejos de los nazis, hacia los cuales era tan hostil por lo menos como hacia Stalin y los que lo rodeaban. Entre estos dos grupos de acusaciones —contra Tukhachevsky y contra Trotsky— hay un gran campo intermedio respecto al cual es más difícil tener seguridad. ¿Había, en realidad, una conspiración civil además de la conspiración militar? Zinoviev y Kamenev, Bujarin y Badek, Sokolnikov, así como el resto de la oposición liquidada ¿eran realmente traidores que actuaban en colaboración con los nazis o simplemente críticos honestos y opositores a la política de Stalin, empujados a la clandestinidad y obligados a emprender actividades conspiratorias por la supresión del derecho a criticar abiertamente, pero inocentes de toda colaboración con los enemigos externos de la Unión Soviética? Parece innegable que la mayoría de ellos eran de hecho conspiradores, dispuestos a ir muy lejos en la oposición a Stalin; pero no parece haber pruebas de que fueran agentes, ni siquiera instrumentos conscientes, de los nazis. Afirmar esto no es negar, ni siquiera dudar, que los nazis tuvieran en Rusia muchos agentes pagados que hacían lo posible por dislocar la economía soviética y sembrar disensiones internas dondequiera que podían; y hay que reconocer que algunos de los sentenciados pueden haber sido víctimas inconscientes de los agentes nazis y haber trabajado con ellos sin saber qué representaban.

¿Qué hay, pues, de las confesiones hechas durante los juicios? Nadie cree ya, estoy seguro, que fueran extraídas mediante el uso de dro-

gas misteriosas, ni siquiera por la tortura en su sentido más extremo. Los temores por sus amigos y familiares pueden haber influido para producir estas extraordinarias demostraciones de rebajamiento personal; pero es improbable que fuera éste el factor principal. Las confesiones deben considerarse en su mayor parte como auténticas, en mi opinión, en el sentido de que los que las hicieron habían sido inducidos a creer en su propia culpa, aun respecto a cosas que no habían hecho ni intentado hacer. Si existía una conspiración militar —como es mi propia opinión— y una conspiración de civiles en la cual pueden haber participado agentes nazis como inductores e instigadores de los conspiradores internos, en general sin el conocimiento de éstos, se comprende que los conspiradores totalmente inocentes de una alianza culpable con los nazis hayan sido llevados mucho más lejos de lo que habían pretendido ir y se sintieran presa de remordimientos cuando comprendieron hasta dónde habían llegado y trataran de limpiar sus conciencias mediante una confesión abyecta. Esto no habría podido suceder en un país donde hubiera existido siquiera una libertad de palabra y de crítica controlada; pero en la Unión Soviética de los treinta no existía tal libertad, ni había una tradición pasada en ese sentido. Las confesiones son, a pesar de todo esto, extraordinarias; pero no hay que tratar de explicarlas en términos de una peculiar "alma rusa" salvo en el sentido en que la palabra "alma" no sea más que una referencia a la peculiar tradición y atmósfera prevalecientes en la política rusa.

No es posible, de todos modos, que se dude que un gran número de las víctimas de la gran purga de 1936-38 eran absolutamente inocentes de las acusaciones presentadas contra ellos y que fueron procesados cuando más por el delito de "culpabilidad por asociación" o inclusive sin ninguna otra razón que el deseo de alguien de denunciarlos. Pero no sería razonable concluir que la purga en general no fue más que una maquinación, sin ninguna realidad detrás. Había en todo caso un gran núcleo de descontento interno, que Trotsky hacía lo posible por organizar y estimular desde el extranjero; y este núcleo de descontento era probablemente lo bastante grande como para constituir un verdadero peligro para el régimen. La purga contribuyó mucho a afectar en sentido adverso la opinión acerca de Rusia en Occidente, para estimular la creencia en que el régimen se desplomaría pronto y producir una subestimación burda de la fuerza y capacidad del Ejército Rojo. Este efecto sobre la opinión extranjera, que Stalin no parece haber previsto o que quizá no le importó, tuvo sin duda una gran influencia en las actitudes inglesa y francesa frente a la posibilidad de llegar a un acuerdo con los rusos para ofrecer una resistencia coordinada a los nazis y contribuyó a que se ignorara completamente a los rusos en las discusiones acerca de Checoslovaquia en 1938. Pero, por

el contrario, Stalin logró indudablemente su objetivo esencial: la eliminación total de la oposición a él o a su régimen dentro de la Unión Soviética y la consolidación de su dominio dictatorial. La oposición dentro de la Unión Soviética no fue solamente aplastada: fue eliminada de tal manera que los trotskistas y otros críticos desde el exilio no pudieron establecer ningún contacto con fuerzas dentro del país. Pero el pueblo de la Unión Soviética no se vio reducido por esto a una situación de instrumento sin voluntad que paralizara su actividad. Por el contrario, como lo demostraron los hechos, cuando las dislocaciones inmediatas habían sido superadas, Stalin quedó como la figura paternal incuestionable de un pueblo avocado al más intenso esfuerzo de defensa y organización colectiva: de tal manera que el acervo de lealtad entusiasta a disposición de Stalin después de 1941 era probablemente más grande que en ningún otro país. Esto no justifica la purga, y mucho menos los excesos cometidos durante la misma, especialmente en sus últimas etapas; pero sí significa que si lo único que importa es el poder y no se toman en cuenta los ideales, la purga debe considerarse un éxito aunque, aun así, un éxito logrado a un precio excepcionalmente alto.

Mientras tanto, el segundo Plan Quinquenal seguía su curso. Reformado antes de su iniciación en 1934 para dar mayor peso a las necesidades de la defensa, apresurando el desarrollo de las industrias pesadas y construyendo el mayor número posible de las nuevas fábricas fuera del alcance de los bombarderos alemanes, el Plan sufrió inevitablemente cierta dislocación al desaparecer un gran número de sus ejecutantes en el curso de la purga, pero a pesar de todo tuvo en general éxito en sus objetivos. Fue afortunado para los rusos que las fábricas de tractores, que se necesitaban en gran número para el éxito de la agricultura colectivizada, pudieran también transformarse rápidamente, en caso de necesidad, para producir tanques y otros pertrechos de guerra y que las fábricas de productos químicos para la producción de fertilizantes pudieran convertirse similarmente para los fines bélicos. Era posible, además, construir un sistema militar de defensa en profundidad estrechamente relacionado con los establecimientos agrícolas. Así, los perjuicios causados a la producción para uso del consumo se mantuvieron en un mínimo.

El segundo Plan Quinquenal, que se efectuó de 1933 a 1937, pero considerablemente modificado en su desarrollo por la atención cada vez mayor prestada a la defensa, no alcanzó en todos sus aspectos principales las metas fijadas, aunque en algunos campos estas metas fueron notablemente superadas. La producción de carbón se elevó a más del doble entre 1932 y 1937, pero la producción de 1937 fue sólo de 128 millones de toneladas, cuando la producción total proyectada era de

152 millones. La producción de hierro colado se dobló también sin llegar a alcanzar el total proyectado. La producción de acero, por otra parte, elevándose de 6 millones de toneladas en 1932 a 17.6 millones en 1937, excedió las metas, mientras que en la industria de fabricación de maquinaria aumentó tres veces su producción, cuando los planes eran de doblarla. El petróleo, con una producción de sólo 30 500 000 toneladas contra una producción proyectada de cerca de 47 millones, fue la más rezagada entre las industrias básicas; pero oficialmente se reconoció que estas industrias, en conjunto, habían alcanzado la producción proyectada, mientras que las industrias de consumo en general no lograron cubrir el objetivo fijado. La producción de artículos de algodón había sido planeada al doble, pero sólo se había elevado en un 42 %; y la de artículos de lana, también planeada al doble, no subió más del 22 %. En cuanto a la industria ligera, en su conjunto, la producción se duplicó entre 1932 y 1937, cuando se había proyectado un incremento de dos veces y media. Durante el segundo Plan hubo un notable desarrollo de nuevas industrias, sobre todo de la industria química pesada, la extracción de metales no ferrosos y la fabricación de aeroplanos, automóviles, tractores y otras máquinas. Las nuevas fincas colectivas recibieron suministros adecuados de maquinaria; el número de tractores se duplicó y la oferta de automóviles se elevó ocho veces. De la producción industrial total, cuatro quintas partes en 1937 procedían de fábricas recién construidas o radicalmente reconstruidas desde 1928.

Analicemos ahora qué significó la purga en relación con el pensamiento socialista o comunista. En primer lugar, significó el rechazo de hecho de la concepción de una sola Revolución del proletariado mundial, de la que sólo fuera una parte la Revolución en Rusia. Para los trotskistas esta concepción era vital, porque según ellos el socialismo sólo podía construirse sobre la base de las más altas técnicas de producción alcanzadas por el capitalismo y como un avance sobre ellas, logrando la abundancia. La atrasada Rusia les parecía obviamente incapaz de encabezar la marcha hacia el socialismo, aunque hiciera el máximo por industrializarse rápidamente, porque no podía esperar por mucho tiempo, si es que llegaba a lograrse, alcanzar la productividad de los más adelantados países capitalistas, para gozar de la abundancia, lo único que podía poner fin a la lucha de las clases antagónicas. De acuerdo con Trotsky, la idea del "socialismo en un solo país" era insostenible; y lo era todavía más si el país en cuestión estaba atrasado en el empleo de las técnicas modernas. Pero, para Trotsky, el socialismo significaba el bienestar popular además del poder mientras que, para Stalin, sólo significaba el poder o, en el mejor de los casos, el poder ejercido en nombre del proletariado. Stalin demos

traría que el poder, sin el bienestar ni la igualdad, incluso un país atrasado podía lograrlos, un país con grandes recursos naturales y organizado para utilizar, en una forma sin precedentes, una gran proporción de su capacidad productiva aumentando la inversión, aun a expensas de un descenso en sus niveles de vida. A Stalin no le importaba que el pueblo en general permaneciera pobre, si la Unión Soviética se hacía fuerte en el plano internacional: primero, capaz de defenderse contra sus enemigos y, después, de imponer en forma creciente su voluntad a los demás. No renunció a las esperanzas de una Revolución mundial; ésta se produciría a su debido tiempo, estaba seguro, con el derrumbe del capitalismo, que consideraba un hecho a largo plazo. Renunció, sin embargo, al deseo de fomentar la Revolución mundial de inmediato, como medio para fortalecer la Revolución ya efectuada en Rusia. Creía que podía pasarse sin este refuerzo, si podía hacer a Rusia lo bastante fuerte como para evitar la derrota en la guerra; y, mientras tanto, se proponía hacer de la consolidación el supremo criterio político dentro de la Unión Soviética. No le importaba que esto llevara implícito una agudización, y no una disminución de las diferencias económicas, y el desarrollo de una nueva casta dominadora semejante en muchos aspectos a una nueva clase, suponiendo que pudiera abrigar la seguridad de que esta nueva casta no se levantaría contra él. Tampoco le importaba que la gran mayoría del pueblo tuviera que sufrir desesperadamente por la falta de medios de vida satisfactorios, mientras esas dificultades no buscaran salida en un movimiento de descontento que produjera una posible revuelta. Como sabía muy bien que el pueblo, en libertad para expresar sus preferencias, optaría por mejores condiciones de vida y no por una tasa alta de acumulación de capital, era necesario eliminar todo foco de oposición y liquidar a todos los críticos potenciales de su política. Pero no retrocedió ante esto, a pesar de sus implicaciones. Además, como la mayoría de los hombres que piensan en términos de poder, amaba el poder y quería acumularlo en sus propias manos, obsesionado cada vez más por el poder personal como objetivo.

Esto no quiere decir que Stalin estuviera totalmente equivocado y Trotsky tuviera la razón, en la gran controversia que surgió entre ellos antes y después que Stalin expulsara a Trotsky de los cargos dirigentes. En primer lugar, Trotsky era también un peligroso teórico, obsesionado por su idea de una Revolución mundial, lo mismo que Stalin por su determinación de construir una Unión Soviética poderosa sujeta a su dominio personal. Los trotskistas, cuando aparecían como grupos minoritarios organizados, eran en general doctrinarios obstinados, devotos de la revolución independientemente de sus posibilidades de éxito e insistían rígidamente en su base proletaria aun cuando el proletariado

no se mostrara con un espíritu revolucionario. Puede que, en toda situación, haya pequeños grupos de esta especie —rebeldes por naturaleza e idealistas dogmáticos que no toman en cuenta a los hombres para determinar sus objetivos y se niegan a transigir en sus ideales ajustando su acción a las circunstancias— y es posible que personas como éstas gravitaran naturalmente en el campo trotskista. Esto no altera el hecho de que la doctrina trotskista fuera, o se convirtiera, en la doctrina de la Revolución mundial proletaria que debería realizarse cualesquiera que fueran las condiciones e implicando una denuncia de Stalin en particular por haber "traicionado a la Revolución", desviándola de su persecución original de fines ideológicos, socialistas, en una simple ambición de poder, sin tener en cuenta los fines en que debía emplearse este poder. Pero me parece que quienes opinaron así de Stalin en los treinta no lo comprendieron totalmente; porque, de hecho, Stalin no perseguía entonces el poder por el poder mismo. Creía verdaderamente en la importancia de que la Unión Soviética, se consolidara como un país al que hubiera que tomar en cuenta en el plano internacional y en la necesidad de que la Unión Soviética descansara sobre la base de la propiedad colectiva, eliminando el lucro privado como fuente de ingresos no ganados mediante el trabajo, de manera que las diferencias de ingreso y de *status*, grandes o pequeñas, dependían del trabajo personal y no de la explotación en el sentido capitalista. A muchos puede parecernos que no importa tanto que los grandes ingresos y la superioridad de *status* dependan de una cosa o de otra, si de hecho existen; pero creo que para Stalin la diferencia contaba realmente. Por el contrario, la libertad personal no tenía importancia para Stalin; porque al considerar los valores humanos su actitud tendía a la clase, y no al individuo, como depositaría de derechos e incluso, en relación con la clase, pensaba más bien en términos de clase como un todo que de los individuos que la componen y creía que sus intereses debían ser formulados y satisfechos por un grupo de dirigentes más que por todos sus miembros. Era centralista y no demócrata; pero su centralismo era un verdadero artículo de fe y no un simple corolario a su ambición de poder por el poder mismo. Es posible que esta actitud haya variado una vez que gozó de la satisfacción producida por el ejercicio del poder absoluto en nombre de la sociedad entera; pero aun cuando esto ocurriera posteriormente, opino que en los treinta, de acuerdo con sus alcances, creía ardientemente en la misión de Rusia y de los pueblos que había tratado de unificar bajo la nueva Constitución de 1936. Esta Constitución desempeñó en todo caso un papel importante en la unificación de los diversos grupos nacionales lingüísticos y culturales de la Unión Soviética en torno a la idea de un "gran Estado ruso", donde todos fueran iguales a pesar de las diferencias raciales y culturales y

capaces de gozar de sus diversas culturas, en condiciones compatibles con esa unidad. La unidad se expresó también en la estructura unitaria del Partido Comunista, que obedecía a una doctrina común y no se dividió en partidos diversos para las numerosas Repúblicas constitutivas ni en relación con los grupos nacionales y culturales que integraban el total de la población soviética. Pero, aparte de la política, el Partido favorecía la diversidad dentro de la unidad y no puede negarse que en este sentido tuvo considerable éxito.

No carece de importancia el hecho de que Stalin, con todas sus cualidades de dirigente y administrador, fuera también un hombre impuro: taimado, vengativo y totalmente desprovisto de escrúpulos en cuanto a los medios, cruel, quizá incluso sádico y por supuesto cada vez más intolerante hacia cualquiera que considerara capaz de desafiar su autoridad. En consecuencia, el socialismo al que creía dar origen carecía de casi todas las cualidades altamente valoradas por la mayoría de los apóstoles del socialismo, que han sido en su mayoría hombres bondadosos, inspirados por una fuerte pasión por la igualdad social y la libertad y en contra de los sufrimientos y la injusticia. A Stalin nada le importaba la libertad ni la igualdad y no lo conmovían el sufrimiento ni el odio a la injusticia, si no se trataba de la injusticia de clase en una forma que le fuera familiar. El socialismo suponía para él la eliminación de las clases cuya existencia reconocía; pero no le importaba lo que pudieran sufrir los "enemigos del pueblo" desplazados ni consideraba injusticia las diferencias extremas de *status* e ingresos que pudieran contribuir a aumentar la fuerza colectiva de la nueva sociedad. El juicio que forme sobre él la posteridad será, en mi opinión, una mezcla de elogio y condenación. Sin su jefatura, es dudoso que la Unión Soviética hubiera superado las dificultades que se enfrentaban a su sobrevivencia; pero la nueva Rusia que contribuyó tanto a construir surgió de sus manos gravemente afectada, en un sentido humano, por sus métodos de acción e incapaz de utilizar de la mejor manera el gran poder que él le había ayudado a ganar. No estoy capacitado para juzgar si Stalin fue o no un gran jefe militar o siquiera un buen jefe; pero creo que el veredicto general es válido respecto a este aspecto en especial. Pienso que fue, sin duda, un gran hombre; pero la grandeza y la bondad no se dan necesariamente unidas en la vida privada ni en la pública.

En comparación con Stalin, Trotsky es una figura humanamente atrayente y creo que también hay que llamarlo grande. Fue, ciertamente, un gran organizador, además de un extraordinario orador; pero sus defectos no son menos profundos que sus virtudes. Nadie habría podido cometer más errores que él en su larga lucha contra Stalin y

quizá el mayor error de su vida fue no aparecer, aunque estuviera enfermo, en los funerales de Lenin, a donde habría podido llegar a tiempo si hubiera intentado hacer el esfuerzo. En esta ocasión, como en otras, parece haber dejado guiar su conducta por el estado de ánimo del momento y haber supuesto que, dada su personalidad, podía prescindir de las concesiones. En la lucha que se produjo entonces por el poder, permitió que Stalin lo envolviera negándose a enfrentarse a su antagonista en el campo de batalla de la intriga entre bastidores y fue demasiado orgulloso, hasta que ya resultó demasiado tarde, para esforzarse en reunir un grupo de partidarios personales. Era imperioso y terco en la acción y demasiado inclinado a despreciar a los colaboradores respecto a los cuales se consideraba superior intelectualmente. Podía indudablemente inspirar una profunda devoción, pero nunca supo trabajar con los demás en términos de igualdad. Apegado a su concepto del socialismo como una etapa en la evolución social sin disputas por la participación en los beneficios demasiado escasos, contemplaba una revolución permanente que no debía detenerse, por ninguna razón, antes de haber logrado esto; como no podía confiar en las perspectivas de realizar esta revolución sólo en la atrasada Rusia, se convirtió en el archiapóstol de la Revolución mundial en el momento mismo en que otros reconocían que había pasado, al menos en el futuro inmediato, el momento de hacerla. No podía afirmar, como actor principal de la Revolución de 1917, que la Revolución había sido un error ni admitir que no había habido una oportunidad real de rápida expansión a los países avanzados del mundo capitalista. En lugar de ello, tenía que seguir persiguiendo su objetivo aunque no existieran posibilidades de éxito y tenía que seguir acusando a Stalin de no perseguir ese objetivo y de persistir en su intento de construir un socialismo, en un solo país atrasado, desprovisto del verdadero espíritu del socialismo. Dijo muchas cosas que eran muy ciertas como críticas a la Rusia stalinista —sobre todo, acerca de la burocracia y de la contribución de Stalin a su creación. Pero Stalin había adoptado en gran medida la política sostenida por Trotsky, adaptándola a un propósito diferente y Trotsky no tenía mucho que ofrecer como alternativa. Sin contacto directo con la Unión Soviética, comprendía cada vez menos lo que allí estaba sucediendo; y después de la gran purga perdió los contactos que antes había sostenido. Que haya colaborado conscientemente con los nazis es una suposición ridícula, sin pizca de evidencia detrás. Pero que utilizara todas las oportunidades a su alcance para crearle problemas a Stalin dentro de la Unión Soviética está, igualmente, fuera de discusión. Stalin pudo, en consecuencia, convertirlo en una figura simbólica del mal: de tal manera que aún hoy es casi imposible men-

cionar en Rusia su nombre sin execrarlo y su enorme participación en la Revolución y la Guerra Civil ha sido casi totalmente borrado de la memoria por una falsificación deliberada de la historia que, en relación con este punto, todavía existe. Trotsky era obstinado, terco y envanecido por sus facultades; pero no impide que haya sido un gran hombre. También vacilo en llamarlo un hombre bueno; pero, en todo caso, no es personalmente repulsivo como Stalin, y su *Historia de la Revolución rusa* es, en mi opinión, un gran libro —aunque no diría lo mismo de sus demás trabajos, ni siquiera de sus admirables folletos, *Las lecciones de octubre* y *El nuevo camino* (*The New Course*). Comprendía además, mucho más que Stalin o Lenin, a Occidente y las ideas occidentales, aunque las repudiara. Finalmente, en su trato con los hombres, era por naturaleza un conciliador, a pesar de su carácter imperioso y de su impetuosidad; porque, en general, consideraba que las diferencias podían superarse mediante la discusión racional antes que convertirlas en insalvables conflictos de principios. Éste fue uno de sus mayores pecados en opinión de los viejos bolcheviques, de los cuales no formaba parte; pero en realidad era uno de sus méritos supremos, aunque fue una de las armas utilizadas para suprimirlo. Si Trotsky hubiera llegado a ser, en lugar de Stalin, el constructor máximo de la nueva Rusia, es de dudarse que ésta hubiera podido salir de la lucha a su situación actual de dominio mundial; pero estoy seguro de que, si hubiera sobrevivido, lo habría hecho con las manos mucho más limpias. Porque a Trotsky, cualesquiera que fueran sus defectos, le disgustaba la crueldad y la opresión innecesarias y creía en la igualdad social como objetivo socialista indispensable.

En cuanto a Bujarin, la principal víctima de 1938, se recordará que Lenin, en su famoso Testamento, lo había elogiado mucho como miembro del Comité Central y, al mismo tiempo, había puesto en duda su comprensión del marxismo. Quería decir, me parece, que la forma de Bujarin de interpretar el marxismo no era la suya, en cuanto que aquél asignaba un papel menor al proletariado industrial e insistía en un tratamiento más justo para los campesinos y quería llevar la Nueva Política Económica todavía más lejos. En los veintes y los treintas, Bujarin permaneció en la extrema derecha del movimiento, pero no se desvió mucho de éste sino después de la subida de los nazis al poder, cuando se asoció a Zinoviev y Kamenev y después, hasta cierto punto, a Trotsky, por una hostilidad creciente hacia Stalin. Pero no tiene sentido considerarlo un instrumento pagado por los nazis o por el imperialismo británico. Es posible que haya sido indiscreto; pero ¿cómo evitarlo sin estar dispuesto a ceder totalmente?, y él no lo estaba.

En cuanto a otros opositores menos importantes que fueron liquidados con él, probablemente la mayoría no había hecho nada —cuando más alguna indiscreción verbal, en el peor de los casos. Fueron suprimidos porque se sospechaba, justa o injustamente, que no eran leales ciento por ciento a la Rusia de Stalin y nada más.

CAPÍTULO XII

EL COMUNISMO EN CHINA

En el sexto volumen de esta historia hice un recuento del comunismo chino, en forma esquemática, hasta la "Larga marcha" mediante la cual Mao Tse-Tung, expulsado de su base en el sur de China, trasladó su cuartel general hacia el Noroeste y constituyó su nuevo gobierno soviético con centro en Yenán, Shensi. Debo, no obstante, volver sobre una parte de estos acontecimientos para relacionarlos con los que se produjeron en Yenán, en los últimos años de la década de los treinta. Como vimos, en 1927-28 el comunismo chino había sido prácticamente destruido por las campañas emprendidas por Chiang Kai-Shek y sus favorecedores del Kuomintang; en 1928, en un Congreso efectuado en Moscú bajo la vigilancia del Comintern, el Partido Comunista chino trató de elaborar una nueva política adaptada a las nuevas condiciones y atribuyó toda la culpa del desastre, salvo la correspondiente a Chiang y el ala derecha del Kuomintang, a los errores de la dirección comunista china, a pesar de que lo que ésta intentó había gozado en todos sus aspectos de la autorización del Comintern e inclusive lo hizo instigada por éste. No era ya posible persistir en la política de alianza y de infiltración al Kuomintang, que estuvo expulsando sin contemplaciones a los comunistas de sus filas, disolviendo las organizaciones laborales influidas por los comunistas, tales como los sindicatos, y ejecutando sin preliminares a todos los dirigentes comunistas o cuasicomunistas que pudieran apresar. Después de 1927 los comunistas fueron empujados a la clandestinidad en las ciudades y casi aniquilados como fuerza organizada; el Partido Comunista chino había perdido casi todos sus miembros de la clase obrera. Los intentos por remediar la situación mediante levantamientos esporádicos en algunas ciudades sólo sirvieron para completar el eclipse; lo que quedaba del movimiento comunista en un tiempo poderoso eran unos cuantos centros de rebelión campesina en el campo y pequeños grupos clandestinos en las ciudades, integrados principalmente por intelectuales, con escaso contacto con la masa del pueblo. En estas circunstancias, el congreso de Moscú había tenido que reconocer la importancia clave del problema rural y de la reforma agraria; pero la busca de soluciones estaba gravemente obstaculizada por su creencia dogmática en que la dirección revolucionaria debía corresponder al proletariado industrial, sin el cual los campesinos serían incapaces de un esfuerzo revolucionario constructivo, y por su profunda hostilidad a los métodos agrícolas practicados

por los campesinos y a la tendencia de los movimientos surgidos entre los campesinos pobres hacia la adopción de objetivos tales como la redistribución equitativa de la tierra entre las familias campesinas. Sosteniendo, como lo hacían, que China no estaba aún madura para la Revolución socialista y que el fin inmediato debía ser una Revolución que se detuviera, por el momento, en la etapa democrático-burguesa, los comunistas no podían tender a la nacionalización ni siquiera a la colectivización inmediata como la estaban efectuando los rusos; porque cualquiera de las dos medidas corresponderían a la Revolución socialista más que a la democrático-burguesa. Tampoco podían colocarse, inequívocamente, de parte de los campesinos pobres contra los acomodados; porque esto quebrantaría desastrosamente al menos en varias regiones, la unidad del movimiento campesino para la rebelión. En consecuencia, el congreso de Moscú no podía fijar una clara orientación en las cuestiones agrarias y siguió insistiendo teóricamente en la primacía del proletariado industrial y negando el papel constructivo del campesinado.

Las condiciones reales eran, sin embargo, demasiado fuertes para poder resistirlas sobre la base de la teoría marxista ortodoxa. Expulsados de las grandes ciudades, los comunistas tenían que ceder del todo o aprovechar las oportunidades todavía abiertas en el campo y, en especial, en las áreas rurales donde existían poderosos movimientos de descontento rural y donde el terreno era de difícil acceso para las fuerzas armadas del Kuomintang y los señores feudales que habían entrado en acuerdos con éste. En tales circunstancias surgieron dentro de China numerosas regiones, grandes o pequeñas, donde los campesinos, en rebeldía contra sus opresores locales, se negaron a pagar rentas e intereses sobre sus deudas, confiscaron y repartieron la tierra propiedad de terratenientes impopulares, y en muchos casos de los terratenientes en general, e impusieron multas y humillaciones a terratenientes y usureros llegando en ocasiones a ejecutarlos. En algunas regiones se actuó de la misma manera respecto a los campesinos más ricos, que empleaban mano de obra asalariada en las tierras que poseían o rentaban, mientras que en otros casos los campesinos en general actuaron contra los terratenientes y usureros como clase. Porque la mayoría de los campesinos sólo tenían armas improvisadas y carecían de equipo militar; pero la lucha era continua, aunque irregular, entre las guerrillas de campesinos y las guardias armadas sostenidas por los terratenientes y los gobiernos locales y en muchas regiones hicieron su aparición fuerzas de "guardias rojas" más o menos organizadas. La mayoría de los levantamientos campesinos sólo tuvieron un éxito transitorio; pero en algunos casos, en terreno favorable, surgieron de ellos gobiernos soviéticos locales con carácter definitivo, que sustituyeron completamente

a las anteriores autoridades gubernativas. Estos levantamientos se habían producido durante toda la década de los veinte, incluso en los años de colaboración comunista con el Kuomintang; pero después de 1927 adquirieron nueva importancia y fueron controlados más plenamente por los comunistas.

La más importante de las regiones soviéticas era el área de Kiangsu, Hunan y las provincias vecinas del sur de China que fueron controladas por las fuerzas encabezadas por Mao Tse-Tung. Allí, en territorio montañoso y difícil, Mao logró establecer su control sobre un área bastante extensa y poblada de la que fueron eliminados los terratenientes, abolidas o muy reducidas las rentas y donde se creó el núcleo de un Ejército Rojo regular, integrado por las mismas fuerzas irregulares campesinas y actuando al lado de éstas. Este Ejército Rojo se dedicó no sólo a entrenar oficiales para dedicarse devotamente al servicio de la Revolución, sino a adoctrinar a sus filas en los principios revolucionarios. Animados vigorosamente por ideas igualitarias y viviendo en condiciones de aguda escasez de suministros, el Ejército Rojo insistía en una combinación de estricta disciplina militar con un fuerte énfasis en la igualdad social y la participación igualitaria de las dificultades por soldados y oficiales, así como por los encargados de puestos civiles.

Chiang Kai-Shek, después de consolidar el control de las grandes ciudades dedicó su atención, en 1930, a un decidido esfuerzo por eliminar estas áreas de rebelión. En muchos casos logró sin gran dificultad reprimir a los soviets locales, aunque no destruir la resistencia clandestina; pero en el caso de la región de Kiangsu-Hunan, donde Mao ejercía el control, grandes expediciones militares, después de un éxito inicial, fueron aplastadas una tras otra y expulsadas del territorio por las fuerzas de Mao, que se apoderaron de grandes cantidades de material de guerra y reclutaron a un gran número de desertores para el Ejército Rojo. La estrategia de Mao en estas campañas era la retirada organizada antes del ataque, moviéndose gradualmente hacia posiciones preparadas dentro del territorio soviético. Entonces, a medida que se prolongaban las líneas de comunicación del enemigo y crecían las dificultades de operación en territorio hostil, el Ejército Rojo, que esperaba la oportunidad, lanzaba una contraofensiva, rechazaba al enemigo y recuperaba el territorio perdido y, si las condiciones eran favorables, perseguía a las fuerzas en retirada hasta zonas no controladas antes por los soviéticos —menos con el fin de conservar permanentemente esas áreas que de establecer organizaciones de guerrillas allí para impedir que fueran utilizadas como base para un nuevo ataque. Esta política de retirada seguida de un contraataque no demasiado profundo tenía gran éxito; en 1930-32 el Ejército Rojo logró rechazar

cuatro grandes campañas lanzadas por Chiang Kai-Shek en escala creciente, con fuerzas atacantes que oscilaban entre los 200 mil y el medio millón de hombres o más. En su contraofensiva Mao no trataba de capturar o, al menos, de conservar grandes ciudades, reconociendo que sus fuerzas eran inadecuadas para semejantes operaciones y sólo podían sostenerse si el terreno era decididamente favorable a su estrategia defensiva. Siempre se opusieron a esta política los comunistas que, por creer todavía que el impulso revolucionario requería la dirección de los trabajadores industriales, presionaban por la toma de las grandes ciudades; pero Mao se resistió siempre a esta política. Había también comunistas contrarios a su estrategia de retirada inicial por el sacrificio temporal de territorio que suponía y sostenían que el Ejército Rojo debía permanecer firme conservando lo que había ganado, aun cuando tuviera que hacer frente a fuerzas muy superiores en número a las suyas. Mao era contrario a esto, insistiendo en la necesidad de atraer a las fuerzas enemigas hasta que quedaran separadas en grupos suficientemente alejados entre sí para que el Ejército Rojo se concentrara con sus fuerzas contra cada uno por separado.

Finalmente, en la quinta gran ofensiva de Chiang en 1933, Mao fue derrotado y se intentó resistir el ataque sin ceder territorio a la embestida inicial. El resultado fue que el Ejército Rojo se vio obligado a retirarse de cualquier manera y no logró consolidar sus fuerzas para una contraofensiva bien situada de modo que, aunque el ataque fue rechazado, el territorio perdido no se recuperó y el Ejército Rojo sufrió serias pérdidas. En estas circunstancias, la sexta ofensiva de Chiang, en 1934, logró hacer insostenibles las principales bases del área soviética y se decidió evacuar toda la región. Chiang no logró, sin embargo, rodear y aniquilar al Ejército Rojo, que pudo emprender la "larga marcha" y, superando dificultades casi increíbles, logró establecerse en el Noroeste de China, donde consolidó el régimen existente de guerrillas en una República Soviética regular, que fijó su sede central en Yenán, provincia de Shensi, a principios de 1937 y logró mantenerse a pesar de todos los esfuerzos de Chiang por desalojarlo.

Dos años antes, a principios de 1935, Mao había sido designado presidente del Comité Central del Partido Comunista chino, y de entonces data su incuestionable ascendiente en el partido. Había sido elegido miembro del Comité Central en el Congreso del Partido en Moscú en 1928, pero hasta 1935 sólo había sido uno más entre los dirigentes y no el más influyente en sus decisiones generales. En efecto, en más de una ocasión había estado en desacuerdo con los demás líderes, criticando las desviaciones de derecha y de izquierda de lo que él consideraba la política correcta del marxismo chino, que desde un principio consideró necesario diferenciar en algunos aspectos vitales

de lo que había sido adecuado en la Unión Soviética y otros países. Sobre todo había diferido, después del desastre de 1927, de la opinión que sostenía la conveniencia, dadas las circunstancias, de dedicarse por encima de todo a reconstituir el comunismo chino como movimiento principalmente urbano, fundado en el apoyo de la mayoría del proletariado urbano y, con este fin, atacar a las grandes ciudades y tratar de capturarlas y conservarlas en contra del Kuomintang. Habían pensado que estos intentos no ofrecían perspectivas de éxito dadas las condiciones existentes y los había atacado como simple "aventurerismo" o "putchismo". Había estado en desacuerdo con Li Li-San cuando éste gozó de ascendiente en las decisiones del Partido a este respecto. Aun cuando Li Li-San fue obligado a renunciar del Politburó en noviembre de 1930, después de haber sido censurado por el Comintern por sus "desviaciones", y se retractó, siendo enviado a Moscú a principios del año siguiente; aun cuando el secretario general del Partido Comunista chino, Hsiang Chung-Fa, fue apresado y ejecutado por el Kuomintang en Shanghai, en junio de 1931, Mao siguió siendo uno de tantos dirigentes, hasta que en noviembre de 1931 fue elegido para presidir el primer Congreso Soviético Panchino en Juichin y allí tomó la iniciativa de proclamar la República Soviética China y promulgar su Constitución y leyes básicas. Después, como presidente del Comité Central Ejecutivo de la nueva República, asumió una posición de mayor autoridad. En 1932, cuando Ch'en Shao-Gü dejó de ser secretario general del Partido Comunista chino y partió hacia Moscú, su sucesor no fue Mao, sino Ch'in Pang-Hsein. Cuando se reunió el segundo Congreso Soviético Panchino en Juichin, en enero de 1934, Mao fue elegido nuevamente presidente; pero Chan Wan-T'ien se convirtió en secretario general sucediendo a Ch'in. Sólo en enero de 1935 llegó Mao a ser presidente del Partido Comunista chino y del Politburó al mismo tiempo —es decir, después de la evacuación de la región de Kiangsu, que había comenzado en octubre de 1934.

Mao había estado en desacuerdo, no sólo con Li Li-San y los llamados "aventureros" del ala izquierda del Partido Comunista, sino también con algunos desviacionistas de derecha que, sosteniendo lo mismo que él en cuanto a que el momento no era propicio para actos de tipo aventurero, se habían ido al otro extremo prefiriendo permanecer ocultos en espera de una coyuntura más favorable para hacer acto de presencia. Porque Mao, al abstenerse de la aventura que debería culminar con seguridad en la derrota, de ninguna manera quería decir que no había que intentar nada. Nada impediría, estaba seguro, que el Kuomintang y sus aliados se sostuvieron en las grandes ciudades; pero estaba fuera de sus posibilidades vigilar eficazmente todo el vasto campo chino, que hervía en agravios locales contra los terratenientes,

usureros, cobradores de impuestos y señores feudales y contra todas las formas de explotación imperialista extranjera —que él veía por todas partes con su malévola acción. Creía en la posibilidad de utilizar este descontento predominantemente campesino, no sólo para estimular revueltas locales que serían rápidamente sofocadas, sino en algunas regiones para expulsar a los terratenientes y usureros y establecer soviets locales que lograran sostenerse por un tiempo considerable en territorio favorable y pudieran, extendiéndose sobre un área creciente del campo, minar la autoridad de Chiang Kai-Shek y preparar el camino para un levantamiento que, llegado el momento, sería lo bastante fuerte como para atacar las ciudades y recuperar al proletariado industrial para la Revolución. Para lograrlo había que actuar, por supuesto, como querían los campesinos: expulsar a los terratenientes y dividir la tierra en parcelas renunciando por el momento, y por mucho tiempo, a todo intento de organizar a los campesinos en fincas colectivas o de nacionalizar la tierra. Pero Mao estaba totalmente dispuesto a hacer esto si con ello podía asestar un golpe efectivo a los enemigos de la Revolución. Actuar así no era, en su opinión, deslealtad hacia el marxismo ni hacia el comunismo; ya que el punto de partida de sus ideas sobre política inmediata era que China todavía estaba inmadura para la Revolución socialista y que era necesario completar primero la Revolución democrático-burguesa, en la cual la clase media y los intelectuales se unirían a los trabajadores y campesinos contra los elementos feudales y militaristas dentro de la sociedad existente. Se dedicó, pues, en común con algunos otros dirigentes —entre ellos, P'eng Pai y Chen Teh— a establecer, principalmente en terreno montañoso y de difícil acceso, áreas independientes bajo el gobierno de soviets locales o regionales encabezados principalmente por campesinos y encargados de reformar el sistema de tenencia de la tierra y los impuestos y de constituir no sólo una Milicia Roja —fuerzas guerrilleras— sino también, lo más rápidamente posible, un Ejército Rojo disciplinado y entrenado, totalmente adoctrinado dentro del comunismo, con cuadros que podrían ser reforzados sobre todo con desertores de las fuerzas del Kuomintang.

Es verdad que al expresar sus ideas, Mao insistía siempre en que los campesinos actuarían bajo la inspiración doctrinal del proletariado industrial y que sólo éste podría servir de vanguardia a la Revolución socialista. Insistía también en que, aunque la tarea inmediata era completar la Revolución democrática y no hacer la Revolución socialista, siempre había que tener en cuenta esta última como objetivo a largo plazo y el Partido Comunista debía mantener su independencia para estar listo en vista a hacer la revolución y de ninguna manera debía dejarse llevar por sus aliados ni apoyar la Revolución democrática como fin en sí. Es difícil, sin embargo, saber a ciencia cierta en qué

sentido Mao asignaba esta dirección necesaria al proletariado industrial con un sentido real; porque es posible que se refiriera al proletariado industrial y al Partido Comunista como si, de hecho, fueran idénticos, inclusive en un momento en que la mayoría de los miembros y líderes del Partido Comunista no estaba integrada por trabajadores industriales que, después del desastre de 1927, escaseaban bastante en sus filas. En opinión de Mao el Partido Comunista, cualesquiera que fueran los elementos que comprendiera de hecho, era por teoría y por definición cuando menos la "vanguardia" del proletariado industrial, la clase más avanzada socioeconómicamente. A pesar de que los campesinos y los artesanos dedicados a ocupaciones en pequeña escala los superaran numéricamente, los trabajadores industriales constituían la clase en nombre de cuya ideología la Revolución socialista tendría que hacerse y el Partido Comunista era la vanguardia de esta clase aunque pocos de sus miembros pertenecieran a ella.

Puede sostenerse con justeza que, al exponer esta doctrina, Mao no estaba planteando los problemas claramente y utilizaba palabras con sentido no auténtico y confuso. Pero no hay duda que consideraba al Partido Comunista chino independiente como el líder indispensable de la Revolución, tanto en su etapa democrático-burguesa como en su necesaria transformación en Revolución socialista; y que, en su opinión, los soviets que él y otros dirigentes fundaron, primero en Kiangsu y Hunan y después en Shensi y el Noroeste, no eran más que organizaciones provinciales y preparatorias, destinadas a perder su papel director cuando los comunistas se hubieran fortalecido lo suficiente para recuperar el control de las grandes ciudades y llevar a la mayoría de los trabajadores industriales a sus filas o dentro de organismos auxiliares, como los sindicatos, donde los comunistas pudieran ejercer control efectivo. Por el momento, sin embargo, el papel principal en la Revolución correspondía a los campesinos y era necesario aprovechar al máximo las oportunidades que se presentaban en las zonas rurales para ayudar a la Revolución a salir de su etapa adversa. A principios de 1935 la dirección del Partido Comunista se había convencido por fin de este punto de vista; y desde entonces Mao prevaleció casi sin discusión como el líder ideológico y práctico del comunismo chino.

Profundamente arraigado en el pensamiento de Mao estaba un factor esencial: China no era un país económicamente desarrollado ni políticamente independiente, sino que era presa del imperialismo extranjero. A esto se debía en parte su atraso y el predominio de los elementos feudales; ya que los señores feudales eran aliados subordinados y favorecedores de los imperialistas, sin cuya ayuda no podían esperar mantener su dominio sobre el pueblo chino. En consecuencia, los señores feudales estaban siempre dispuestos a traicionar al pueblo en

favor de los imperialistas y a actuar en nombre de éstos. No obstante, afortunadamente para China, había disensión en las filas del imperialismo. El imperialismo japonés, el más inmediato e inminente peligro desde 1931, entraba a veces en conflicto con el imperialismo británico y el norteamericano e inclusive estos últimos se volvían a veces antagónicos entre sí. Había que luchar contra todos los imperialistas; pero también era necesario, en lo posible, aprovechar sus disensiones e inclusive en un momento dado utilizar a los menos peligrosos en lo inmediato para combatir a los más peligrosos. De todos los imperialismos, el más peligroso en los treinta era indudablemente el japonés, porque Japón había lanzado su ataque contra Manchuria en 1931 y desde entonces había procedido a extender su poder hacia el sur dentro del territorio propiamente chino, hasta que en 1937 la agresión se había convertido en una guerra en gran escala extendida a todas las regiones importantes de China. El hecho de que la Sociedad de Naciones, desde 1931, no tomara medidas efectivas para controlar la agresión japonesa se había considerado como una demostración clara de la unidad fundamental del imperialismo como enemigo del pueblo chino y a los imperialistas ingleses y norteamericanos se atribuyó parte de la culpa; pero el principal resentimiento e ira del pueblo chino se había dirigido naturalmente contra los japoneses, cuyos fines e intenciones de someter a todo el país eran cada vez más manifiestos. La recién fundada República Soviética China declaró la guerra al Japón desde febrero de 1932 y llamó a todos los grupos y clases de China a unificarse en la aplicación de medidas de resistencia a la agresión japonesa; pero mientras la sede soviética permaneció en Kiangsu, la República soviética no tuvo contacto directo con los japoneses y sólo pudo actuar en pequeña escala a través de las guerrillas en las regiones del Norte ocupadas por los japoneses. Sólo cuando el cuartel general soviético se trasladó al Noroeste en 1935, después de la "Larga marcha", las fuerzas soviéticas entraron en batalla regular con los invasores japoneses y empezaron a desempeñar un papel importante en la lucha antijaponesa. Fue en diciembre de 1935 cuando el Comité Central del Partido Comunista lanzó su primer llamado para la constitución de un frente unido contra el Japón y pidió al Kuomintang que colaborara en la organización de un movimiento nacional de resistencia.

Este llamado a la acción unificada, que se reiteró durante los años siguientes, suponía cambios fundamentales en la política del Partido Comunista y en la exposición de la actitud comunista por Mao. Después que la primera colaboración con el Kuomintang fracasó totalmente en 1927-28, los comunistas habían denunciado a la burguesía como traidora de la Revolución y habían tratado de reconstruir su movimiento como una alianza de campesinos, intelectuales y pequeños burgueses

bajo la dirección del proletariado industrial —o más bien, del mismo Partido Comunista como su vanguardia. Pero a mediados de los treinta era obvio que la oposición a la penetración imperialista japonesa se extendía no sólo a estas clases, sino también a un gran sector de la "burguesía nacional". En estas circunstancias, Mao y el Partido Comunista se dispusieron a reconocer la existencia de la llamada "burguesía nacional", para distinguirla de los elementos más reaccionarios, como posible colaboradora en la lucha antijaponesa y favorecer la creación de un Frente Unido Antijaponés, lo bastante amplio para incluirla además de las otras clases a las cuales habían estado apelando en sus llamados a la acción unida.

Se hicieron numerosas justificaciones en China de esta aparente vuelta a la política de colaboración de las clases tan desastrosamente interrumpida en 1927. Esta vez, por supuesto, el apoyo al Frente Unido coincidía con la nueva política del Comintern de los Frentes Unidos contra el fascismo en Europa; y, en el verano de 1935, el séptimo Congreso Mundial del Comintern se manifestó específicamente favorable a un Frente Unido en China contra el Japón. La cuestión era determinar hasta qué punto el Frente podía extenderse a los sectores de derecha y cuál había de ser su base de organización. En un sentido, como ya hemos visto, el comunismo es siempre favorable al Frente Unido; pero el significado del término puede variar desde el "Frente Unido desde abajo", que es de hecho un llamado de los partidos comunistas a las masas para que abandonen a sus líderes reformistas y se agrupen bajo la dirección comunista, hasta el "Frente Unido desde arriba", que supone la colaboración con estos mismos líderes en una campaña común hacia un objetivo particular. En 1935 el Comintern, consciente del peligro fascista, que antes había subestimado, especialmente en Alemania, había pasado de la primera de estas actitudes —la "lucha de clases"— a la segunda y recurría a todos los grupos que pudiera atraer para la cruzada antifascista. China, país semicolonial, estaba sin embargo en distinta situación que los países occidentales; en China el equivalente correcto del Frente Unido contra el fascismo era el Frente Unido contra Japón, como el más peligroso representante del imperialismo y el enemigo en ese momento de la independencia nacional del pueblo chino. En vista de los fuertes sentimientos despertados por la agresión japonesa, era evidentemente posible constituir un movimiento de resistencia de masas y denunciar y aislar a Chiang Kai-Shek y sus partidarios que, en vez de dirigir sus mayores esfuerzos contra el Japón, se habían mostrado decididos a proseguir la guerra civil con la esperanza de destruir a la República Soviética China. Los trabajadores industriales y los campesinos —acomodados y pobres—, los intelectuales y la pequeña burguesía estaban indudablemente en actitud de res-

ponder a este llamado; pero ¿qué podía esperarse de la gran burguesía, que se había asociado a Chiang para derrotar a la Revolución en 1927? Muchos miembros de este sector eran demasiado firmemente antijaponeses y sufrían del impacto del imperialismo japonés; por tanto, era posible solicitar su participación en el Frente antifascista, especialmente si éste adoptaba la forma de un frente general, patriótico, chino contra los malvados extranjeros. Mao y sus colaboradores activistas plantearon así un nuevo análisis de la estructura de clases china, en el cual la "burguesía nacional" aparecía como una de las clases patrióticas que debían incluirse en el Frente antijaponés, quedando fuera del mismo sólo aquellos sectores de la burguesía y las clases feudales que había demostrado claramente su disposición a colaborar con los japoneses o, en todo caso, a subordinar la lucha contra el Japón a la guerra civil contra los soviets chinos. El Frente Unido, en este sentido, suponía una disposición condicional a cooperar con el Kuomintang y con el propio Chiang, a condición de que se renunciara a la guerra civil para concentrar todas las fuerzas posibles contra los japoneses y que el Kuomintang aceptara reimplantar cierta democracia y participación en la convocatoria a una Asamblea Nacional para elaborar un programa concertado para el futuro; y, además, debían hacerse concesiones a los trabajadores y campesinos mediante mejoras inmediatas a sus niveles de vida. Aceptadas estas condiciones, el Partido Comunista se declaraba dispuesto a detener la confiscación de tierras a los campesinos, a unir al Ejército Rojo con las fuerzas del Kuomintang y no utilizar el término "soviético", aceptando la disolución de los regímenes independientes en las regiones soviéticas y la inclusión de estas regiones en la estructura democrática pan-china.

El Kuomintang no respondió al Manifiesto del Partido Comunista que presentaba este programa de acción y demandaba la aceptación del Kuomintang. La guerra civil continuó; pero los comunistas, después de fundar en marzo de 1937 el gobierno soviético de Shensi-Kansu-Ninghsia con sede en Yenán, hicieron una guerra cada vez más abierta contra los japoneses en las provincias del Noroeste e intensificaron su campaña en favor del Frente Unido. En agosto de 1937 el Partido Comunista emitió sus *Diez grandes puntos políticos para la resistencia contra el Japón y la salvación nacional* y, en septiembre, su *Manifiesto sobre la cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista chino*, enviado en julio al Kuomintang, fue hecho público por el gobierno central. También en septiembre el Ejército Rojo, llamado entonces el "Ejército de la Séptima Marcha", avanzó sobre el norte de Hopei y Shensi para hostigar a los japoneses mediante la guerra de guerrillas y el nombre del gobierno soviético de Shensi-Kansu-Ninghsia se modificó adoptándose el de "Gobierno de la región fronteriza",

suprimiéndose la palabra "soviético". En diciembre se estableció en la región de Shensi-Hopei-Chahar un nuevo "Gobierno de la región fronteriza" y antes se había organizado un nuevo Cuarto Ejército con elementos comunistas y no comunistas en Kiangsi y Fukien, que se había dirigido a Kiangsu y Anwhei para hostilizar a la vanguardia japonesa.

La actitud del Partido Comunista ante la guerra abierta entre China y Japón que comenzó en julio de 1937 puede apreciarse en los *Diez grandes puntos volíticos* del mes siguiente. Estos puntos eran: 1) La derrota del imperialismo japonés. 2) La movilización militar total de la nación. 3) La movilización total de la nación entera. 4) La reforma del mecanismo político (convocando a una Asamblea Nacional para redactar una Constitución democrática y establecer un gobierno de Defensa Nacional integrado por los elementos revolucionarios de todos los partidos y grupos, pero excluyendo a las facciones pro-niponas). 5) Apoyo al Campo de la Paz y oposición al campo de agresión de Japón, Alemania e Italia. 6) Reforma al sistema fiscal, confiscación de las propiedades de los traidores, expansión de la producción y eliminación de los artículos japoneses del mercado. 7) Mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, campesinos, burócratas, maestros y soldados antijaponeses. Reducción de las rentas y las tasas de interés. Subsidio al desempleo. 8) Un nuevo sistema educativo, general, obligatorio y gratuito y un nuevo plan de estudios, para fundar la salvación del país y la lucha contra los japoneses. 9) La supresión de los traidores, los títeres y los grupos pro-nipones. 10) En cuanto a la cooperación plena entre el Kuomintang y el Partido Comunista, la constitución de un frente unido nacional antijaponés de todos los partidos, grupos, clases y ejércitos para dirigir la lucha contra el Japón y resolver la crisis nacional a través de una sincera unidad.

Al presentar este programa el Partido Comunista destacaba energicamente su compatibilidad con los "Tres Principios" establecidos por Sun Yat Sen —el nacionalismo, los derechos populares y un nivel de vida decoroso para el pueblo— que eran aceptados nominalmente por el Kuomintang. Al mismo tiempo, los "Tres Principios" eran declarados plenamente compatibles con el punto de vista del comunismo y se consideraba que encarnaban las demandas comunistas en la etapa de la Revolución democrático-burguesa. Los comunistas no trataban de ocultar su intención de avanzar a su debido tiempo más allá de esta etapa a la de la Revolución socialista ni de mantener la independencia de su propia organización para conservar la libertad de laborar por este avance llegado el momento; pero subrayaban el punto de que trabajaban en lo inmediato, no para el socialismo, sino sólo para implantar una etapa

democrática de transición, que se desarrollaría necesariamente en dirección del socialismo.

Ésta era la doctrina que Mao exponía en su obra, *Sobre la nueva democracia*, publicada en 1941, pero ya anticipada en gran medida en sus trabajos anteriores. *Sobre la nueva democracia* era no sólo una ampliación de las declaraciones y manifiestos en los que se había expuesto la política del Frente Unido desde 1935, sino también una nueva contribución a la teoría comunista, elaborada en China y de acuerdo con las condiciones chinas. Hasta 1935 el Comintern había expuesto una serie de puntos para aplicar su política general a las circunstancias chinas, cuyas características históricas propias y especiales eran reconocidas. Pero desde 1935 el Comintern, después de suscribir la política de Frente Unido en China como en otros lugares, dejó de imponer su propia política a la aceptación del Partido Comunista chino, que pudo seguir su línea de acuerdo con las directivas generales del Frente Unido. Esto era lo que Mao trataba, esencialmente, de hacer.

Sobre la nueva democracia comienza destacando la situación de China como país semicolonial, que ha vivido en condiciones feudales por cerca de tres mil años. Declara después que su ideal para China es la Revolución dividida en dos etapas, la democrática y la socialista, diferentes por su naturaleza. Pero la Revolución democrática, la primera de estas etapas, es establecer una Nueva Democracia, esencialmente distinta de la antigua democracia y del feudalismo. La Revolución democrática china, se afirma, puede rastrearse hasta los comienzos de la Guerra del Opio de 1839-42; pero en ese momento y hasta la Revolución rusa de 1917 permaneció dentro de la órbita de la vieja Revolución democrático-burguesa mundial, de la cual formaba parte. Desde 1917, sin embargo, la Revolución democrática china entró dentro de la órbita de la nueva Revolución democrático-burguesa y se convirtió en parte de la Revolución proletaria-socialista mundial. Esto significa que, aunque el objetivo inmediato sigue siendo democrático-burgués, la Revolución, aun en esta etapa, no es ya del antiguo tipo, bajo la dirección burguesa para la construcción de una sociedad capitalista con una dictadura burguesa, sino una nueva especie de Revolución dirigida, total o parcialmente, por el proletariado, con el objetivo inmediato de implantar un nuevo Estado basado en la dictadura conjunta de todas las clases revolucionarias. En otras palabras, desde 1917 la Revolución mundial ha entrado en una nueva fase: se ha convertido en una "Revolución proletaria-socialista mundial, en la cual el proletariado de los países capitalistas es la principal fuerza y los nativos oprimidos de las colonias y las semicolonias son sus aliados". En estos países todas las clases revolucionarias, concientes o no de ello, participan en la Revolución proletaria-socialista mundial y son aliadas del prole-

tariado en su realización. En consecuencia, la Revolución burguesa en esos países se convierte en Revolución democrático-burguesa de un nuevo tipo, esencialmente diferente a la de antes. Si la burguesía china es incapaz de dirigir esa Revolución contra el feudalismo y el imperialismo, la responsabilidad de hacerlo corresponde al proletariado chino, a los campesinos y a los intelectuales y otros elementos de la pequeña burguesía. Estas clases, se advierte, "han despertado o están despertando y constituirán elementos básicos del marco estatal y gubernativo en la República Democrática China", que sólo puede ser "una dictadura de todo el pueblo antiimperialista y antifeudal". Así, la nueva República Democrática difiere esencialmente del tipo anterior, más débil, sometido a la dictadura de la burguesía. Dentro de la categoría general de Repúblicas se reconocen tres clases de Estados: los sujetos a una dictadura burguesa, los sujetos a una dictadura proletaria y los sometidos a una dictadura conjunta de las clases sociales revolucionarias; y la tercera de estas formas es la de transición en las áreas coloniales y semicoloniales. En una República semejante se pondrá en práctica una política económica correspondiente a la estructura política. La banca, las grandes industrias y otras formas de los grandes negocios, incluyendo las empresas de propiedad extranjera, serán nacionalizadas y reorganizadas por el Estado; pero podrán existir otras formas de empresa, en las que "no se pueda manipular el nivel de vida del pueblo". Los cultivadores de la tierra la poseerán; las propiedades de los grandes terratenientes serán confiscadas y redistribuidas entre los campesinos; pero los campesinos ricos podrán conservar la tierra que poseen.

Mao se refiere después al papel del campesino en la Revolución democrática china. "La Revolución china es en esencia una revolución del campesinado; la guerra de resistencia del campesino es esencialmente la guerra de resistencia del campesinado. La política de la nueva democracia es esencialmente la transferencia del poder al campesinado. Los nuevos y auténticos Tres Principios —alianza con la Unión Soviética, alianza con los comunistas y apoyo a los campesinos y trabajadores— son en esencia los principios de una Revolución campesina. .. La guerra antijaponesa es, por su esencia, una guerra campesina. .. Todo lo que hacemos es para el campesinado." Pero Mao añade que esto no significa olvidar a otras clases, aunque más del 80 % de la población de China es campesina. "La fuerza del campesinado es la principal fuerza de la Revolución china. Pero hay también varios millones de trabajadores industriales, esenciales para la vida del pueblo y sin ellos la Revolución no podría triunfar... porque son ellos los líderes de la Revolución y los que tienen el más alto espíritu revolucionario." Así Mao, después de afirmar aparentemente la primacía de los campesinos, vuelve a la idea de que los trabajadores industriales son,

en un sentido profundo, los dirigentes necesarios de la Revolución; pero ¿entiende realmente por "proletariado industrial" los trabajadores en la industria o el Partido Comunista considerado necesariamente como su vanguardia? Creo que hay aquí una confusión; pero es evidente que uno y otro concepto están estrechamente identificados en su pensamiento.

Mao habla luego de la "Revolución cultural" que refleja y sirve a los fines de la Revolución política y económica. Una cultura socialista, dice, es imposible por el momento, porque debe reflejar una política y una economía socialistas, que no existen y no pueden existir todavía. Es, no obstante, una tarea indispensable extender la propaganda del pensamiento comunista y el estudio de las doctrinas del marxismo-leninismo, porque sin esto no pueden triunfar ni la Revolución socialista ni tampoco la democrática. Los comunistas deben preparar al pueblo para la siguiente etapa socialista de la Revolución, pero deben distinguir esta preparación de la construcción de una nueva cultura popular apropiada a la etapa democrática. La esencia de ésta es su carácter nacional: "pertenece a nuestra propia nación y encierra características de nuestra propia nación". La nueva cultura debe absorber mucho de la cultura de otras naciones, pero debe evitar absorberlas totalmente. "La tesis de una 'total occidentalización' es un punto de vista erróneo." Lo mismo que el cuerpo humano ingiere alimentos, separando lo que puede absorber del residuo y expulsando éste, China debe proceder con los elementos culturales extranjeros. El marxismo formal no es útil a China si no ha sido adaptado a la forma nacional adecuada a la cultura china. La nueva cultura debe ser, además, predominantemente científica, rechazando todas las formas de ideas feudales y supersticiosas y buscando la verdad a través del estudio de los hechos concretos. Debe reconocer la grandeza de la tradición cultural china y recoger de ella todo lo que sea de un carácter más o menos democrático o revolucionario, pero nunca debe absorberlo indiscriminadamente. Por último, la nueva cultura debe ser popular: debe apelar directamente al pueblo y jamás aislarse de éste en una torre de marfil; para esto es necesario reformar y simplificar el idioma y utilizar palabras sencillas. "La combinación de la nueva política democrática, la nueva economía democrática y la nueva cultura democrática integra la República de la Nueva Democracia."

Éste es, indudablemente, un resumen inadecuado del razonamiento de Mao, que no está en modo alguno claro en todos sus puntos; pero creo que refleja bastante bien lo esencial. El factor nuevo más importante es la afirmación de la posibilidad y de la necesidad para China de una dictadura conjunta de las distintas clases. No se considera siquiera la posibilidad de otra cosa distinta a la dictadura, refi-

riéndose a las democracias occidentales simplemente como formas de dictadura burguesa. Pero, mientras el comunismo había sostenido siempre que todas las formas de Estado deben descansar en la dictadura de una clase en particular, burguesa o proletaria, Mao exponía la teoría de una dictadura compartida entre las clases que participaran en la Revolución y que abarcaba, pues, a todos salvo los aliados de los feudales y imperialistas. Esta dictadura no descansaría, sin embargo, en todo el pueblo, independientemente de las clases, sino en una distribución del poder entre las clases. Éste era, de hecho, el carácter fundamental de su Nueva Democracia, aplicable no a todo el mundo, sino a los países no maduros todavía para el socialismo y especialmente a los países feudales y dominados por los imperialistas como China. Era, esencialmente, una idea de transición; porque estos países deberían proceder de la Revolución democrática a la Revolución socialista y los partidos comunistas tenían en ellos la doble función de desempeñar un papel en la primera y, al mismo tiempo, preparar la opinión para la segunda: de modo que, al colaborar en un Frente Unido con otros elementos no debían de ninguna manera renunciar a su independencia ni aferrarse al Frente en detrimento de su tarea a largo plazo. Mao atacaba como disidentes de derecha a los que actuaban de manera que favorecían esa absorción, atacando con igual vehemencia a los extremistas de izquierda, que negaban la legitimidad de la cooperación con otras clases en la tarea inmediata de realizar la Revolución democrática —por esto atacaba especialmente a los trotskistas chinos, que habían creado su propia organización, con Ch'en Tu-Hsin a la cabeza (1880-1942), en una Conferencia efectuada en Shanghai en 1931, pero cuyos líderes habían sido arrestados y encarcelados por el Kuomintang al año siguiente. Mao había calificado a trotskistas e imperialistas de principales enemigos de la Revolución en su informe al Partido Comunista chino en noviembre de 1938, cuando denunció el Tercer Frente de Han Lin-Fu con especial vehemencia. Los trotskistas chinos, que continuamente se referían al desastre de 1927 como el resultado de la alianza con el Kuomintang, eran los críticos más decididos del Frente Unido y de la Nueva Democracia de Mao y eran atacados tan duramente como los partidarios y supuestos partidarios de Trotsky en Europa.

Los comunistas, como ya hemos visto, habían ofrecido en 1937 renunciar, en determinadas condiciones, a sus gobiernos soviéticos independientes, abandonar el empleo del término "soviético", asimilar al Ejército Rojo en un ejército nacional unificado antijaponés y detener la confiscación y redistribución de la tierra en las regiones controladas por ellos, como parte de una transacción general con el Kuomintang para fundar la acción común contra el Japón. ¿Hasta qué punto

se dieron realmente esas condiciones? Después del "Incidente de Sian" de diciembre de 1936, cuando Chiang Kai-Shek, después de ser secuestrado por Chang Hsueh-Liang, fue libertado por consejo del Partido Comunista, se había producido un cierto cambio en las relaciones con el Kuomintang. El Kuomintang no respondió oficialmente a las proposiciones del Partido Comunista de 1937 para la integración de un Frente Unido; pero varias negociaciones se llevaron a efecto entre los dos partidos y, por un tiempo, la guerra civil fue de hecho interrumpida y los ejércitos de ambos participaron conjuntamente en la resistencia al Japón. En 1937 y 1938 las relaciones entre ambos partidos mejoraron sustancialmente, al menos en apariencia. Entonces, después de la caída de Hankow en octubre de 1938 hubo un deterioro progresivo y el conflicto se inició de nuevo después del ataque del Kuomintang al Cuarto Ejército en enero de 1941. Hemos visto que en el periodo de mejoría en las relaciones, los comunistas cambiaron efectivamente la designación oficial de las regiones soviéticas; y en julio de 1938 un grupo de delegados del Partido Comunista, encabezados por Chou En-Lai, se reunieron con los líderes del Kuomintang para entablar negociaciones en Chungking. Pero, en el verano de 1939, Chiang Kai-Shek había ordenado un bloqueo total de las áreas controladas por los comunistas en Shensi y Kansu. No obstante, los comunistas persistieron en sus esfuerzos de acción unida, introduciendo en julio de 1940 en las regiones bajo su control el sistema llamado de los "Tres tercios", de gobierno de coaliciones integradas en números iguales por representantes comunistas, del Kuomintang y no pertenecientes a ningún partido. Esta política prosiguió aun después que, en enero de 1941, el general del Kuomintang, Ku Chu-T'ung, había atacado al Cuarto Ejército, capturado a su comandante y matado en batalla al vicecomandante además de dispersar a todas sus fuerzas, cuyos restos escaparon para reunirse con los comunistas en Kiangsu y Shantung. Así siguieron las cosas, con una mezcla de colaboración en algunas regiones y lucha entre los rivales en otras, hasta que terminó la guerra en Europa. Entonces se celebró, en abril de 1945, el séptimo Congreso del Partido Comunista chino en Yenan, que reformó la Constitución del Partido y recibió un informe de Mao acerca del gobierno de coalición. En la reforma de la Constitución el Congreso insertó un Preámbulo, notable porque se refiere a las ideas de Mao Tse-Tung como "los principios orientadores de toda la labor del Partido" que, junto con los fundamentos del marxismo-leninismo, son básicos para definir el curso de la Revolución en China. El Partido Comunista se autodefine como "una organización unificada, compacta, construida sobre los principios del centralismo democrático y sostenida por la dis-

ciplina que todos los miembros del partido deben observar consciente y voluntariamente".

El Partido Comunista, al elevar a Mao Tse-Tung a una posición de igualdad —o casi— con Marx y Lenin, colocándolo, al menos implícitamente, muy por encima de Engels o Stalin, honraba a su líder, si no precisamente como teórico original, al menos como maestro en tácticas y estrategia, ya que había visto claramente cómo adaptar la doctrina de Marx y Lenin a las circunstancias de China como país feudal y semicolonial —y quizá a las circunstancias de otros países semejantes—. Pero ¿la doctrina de Mao era algo más que una adaptación de la doctrina del marxismo-leninismo? Mao por su parte afirmaba que sí; pensaba, no menos que Marx o Lenin, que el proletariado industrial era la clase destinada a dirigir la Revolución, no sólo en su etapa socialista, que contemplaba como segura, sino también en gran medida en la fase anterior de la "nueva democracia". Si se tomaban literalmente sus palabras, la Revolución sólo podía triunfar en cualquiera de sus etapas bajo la dirección proletaria. Ciertamente también había afirmado que, en la etapa de la "nueva democracia" sería forzosamente una Revolución principalmente campesina y que, en toda su carrera, había sido antes que nada dirigente y organizador de la rebeldía campesina. Sentía, sin embargo, que los campesinos, aunque pudieran *hacer* la Revolución en su primera etapa, no podrían *dirigirla* sino bajo una orientación de fuera y creía además profundamente que no podrían hacer la Revolución en su segunda etapa socialista. Lo que él llamaba dirección "proletaria" era pues necesaria en ambas etapas y necesaria en la primera para asegurar que se hicieran de inmediato los preparativos debidos para realizar la segunda y que el Partido no degenerara en un simple partido campesino ni se asimilara a las demás fuerzas con las cuales tenía que actuar, por el momento, en alianza. Sobre estas bases, Mao insistió con todas sus fuerzas y a lo largo de toda su carrera que los errores de los veintes no debían repetirse —que el Partido comunista no debía infiltrarse dentro del Kuomintang ni perder su fuerza de acción independiente y su capacidad para trazar su propia política por colaborar con aquél ni con las clases de las cuales pretendía ser el vocero. Mao veía la imposibilidad de una dirección efectiva de la clase obrera, en el sentido de una dirección real por un partido de masas basado en los trabajadores industriales mientras las grandes ciudades estuvieran ocupadas por el Kuomintang e incluso mientras el proletariado industrial no se hubiera incrementado considerablemente y concentrado más a través del proceso de industrialización. Pero también podía, para su propia satisfacción, conciliar la preeminencia real de los campesinos en la lucha revolucionaria y la ausencia de una gran influencia del Partido Comu-

nista entre los trabajadores industriales por su creencia en que el Partido Comunista era el único líder posible, natural, inevitable y la vanguardia del proletariado industrial, aunque pocos obreros pertenecieran al partido o pudieran llenar las condiciones necesarias de una participación desempeñando una labor activa dentro del mismo. Para Mao, las ideas mismas de "Partido Comunista" y "proletariado industrial" estaban inseparablemente ligadas, de tal manera que era imposible concebir a uno sin el otro o contemplar la posibilidad de una división entre ambos. Ésta era la base misma de su filosofía marxista-leninista; y nada de lo que afirmaba debía interpretarse como una desviación de ésta. Por el momento, era necesario unir contra el imperialismo y sobre todo contra los japoneses a todas las clases y grupos que pudieran ser instadas a participar en el Frente Unido y en la constitución de la *Nueva Democracia*. Pero la "Nueva Democracia" era sólo un paso de transición en el camino hacia la Revolución socialista y cuando madurara el momento para la Revolución socialista la dirección debería corresponder sólo al Partido Comunista, como vanguardia y vocero representativo de los trabajadores industriales. Una dictadura conjunta de varias clases era considerada posible y necesaria en la etapa de la Revolución democrática; pero Mao nunca afirmó, ni creo que supusiera, que pudiera prolongarse en la siguiente etapa socialista.

¿Cómo suponía, pues, Mao, que si se entregaba a los campesinos la posesión individual o familiar de la tierra, en la primera etapa democrática de la Revolución fuera posible pasar después a una etapa posterior, socialista? Seguramente no creía que la agricultura individual pudiera servir de base al socialismo ni fuera compatible con el funcionamiento de una sociedad socialista. Pero apenas se refirió a las condiciones de la transición de la Nueva Democracia hacia el socialismo, salvo para predecir que habría de producirse necesariamente llegado el momento. De hecho, parece haber creído tanto como Marx y Lenin en la superioridad de la empresa en gran escala y en la relación inseparable entre ésta y el socialismo además de considerar como artículo de fe fundamental que la Revolución socialista, concebida en términos de gran empresa, triunfaría necesariamente cuando se suprimiera la opresión del capitalismo. Era vigorosamente partidario del desarrollo industrial, como resultó más claro que nunca cuando el Partido Comunista lanzó su campaña de incremento de la producción en febrero de 1943, pero ya había sido evidente mucho antes. Pero nunca consideró necesario explicar cómo podría transformarse la agricultura individual campesina en agricultura colectivizada o nacionalizada, siendo siempre su preocupación principal la necesidad de una estrategia revolucionaria inmediata y el sostenimiento por el Partido Comunista de sus

doctrinas esenciales no alteradas por el momento por las exigencias de la transacción.

Sobre este punto, como hemos visto, siempre insistió con la mayor vehemencia. Al aconsejar alianzas con todos los grupos antimperialistas, nunca ocultó, ni quiso que los ocultara el Partido Comunista, sus objetivos socialistas ulteriores. Por el contrario, consideraba al Partido Comunista una escuela para el socialismo y el comunismo, además de la fuerza dirigente en los problemas inmediatos, y siempre dio gran importancia a su papel educativo y al deber de todos sus miembros de conocer las doctrinas marxistas-leninistas. Insistía mucho también en la importancia de lo que llamaba el "centralismo democrático", como método indispensable de organización y control del partido. Mao insistía en que todos los miembros del Partido Comunista pusieran en práctica su política en forma disciplinada y que esta política debía emanar de las organizaciones centrales del Partido en vez de ser transmitidas a éstas desde los escalones más bajos. Con ello subrayaba la necesidad de que se efectuaran discusiones muy completas, entre todos los miembros y ramas, de las cuestiones políticas sobre las cuales no se hubiera adoptado aún una decisión oficial con carácter de obligatoria; pero también subrayaba que esas discusiones debían realizarse sólo dentro del Partido y entre sus miembros y que no existía el derecho de libre discusión más allá del Partido. Esta restricción era de particular importancia cuando el Partido debía actuar en colaboración con otros elementos del Frente Unido ya que descartaba el derecho de libre discusión en las organizaciones que colaboraban con el Partido, sin pertenecer al mismo.

En la Constitución del Partido adoptada en 1945 se incluyeron disposiciones en relación con esto, lo mismo que en la redactada en 1928 en el Congreso de Moscú. La nueva Constitución, sin embargo, subrayaba más la determinación central de la política y la disciplina que limitaba la discusión y la libre expresión de opiniones referentes a las cuestiones del partido a sus miembros, en debates internos. El Artículo 25 establece que "antes de su determinación por el Comité Central, las organizaciones locales y otras del partido o sus responsables deben discutir los problemas de carácter nacional sólo entre ellos o someter sus proposiciones respecto a estas cuestiones al Comité Central. En ningún caso deben dar publicidad a sus opiniones o decisiones". Esto, por supuesto, sólo se aplica a las "cuestiones de carácter nacional"; pero hay además disposiciones correspondientes referentes a la "democracia dentro del partido", en las cláusulas referentes a la organización regional y local. El capítulo referente a la estructura de la organización del partido se inicia con las palabras "La estructura del partido se organiza de acuerdo con el principio del centralismo demo-

crético" y establece una compleja jerarquía que determina la precedencia relativa de los diversos organismos dentro del partido, hasta el Congreso Nacional, autoridad máxima. También se establece que, en el caso de cada organismo, "cuando no están en sesión, los comités electos por ellos son las autoridades supremas en los diversos niveles de la organización del partido". Esto establece claramente la autoridad superior del Comité Central excepto durante las sesiones del Congreso Nacional. Un Congreso Regional, por ejemplo, no tiene derechos sobre el Comité Central. Las organizaciones locales del partido tienen "derecho a tomar decisiones respecto a cuestiones de carácter local"; pero éstas "deben someterse a las decisiones del Comité Central o de otros organismos más altos". Las células del partido se declaran "los organismos básicos del Partido" y en "las organizaciones gubernamentales, los sindicatos obreros, las asociaciones campesinas, las cooperativas y otras organizaciones de masas donde tengan posiciones de responsabilidad tres o más miembros del partido" se deben constituir "núcleos del Partido", pero estos núcleos quedan bajo la dirección de los correspondientes comités del partido en los diversos niveles, y no tienen autoridad independiente. Finalmente, hay disposiciones para disciplinar a los miembros que violen la disciplina del partido, hasta la sanción de expulsión; pero existen procedimientos estrictos de apelación por las organizaciones del partido o sus miembros individuales contra cualquier sentencia que se les imponga y se establece que el propósito de las medidas disciplinarias es educacional y que "de ninguna manera se pretende. . . imponer un principio de punición en masa dentro del Partido". Las organizaciones del partido no deben, definitivamente, adoptar una actitud indebidamente rígida; en general, la advertencia o el consejo más que la expulsión parece considerarse el método adecuado para tratar a los culpables por primera vez, o cuyos incumplimientos no sean muy graves. No existen dudas, sin embargo, acerca del deber de demostrar una estricta conformidad, por parte de todos los miembros, a las decisiones adoptadas por el Comité Central o por las organizaciones menos importantes del partido sujetas a aquél, o acerca de la determinación de la política en el nivel más alto y su transmisión hacia abajo, antes que, al contrario, de los miembros y las ramas hacia el centro.

Hemos visto que el Partido Comunista, al presentar su programa de Frente Unido, se declaraba dispuesto a interrumpir la confiscación y redistribución de la tierra a los campesinos. Esto se hizo, en efecto, durante y después de la guerra chino-japonesa que comenzó en 1937; pero no significó siquiera que el Partido perdiera su principal apoyo entre los campesinos. Quedó en libertad, aunque los terratenientes que quedaban conservaran la propiedad de sus tierras —excepto donde

se les podía expulsar como traidores definidos a la causa nacional— para actuar en favor de la reducción de las rentas y las tasas de interés sobre los préstamos y la supresión o reducción de los impuestos opresores que pesaban sobre los campesinos. En una decisión política adoptada en enero de 1942, el Comité Central del Partido Comunista trazó detalladamente su política agraria en las regiones básicas controladas por los comunistas. De acuerdo con esta política, las rentas debían reducirse considerablemente y las tasas de interés bajarían; pero los terratenientes que aceptaran las rentas reducidas e inclusive los señores feudales que lo hicieran, recibirían las sumas reducidas que les correspondían y quedarían en posesión de sus tierras y capitales. El Partido Comunista pedía a sus miembros "que reconocieran que la mayoría de los terratenientes son antijaponeses y que algunos de los señores feudales ilustrados favorecen también las reformas democráticas". En consecuencia, la política del Partido Comunista es "sólo ayudar a los campesinos a reducir la explotación feudal, pero no liquidar totalmente la explotación feudal, y mucho menos atacar a los señores ilustrados que apoyan la reforma democrática. Por tanto, después de reducir las rentas y las tasas de interés hay que asegurar su pago; y se establece que, además de proteger las libertades civiles, los derechos políticos y económicos y los derechos a la tierra de los campesinos, hay que garantizar a los terratenientes sus libertades civiles, sus derechos políticos, económicos y sus derechos de posesión de la tierra, para aliar con nosotros a la clase de los terratenientes en la lucha contra los japoneses. La política de liquidar la explotación feudal sólo debe adoptarse contra los traidores incapaces de arrepentirse". Las disputas entre terratenientes y arrendatarios deben resolverse, siempre que sea posible, mediante la conciliación; y el sistema de gobierno de los "Tres tercios" debe "realizarse resuelta, estricta y extensamente en consejos y gobiernos de los distintos niveles". Los reglamentos de gobierno no deben ser "parciales", sino que deben obligar a los campesinos lo mismo que a los terratenientes.

No hay duda que sobre la base de tan moderada política agraria el Partido Comunista pudiera seguir reuniendo un efectivo apoyo campesino. Al hacerlo, descansaba en parte en los beneficios logrados, pero también considerablemente en una apelación directa al sentimiento nacionalista. Desde el momento en que el Partido Comunista comenzó a demandar un Frente Unido Antijaponés, el tono de sus llamados era fuertemente nacionalista y el internacionalismo, que había sido una fuerte característica de su actitud anterior, pasó cada vez más a un segundo plano. El efecto general de la doctrina de Mao fue diferenciar agudamente el caso de China —y de otros países sujetos a la dominación imperialista— del de otros países y, en consecuencia, del de la

Unión Soviética: de modo que el ejemplo de la Unión Soviética dejó de ser objeto de imitación deliberada y se subrayó enérgicamente la necesidad de que China elaborara una política adecuada. Básicamente, la doctrina no era nacionalista, ya que se consideraba aplicable a todos los países coloniales y semicoloniales y no sólo a China; pero como la cuestión era, principalmente, determinar cómo podrían actuar más eficazmente dadas las condiciones de su propio país, se debía trazar antes que nada la estrategia de acción apropiada a China. Cuando ésta se definió situando en primer lugar el agrupamiento de todas las fuerzas posibles dentro de China contra el imperialismo japonés, desapareció toda diferencia inmediata entre la política comunista china y el nacionalismo democrático chino y este nacionalismo se convirtió progresivamente en parte de la política oficial del Partido Comunista. Esta política alejó al Partido del Comintern, a pesar de la ardiente recomendación del Frente Unido contra el fascismo que éste hacía; en la práctica, el Comintern casi dejó de intervenir en los asuntos chinos mucho antes que Stalin lo aboliera en 1943. Mao siguió afirmando como principios de acción la alianza con la Unión Soviética y la consideración de la Revolución china en sus dos etapas como parte, esencialmente, de la Revolución proletaria mundial; pero esto no significaba que estuviera dispuesto a aceptar que se dictara la política china desde Moscú ni que se marchara hacia la Revolución mundial mientras no se hubiera realizado plenamente la "nueva Revolución democrática" en China. Al adoptar un tono cada vez más nacionalista e invocar mucho más espontáneamente las glorias del pasado histórico y cultural de China, el Partido Comunista seguía un camino paralelo en general al de la Unión Soviética, cuando menos después de 1941, y de otros partidos comunistas, como el francés, a fines de los treintas; pero el camino que seguía era el suyo propio y no le era impuesto por la Unión Soviética.

En líneas generales, pues, lo que se produjo en China durante la década de los treintas, principalmente bajo la influencia y la inspiración de Mao Tse-Tung, fue un comunismo propiamente chino que asignó un papel mucho mayor a los campesinos que el comunismo de casi todos los demás países; porque, aunque la dirección del proletariado industrial seguía afirmándose en principio, se reconocía que la Revolución era y debía ser en la práctica primordialmente una Revolución campesina, tanto inmediatamente como por bastante tiempo, y la dirección nominal del proletariado industrial significaba en efecto poco más que la dirección del Partido Comunista sobre los campesinos. Los campesinos serían necesariamente, en opinión de Mao, los principales actores en la realización de la nueva Revolución democrática, dentro de la cual laboraría el Partido Comunista no sólo para contribuir

a llevarla a cabo, sino también para preparar los ánimos para la Revolución socialista que debía seguirle. Además, en vista de la situación semifeudal y semicolonial de China era indispensable atraer al lado de la Revolución a todos los elementos del pueblo que pudieran ser estimulados a participar en la cruzada antiimperialista y aceptar la necesidad de una estructura política y social "democrática"; y esto suponía una fuerte insistencia en la solidaridad nacional como medio de ganar apoyo. No es fácil determinar hasta qué punto el Partido Comunista chino adoptó teóricamente la doctrina del nacionalismo: en todo caso se volvió considerablemente nacionalista en la práctica y hay que tener en cuenta que la unidad de la teoría y la acción era uno de los principios marxistas que el propio Mao afirmaba más vehementemente. Mao pronunció una conferencia, en 1937, sobre *La práctica*, que fue publicada más tarde, donde se afirmaba enérgicamente que "el marxismo no es un dogma, sino una guía para la acción" y toda su contribución al pensamiento socialista está de acuerdo con esta afirmación.

Me he referido exclusivamente en este capítulo al comunismo chino y no he dicho nada del desarrollo de otras formas de socialismo en la China de los treinta. Puede decirse poco, en general, de desarrollos externos al Partido Comunista que, tan pronto como comenzó a recuperarse del desastre de 1927, ejerció un cuasimonopolio en la defensa del socialismo y actuó solo en la práctica. Fuera del Partido Comunista chino hubo siempre grupos que se opusieron a la estrategia del Frente Unido y demandaron una política proletaria más limitada, basada en una alianza de trabajadores y campesinos y pedían una identificación más estrecha con la causa de la Revolución mundial, distinguiéndola de la Revolución exclusivamente china. Éstos eran los grupos que Mao denunciaba como "trotskistas", lo cual confesaban ser algunos, pero no todos. A estos grupos pertenecían los que participaron en la Conferencia de Shanghai de 1931 y fundaron un Comité Central rival, encabezado por Ch'en Tu-Hsin como secretario general, el "Tercer frente" de Han-Lin-Fu, el "Frente Lenin" de Liu Jen-Ching, atacados por Mao en 1938, y algunos otros movimientos de "oposición". Mao atacó también, como "putehistas" y "advenedizos" a los que siguieron la dirección de Li Li-San en 1930, antes de su retractación y envió a Moscú al año siguiente. Hubo también disidentes de derecha, atacados de "oportunistas", como Tan Ping-Shan, quien fue expulsado del Partido a fines de 1927 por proseguir en colaboración con el Kuomintang y que después organizó un "Tercer Partido" y Ku Shan-Chung, quien se pasó al Kuomintang después de su arresto en 1932.

Aparte de estos "desviacionistas" había en China muchos intelectuales simpatizadores del socialismo, pero no relacionados con el Par

tido Comunista ni con sus vastagos disidentes. Para la mayoría de ellos la política del Frente Unido Antijaponés constituía un fuerte atractivo y, sin adherirse al comunismo, estaban dispuestos a colaborar con el Partido Comunista y a aceptar, en general, su dirección en la política inmediata. Hasta el surgimiento de la Liga Democrática después de 1945 estos elementos carecieron de una organización central, en torno a la cual pudieran coordinarse; la mayoría de ellos trabajaron en el Frente Unido o actuaron en organismos no políticos como la Liga Cooperativista —o, por supuesto, en ambos. Los intelectuales no comunistas, sin embargo, no poseyeron nunca un apoyo de masas y no lograron ejercer una influencia importante. Tampoco parecen haber sido fértiles en el campo del pensamiento socialista, aunque algunos intentaron adaptar el pluralismo socialista europeo a las condiciones chinas y su influencia en el movimiento cooperativista siguió siendo importante hasta 1949 —en general, fuera de las áreas controladas por los comunistas.

Mao Tse-Tung, no obstante, es la única figura de verdadera estatura socialista que surgió en China entre las dos guerras, como predicador y ejecutante práctico de una notable variante de la actitud comunista, asignando un papel mucho mayor que los comunistas de otros países al campesinado y a los supuestos nacionalistas del Frente Unido en un país semifeudal, semicolonial, que quería aliar a la Unión Soviética y a los movimientos nacionalistas democráticos en otros países sujetos a la penetración imperialista. Cómo se desarrolló esta política después que los comunistas asumieron el poder en 1949 es cuestión que se sale del campo de este volumen.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Una excelente colección de fuentes traducidas es la obra *A Documentary History of Chinese Communism* (Harvard, 1952), de C. Brandt, B. I. Schwartz y J. K. Fairbank. Véase también *The Far East* (Nueva York, 1948), de P. H. Clyde; *The United States and China* (Harvard, 1948), de J. K. Fairbank; *The Chinese Tangle* (Princeton, 1953), de H. Feis; *The Tragedy of the Chinese Revolution* (Stanford, 1938), de H. R. Isaacs; *China's New Democracy* (1941, traducción inglesa: Nueva York, 1945) y *Selected Works* (en vías de aparición, vol. I, 1954), de Mao Tse-Tung; *Moscow and the Chinese Communists* (Stanford, 1953), de R. C. North; *China among the Powers* (Nueva York, 1945), de D. B. Rose; *Chinese Communism and the Rise of Mao* (Harvard, 1951), de B. I. Schwartz; *Land and Labour in China* (1932), de R. H. Tawney; *Stalin on China* (Bombay, 1951), de J. Stalin; *Maoism* (Los Ángeles, 1952), de H. A. Steiner; *Thirty Years of the Communist Party of China* (Pekín, 1951), de Hu ph'iao-Mu; *The Kuomintang and the Chinese Communist Elites* (Stanford, 1952), de R. C. North; *Red Star over China* (1938), de Edgar Snow; *American-Russian Relations in the Far East* (Nueva York, 1949), de P. Thurber; *Report on Mao's China* (Nueva York, 1953), de F. Moraes; *The Prospects for Communist China* (1954), de W. W. Rostow.

CAPÍTULO XIII

UNA MIRADA AL PASADO Y AL FUTURO

Pongo fin a este estudio del pensamiento socialista en 1939, al estallar la segunda Guerra Mundial, ya que los acontecimientos que se producen después de la guerra son todavía demasiado recientes para que el historiador los valore con seguridad. Pero no puedo terminar mi sumario sin tratar de calcular cuál era la situación del socialismo como movimiento mundial en 1939 y cuáles parecían entonces sus perspectivas. Por más de veinte años había estado claramente dividido en dos movimientos contendientes —el comunismo y la socialdemocracia—, el primero de los cuales ejercía el poder absoluto en la Unión Soviética y el segundo integraba el gobierno constitucional en los tres principales países escandinavos, aunque sin el apoyo de una mayoría absoluta de electores en ninguno de los tres. El comunismo y la socialdemocracia se habían extinguido, con excepción de algunas actividades clandestinas, en Italia, Alemania, España y casi todos los Estados de la Europa oriental. Había una fuerte minoría comunista y una minoría socialdemócrata en Francia; en Gran Bretaña, donde el comunismo tenía pocos partidarios, el Partido Laborista se había ido recuperando lentamente del desastre de 1931 y desafiaba la supremacía conservadora que todavía existía después de las elecciones de 1935. En los Estados Unidos, el Partido Socialista norteamericano, que no constituía una fuerza real desde 1914, se fue desintegrando mientras que los sindicatos acrecentaban su fuerza considerablemente con el Nuevo Trato. En América Latina, el comunismo era la doctrina de minorías activas, pero no muy grandes, en casi todas las Repúblicas, mientras la socialdemocracia no constituía en ninguna parte una fuerza predominante; ambos estaban en desacuerdo con el movimiento aprista, con fuerza real en Perú. En México el presidente Cárdenas contribuyó mucho a levantar y llevar adelante la tradición de la Revolución predominantemente agraria. Australia y Nueva Zelandia tenían gobiernos laboristas y Nueva Zelandia había hecho notables avances hacia el Estado benefactor. En Canadá, todavía tenían el predominio los partidos tradicionales pero la Federación Socialdemócrata Cooperativista del Commonwealth había empezado a poner en peligro su autoridad, especialmente en Saskatchewan. En Suráfrica, el movimiento laborista estaba en desintegración y el nacionalismo intolerante era una fuerza en ascenso. En la India, había surgido un Partido Socialista del Congreso pero funcionaba todavía dentro del marco del Partido del Congreso y en rivalidad creciente

con el Partido Comunista. En Japón, el socialismo, en todas sus manifestaciones, se había eclipsado por el momento debido al desarrollo del militarismo nacionalista. En China, Mao Tse-Tung establecía su ascendiente en las decisiones del Partido Comunista y encabezaba un Frente Popular para resistir la penetración imperialista japonesa; pero el gobierno central de China estaba todavía en manos de Chiang Kai-Shek y el Kuomintang. Había movimientos comunistas y socialistas nacientes en algunos países del Medio Oriente; pero todavía eran pequeños e ineficaces. Finalmente, entre los países europeos más pequeños, Bélgica, Holanda y Suiza poseían grandes minorías socialdemócratas que no daban señal de convertirse en mayorías; Portugal estaba firmemente sujeta al gobierno dictatorial del doctor Salazar; Checoslovaquia tenía fuertes minorías comunistas y socialdemócratas, ninguna lo bastante fuerte como para controlar el país; Polonia había quedado bajo la semidictadura de los coroneles que habían sucedido a Pilsuski y en Finlandia los socialistas acababan de caer.

En general, la situación era desalentadora para el socialismo como fuerza mundial. La Revolución comunista mundial, tan confiadamente profetizada a principios de los veinte, no sólo no se había producido, sino que por el momento había sido olvidada por sus protagonistas rusos, que dedicaban todas sus energías, bajo Stalin, a construir "el socialismo en un solo país" e influían en los Frentes Populares Antifascistas destinados a proteger a la Unión Soviética contra los peligros de la agresión nazi. Mientras tanto, la socialdemocracia —aunque en algunos países sus partidarios habían logrado avanzar sustancialmente en dirección del Estado benefactor— mostraba una marcada tendencia a quedarse en gran minoría permanente en los países occidentales con gobierno constitucional y, aun cuando tenía en sus manos el gobierno, demostraba poco celo por avanzar rápidamente hacia el socialismo como alternativa del capitalismo para el ordenamiento económico de la sociedad.

Los movimientos socialdemócrata y comunista de 1939, aunque agudamente opuestos entre sí, afirmaban derivar su inspiración de un origen común. Salvo en pocos países, el más importante de los cuales era Gran Bretaña, donde las doctrinas marxistas tenían poco apoyo, tanto los comunistas como los socialdemócratas eran según sus propias declaraciones seguidores de Marx, cuyas doctrinas esenciales interpretaban en formas esencialmente diferentes. Ambas escuelas expresaban su creencia en las teorías marxistas del valor y la plusvalía y coincidían al sostener que las clases propietarias explotaban al proletariado comprando la mercancía, fuerza de trabajo, a menos precio que el valor de su producto. Ambos creían en una interpretación económica de la historia que ofrecía al proletariado la perspectiva de convertirse en la

clase dominante de la sociedad y de utilizar su fuerza para suprimirse a sí mismo, y a las demás clases, en la futura sociedad sin clases. Ambas creían que el capitalismo, iniciador en una época de avanzados métodos de producción, tenía que ser superado por un sistema de propiedad estatal de los medios de producción en el cual desaparecería la explotación del hombre por el hombre para dar lugar a la producción para las necesidades y no para el lucro. Diferían en que, mientras los comunistas proclamaban la necesidad de la revolución y la dictadura proletaria en manos de un Estado esencialmente nuevo que procedería después a abolirse y a sustituir el gobierno de los hombres por la administración de las cosas, los socialdemócratas sostenían que el Estado existente podía transformarse gradualmente en un instrumento democrático para la construcción del socialismo y, en consecuencia, no tenía que ser derrocado sino que había que apoderarse de él ganando la mayoría de los electores para la causa socialista. Los socialdemócratas, organizados principalmente en países que, cuando menos después de 1918, gozaban del sufragio universal o al menos del sufragio masculino para la integración de la principal Cámara legislativa, proclamaban la democracia parlamentaria y el gobierno de la mayoría como bases indispensables para el socialismo; mientras que los comunistas, organizados principalmente en países donde no existía la democracia parlamentaria, aunque en términos no de votantes individuales ni de mayorías, sino de clases organizadas como depositarias del poder, estaban dispuestos a negar los derechos de voto a los miembros de las clases opositoras y a basarse en una dictadura que excluiría a los "enemigos de clase" de toda participación en la influencia política. La dictadura propuesta por los comunistas era siempre, sin embargo, la dictadura de una clase, el proletariado, o de las clases aliadas, trabajadores y campesinos, actuando bajo la dirección del proletariado. La dictadura de clase se convirtió en dictadura del partido de clase sólo porque éste era considerado el representante esencial de una vanguardia de clase, encarnando las aspiraciones de la clase en general y capacitado, por tanto, para gobernar en su nombre. Los socialdemócratas, por otra parte, negaban que Marx hubiera favorecido la dictadura en el sentido que le daban los comunistas. Marx, afirmaban, sólo había contrastado la dictadura del proletariado con la de la burguesía, en el sentido de propugnar por el gobierno de la mayoría contra el de una minoría, y considerado que el proletariado constituía la gran mayoría del pueblo: los campesinos explotados más los habitantes de las ciudades dedicados a la industria moderna. Los comunistas, por su parte, utilizaban generalmente la palabra "proletariado" en dos sentidos diferentes, abarcando uno a las clases explotadas como un todo y el otro tan sólo a los asalariados en la industria o, más particularmente, a los empleados en la

industria en gran escala; sus actitudes hacia el campesinado variaban desde considerar a la gran masa de campesinos pobres y trabajadores rurales sin tierras como los aliados naturales del proletariado contra las clases ricas, hasta despreciar a los campesinos por dedicarse a formas obsoletas de producción en pequeña escala, que debían ser extraídos de su primitivismo por la industrialización de los métodos agrícolas bajo la dirección y el control estrictamente proletarios.

Desde los principios del movimiento comunista, su conflicto con la socialdemocracia se manifestó agudamente en relación con el tratamiento de los territorios coloniales bajo el dominio de las potencias imperialistas. En esos territorios, los socialdemócratas en general propugnaban la necesidad de dar mejor trato a los pueblos nativos y del desarrollo gradual de instituciones de autogobierno tendientes a la plena autonomía interna —tendencias en armonía con su política gradualista en los asuntos internos—; mientras que los comunistas, enemigos declarados del imperialismo y el colonialismo, querían fomentar la rebelión colonial y la total liquidación del dominio imperialista. La política reformista y la revolucionaria se oponían así, agudamente, en las áreas coloniales donde el movimiento comunista lograba echar raíces.

Es fácil observar, si se considera la cuestión desde un punto de vista mundial amplio, que ni el comunismo ni la socialdemocracia tenían en realidad un mensaje práctico para todos los países. Por una parte, nunca existieron perspectivas reales de que determinados países —los escandinavos, por ejemplo, o Gran Bretaña— desearan lanzarse a una revolución comunista para cambiar los sistemas existentes que, de todas maneras, se modificarían sustancialmente si una mayoría popular se mostrara dispuesta a votar por los partidos reformistas para que éstos asumieran el poder. Por otra parte, en Rusia antes de 1917 no había otro camino que el de la revolución, primordialmente porque la voluntad de reforma de una mayoría no era reconocida y no había una forma constitucional de promover el avance democrático. Algunos países, especialmente Alemania, se encontraban a medio camino entre estas situaciones contrastantes, ya que poseían Parlamentos, electos por sufragio amplio y con considerables facultades, pero estos Parlamentos no controlaban al gobierno Ejecutivo que descansaba en manos irresponsables: de modo que el choque decisivo entre la Cámara popular y el Ejecutivo tendría que resolverse mediante una transacción o apelando a la fuerza. Francia, por razones diferentes, también se encontraba entre los extremos, porque tenía una tradición revolucionaria derivada de 1789 y porque poseía numerosos elementos que nunca habían aceptado las instituciones de la República parlamentaria. También Italia, por la debilidad de su tradición parlamentaria y el viejo conflicto entre la Iglesia y el Estado, estaba en posición ambigua entre las democracias par-

lamentarías y los países sujetos a un gobierno autoritario; mientras en Japón los partidos parlamentarios nunca habían logrado dar órdenes a los militares ni reducir al gobernante divinizado al *status* de un monarca constitucional.

Desde un punto de vista mundial, el manifiesto lanzado en Berna en 1919 por la Segunda Internacional revivida tenía un tono claramente local. No encerraba mensaje alguno para los rusos, los chinos, los japoneses ni siquiera para los alemanes o los italianos, excepto en términos de las instituciones todavía no puestas a prueba de la República de Weimar. Pero el Manifiesto casi simultáneo del recién fundado Comintern, emitido desde Moscú un mes después, era igualmente limitado, ya que descansaba en una afirmación dogmática de que el proletariado en todos los países tenía ante sí el claro deber de marchar en todos los respectos por el camino de Moscú, que, de hecho, carecía de realismo en relación con Gran Bretaña, los Países Escandinavos o los Estados Unidos y, en medida no mucho menor, respecto a Francia e Italia y, como lo demostraron los acontecimientos, la Alemania de Weimar —para no decir nada de Australia y Nueva Zelanda, Canadá y México, la India o Ceilán. Sólo las Centrales de la Internacional "Dos y media" de Viena comprendieron cuan absurdo era establecer un método único aplicable a todos los países, sin tener en cuenta sus circunstancias y tradiciones ni las oportunidades abiertas a sus pueblos; el intento de Viena por reconciliar a los contendientes reconociendo que ambos puntos de vista eran de aplicación limitada fue despreciado por los partidarios rivales de la intolerancia.

Miremos ahora retrospectivamente y tratemos de determinar cómo se había desarrollado el pensamiento socialista desde sus inicios a fines del siglo xviii hasta los movimientos de los años anteriores a la segunda Guerra Mundial. En esta visión retrospectiva, el primer pensador socialista a señalar fue Graco Babeuf, con su Conspiración de los Iguales de 1796. Porque, aunque el término "socialismo" todavía no había nacido, Babeuf tiene derecho a ser considerado el primer pensador socialista que encabezó un movimiento de intención ampliamente socialista; es significativo que comenzara como conspirador revolucionario tratando de llevar la gran Revolución francesa a una etapa más avanzada, igualitaria. De Babeuf y su conspiración procede una larga línea de conspiradoras socialistas —Blanqui y Barbes, la extrema izquierda de los cartistas ingleses, la Comuna de París y, en ciertos aspectos, los dirigentes de la misma Revolución bolchevique de 1917, aunque la acusación de "blanquista" hecha contra Lenin ha sido negada con frecuencia y con vehemencia. Una tradición entre varias de la historia socialista es, sin duda, la del levantamiento insurreccional de una *élite*, de un núcleo devoto de revolucionarios que intentan arras-

trar tías de ellos a la masa menos activa hacia una nueva sociedad, por la fuerza del ejemplo y de la doctrina. Siempre y en muchos países han surgido grupos de personas cuya concepción instintiva de la revolución socialista se ha manifestado en términos de un levantamiento; y probablemente siempre será así, aun en países donde tales levantamientos revolucionarios carecen de toda perspectiva. Porque esa tendencia a la insurrección es sobre todo cuestión de temperamento y de incapacidad constitucional para pensar en otros términos, aunque por supuesto hay momentos y lugares donde muchas personas sin ese temperamento son estimuladas, por circunstancias peculiares, a recurrir a la insurrección como arma política.

La segunda corriente de la tradición socialista es esencialmente diferente. Surge con los primeros pensadores que proyectan comunidades: Robert Owen y Charles Fourier, con sus proyectos de pequeñas comunidades, al margen de la competencia que las rodea para perseguir una vida en pequeño, autosuficiente en general; grupos de productores-consumidores, cooperando en vez de competir por los medios de vida y animados por filosofías sociales de buena voluntad mutua. El llamado de Fourier a las inclinaciones humanas naturales y el de Owen al principio moral de la solidaridad comunitaria eran, sin duda, muy distintos y apelaban a grupos sociales diferentes; y Owen tuvo, de lo que careció Fourier, una estrecha relación con el movimiento obrero en una determinada fase de su desarrollo. Pero ambos eran utopistas, que trataban de modificar las sociedades existentes sobre la base de la asociación en pequeñas comunidades, con lo cual esperaban abarcar en el curso del tiempo el mundo entero, descansando las relaciones entre estas comunidades sobre una base ampliamente federal y perdiendo importancia y sentido el problema del poder frente a la plena libertad de que gozaría cada comunidad. Su sucesor, Cabet, difería de ambos porque trataba de fundar una comunidad más amplia unida por una disciplina mucho más estrictamente igualitaria, en donde el voluntarismo de Owen y Fourier era sustituido, al menos en el terreno de la intención, por un más amplio nexo de asociación. Pero también Cabet pertenece al campo de los utopistas, que concebían el surgimiento de la nueva sociedad como un alejamiento voluntario de lo que Owen llamaba "el viejo mundo inmoral" del desorden competitivo para lograr una armonía en la asociación nacional basada en la apelación a las mejores cualidades de la naturaleza humana.

La tercera escuela, entre las iniciadoras, era esencialmente distinta de las otras. Henri Saint-Simon no era ni un igualitario partidario de la insurrección ni un visionario utopista, sino un planificador con una doctrina del desarrollo histórico. Vea la misión del siglo xrx en la emancipación de la humanidad del dominio de *les oisifs* (los ociosos)

—los reyes, aristócratas y militaristas que dominaban la situación antes y después de la gran Revolución— y su sustitución por *les savants* (los sabios) —los hombres de conocimientos científicos, que restablecerían la perdida unidad y el orden de la sociedad desarrollando los medios de producción en servicio de todos y, por encima de todos, de *la classe la plus nombreuse et la plus pauvre* (la clase más numerosa y más pobre). En opinión de Saint-Simon lo que venía no era un conflicto de clases entre patronos y trabajadores, sino una colaboración de ambos para poner fin a la guerra y la explotación y crear una economía planificada bajo la cual la producción de riqueza avanzaría a saltos. Bajo su autoridad benefactora surgiría un "Nuevo Cristianismo" despojado de todo dogma teológico en el que sólo prevalecería la verdad científica. Los discípulos de Saint-Simon añadieron a la doctrina del "maestro" una declaración de la ilegitimidad de toda riqueza heredada y la necesidad de distribuir las funciones sociales y económicas de acuerdo con la capacidad de los hombres para darles buen uso en el interés común. Algunos, particularmente Énfantin, se lanzaron a extrañas interpretaciones místicas de la doctrina religiosa del maestro, que desacreditaron el movimiento y contribuyeron a destruir su importancia social. Pero en Saint-Simon y sus seguidores hay que rastrear la corriente del pensamiento socialista que hace partidario al socialismo de la economía planificada y, además, la tendencia que lo identifica con el desarrollo tecnológico y la industrialización en gran escala como fundamentos necesarios del orden socialista.

El cuarto desarrollo importante del pensamiento socialista se produjo con la obra de Louis Blanc, reelaborada más tarde en algunos de sus aspectos por Ferdinand Lassalle. La principal contribución de Louis Blanc fue la idea del "derecho al trabajo" —de la obligación correspondiente al Estado de suministrar empleo para todos los trabajadores dispuestos a trabajar, tal como se expresa en su *Organisation du Travail*, publicado por primera vez en 1839. Blanc propugnaba por un sistema de talleres nacionales con autogobierno, establecidos y financiados por un Estado democrático reformado, pero libres para manejar sus asuntos y sujetos sólo a un control general de coordinación y planificación integrado por representantes del pueblo. Lassalle, en la década de 1860, recogió esta idea y la aplicó a las condiciones de Prusia, demandando que el Estado prusiano suministrara capital para el desarrollo de sociedades cooperativas de productores, administradas por sus miembros, bajo un régimen político de sufragio universal, que convertiría al Estado, de enemigo del pueblo en instrumento esencial de su emancipación.

Louis Blanc y Lassalle contribuyeron mucho al desarrollo de la idea de que el socialismo exigía la intervención del Estado, no sólo

para regular las condiciones sociales y laborales, sino para responsabilizar de hecho al Estado del funcionamiento de la industria a través de asociaciones de trabajadores formadas y alentadas bajo sus auspicios. Esta concepción del socialismo, sin embargo, iba directamente en contra del nuevo "socialismo científico" proclamado por Marx y Engels en la década de los cuarentas y de la doctrina radicalmente diferente elaborada por P. J. Proudhon aproximadamente en la misma época. Porque Marx y Engels, en su versión de la concepción materialista de la Historia, expusieron una doctrina en la que resumían la historia de la humanidad como una sucesión de luchas de clase, en cuya íntima fase las principales clases contendientes habían quedado reducidas a sólo dos —la capitalista y la proletaria— entre las cuales la lucha continuaría con creciente agudización hasta que los burgueses, los capitalistas, fueran vencidos finalmente por la rebeldía de los proletarios explotados y la sociedad se reorganizara sobre una base libre de clases y de contradicciones económicas y sociales. Todas las demás clases eran consideradas por Marx en proceso de desaparición, ante el impacto del avance tecnológico —los feudales a medida que los capitalistas los sustituían más y más en el ejercicio del poder y la pequeña burguesía, los artesanos en pequeña escala y los campesinos a medida que la producción en gran escala los expulsaba del mercado por su eficiencia económica superior. El capitalismo en gran escala era, pues, en opinión de Marx, esencialmente hasta cierto punto una fuerza progresista; pero contenía en su interior contradicciones que obstaculizaban fatalmente su avance más allá de este punto y harían del proletariado, incrementado por su desarrollo, una fuerza en su contra cada vez más amenazadora. El resultado, sostenía Marx, podía preverse con seguridad científica como la supresión del capitalismo y la socialización de los medios de producción bajo el control proletario.

Marx esperaba, indudablemente, que este proceso se desarrollara pronto, como resultado de una de las crisis recurrentes a las que estaba sujeto el capitalismo de su tiempo. Subestimaba la elasticidad capitalista y la capacidad de los Estados controlados por el capitalismo para auxiliar a la clase capitalista amenazada y sobrestimaba la fuerza de la solidaridad proletaria y las posibilidades de unificar, bajo la bandera proletaria, a los grupos sociales absorbidos por el proletariado debido al avance del capitalismo en gran escala y a los campesinos pauperizados por la progresiva industrialización de la agricultura. Pero tenía razón al anticipar que la lucha entre trabajadores y capitalistas sería el principal conflicto de la última parte del siglo xix en los países capitalistas avanzados y en prever un avance de la tendencia hacia la producción en escala cada vez más grande. El socialismo marxista hizo su primer gran impacto sobre los trabajadores de los países adelantados en los días de

la Primera Internacional, en la década de los sesentas. Marx publicó el primer volumen de su gran obra, *Das Kapital*, en 1867 y, bajo la influencia de sus seguidores, fundó el Partido Socialdemócrata alemán de Eisenach ese mismo año, en oposición a la Asociación Universal de Trabajadores Alemanes de Lassalle, que se había creado algunos años antes. Los grandes puntos de discusión entre marxistas y lassallianos en los años de conflicto que siguieron giraron en torno, primero, a la ley "de bronce" de los salarios, que los lassallianos defendían y Marx atacaba y, de mayor importancia inmediata, la actitud que debía adoptarse por parte de los socialistas en sus relaciones con el Estado. Sobre esta cuestión, mientras los lassallianos esperaban que el Estado, transformado por el sufragio universal, actuara como promotor de las empresas productivas de los trabajadores en oposición a los capitalistas, los marxistas proclamaban la necesidad de destruir las raíces y las ramificaciones del Estado capitalista y construir sobre sus ruinas un nuevo Estado basado firmemente en el poder de los trabajadores.

Era éste un agudo conflicto de doctrinas; pero no logró impedir la fusión de los partidos alemanes marxista y lassalliano en el Congreso de Gotha de 1875, sobre la base de un programa común que Marx atacó decididamente porque hacía demasiadas concesiones al punto de vista lassalliano, especialmente en relación con el Estado. Sus seguidores alemanes ignoraron, sin embargo, su protesta y siguieron adelante con la fusión, que consideraban esencial para el triunfo de la lucha contra la cruzada antisocialista de Bismarck. El Partido Socialdemócrata alemán unificado, que surgió de esta lucha, se convirtió después en modelo para los partidos socialistas de casi toda Europa, con excepción de Gran Bretaña, donde la Federación Social-Demócrata de H. M. Hyndman nunca logró sino un pequeño apoyo y pronto se vio reducida a la insignificancia por el desarrollo de partidos no marxistas, primero el Partido Laborista Independiente de Keir Hardie, en 1893, y luego el Comité de Representación Laborista de 1900, que se convirtió en Partido Laborista en 1906. Pero en la mayoría de los países de Europa occidental —los escandinavos, Holanda, Bélgica, España, Italia y Austria entre ellos— los partidos socialdemócratas marxistas desempeñaron en las décadas de 1880 y 1890 un papel predominante en la política obrera, mientras que en Francia y Rusia el terreno estaba dividido entre partidos marxistas y no marxistas de diversa composición.

El marxismo, en la forma que le imprimió el Partido Social-Demócrata alemán, se convirtió pues en la influencia predominante en la Segunda Internacional, fundada en París en 1889 y se mantuvo hasta la disolución de la Segunda Internacional en 1914. La influencia marxista, no obstante, no dejó de tener rivales aunque una y otra vez logró pre-

valecer contra las fuerzas que se le oponían. El desafío más importante al marxismo había sido hecho, en efecto, en la década de 1860, en la Primera Internacional, cuando Marx tuvo que batallar primero con los discípulos de Proudhon y después con la formidable oposición del ruso Mijail Bakunin, cuyo control sobre ciertos sectores de la Internacional era tan fuerte que obligó a Marx a condenar a muerte a la Internacional, trasladando su sede a los Estados Unidos, para no correr el peligro de caer en manos de los bakuninistas.

Proudhon y Bakunin han sido asociados con frecuencia porque sus partidarios respectivos se oponían por igual a Marx; pero de hecho tenían puntos de vista muy diferentes, aunque abrigaban en común una aguda hostilidad a la centralización y al Estado como maquinaria de control burocrático. Proudhon creía, de hecho, en las virtudes de un campesinado independiente, integrado por pequeños productores que cultivaran su propia tierra y artesanos en pequeña escala que produjeran artículos, de manera semejante, ya fuera individualmente o en cooperación, directamente para el mercado de consumo. Quería que a estos productores se les suministrara crédito gratuito por un Banco Popular, lo que les aseguraría los medios de ocupación, y deseaba que cada productor recibiera una remuneración, sobre la base de un contrato libre, correspondiente al éxito de su esfuerzo personal o familiar. Los proudhonistas en la Primera Internacional se opusieron, en consecuencia, a la nacionalización de los medios de producción, incluyendo la tierra, y apoyaron la empresa cooperativa libre ayudada, no por el Estado, sino por Bancos de Crédito bajo su propio control. Eran, de hecho, anarquistas más que socialistas, si se considera que el socialismo supone la propiedad estatal; su derrota en la Primera Internacional por los partidarios de la propiedad estatal fue, en efecto, la primera identificación clara del socialismo marxista con ese sistema. Pero tan pronto como fueron derrotados los proudhonistas aparecieron los partidarios de Bakunin como una nueva oposición a Marx, apoyados por los españoles e italianos y por un importante sector de los suizos, sobre todo de la región fabricante de relojes del Jura, alrededor de Le Locle y La Chaux-de-Fonds. Esta nueva oposición constituyó un desafío fundamental a los marxistas, al negar el derecho del Consejo General de Londres, que controlaba Marx, y de todo organismo autoritario, de trazar una política o un programa con carácter obligatorio para las secciones nacionales y locales que integraban flexiblemente la Internacional. Bakunin, en su filosofía social general, destacaba la independencia primaria de los grupos locales y su derecho a determinar su propia política sin ser sometidos a un control autoritario desde afuera. Quería reducir la Internacional al *status* de un organismo simplemente consultivo, sin facultades para obligar a las secciones nacionales y locales, y decía-

raba abiertamente la guerra al Estado en todos sus formas como órgano de la autoridad burocrática sobre el pueblo. Había, según Bakunin, una solidaridad natural del grupo local, que podía resolver sus problemas locales sobre la base de la libre cooperación de los hombres, mientras que las unidades políticas más amplias, como los Estados nacionales, estaban constituidas necesariamente por gobernantes y gobernados, entre los cuales no podía existir semejante solidaridad. Había también una división entre bakuninistas y marxistas acerca de los derechos de propiedad. Los bakuninistas querían concentrarse en una campaña para la abolición de la herencia, mientras Marx sostenía que la herencia era simplemente un síntoma de la enfermedad misma de la propiedad privada y creía que debía dirigirse el ataque contra la enfermedad más que contra el síntoma. La disputa, sin embargo, aunque pareció de grandes proporciones en el conflicto efectivo entre Marx y Bakunin, era de hecho superficial en comparación con la diferencia mayor entre ellos en tomo a la autoridad y la centralización. Porque mientras Marx consideraba la creación de partidos políticos centralizados de las clase obrera como el paso esencial hacia la Revolución socialista, Bakunin veía en estos partidos instrumentos para traicionar los intereses de los trabajadores por el inevitable desarrollo dentro de ellos de tendencias burocráticas y de una propensión a aceptar el Estado autoritario en vez de destruirlo totalmente como objetivo fundamental de su política social.

En el Congreso de La Haya de 1872 Marx, en ausencia de los italianos que se habían negado a asistir, logró la expulsión de Bakunin de la Internacional y después el traslado de la sede a los Estados Unidos, donde expiró pocos años después tras un periodo de agonía inactiva. Pero sus opositores mantuvieron una apariencia de Internacional en Europa por algunos años, auspiciada principalmente por anarquistas y sindicalistas, hasta que también ésta expiró en el curso de un nuevo intento de unificación de fuerzas en el Congreso de Unificación de Gante, en 1877. El esqueleto de una Internacional puramente anarquista se constituyó en un Congreso secreto en 1881, pero aparte de esto no hubo en lo sucesivo un nexo formal que uniera a los socialistas en el plano internacional, aparte de algunos congresos ocasionales, hasta la fundación de la Segunda Internacional en 1889. Entonces se reanudó de inmediato la lucha entre socialistas y anarquistas, lanzando todo su peso el Partido Socialdemócrata alemán contra los anarquistas, que fueron expulsados varias veces de los Congresos de la Internacional, sólo para reaparecer con un nuevo desafío en cada reunión sucesiva. En la Segunda Internacional, la existencia de un Partido Socialista regulamente constituido, que acudiera a las elecciones parlamentarias donde las hubiera, se convirtió en el criterio de selección

para los aspirantes, limitando a la admisión a los partidos socialistas que trabajaran sobre la base de la lucha de clases. Esto no resultaba, de ninguna manera, fácil de interpretar —por ejemplo, el Partido Laborista británico no profesaba la lucha de clases en sus declaraciones políticas, pero fue admitido como partido que actuaba sobre el presupuesto de la lucha de clases, aunque no lo hiciera explícito, mientras que los grupos anarquistas que declaraban orgullosamente sus principios de clase eran firmemente excluidos si se negaban a participar en la actividad parlamentaria. En países como Rusia, donde hasta después de la Revolución de 1905 no hubo un Parlamento, el deseo se tomó como hecho, y los socialdemócratas rusos —mencheviques y bolcheviques, además de los socialrevolucionarios no marxistas— fueron admitidos, lo mismo que los partidos abiertamente hostiles entre sí de los socialistas "amplios" y "estrictos" de Bulgaria.

En la Segunda Internacional, los socialdemócratas alemanes apreciaron como un partido sólido y unificado. No así los franceses, hasta que fueron obligados a unirse por la fuerte presión que ejerció la Internacional en 1904. Porque en Francia los socialistas estaban muy divididos en diversos grupos contendientes. Jules Guesde dirigía al grupo más antiguo, el Partido Obrero, en estricta conformidad con los dogmas marxistas y en estrecha alianza en casi todos los puntos con los alemanes; con Jean Jaurés, del grupo socialista independiente, se reunía un núcleo considerable que defendía a la República burguesa contra sus enemigos antidemocráticos y antisemitas y estaba dispuesto a colaborar, en caso necesario, con la burguesía radical en defensa de esa República, lo que era desaconsejado por los guesdistas como contrario a los principios de independencia socialistas. Un tercer partido, dirigido por Edouard Vaillant, seguía la tradición intransigente de los blanquistas y un cuarto, encabezado por Paul Brousse, se proclamaba "posibilista" y se preocupaba principalmente por obtener medidas de reforma social y actividad municipal. Además, la situación en Francia se complicaba con la actitud de los sindicatos organizados en la C.G.T., que se declaraban favorables a la abstención de toda asociación con partidos políticos —quedando sus miembros en libertad para afiliarse si lo deseaban— y favorecían una variante sindicalista del anarquismo que conscientemente buscaba su inspiración en Proudhon más que en Marx.

En efecto el sindicalismo, que echó raíces en Italia y España lo mismo que en Francia y tenía su análogo, en algunos aspectos aunque no en todos, en los movimientos de los Industrial Workers of the World en los Estados Unidos y Australasia, fue en los primeros años del siglo la nueva amenaza al socialismo marxista, en sus aspectos revolucionarios y reformistas. El sindicalismo europeo, a diferencia del norteamericano, era el sucesor directo del anarquismo y atacaba a los

socialistas tradicionales desde el mismo punto de vista localista y federalista. Los partidos políticos, se decía, conducen inevitablemente a sus miembros a los males de la oligarquía y destruyen la solidaridad espontánea que surge en el plano local, por las experiencias diarias que surgen en los talleres. *La lutte de classe ne peut étre menée que sur le terrain de classe* —es decir, en el terreno laboral—, sostenían. La política no sólo conduce a la burocracia y el control oligárquico sino a la transacción para conciliar a los grupos de electores marginales. La acción política confunde así la lucha de clases y es fatal para el *élan* revolucionario de la clase obrera. Lenin, en efecto, adoptaba una actitud opuesta, considerando la política como el principal terreno para la actividad revolucionaria y demandando el control político de los sindicatos, que sin éste podían contentarse con simples actividades reformistas. Pero Lenin pensaba en Rusia, donde la acción política tenía casi por necesidad un carácter revolucionario, mientras que los sindicalistas pensaban en la política parlamentaria al estilo occidental. Los sindicalistas se oponían, sin embargo, al tipo de partido político propugnado por Lenin y a los partidos al estilo parlamentario. Porque eran hostiles a todas las formas de control centralizado que minaban la solidaridad espontánea de los trabajadores en el conflicto laboral local y no querían tener nada que ver con el "centralismo democrático", característica esencial del bolchevismo. El Comintern, cuando se formó en 1919, apeló sin duda a los delegados sindicales revolucionarios y otros elementos de izquierda que compartían la hostilidad de los sindicalistas hacia la disciplina centralizada; pero pronto fue evidente que no podía darse cabida a esos elementos, aunque fueran de izquierda, si no abandonaban su hostilidad por la disciplina centralizada y aceptaban el derecho del Ejecutivo del Comintern de dirigir la política sindical y la política en general. Esos sindicalistas, o no sindicalistas, que se adhirieron en un principio al Comintern pronto se encontraron en desacuerdo con la dirección de Moscú. Hombres como Rosmer y Monatte en Francia y Ángel Pestaña en España quedaron pronto fuera del Comintern y entre sus más enérgicos opositores; la misma suerte corrieron los noruegos encabezados por Martin Tranmael y el sector de los italianos que siguió a Bordiga al Partido Comunista.

El caso de los sindicalistas norteamericanos de los I.W.W. era algo diferente; porque ellos no propugnaban tanto por la autonomía local como por el sindicalismo industrial en escala nacional, de acuerdo con la mayor integración de las grandes finanzas norteamericanas. Pero los norteamericanos, o en todo caso algunos de sus principales dirigentes como W. D. Haywood, también rechazaban la disciplina excesivamente centralizada de la Unión Soviética y reaccionaban fuertemente en su contra ya que, en la práctica, los I.W.W. habían constituido en

los Estados Unidos un organismo muy localizado, que lanzaba a sus propios líderes locales a las luchas laborales localizadas, como la gran huelga textil de Lawrence, y cuya dirección era ejercida en general por inmigrantes de Europa que había traído consigo sus opiniones sindicalistas y no se ajustaban a la burocracia enormemente organizada de los sindicatos afiliados a la Federación Norteamericana del Trabajo. Muchos de estos miembros de los Trabajadores Industriales del Mundo entraron en las filas comunistas en 1919, pero pronto se desilusionaron y salieron o se adhirieron a uno u otro de los casi infinitos movimientos disidentes que aparecieron en la izquierda norteamericana.

Los sindicalistas, especialmente en Francia, hacían otra crítica a los partidos políticos de la clase obrera. Afirmaban que éstos, en vez de unificar a los trabajadores sobre una base de clase, los dividían en partidarios de ideologías rivales, destruyendo así su solidaridad natural. Esta crítica surgía fácilmente en Francia, en vista de la experiencia francesa de numerosas sectas políticas contendientes, mientras que en casi todos los demás países había un Partido Socialista claramente distinto a los otros partidos políticos, aunque hubiera pequeños grupos disidentes fuera de sus filas. Las razones de esta diferencia entre Francia y otros países eran fundamentalmente históricas. Las rivalidades de los sectores socialistas franceses venían de lejos y nunca un grupo en particular había logrado establecerse en una posición de predominio, mientras que en Alemania marxistas y lassallianos se habían unificado para formar un solo partido y en otros muchos países los partidos fundados siguiendo el modelo alemán habían predominado. En España no había, de hecho, tal unidad socialista pero allí también los sindicatos estaban divididos en movimientos rivales de fuerza casi igual, mientras que en Francia la C.G.T. no tuvo rival efectivo durante el periodo de actividad sindicalista en los primeros años del siglo xx.

El sindicalismo no tenía mucha influencia en Europa fuera de los países latinos, aunque en Holanda ejerció considerable ascendiente durante algún tiempo, lo mismo que en Noruega en la posguerra. En Gran Bretaña desarrolló cierta actividad en los años de inquietud laboral antes de 1914, pero quedó relegado a una posición de importancia secundaria con el ascenso del socialismo gremial durante la primera Guerra Mundial. Los socialistas gremiales hacían suyos muchos de los argumentos sindicalistas, sin llegar a los mismos extremos de oposición al Estado, que la mayoría de ellos querían conservar, en forma democratizada, como instrumento de gobierno, en un plano general, al lado de los gremios. Pero, aunque criticaban duramente al Partido Laborista por su reformismo, los socialistas gremiales nunca suscribieron plenamente el localismo esencial del movimiento sindicalista europeo.

Esto se debió, en gran medida, a que en Inglaterra los sindicatos estaban firmemente organizados sobre una base nacional y los contratos colectivos locales iban siendo sustituidos rápidamente por la negociación en un plano nacional. Los socialistas gremiales, en general, daban por supuesta esta centralización industrial y querían establecer gremios nacionales basados en los sindicatos nacionales más que comunas locales como lo contemplaban los sindicalistas franceses, italianos y españoles. A pesar de la presencia de un pequeño grupo en torno al príncipe Peter Kropotkin, que vivía en Inglaterra, el anarquismo inglés era muy débil y no ejercía influencia de ninguna especie en los círculos sindicales ya que la tradición del gobierno parlamentario estaba fuertemente arraigada. Los socialistas gremiales criticaban, en consecuencia, a los que se mostraban decididamente hostiles a las instituciones de la democracia parlamentaria y concentraban su propaganda en la necesidad de extender la democracia a la esfera industrial por igual.

La posición de los sindicalistas europeos reproducía, en una forma avanzada, el federalismo que había sido la tendencia opuesta al marxismo en el pensamiento de Proudhon y Bakunin. Esto era fuente de fuerza y de debilidad al mismo tiempo —de fuerza porque el desarrollo de la organización en gran escala y de la burocracia centralizada había despertado en muchos espíritus una reacción contra las tendencias despersonalizantes del mundo moderno y había alentado una actitud favorable a lo que los norteamericanos llaman "democracia de extensas raíces" (*Grass-roots democracy*) y de debilidad porque el movimiento obrero mismo había sido muy afectado, necesariamente, por el desarrollo de las dimensiones y tendía a considerar la organización en gran escala, cualesquiera que fueran sus desventajas desde el punto de vista humano, como necesaria para los fines de la lucha y por tanto indispensable como condición de la lucha contra el capitalismo en gran escala. No era accidental que la doctrina sindicalista encontrara su principal apoyo en países, como Francia, Italia y España, donde la empresa capitalista en gran escala, aunque existiera, estaba menos desarrollada y mucho menos extendida que en los principales países capitalistas, como los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Los países latinos, en general, todavía tenían en los primeros años del siglo xx movimientos obreros en los que los lazos de solidaridad local eran más fuertes que los de cada industria en el plano nacional, de manera que el sindicato francés, italiano o español era todavía un organismo local y la organización nacional en cada industria era generalmente sólo una federación de organismos locales que consideraban su adhesión a las Cámaras de Trabajo, federaciones de los sindicatos locales, casi tan fuerte como la adhesión a las centrales laborales nacionales. El sindicalismo como movimiento tendía a desaparecer a medida que creciera

la unificación nacional y también a medida que el problema de la nacionalización se planteara en los servicios de utilidad pública y en las industrias básicas como la minería. Obviamente era mucho más fácil hacer proyectos realistas de control local por los trabajadores de empresas locales que de simples secciones locales de empresas organizadas con amplitud nacional. Aun cuando se aconsejara un alto grado de descentralización en las industrias sujetas a una organización nacional en gran escala, el intento de ponerla en práctica tenía que tropezar con la hostilidad de los dirigentes sindicales nacionales, que temían la pérdida de su autoridad si la responsabilidad y el poder se difundían ampliamente.

Hasta 1914, en las actividades recurrentes dentro de los movimientos obreros entre centralistas y federalistas, los últimos habían llevado la peor parte en la batalla, porque los factores de desarrollo económico y político favorecían por igual la centralización. Cuanto más crecieran los sindicatos y lograran el reconocimiento como organismos de negociación, tanto más tenían que tender a ampliar el campo de la negociación, hasta sustituir la negociación local por la negociación nacional; mientras por otra parte, el desarrollo de partidos socialistas altamente organizados, que trataban de estar representados en los Parlamentos nacionales, actuaba en la misma dirección y dificultaba cada vez más que los grupos o sectas locales mantuvieran posiciones independientes. En los sindicatos y en el terreno político se subrayaba cada vez más la unidad y la disensión de la opinión mayoritaria era considerada cada vez más como un delito porque rompía la solidaridad del movimiento. Esto no impedía la aparición de grupos disidentes pero dificultaba su situación y sustituía progresivamente la acción local por la acción nacional. Ésta era la situación ya fuera que los organismos nacionales tendieran a la izquierda o a la derecha, aunque se aplicaba más obviamente cuando aquéllos se inclinaban a la derecha, como sucedía con la mayoría; porque al menos en Europa occidental la tendencia era definitivamente hacia la derecha a medida que los partidos socialistas, cada vez más parlamentarios, se acomodaban a las condiciones de la acción parlamentaria y las elecciones de masas. La misma tendencia, sin embargo, podía manifestarse aun cuando la tendencia fuera de izquierda. En Rusia, por ejemplo, donde la derrota de la Revolución de 1905 había dejado abierto el camino para un nuevo avance revolucionario, el sector bolchevique del Partido Social-Demócrata, que trabajaba clandestinamente como conspiración revolucionaria, adoptó casi por la fuerza una forma extremada de disciplina centralizada y la convirtió en cuestión de principio a través de la teoría del "centralismo democrático", que según afirmaba procedía de Marx. Los mencheviques fueron mucho menos lejos en cuanto a una rígida disci-

plina central; pero también ellos eran centralistas en comparación con los socialrevolucionarios, organizados mucho más flexiblemente, cuyo movimiento, que cubría todos los matices de opinión desde la derecha hasta la extrema izquierda, permitía amplias diferencias locales y no imponía una doctrina uniforme a sus miembros ni a los grupos que lo integraban. No puede decirse que los socialrevolucionarios hayan poseído una doctrina común más allá de un amplio apoyo a la acción revolucionaria en el terreno de la reforma agraria y el derrocamiento de la autocracia que sostenía los intereses de las clases terratenientes. Pero, excepto por un cortísimo periodo en 1905-6, cuando el movimiento revolucionario en Rusia estaba en su climax, los socialrevolucionarios apenas contaron en las actividades de la Segunda Internacional donde los alemanes, que eran centralistas casi sin excepción, constituyeron siempre la fuerza dominante.

Los alemanes, por su parte, eran centralistas porque se oponían a la autocracia altamente centralizada de Prusia, elemento fundamental del Reich alemán. Ya estuvieran de acuerdo con Kautsky o con Bernstein en la gran controversia revisionista, coincidían en la intención de construir un Partido Socialista fuerte y estrechamente ligado, tras el cual esperaban agrupar a una mayoría de los electores alemanes, con vista a derrocar al régimen autocrático. Tan decididos estaban a mantener la unidad del partido que no se deseaba expulsar a Bernstein y sus partidarios para no provocar una división. De hecho, no era difícil mantener la unidad del partido porque las diferencias entre Kautsky y Bernstein, aunque grandes en teoría, tenían muy poco alcance en la actividad real del partido dentro de la situación existente. Porque, aunque Kautsky y la mayoría que lo apoyaba hablaban y pensaban en términos de lo que calificaban de rompimiento revolucionario con el régimen existente, mientras Bernstein subrayaba la posibilidad de un avance gradual hacia el socialismo, ninguna de las dos facciones pensaba seriamente en una acción inmediata de tipo revolucionario y los kautskistas al igual que los revisionistas consideraban que la tarea del Partido era obtener una mayoría electoral y contemplaban por tanto a la unidad como una condición indispensable del éxito. La importancia creciente de los sindicatos en las cuestiones del partido favorecía también una progresiva centralización ya que los sindicatos sólo podían confiar en establecerse como organismos eficaces de negociación colectiva sobre la base de una acción laboral unificada en un terreno cada vez más amplio y el éxito en la negociación laboral suponía, evidentemente, la disposición de las minorías a aceptar las decisiones de la mayoría aunque las desaprobaban. La insistencia de los sindicatos en el requisito de que las minorías aceptaran esta forma de gobierno mayoritario se introdujo fácilmente en el campo político

donde los sindicatos participaban en la acción política como aliados del Partido Socialista —una tendencia que se manifestaba todavía más claramente en Gran Bretaña que en Alemania, porque el Partido Laborista británico, a diferencia del Partido Socialdemócrata, estaba constituido fundamentalmente sobre una base sindical y sus decisiones políticas eran tomadas, en último término, por la votación en bloque de los sindicatos en las Conferencias del Partido Laborista.

Hasta 1917, no obstante, los socialistas fueron siempre y en todas partes una minoría, sin perspectivas aparentes de poder tomar el poder. Las divisiones y los movimientos faccionales podían parecer, a los dirigentes de los partidos, obstáculos en el avance hacia el poder pero, aun sin esas divisiones, había pocas posibilidades de llegar al poder en un futuro cercano. La situación se hizo radicalmente distinta después de 1917, cuando un gobierno con objetivos socialistas se convirtió de hecho en la fuerza dominante en un gran Estado y tuvo que hacer frente a las responsabilidades de su nueva autoridad. Porque, por primera vez, surgió prácticamente el problema de si la disciplina centralizada que había caracterizado al partido victorioso en su camino hacia el poder debía implantarse en las instituciones del nuevo Estado o si había que tolerar partidos de oposición, aceptándolos como elementos necesarios del nuevo orden. Esta cuestión tenía, de hecho, una doble cara porque surgió en relación con los grupos y partidos socialistas que disintían del partido victorioso y con los grupos y partidos no socialistas que representaban fuerzas fundamentalmente hostiles a la Revolución. Los bolcheviques, sin vacilación, resolvieron negativamente ambos aspectos de la cuestión. Ni siquiera consideraron el reconocimiento de derechos de oposición de los elementos contrarrevolucionarios y aunque, por poco tiempo, permitieron la participación en el nuevo Estado de los socialrevolucionarios de izquierda y la existencia de los mencheviques como partido organizado, pronto fue evidente que en el nuevo régimen no habría lugar para los socialistas disidentes ni para la oposición no socialista. Los socialrevolucionarios de derecha, muchos de los cuales se comprometieron gravemente en la guerra civil, en oposición armada contra los bolcheviques, fueron dispersados inmediatamente cuando se disolvió la Asamblea Constituyente. Sólo unos cuantos mencheviques tomaron las armas contra los bolcheviques en la guerra civil, mientras muchos hicieron todo lo posible por colaborar con el régimen bolchevique. Pero, aunque los bolcheviques utilizaron a muchos mencheviques, especialmente en puestos diplomáticos y en las instituciones económicas del nuevo Estado, pronto fue obvio que el Partido Menchevique sería privado de toda facultad de acción independiente y que sus voceros serían expulsados de los puestos importantes que desempeñaban en muchos soviets locales y en muchos sindicatos

y que no podría existir ningún partido socialista no dispuesto a identificarse completamente con los puntos de vista bolcheviques. En cuanto a los socialrevolucionarios de izquierda, los bolcheviques se dedicaron a atraer a sus miembros en masa al Partido Bolchevique, pero sin dar a sus dirigentes la oportunidad de presionar en favor de sus propios puntos de vista mediante una acción colectiva.

Lo que surgió en Rusia, pues, después de la Revolución bolchevique, fue un Estado unipartidista no dispuesto a tolerar ningún posible foco de oposición ni a aceptar la colaboración de otro partido organizado. Más aún, pronto se vio que las facciones dentro del partido serían suprimidas tan absolutamente como las facciones externas al partido y la "Oposición de los Trabajadores", además de otras facciones disidentes, fue suprimida implacablemente. La doctrina del "centralismo democrático", que había surgido como condición necesaria para llevar a cabo con éxito la oposición conspiratoria contra el antiguo régimen, se convirtió en dogma de los nuevos gobernantes, primero como necesaria para la derrota de los intervencionistas extranjeros y los elementos contrarrevolucionarios dentro de Rusia, pero después como la base misma de la nueva democracia proletaria que debía ser la fuerza impulsora de la Revolución mundial. Con este ánimo, el Comintern se dedicó a implantar su control disciplinario sobre los partidos comunistas de todos los países, hasta el punto de ordenarles adoptar la política y los dirigentes que aprobara. Además, mientras que el centralismo democrático había dejado teóricamente plena libertad de discusión hasta el momento en que se tomara una decisión con carácter obligatorio, el campo de esa discusión se circunscribió cada vez más a la denuncia como facciones de todos los intentos de organizar grupos en apoyo de una política desaprobada por los dirigentes del partido y cada vez se hizo más evidente que el derecho de discusión se confinaba estrictamente a las reuniones internas del partido sin que llevara implícito el derecho de hacer públicas o propagar opiniones seccionales diferentes de las de los dirigentes del partido. Además, la política a seguir debía surgir de la dirección para ser transmitida a los miembros de fila, en vez de proceder de los niveles más bajos hacia los más altos del partido.

En efecto, el "centralismo democrático" se convirtió en centralismo sin democracia. Se suponía que había una respuesta correcta a todos los problemas posibles, una respuesta de clase científicamente correcta de la cual la dirección del partido, vanguardia de la vanguardia, tenía la clave; la conformidad absoluta a las opiniones de la dirección se convirtió en la amarga prueba de lealtad al partido. Aunque en Rusia no había teóricamente un Fuehrer ni un Duce en una posición análoga a la de Hitler o Mussolini, ni la autoridad de la dirección colectiva

no era menos absoluta que la de aquéllos y la estructura del bolchevismo pronto adoptó cercanas analogías al totalitarismo de los Estados fascistas —tanto que muchos de los críticos de ambos sistemas los consideraban simples variantes de una sola especie, ignorando totalmente los elementos en los que diferían *toto ccelo*. Prominentes entre estos críticos eran muchos socialdemócratas de los países occidentales, que tenían como huéspedes a socialistas exiliados de Rusia y sus Estados fronterizos y admitían a esos huéspedes en los consejos de la Internacional Laborista y Socialista como representantes de los partidos socialistas en el exilio. Estos exiliados eran naturalmente, en su mayoría, vehementes en sus denuncias del régimen bolchevique y su presencia deterioraba inevitablemente las relaciones entre los socialdemócratas occidentales y la Unión Soviética, hasta el punto que a veces parecía que los socialdemócratas valoraban más su concepción de la democracia que la causa del socialismo —una actitud que los comunistas no contribuyeron a atenuar hasta su tardía conversión a la política de Frente Popular, ante el amenazador avance del fascismo. Aun este cambio de línea, al coincidir con la purga stalinista en la Unión Soviética, no fue acompañado por una modificación de las doctrinas bolcheviques extremistas del monopolio unipartidista y la rígida disciplina de partido, de modo que grandes obstáculos se interpusieron en el camino de la aceptación y funcionamiento armónico de un Frente Popular en el que se encontraran los comunistas. Porque no podía esperarse que los dirigentes socialdemócratas olvidaran en un momento lo que los comunistas habían dicho de ellos ni sintieran confianza en que la política del partido no volviera pronto a un ataque semejante a los dirigentes de derecha y de centro —como sucedió, de hecho, de 1939 a 1941.

Un golpe que hizo vacilar a muchos fue el Pacto Nazi-Soviético de 1939, cuando la Unión Soviética varió abruptamente, después de años de esfuerzo por construir los Frentes Populares antifascistas para oponerse a la repetida agresión de Hitler y Mussolini y a su falta de lealtad, llegó a un acuerdo con la Alemania nazi en términos aparentemente irreconciliables con esos esfuerzos, dejando así a los alemanes libres para lanzar su ataque contra Occidente sin el peligro inmediato de verse expuestos a un ataque desde el este. Retrospectivamente, no es difícil apreciar las razones que tuvo Stalin para este acto. Al menos estaba ganando tiempo; y después de la desorganización de las fuerzas soviéticas producida por la condenación de Tukhachevsky y otros jefes y oficiales de menor graduación y los trastornos debidos a las "purgas" civiles, el tiempo era muy importante para la reorganización y la revisión del potencial militar y económico. Además, el Pacto ofrecía una oportunidad de dividir Polonia, cubriendo así a la Unión Soviética de un avance directo por el oeste y de someter a Finlandia una vez que

Occidente no pudiera acudir eficazmente en su ayuda. Por otra parte, la experiencia de las negociaciones con las potencias occidentales había demostrado que éstas no confiaban mucho en la ayuda militar soviética y que su punto de vista era muy distinto al de la Unión Soviética. La negativa de Occidente a ir en auxilio de Checoslovaquia cuando la crisis de Munich sirvió para demostrar, si no que estaban alentando deliberadamente a Hider a "marchar hacia el este" con su tácita bendición, al menos que no harían nada por detenerlo.

No obstante, la firma del Pacto Nazi-Soviético fue un golpe serio para muchos comunistas que todavía participaban activamente en los Frentes antifascistas que habían integrado en muchos países y se vieron obligados a modificar su política a medio camino o a renunciar a su filiación comunista. La mayoría de ellos había aprendido a considerar tan firmemente la defensa de la Unión Soviética como el deber permanente de todo comunista que casi todos tomaron el primer camino, en algunos casos después de un periodo de incertidumbre que costó a algunos, por el momento al menos, sus puestos en la jerarquía comunista. Al hacerlo, tenían necesidad no sólo de oponerse a la *phony war* de 1939-40, sino de seguir a Molotov en la actitud de hostilidad manifiesta hacia las potencias occidentales y de denunciar a la guerra como una lucha entre imperialismos rivales, en la cual la Unión Soviética no podía tener ninguna participación. Esto, en todo caso, era inconsecuente con la línea que la Unión Soviética había seguido en su etapa antifascista y de hecho con la verdad misma porque, aunque las potencias occidentales fueran predominantemente capitalistas en sus puntos de vista, eran mucho menos antisocialistas que los fascistas. Pero esto no impidió a los bolcheviques, que estaban tan acostumbrados a denunciar a los socialdemócratas como enemigos del socialismo y a considerar que la Unión Soviética era la única que encarnaba el verdadero socialismo, volvieran sin vacilación a su antigua actitud y se desprendieran del Frente Popular sin otro sentimiento que el de una pasajera inconsecuencia.

Comprendo que la Unión Soviética, gobernada por Stalin, firmara el Pacto Nazi-Soviético; pero no puedo considerarlo justificado, ni siquiera en las circunstancias de 1939, porque pienso que el fascismo y el nazismo eran doctrinas bestiales que había que resistir y derrotar a cualquier precio. Aunque la Unión Soviética estuviera justificada para no entrar en la guerra en 1939, esto no significa que estuviera justificada al dividirse Polonia con los nazis ni al atacar a Finlandia ni, de hecho, que hubiera una justificación para mantenerse al margen de la guerra en la hora más sombría para Occidente, después de la caída de Francia. Inclusive en 1939 habría podido adoptar una actitud mucho más neutral que la que adoptó e impuso a los par-

tidos comunistas en los países beligerantes y neutrales hasta 1941, cuando su actitud y la de aquéllos cambiaron abruptamente al atacar los nazis a la Unión Soviética. Después, indudablemente, los partidos comunistas de los diversos países fueron de los más decididos luchadores antifascistas, pero inclusive entonces su lealtad hacia la Unión Soviética era mucho mayor que su adhesión a las fuerzas aliadas de las que ésta formó parte desde entonces.

Conviene determinar cuáles eran las fuentes de esta profunda y perdurable lealtad a la Unión Soviética como centro del socialismo mundial —una lealtad que resistió hasta la revelación de la crueldad dictatorial del régimen stalinista y prevalece hoy, cuando ese régimen sigue en el poder, aunque considerablemente modificado en su funcionamiento. La principal fuente de esta lealtad era el sentimiento de que los comunistas habían luchado por muchos años prácticamente solos contra las fuerzas mundiales belicistas y favorables al mantenimiento del capitalismo, mientras que los socialdemócratas no habían ofrecido más que palabras y se habían rendido, en Italia, Alemania e incluso Austria, casi sin dar un solo golpe en defensa del movimiento obrero. Había un gran acervo de buena voluntad hacia la Revolución rusa, si no hacia el comunismo como ideología; y abandonar a la Unión Soviética parecía una traición para muchos que no estaban en absoluto dispuestos a defender su conducta real —especialmente en relación con los socialistas desviacionistas dentro y fuera de Rusia. La respuesta popular al movimiento de los Frentes Unidos contra el fascismo había sido amplia entre los militantes de filas, aunque menor entre los dirigentes socialdemócratas. Pero los comunistas, aun en su actitud más transigente, se habían mostrado difíciles para la colaboración porque los Frentes Unidos que deseaban crear eran siempre, en el fondo, frentes dirigidos y controlados por los comunistas y no alianzas auténticas con elementos no comunistas dentro de la clase obrera, que de acuerdo con la teoría comunista sólo podía tener una política legítima y unificadora —la de los propios comunistas.

No había puente posible entre el comunismo y la socialdemocracia tal como existían en los treintas. Aunque era evidente la necesidad de unidad obrera en la lucha contra el nazismo, sólo Hitler, al invadir sin provocación a la Unión Soviética en 1941, pudo provocar una alianza forzosa de las democracias occidentales y la Unión Soviética en la segunda Guerra Mundial; aun entonces, como la colaboración era entre los gobiernos más que entre los pueblos y como los socialdemócratas no controlaban, aun cuando participaran en ellos, los gobiernos de los países occidentales, no se logró efectivamente salvar el abismo entre socialdemócratas y comunistas; con el resultado de que fue demasiado fácil que resurgieran los viejos antagonismos cuando ter-

minó la guerra y después que el enemigo común había sufrido una denota decisiva. Ésta es, de hecho, la situación en que se encuentra el mundo todavía hoy, con los socialdemócratas occidentales aliados a los Estados Unidos contra la Unión Soviética en una guerra fría que, si llega a "calentarse", amenaza a la raza humana con la destrucción absoluta.

¿Puede hacerse algo, pues, para salvar este calamitoso abismo? A pesar de la muerte de Stalin y del repudio parcial del stalinismo por los dirigentes actuales de la Unión Soviética, muy poco se ha logrado más allá de un acuerdo de vivir y dejar vivir y la renuncia mutua a la guerra como instrumento político que ha dejado de ser utilizable para convertirse en una forma de suicidio mutuo, fatal para todos los combatientes —de tal manera que nadie en sus cinco sentidos puede pensar en ella a no ser con horror y con la decisión de evitarla a casi cualquier precio. Digo "a casi cualquier precio" porque todavía hay demasiadas personas que, declarando que prefieren la muerte a la esclavitud y acusando a la Unión Soviética de designios siniestros de esclavizar a Europa, no ven otra alternativa que seguir acumulando armamentos para detener un posible ataque, aunque reconozcan que si se llegaran a utilizar tales armamentos nada evitaría una matanza mutua horrible de concebir. En estas circunstancias, el acuerdo de desarme y la prohibición total de las armas atómicas tienen prioridad en la agenda de las naciones preparadas para una contienda; pero ni siquiera la terminación del peligro de guerra ni la liberación de la humanidad de los temores que ésta despierta disminuiría el abismo entre los puntos de vista del comunismo y los de la socialdemocracia. Indirectamente, sin embargo, podría contribuir mucho, porque la supresión del peligro de guerra pondría fin a una gran fuerza que favorece las formas de gobierno totalitarias y podría abrir el camino a una liberalización gradual de los regímenes dominantes actualmente en el área soviética del mundo.

Sin embargo, es bastante irracional esperar que esa liberalización adquiera la forma de una adopción, por los países controlados por los comunistas, de instituciones modeladas de acuerdo con los sistemas parlamentarios de Europa occidental o la estructura presidencial parlamentaria de los Estados Unidos porque de ninguna manera puede darse como un hecho que esas instituciones, aun en sus formas modernas casi democráticas; sean artículos de exportación, que puedan reproducirse en países tan diferentes por sus tradiciones y estructuras sociales como Rusia y China. Tenemos que preguntarnos, pues, no si Rusia o China pueden ser inducidas a imitar o reproducir nuestras instituciones políticas occidentales o gobernarse más acordemente con nuestras ideas de lo que constituye el buen gobierno, sino más bien qué puede

considerarse justamente como universal, y no simplemente particular, en los valores políticos que han sido establecidos entre nosotros como resultado de una prolongada lucha gradual y en consecuencia necesarios a ese régimen de coexistencia democrática que debe surgir para que no perezca toda la raza humana, muy pronto, en una guerra terriblemente devastadora. ¿Estamos, por ejemplo, tan plenamente satisfechos con el sistema de gobierno de dos o más partidos a través de Parlamentos elegidos nacionalmente con sus gabinetes, o mediante presidentes que comparten el poder con el Congreso, como en los Estados Unidos, para insistir que ésta es la única base posible para construir la democracia? ¿O bien reconocemos que la democracia puede adoptar formas diversas que pueden pretender expresar, lo mismo que las nuestras, los valores primordiales de la sociedad?

En consecuencia, en vez de pedir a los rusos o a los chinos que adapten sus instituciones a las nuestras, tratemos de definir cuáles son los valores esenciales que tratamos de realizar en nuestras estructuras políticas e intentemos después descubrir en qué otras formas institucionales pueden encarnar estos valores. Y además, en la medida en que tengamos conciencia de los valores reales que nuestras instituciones no han logrado encarnar hasta ahora, busquemos esos valores y las señales de que se manifiesten, real o potencialmente, en las estructuras institucionales de los países comunistas o de otros no apegados a las formas occidentales de organización política.

El valor que, por encima de todos, ha sido el centro de la batalla para el mundo occidental es la libertad individual. Primero fue afirmada como derecho aristocrático, para aquellos que pertenecían a una clase superior que reclamaba el monopolio del poder, y no se amplió para abarcar a la gran mayoría de habitantes de los territorios donde se la hizo valer. Su extensión a éstos se produjo primero en la esfera específica de la igualdad ante la ley, como desafío a las pretensiones exclusivistas de una minoría de gozar de un *status* legal privilegiado. La aplicación de ese principio puso fin a la esclavitud y la servidumbre y colocó a todos los hombres bajo una igualdad formal de *status* legal, sin modificar las desigualdades de derechos políticos ni de situación social o económica. El reconocimiento de un *status* legal igualitario fue seguido por la demanda de igualdad política, en el sentido del derecho igual de todos los hombres a participar en la determinación del gobierno, al menos en la medida del derecho de sufragio para elegir a los que ejercerían las facultades legislativas e, indirectamente, la ejecutiva. Pero esta demanda de igualdad de ciudadanía política fue otorgada, no como derecho humano, sino más bien como extensión gradual de los derechos cívicos a una proporción creciente del pueblo. La extensión de este derecho de los hombres a las mujeres tardó mu-

cho en la mayoría de los casos y, aun cuando se concedió ampliamente el derecho de sufragio, pasó algún tiempo en muchos países antes de que se aceptara su aplicación, no sólo al principal cuerpo legislativo, sino también a la autoridad ejecutiva que antes había estado en manos de la Corona. En Gran Bretaña, la etapa crucial en la transición se produjo cuando la facultad de la Corona para designar y despedir al ejecutivo fue asumida por la legislatura elegida, de modo que los que hasta entonces habían sido servidores de la Corona se convirtieron de hecho en representantes de una mayoría parlamentaria debiendo su autoridad a un mandato popular. Esto sucedió en Gran Bretaña mucho antes de que la maquinaria electoral hubiera sido modificada para hacer de la autoridad legislativa la representación de todo el pueblo, mientras que en otros países —particularmente en Alemania— se logró que la legislatura fuera elegida por un electorado de masas mucho antes de reconocerse el derecho del cuerpo legislativo a controlar o elegir al ejecutivo. De una u otra manera, sin embargo, la democracia parlamentaria llegó a llevar implícita la elección del cuerpo legislativo responsable por todo el pueblo y la elección del gobierno ejecutivo por un método semejante, como en los Estados Unidos, o por el veredicto del pueblo entero emitido en una elección parlamentaria, como en el sistema británico.

En teoría, la extensión de los derechos políticos a todo el pueblo, para otorgarle la facultad de elegir al cuerpo legislativo y al gobierno ejecutivo, podía realizarse sin un reconocimiento paralelo de los derechos sociales y económicos. En la práctica, sin embargo, los derechos puramente políticos para todos no podían concederse sin grandes repercusiones en la estructura social y económica, porque no podía esperarse que un electorado de masas, que controlara al ejecutivo y al cuerpo legislativo, se abstuviera de utilizar su fuerza para fines económicos y sociales. En consecuencia, con la extensión del derecho de voto se produjo una creciente tendencia a utilizar el poder del Estado para influir en la distribución de la riqueza mediante un sistema fiscal progresivo y utilizando el producto de esos impuestos para promover una distribución menos desigual del poder de compra. Este proceso condujo gradualmente al desarrollo de la idea de un mínimo económico, que el Estado debía asegurar a todos sus habitantes en forma de servicios de seguro social, tales como la garantía efectiva de ocupación plena y otorgamiento de servicios sociales para los enfermos e incapacitados, las personas de edad avanzada y los niños, especialmente en las familias grandes. Así, de la institución de la democracia política surgió el llamado Estado benefactor, donde un nivel mínimo de seguridad social comenzó a aplicarse a todos los habitantes. Pero por su misma naturaleza esta seguridad puede concederse en cualquier nivel que una socie-

dad en particular alcance, de modo que no se otorga plenamente ni se deja de otorgar del todo, sino hasta cierto punto, y la demanda de mayores beneficios de seguridad social es insaciable mientras exista una desigualdad económica sustancial.

Así, en las sociedades occidentales ha habido en general tres etapas sucesivas en el desarrollo y extensión de los derechos sociales. En la primera etapa se logró la extensión a todos de los derechos civiles y, con ello, la liquidación de las pretensiones de privilegios minoritarios en el terreno del *status* social en relación con los derechos legales. En la segunda etapa, la demanda de derechos políticos se había ido afirmando y extendiendo mediante la concesión del derecho de sufragio a una mayor parte del pueblo, y en último término prácticamente a todo el pueblo, y la transferencia del poder ejecutivo de la Corona a organismos integrados por personas que debían su posición al consentimiento popular y eran responsables del uso del poder ante la opinión pública. En la tercera etapa, este poder político ha sido utilizado para imponer la concesión de derechos sociales y económicos a través de la implantación de una especie de Estado benefactor que garantice la seguridad social a todos los ciudadanos.

En estas sociedades, con o sin la ayuda de la revolución, se ha producido una ampliación y extensión gradual del campo de los derechos de modo que cada vez se han extendido más eficazmente los derechos sociales a un mayor número de personas. Los valores que se han realizado, al menos en parte, residen en estos derechos y la batalla que todavía ha de librarse parece centrada en torno a su desarrollo ulterior hasta establecerse las condiciones de una sociedad sin clases. Hay oposición a este proceso, como la ha habido en todas las etapas previas; pero parece razonable esperar que continúe en vista de las fuerzas impulsoras de un cambio encarnadas en las instituciones modernas y de la distribución actual del poder social básico. Tenemos razones, sin duda, para saber que el proceso no avanza ininterrumpidamente y que puede haber retrocesos infortunados, como en Italia y Alemania en nuestra propia época. Pero, lo mismo que estos obstáculos se han suprimido con éxito, podemos esperar con bastante confianza que se supriman otras tendencias semejantes si reaparecen —como resultado probable de la determinación del hombre común de aferrarse a lo que ha conseguido y de utilizarlo como escalón para nuevos avances, y no, por supuesto, como algo seguro e irresistible.

Lo que hemos logrado, en diversos grados, en los distintos países occidentales puede resumirse como sigue: primero, un reconocimiento casi general de que todos los hombres y mujeres tienen ciertos derechos básicos iguales a ser tratados como personas por derecho propio y, con ello, una negación de las pretensiones de algunos hombres a ser trata-

dos como superiores a los demás en relación con esos derechos; en segundo lugar, el reconocimiento casi generalizado de que entre esos derechos universales está el derecho a una participación básicamente igual en decidir el gobierno que deba tener cada sociedad y, con ello, el derecho a cambiar de gobierno por votación mayoritaria —lo que supone la existencia de otro gobierno posible—; y en tercer lugar, cierta garantía a cada ciudadano de seguridad social, limitada necesariamente a la que pueda conceder una sociedad en una etapa específica de su desarrollo, pero tendiendo a crecer en la medida en que aumenten los medios para hacerla efectiva. En general, el reconocimiento de estos tres derechos se ha producido en etapas sucesivas pero que han coincidido en determinado punto y la lucha por dar pleno efecto a los primeros ha continuado después que la batalla principal se ha transferido a los más recientes. En Gran Bretaña, por ejemplo, aunque la igualdad ante la ley ha sido reconocida en principio desde hace mucho tiempo, todavía es necesario tomar más medidas para hacerla plenamente efectiva debido al alto precio de los recursos legales y a la ventaja que se confiere así a los ricos en sus conflictos con los pobres; en la segunda de las tres esferas, aunque se ha reconocido el sufragio universal, instituciones básicamente antidemocráticas como la Cámara de los Lores y la Monarquía todavía sobreviven, aunque con facultades muy disminuidas, y toda la estructura social está aún dominada por las divisiones de clase, aunque éstas sean mucho menos rígidas y opresivas que antes.

Cuando, desde nuestro punto de vista, analizamos las instituciones que se han implantado en los países comunistas comprendemos de inmediato que éstas no llegan a satisfacer, en muchos aspectos vitales, nuestros niveles de efectividad. En primer lugar, no hay en esos países igualdad básica para todos los hombres y mujeres en relación con los derechos civiles porque el régimen es una dictadura ejercida por un solo partido representante de una sola clase, negándose explícitamente la igualdad de derechos básicos a todas las personas que no pertenezcan a esa clase dominante o que no logren con éxito identificarse a ella. Además, aun entre los miembros de la clase dominante, no se reconocen derechos al individuo como tal sino a la clase como un todo; y cualquier individuo cuya actuación se considere contraria a los intereses colectivos de clase pierde su participación en los derechos colectivos. La base de estas nuevas sociedades es, de hecho, el derecho de clase y no el derecho individual. Sin duda se espera y se desea que, en el curso del tiempo, las distinciones de clase desaparezcan y todos los ciudadanos sean miembros de una sola clase, al absorber el proletariado a todas las demás, de tal manera que la idea misma de clase sea absoluta y nadie sea excluido por razones de clase de la igualdad básica de

la sociedad sin clases. Pero, aun si esto ocurre, cuando ocurra, el derecho básico reconocido será, de acuerdo con la filosofía comunista, el de toda la sociedad más que el de los individuos que la componen y no habrá tampoco entonces un reconocimiento de los derechos básicos del individuo.

En segundo lugar, respecto a la participación en la tarea del gobierno y la decisión de cuál debe ser ese gobierno, las sociedades comunistas reconocen el derecho de cada individuo a votar y el derecho de que la mayoría elija al gobierno, pero en la práctica la ausencia de otro gobierno posible priva al derecho de sufragio de su valor real y lo reduce a una simple aceptación de un gobierno que de hecho no es elegido por los electores, sino por un partido único dominante que se arroga el derecho exclusivo de determinar cuál ha de ser el gobierno e inclusive reclama el derecho de realizar actos de gobierno por su propia autoridad: de modo que el partido mismo puede promulgar leyes, como los soviets, que constituyen la estructura formal del gobierno. Esta doble autoridad asumida por el partido se justifica porque el partido representa en cierto sentido al proletariado, del cual es la vanguardia, y por tanto se le autoriza a gobernar a toda la sociedad en su nombre. Además, aunque el partido tiene una masa de miembros, la determinación de la política dentro del mismo se concibe dentro de la línea del llamado "centralismo democrático", de acuerdo con el cual la iniciativa de las decisiones corresponde a la dirección central y no a la gran masa de miembros del partido, que están obligados por su rígida disciplina a obedecer las órdenes emanadas de la dirección central y tienen prohibido formar "facciones" para favorecer puntos de vista divergentes. Esto equivale a una negación absoluta de la democracia tal como se entiende en Occidente y supone la exclusión total, no sólo de quienes no sean miembros del partido sino inclusive de la gran mayoría de miembros, de participar en la determinación de quiénes deben constituir el gobierno y de qué política se debe seguir. En la raíz de este sistema oligárquico descansa, una vez más, la creencia en que lo que cuenta es la clase y no el individuo y que la verdadera democracia consiste no en la participación de todo individuo en el proceso democrático sino en la supremacía de un solo organismo que representa a la clase dominante en general y dominado a su vez por una dirección central, que tiene que expresar necesariamente la opinión colectiva —de clase— correcta.

Cuando pasamos al tercer grupo de derechos —los de naturaleza socio-económica— aparece la misma discrepancia. Estos derechos se otorgan de hecho, en general, en mayor medida que en Occidente, en relación con la capacidad de las sociedades comunistas para concederlas; pero se conceden, no a los individuos como tales, sino en

relación con su capacidad para servir a los intereses colectivos de la sociedad. Así, las necesidades de los consumidores se han pospuesto sistemáticamente a las del desarrollo económico, para construir la fuerza colectiva de la sociedad; en el terreno de la educación, donde las realizaciones de la Unión Soviética han sido más impresionantes, se ha acentuado la contribución que un pueblo altamente educado puede hacer al servicio colectivo de la sociedad más que los efectos de la educación en el mejoramiento del carácter y la realización del individuo. El sistema educativo soviético es fundamentalmente utilitario: es parte del esfuerzo colectivo de la sociedad soviética por lograr la máxima productividad posible y los valores culturales se subordinan sistemáticamente a este propósito fundamental. En otros servicios sociales también se destaca principalmente la contribución que pueden aportar a la eficacia total de la sociedad más que los beneficios que confieren al individuo.

En resumen, en las tres esferas de acción, el contraste entre las sociedades occidentales y comunista reside en un individualismo básico que afirma y un colectivismo básico que niega la prioridad de los valores individuales. No hay, ni puede haber, un medio para trascender esta diferencia fundamental: lo único que importa es determinar si, en el mundo de hoy o en el de mañana, es posible que sociedades fundadas en estos principios conflictivos pueden coexistir y colaborar a pesar de las diferencias básicas de sus escalas de valores.

En las sociedades occidentales más avanzadas este individualismo básico se ha mostrado compatible, hasta cierto punto, con un acercamiento a la igualización democrática. En estas sociedades, los tres grupos de derechos individuales se han extendido, en una medida considerable y efectiva, a todo el pueblo, de modo que para casi todos existen ciertas libertades fundamentales básicas, cierto derecho a participar en las decisiones políticas y ciertas garantías de seguridad social —aunque estos derechos no sean plenamente reconocidos y la concesión de los derechos sociales y económicos sea todavía particularmente incompleta y precaria. Pero en la mayoría de las sociedades menos desarrolladas no existen en medida importante ninguno de estos derechos —ni los derechos civiles básicos, ni los políticos ni los sociales y económicos—. Estos países quieren darse instituciones nuevas que deben encarnar sus aspiraciones de un modo de vida que los libere de su largo estancamiento —y, en muchos casos, de una larga subordinación al dominio colonial—. Tienen que escoger, en general, entre dos modelos para la construcción de esas nuevas instituciones, uno el occidental y otro el del comunismo. Si escogen seguir el modelo occidental tienen necesidad, no sólo de implantar ciertas formas determinadas de gobierno, imitadas esencialmente de las occidentales sino, lo que resulta mu-

cho más difícil, desarrollar formas de pensamiento y de conducta que permitan a esas formas de gobierno funcionar con éxito —en especial sistemas administrativos tolerablemente eficientes y no corrompidos y un alto grado de alfabetización para promover la libre comunicación de las opiniones. Por otra parte, si adoptan el modelo comunista pueden lograr, si no se los impiden las potencias occidentales, un ritmo mucho más rápido de avance social y económico colectivo y una forma de gobierno que requiere mucha menos participación general en la dirección real de los procesos de gobierno.

No puede esperarse que para pueblos que no han experimentado, en su gran mayoría, los beneficios de la libertad individual y la participación en el gobierno, éstos ejerzan un atractivo dominante. Tampoco existe en esta época la posibilidad de una evolución gradual a través de la cual se construya por etapas una tradición de libertad individual y participación política en sectores cada vez mayores del pueblo. Es absolutamente necesario dar un salto mucho más rápido para cumplir las demandas populares y atender inmediatamente a los derechos económicos y sociales, así como a los políticos, del pueblo en general. Es posible, en algunos casos, en condiciones especialmente favorables, que los territorios abandonen la situación colonial para implantar sus propias formas de gobierno autónomo sin una revolución social —como ya ha ocurrido en Ghana y Malaya y, más limitadamente, en Túnez y Marruecos, además de la India, Pakistán y Birmania—; pero son escasas las oportunidades de que esto suceda en áreas donde exista una población numerosa de colonizadores europeos, con niveles de vida muy superiores a los de los habitantes nativos, como en Argelia, Kenya y el África Central. En estas regiones el camino hacia el autogobierno parece ser el de la revolución más que el de un cambio pacífico. En ellas el fuerte apoyo prestado por los comunistas al nacionalismo de las colonias parece destinado necesariamente a encontrar una respuesta viva frente a las actitudes intransigentes de las minorías de colonizadores europeos, que sólo pueden esperar mantener sus privilegios mediante la fuerza. Porque donde el progreso sólo puede lograrse peleando por él en un conflicto armado, puede haber muy pocas perspectivas para el desarrollo de una tradición semejante a la de Occidente y es más probable que se dé más importancia a los avances colectivos que a los individuales. Consideraciones semejantes se aplican a otros países subdesarrollados que no tienen que liberarse del dominio colonial sino de los despotismos feudales de gobernantes nativos ya que es de esperarse que las clases dominantes en estos países se opongan obstinadamente a un proceso que amenaza su poder y su *status* privilegiado, y empujen a los pueblos a rebeliones en masa que conduzcan al establecimiento de alguna forma de dictadura más que de la demo-

cracia en su manifestación occidental. La dictadura comunista, y no la democracia occidental, se estableció en China con Mao Tse-Tung y la Revolución bolchevique en Rusia trajo consigo la victoria de un solo partido, altamente disciplinado, que no se mostró más considerado respecto a los derechos individuales que la autocracia zarista a la cual sustituía.

No obstante, aunque los Estados comunistas no tengan en cuenta los derechos de los individuos como tales, no hay que olvidar que en el terreno de los derechos y las realizaciones colectivas han dado satisfacción bastante amplia a un gran número de individuos. Aunque el motivo principal tras el desarrollo extraordinariamente rápido de la educación en la Unión Soviética haya podido ser el mejoramiento de la capacidad de los ciudadanos para servir al Estado, la educación no deja de ser por ello un logro indudable del que se ha beneficiado un gran número de individuos y, del mismo modo, los nuevos servicios de seguridad social, cualesquiera que sean los motivos que los fundamenten, han contribuido a transformar la estructura social de la sociedad y han traído consigo una gran extensión de la libertad real. Aunque el individuo esté indefenso en sus relaciones con el Estado, el número de individuos que realmente sufren o tienen aguda conciencia de esta opresión es mucho menor que el número de los que se benefician de las ventajas otorgadas por la nueva sociedad para sus propios fines. Cuando no existe una tradición popular de libertad individual ni participación política es posible que su falta no se experimente demasiado; y la mayoría del pueblo tiene mucha más conciencia de los beneficios que la mayor parte de ellos derivan de las nuevas instituciones que de la represión a la que, como individuos, están expuestos. La mayoría del pueblo, además, tiene mucha más conciencia de los llamados que se le hacen para que desempeñe un papel en la gran obra de construcción social que de la medida de su subordinación a una pequeña *élite* gobernante en posesión de la autoridad exclusiva.

El socialismo, hasta el surgimiento del bolchevismo en Rusia, fue casi exclusivamente una corriente de opinión dentro de la sociedad occidental, residiendo principalmente en la Europa occidental. En casi todas sus manifestaciones fue parte de la tradición radical de Europa occidental que intentaba llevar adelante las victorias del pueblo sobre las clases dominantes y protestaba contra el capitalismo de *laissez-faire* que se había establecido en los principales países de Occidente. Este capitalismo era su enemigo, pero era considerado como un estadio más alto en el camino de la evolución social que las formas de sociedad que lo habían precedido y como una etapa necesaria en el proceso de evolución social que había de culminar en el establecimiento de una estructura socialista sin clases. El socialismo revolucionario,

lo mismo que el partidario de la transformación gradual, sostenían esta teoría del cambio revolucionario de formas más elementales a formas más elevadas. Había, en consecuencia, una fuerte tendencia a pensar que el capitalismo preparaba el camino al socialismo y que el desarrollo en escala y la concentración de la empresa económica contribuían a madurar la sociedad para el socialismo. A medida que fueran menos las manos que concentraran el control de la empresa capitalista, se estaría más cerca del momento en que ésta pasara a manos de todo el pueblo. Así, aunque la concentración capitalista pudiera aumentar la capacidad de los capitalistas para explotar a los obreros, el capitalismo no podía evitar el surgimiento de una rebeldía en masa de la clase sometida —una clase que pronto sería lo bastante fuerte como para arrebatarse el control a los capitalistas y asumirlo en sus propias manos.

La primera oposición efectiva a esta concepción del socialismo como sucesor necesario del capitalismo partió de los narodniks rusos quienes, frente a la existencia de un capitalismo nacional mucho menos poderoso y amplio que el de Europa occidental, planteaban la cuestión de si era necesario en Rusia atravesar una etapa de capitalismo desarrollado antes de avanzar hacia el socialismo o si no sería posible en Rusia fundar una sociedad socialista directamente sobre las ruinas de la autocracia zarista. ¿Por qué, preguntaban los narodniks, hemos de derrocar al zar simplemente para sustituir su autoridad por la de otro enemigo del pueblo, quizás más formidable, encarnado en el capitalismo? ¿No es posible, aprovechando el gran elemento comunal de la sociedad rusa, proceder de inmediato a la construcción del socialismo sin sufrir los males del capitalismo? Marx, el archiprofeta del socialismo occidental, no se mostró ajeno a esta idea en sus últimos años, aunque nunca la adoptó plenamente. Sus seguidores en Rusia, sin embargo, abandonaron esta teoría insistiendo en que las fuerzas en rápido desarrollo del capitalismo ruso debían seguir su curso y que también Rusia debía pasar por su etapa de dominio capitalista antes que el socialismo pudiera sustituirlo. Los mencheviques rusos se convirtieron en los principales exponentes de esta doctrina, considerando la necesidad de una etapa bastante prolongada después del derrocamiento del zarismo durante la cual los socialistas constituirían la principal oposición a una sociedad rusa predominantemente capitalista; mientras que los bolcheviques, más concientes de la debilidad del capitalismo ruso y de sus relaciones con el zarismo, concebían un periodo de transición mucho más corto e inclusive un rápido paso de la Revolución de su etapa burguesa a una etapa socialista. Lenin, no obstante, insistió siempre vigorosamente en la diferencia fundamental entre las dos Revoluciones —la burguesa y la socialista— y en la necesidad de que una precediera a

la otra; mientras Trotsky sostenía que la clase capitalista no podría establecerse como clase efectivamente dominante en Rusia, de modo que la primera revolución tendría que producirse bajo una dirección principalmente proletaria y tendría que dar paso directamente a la segunda —una teoría que prácticamente negaba una etapa capitalista antes de la Revolución proletaria. Fue Lenin quien intentó resolver el enigma sosteniendo la alternativa de una Revolución burguesa bajo control proletario, que diera como resultado la implantación del capitalismo de Estado como forma de transición del zarismo al socialismo y propugnando así una doctrina que requería una etapa capitalista en la evolución sin la necesidad de un régimen de Estado capitalista.

Si, no obstante, el control de la maquinaria del Estado había de pasar directamente o en un lapso muy corto a manos del proletariado, esto difícilmente podía hacerse excepto bajo un régimen dictatorial; porque el proletariado industrial, que no constituía sino una pequeña minoría del pueblo, no podía esperar establecer su control sobre la base de una votación mayoritaria. Tendría, sin duda que llegar a un acuerdo con los campesinos y hacer las concesiones necesarias para obtener el apoyo campesino; pero tendría que preservarse del peligro de ser superado por la vasta mayoría campesina y cuidar de conservar firmemente el poder en sus manos. De ahí, por una parte, la adopción no muy entusiasta de una amplia política que permitía a los campesinos convertirse en propietarios individuales de la tierra y, por otra, la disolución de la Asamblea Constituyente en la cual el elemento predominante era el de los campesinos.

En todo caso, la Revolución rusa de 1917 no podía haber sido, primordialmente, una Revolución anticapitalista porque el capitalismo ruso era demasiado débil para constituir la principal oposición a los revolucionarios. De las dos revoluciones de 1917, la primera fue contra el zarismo y puso fin a la vieja autocracia de los zares sin sustituirla por una estructura viable. La caída del zar arrastró consigo el poder de la aristocracia terrateniente y la burocracia mediante la cual habían gobernado los zares, dejando un vacío que fue llenado temporalmente por las revueltas campesinas locales y el ejercicio de la autoridad en las ciudades por los soviets de trabajadores. Los sucesivos gobiernos provisionales presididos por Lvov y Kerensky no podían de hecho gobernar y en el verano cundió una creciente desintegración. Esto preparó el camino a la Revolución bolchevique, en la cual tomaron el poder los dirigentes del Partido Bolchevique, en alianza con los socialrevolucionarios de izquierda, contra los demás partidos socialistas —los mencheviques y los socialrevolucionarios de derecha— y sin el apoyo de la gran mayoría del pueblo, aunque probablemente con el de la mayoría de los trabajadores industriales. Esta victoria casi sin derramamiento de san-

gre se obtuvo porque las fuerzas contrarias a los bolcheviques estaban divididas sin remedio y no podían constituir un gobierno capaz de mantener unificado al país. Sus principales oponentes no eran, por supuesto, los capitalistas, que apenas participaron en los acontecimientos de 1917 y fueron simplemente barridos por el curso de los sucesos. El resultado fue, sin duda, su desaparición de la escena, pero la principal realización de la doble Revolución no fue la derrota y liquidación de la clase capitalista, sino la desaparición definitiva de la vieja sociedad, predominantemente agraria y feudal y su sustitución por el gobierno de un solo partido ya que los socialrevolucionarios de izquierda pronto desaparecieron del panorama después del golpe.

El control socialista se estableció, pues, en la Unión Soviética como sucesor no del capitalismo, sino del dominio autocrático y feudal y en oposición a un gran núcleo de opinión socialista. Los bolcheviques se dedicaron entonces a construir la nueva Rusia sobre las ruinas de una sociedad en general precapitalista, pero con una armazón teórica según la cual el socialismo era considerado esencialmente como sucesor del capitalismo y fundado sobre la base de un proletariado industrial relativamente poco desarrollado. Envueltos de inmediato en la guerra civil y en una lucha contra la intervención extranjera, los bolcheviques tenían que utilizar las escasas fuerzas con que contaban para estas luchas. Una gran proporción de los trabajadores industriales tuvieron que ser movilizados para integrar las fuerzas armadas y muchos murieron en la lucha. Entretanto, la industria tuvo que ser reconstruida casi de la nada con una fuerza de trabajo improvisada en su mayoría, procedente en general del campesinado, y la maquinaria administrativa tuvo que improvisarse reclutando nuevos elementos en cuya lealtad no podía confiarse mucho. El Ejército Rojo tuvo que integrarse mediante un enorme esfuerzo de reclutamiento, cuya responsabilidad principal tocó a Trotsky. Bajo todas estas influencias surgió una nueva especie de socialismo, que debía poco a las tradiciones socialistas occidentales y mucho a la iniciativa y el impulso de un hombre: Lenin.

La tradición socialista europea no podía servir de mucho, en efecto, a los bolcheviques en los primeros años críticos del nuevo régimen porque la situación que tenían que resolver nunca había sido concebida por Marx ni sus sucesores en el movimiento socialista europeo. Los socialistas alemanes y sobre todo su principal teórico, Karl Kautsky, siempre habían pensado que el socialismo llegaría al poder apoderándose de las instituciones económicas de un capitalismo plenamente desarrollado, de modo que el cambio consistiría esencialmente en el surgimiento de un nuevo "alto mando", que dirigiría en lo sucesivo las empresas en servicio del pueblo entero. Se había prescindido, como utópica, de toda especulación acerca de la forma que debería adoptar el

nuevo control, difiriendo el problema hasta tener el poder, tanto más cuanto que se había supuesto tácitamente que la estructura capitalista sería conquistada y se introducirían cambios en ella sin grandes trastornos y en condiciones democráticas. Se supuso que el socialismo se implantaría, con o sin una revolución violenta, como respuesta al deseo manifiesto de una mayoría del pueblo, cuya colaboración con el nuevo orden estaría, pues, asegurada. La democracia, en forma de sufragio universal, y la determinación de la política mediante el voto general del pueblo, se habían dado como hechos.

Esta era una situación totalmente diferente de la que se produjo cuando los bolcheviques tomaron el poder y la tradición socialista europea no podía servirles de guía en la conducta a seguir. El sufragio universal no podía servir a sus fines porque habría dado el poder a la mayoría campesina, apenas influida por el socialismo e interesada, sobre todo, en obtener la posesión individual o familiar de la tierra y muy poco interesada por las formas de gobierno o por la manera de mantener unificado al vasto país. La única alternativa posible era una dictadura para evitar la disolución de Rusia en un gran número de Repúblicas agrarias o la reconquista de partes del país por elementos contrarrevolucionarios. En consecuencia, el problema después de la Revolución bolchevique no era determinar si debía o no implantarse una dictadura, sino más bien qué tipo de dictadura debía implantarse. Este problema, sin embargo, se resolvió en la realidad por la naturaleza del partido que había sido el principal factor en la toma del poder porque este partido poseía una disciplina muy centralizada y una doctrina de "centralismo democrático", así como una notable intolerancia hacia todos los que no aceptaran su dirección o no estuvieran de acuerdo con él. Por tanto, aunque se había hecho la Revolución en nombre de los soviets, que aunque dominados por los bolcheviques en las principales ciudades incluían también a representantes de otros partidos, la dirección real pasó a manos del Partido, que reclamó el derecho de ejercerla como verdadero representante de la clase obrera y único exponente autorizado del punto de vista proletario. Desde el momento en que los socialrevolucionarios de izquierda se separaron del gobierno, opuestos al Tratado de Brest-Litovsk, el Partido Bolchevique constituyó de hecho el gobierno y los elementos de oposición dentro de los soviets fueron rápidamente eliminados de manera que los soviets dejaron de ser organismos constituidos por elecciones populares libres, aun entre los trabajadores industriales, y se convirtieron en simples emanaciones del Partido, aceptando sin discusión su dirección en las cuestiones políticas y, de hecho, obligados a hacerlo porque a su flexible estructura federal el Partido oponía una fuerza estrechamente unificada y disciplinada que funcionaba sobre todo el territorio del imperio ruso. Esta estruc-

tura unitaria del Partido en el Estado era esencial a su autoridad y constituía el puntal de su dictadura. Las exigencias de la guerra civil en el país y la lucha contra la intervención extranjera obligaron al Partido a recurrir a una centralización y un control burocrático cada vez mayores. Mientras Lenin permaneció realmente a la cabeza del gobierno esta centralización fue compatible con cierta medida de libre discusión dentro de la *élite* del Partido, pero cuando la enfermedad lo hizo retirarse surgió la oportunidad de Stalin. Trotsky denunció el rápido desarrollo de la burocracia dentro del Partido, sólo para ser eliminado y colocado en una situación de impotencia y muy pronto enviado al exilio. Stalin utilizó su posición como secretario del Partido para controlar la burocracia y elevarse, llegado el momento, a una posición de dictadura personal. La dictadura colectiva del proletariado nunca había sido una realidad porque, desde un principio, había sido el Partido más que la clase quien había detentado el poder dictatorial. Pero la dictadura del Partido pasó a manos de un núcleo todavía más pequeño de dirigentes y después a las de un solo individuo, que procedió a utilizar su poder sin escrúpulos para liquidar a sus antiguos camaradas. Sólo después de la muerte de Stalin se denunció el llamado "culto de la personalidad" y con ello se intentó reimplantar la dirección colectiva; pero aun después el poder siguió en realidad confinado a un pequeño grupo de dirigentes, entre los cuales surgieron luchas internas por el poder y la influencia, aunque en forma menos extremada que en la época stalinista.

A través de todos estos cambios los principales objetivos de la política soviética no variaron, con una excepción. En los primeros años después de la Revolución, los bolcheviques consideraron seguro que su Revolución no podría sobrevivir si los países capitalistas avanzados no seguían su ejemplo, con virtiendo así la Revolución rusa en una Revolución mundial al estilo ruso. La Tercera Internacional se fundó en 1919 con este fin y siguió persiguiéndolo hasta que hubo que reconocer su impracticabilidad. Stalin adoptó entonces el lema del "socialismo en un solo país" y convirtió a la Internacional en un instrumento, no de la Revolución mundial, sino para crear problemas en el mundo entero a los países no comunistas apelando a los trabajadores en todas partes para que subordinaran sus intereses inmediatos a los de la Unión Soviética como protagonista del socialismo en un mundo hostil. La victoria del nazismo en Alemania produjo, tardíamente, un cambio de frente y obligó a los comunistas a tratar de crear Frentes antifascistas; pero ante el fracaso de estos esfuerzos Stalin cambió nuevamente de línea y llegó a un acuerdo con los nazis, sólo para variar una vez más, forzosamente, cuando Hitler lanzó el ataque a la Unión Soviética en 1941.

En este aspecto, la política soviética sufrió drásticos cambios, aunque el objetivo de la Revolución mundial nunca fue abandonado, sino únicamente diferido. En otros puntos, los objetivos políticos permanecieron invariables a través de todos los cambios. La tarea de los bolcheviques, tal como ellos la entendían, era elevar a Rusia lo más rápidamente posible de su atraso económico y social a un lugar importante entre las sociedades industriales avanzadas, para derrotar a los capitalistas en su propio juego. Los fundamentos de esta actitud habían sido colocados por Lenin con su grandioso plan de electrificación; pero Lenin se había mostrado favorable a avanzar con precaución, al adoptar la Nueva Política Económica en 1921 y en su actitud respecto a los proyectos de los planificadores de grandes proyectos de desarrollo industrial. Sólo después que Stalin liquidó a la mayoría de los líderes que quedaban de la Revolución de 1917, o al menos los expulsó del poder, se produjo un agudo cambio de política que encarnó en el primer Plan Quinquenal y en la colectivización forzosa de la agricultura a pesar de la considerable resistencia campesina. Estos grandes cambios económicos, no obstante, no suponían una alteración en los objetivos esenciales del desarrollo económico, sino sólo su intensificación. La Unión Soviética, después del retroceso inicial producido por la etapa de hambre debida a la pérdida de las cosechas, procedió más rápidamente al desarrollo de la industria pesada, para lo cual se pospuso definitivamente el desarrollo de la industria ligera para cubrir las necesidades de los consumidores y siguió posponiéndose en los siguientes Planes Quinquenales. Mientras tanto, en la agricultura se produjo, después del período de hambre, un avance en el total de la producción cosechable; pero la matanza de ganado que había acompañado a la colectivización no pudo recuperarse rápidamente. De hecho, muchos de sus efectos siguen sintiéndose aun hoy y el desarrollo de la producción agrícola en general se ha rezagado mucho en relación con la producción industrial, a pesar de la gran extensión de las áreas cultivadas y de la explotación de las "tierras vírgenes", principalmente mediante fincas estatales.

Sin duda, los cambios efectuados a fines de los veinte trajeron consigo un gran incremento en la severidad de la disciplina económica impuesta por el Estado y el ofrecimiento de estímulos económicos a la alta producción individual, en contra de las tendencias anteriores hacia una disminución de las desigualdades económicas. Stalin encabezó este movimiento y, en el curso de los treinta, implantó su autoridad dictatorial sobre una base personal liquidando a los críticos que quedaban y convirtiendo la enorme maquinaria del Partido Comunista en un instrumento al servicio de su dominio personal. Éste fue el sistema que llegó a su fin con la muerte de Stalin en 1953 y fue denunciado después por Jruschov en el Congreso del Partido de 1956.

Pero, aunque Beria fue liquidado y la disciplina perdió rigidez después de la muerte de Stalin, no hubo cambio fundamental de objetivos, ni siquiera de métodos. Un control colectivo de la política subsistió en cierta medida al gobierno personal de Stalin; pero los fines y en gran medida los métodos permanecieron como antes, aunque éstos se hicieron más flexibles hasta cierto punto. No se alteró la estructura unipartidista de la sociedad soviética y el poder del Partido aumentó inclusive en algunos aspectos. Molotov y Malénkov fueron, en efecto, eliminados de la dirección sin ser liquidados —lo que pareció indicar cierto suavizamiento del régimen—, pero el aplastamiento de la rebelión de Hungría por la Unión Soviética en 1956, aun sin tener en cuenta la subsecuente ejecución de Nagy y Maleter en junio de 1958, demostró que no había habido un cambio fundamental y el nuevo ataque al "titoísmo" en 1958, después del acercamiento a los yugoslavos en 1956, indicó claramente que los dirigentes soviéticos no estaban dispuestos a aligerar el control sobre los satélites, a pesar de las concesiones que se habían visto obligados a hacer a Polonia en 1956.

En resumen, todavía en 1958 la Unión Soviética era esencialmente un Estado unipartidista totalmente controlado desde arriba por los dirigentes del Partido Comunista y sin permitir la expresión de opiniones disidentes ni siquiera desviacionistas. En este aspecto, la China comunista siguió la misma orientación, después que se habían depositado grandes esperanzas en el aparente estímulo de Mao al "florecimiento de cien flores" en el jardín de la ideología. Mao se puso de parte de la Unión Soviética en el caso de Hungría y fue inclusive más allá en los ataques al "titoísmo" en 1958. Con excepción de Polonia, caá no hubo señal de flexibilización en los países satélites.

En la misma etapa, sin embargo, la Unión Soviética hacía lo posible por aparecer como la mayor partidaria de la paz y la coexistencia en oposición a la llamada política belicista de los Estados Unidos y los países occidentales en general. En mi opinión, el deseo sincero de los dirigentes soviéticos —y de los pueblos soviéticos— de evitar una guerra en la que la destrucción por ambas partes sería de una gravedad sin punto de comparación debe ser creída, así como que preferirán perseguir sus fines por otros medios. Por desgracia, esto no significa que estén dispuestos a cambiar o modificar sus fines ni a aceptar condiciones que, según ellos, los situarían en desventaja frente a los Estados Unidos. En cuanto a éstos, aunque la mayoría del pueblo y de los dirigentes también esperan sin duda que pueda evitarse la guerra, muchos no están en absoluto dispuestos a contentarse con una posición que no suponga la evidente superioridad militar ni a renunciar a la esperanza no sólo de contener sino de derrotar al comunismo y de contribuir al derrocamiento de algunos, cuando menos, de los regímenes comunistas

existentes. En estas circunstancias, la competencia por la superioridad militar, especialmente en armas atómicas, se sostiene incólume y los instrumentos de destrucción se acumulan en ambos bandos en cantidades ya absurdas, además de desastrosas económicamente para cualquier país menor, como Gran Bretaña, que intente mantenerse al mismo ritmo. De hecho, las únicas condiciones en las cuales puede avanzarse suponen un abandono por ambas partes de toda esperanza de poder derrotar a la otra en una guerra y de sobrevivir. Esto significa un verdadero deseo de coexistir en la paz a pesar de las agudas diferencias que los dividen. Supone que la Unión Soviética debe renunciar a la esperanza, si es que alguna vez la ha abrigado, de imponer por la fuerza el triunfo del comunismo como sistema mundial; pero también lleva implícito que los norteamericanos deben renunciar a sus esperanzas de derrocar al comunismo, en los países que tienen ese sistema, por la fuerza —lo que por ahora no parecen muy dispuestos a hacer.

Dejamos, pues, la historia del movimiento socialista mundial en una situación de gran debilidad, eclipsado por el momento en Italia, Alemania, Austria, España y la mayoría de los países de la Europa oriental y central y lo mismo en los Estados Unidos, donde el surgimiento de la conciencia de la clase obrera relacionado con el Nuevo Trato de Roosevelt no adoptó una forma socialista, mientras que el comunismo se había disuelto en una serie de luchas de facciones con muy escaso impacto sobre la mayoría de la clase obrera. Interrumpo aquí la historia, justamente a medias, porque las etapas posteriores no están todavía maduras, en mi opinión, para la pluma del historiador. No he podido evitar, de hecho, prolongar este recuento, en algunos casos, hasta más allá de 1939; pero no pretendo con estas miradas ocasionales sobre los acontecimientos posteriores hacer una historia completa o suficiente, ni siquiera hacer un enfoque teórico válido. Mi punto de vista personal se ha expresado suficientemente, me parece, en los diversos volúmenes de esta obra. No soy ni comunista ni socialdemócrata, porque considero a ambas como doctrinas de centralización y burocracia y pienso que una sociedad socialista fiel a sus principios igualitarios de fraternidad humana debe descansar en la difusión más amplia posible del poder y la responsabilidad, para permitir la participación activa del mayor número posible de sus ciudadanos en las tareas del autogobierno democrático.

INDICES

INDICE DE NOMBRES

- Adler, Friedrich: 160
 Alcalá Zamora, Niceto: 31, 118-9, 125, 127
 Alessandri, Arturo: 206
 Alfonso XIII: 118, 141
 Alter, Viktor: 187
 Álvarez del Vayo, Julio: 138
 Antonescu, Ion: 188, 191
 Araquistain, Luis: 138
 Attlee, Clement: 69-70, 72, 74, 81-82
 Auriol, Vincent: 109
 Ávila Camacho, Manuel: 205
 Azaña, Manuel: 119-20, 124, 126-7, 129, 135, 137, 139, 141
 Aznar, Manuel: 118
- Babeuf, Graco: 272
 Bakunin, Mijail: 121, 123, 277-8, 282
 Baldoni, general: 211
 Baldwinson, Jan: 175
 Baldwin, Stanley: 80-1
 Barbes, Armand: 272
 Barth, Karl: 64
 Bartlett, Vernon: 89
 Batlle y Ordóñez, José: 211
 Bauer, Otto: 12, 147-8, 150, 156
 Beales, H. L.: 72
 Berenguer, Dámaso: 118
 Beria, Lavienty, 234, 305
 Bernstein, Eduard: 284
 Besteiro, Julián: 122, 138, 143
 Bevan, Aneurin: 83, 87, 90
 Bevin, Ernest: 72-3, 81, 91
 Bhave, Vinova: 12
 Bismarck, Otto von: 276
 Blagoev, Dimitar: 192
 Blair, W. R.: 72
 Blanc, Louis: 274
 Blanqui, Auguste: 272
 Blatchford, Robert: 72
 Blum, Léon: 28-9, 34, 82, 95, 102-5, 107-12, 116, 130, 141, 180
 Bohlschwingh, Friedrich von: 64
 Bondfield, Margaret: 70
 Bonnet, Georges: 105
 Bordiga, Amadeo: 280
 Bottai, G.: 20
- Bracke, Alexandre: 116
 Brandt, C.: 267
 Branting, Hjalmai: 168
 Braun, Otto: 57
 Braunthal, Julius: 9, 10, 160-1
 Briand, Aristide: 95
 Brotherhood, Miss: 9
 Brousse, Paul: 279
 Browder, Earl: 199
 Broz, Josip: véase Tito
 Brüning, Heinrich: 44, 52
 Budenny, Simeón: 233
 Bujarin, N. I.: 214, 234, 242
 Busch, Germán: 206
 Bustamante Rivero, José Luis: 206
 Buder, R. A.: 93
- Cabet, Étienne: 273
 Caillaux, Joseph: 95
 Calvet, Luis: 121
 Calvo Sotelo, José: 126, 128
 Cannon, James P.: 198-9
 Cárdenas, Lázaro: 204-6, 210, 212, 268
 Carias, Tiburcio: 206
 Carol II de Rumania: 188, 191
 Casanovas, Juan: 138
 Casares Quiroga, Santiago: 127-8
 Clyde, P. H.: 267
 Clynes, J. R.: 70, 88
 Cojander, A. K.: 174
 Coldwell, M. J.: 203
 Colé, G. D. H.: 9, 10-4, 72, 306
 Colé, Humphrey: 9
 Colé, Margaret: 9, 10, 72
 Comorera, Juan: 138
 Companys, Luis: 121, 126-7, 138-9
 Cripps, Sir Stafford: 69-70, 72-3, 78, 83, 87-90
- Chamberlain, Neville: 28-9, 34, 89-91, 105-6, 114
 Chang Hsueh-Liang: 259
 Chang Wan-T'ien: 248
 Chautemps, Camille: 95-7, 104-5, 109 111
 Ch'en Shao-Gü: 248

- Ch'en Tu-Hsin: 258, 266
 Chéron, Henri: 96
 Chiang Kai-Shek: 244, 246-7, 252-3, 259, 269
 Chiappe, Jean: 92
 Ch'in Pang-Hsein: 248
 Chou En-Lai: 259
 Chu Teh: 249
 Churchil, Winston: 28, 91
- Daladier, É.: 29, 34, 95-7, 105
 Dalinie: 96
 Dalton, Hugh: 70, 72, 78-9
 Danneberg, R.: 160
 Darré, R. Walther: 60-1
 Daudet, Léon: 96
 De la Rocque, coronel: 96, 99, 111
 De Man, Henri: 177-80
 Déat, Marcel: 96, 116, 180
 Degrelle, Léon: 178
 Desrousseaux, A.: véase Bracke, Alexandre
 Deutsch, Julius: 147, 156
 Dewey, John: 200
 Díaz, José: 138
 Dimitrov, Georgi: 199
 Djalković, Djuric: 189
 Dmowski, Román: 23
 Dobrogeanu-Cherea, C.: 192
 Dollfuss, Engelbert: 76, 100, 145, 152-8
 Doñas, Dr. J.: 126, 137
 Dorgères, H.: 99
 Doriot, Jacques: 116
 Douglas, C. T.: 203
 Doumergue, Gastón: 76, 97-8
 Dubinsky, David: 201
 Durruti, Buenaventura: 134
- Echevarrieta, Horacio: 138
 Edén, Anthony: 100, 105
 Ehrlich, Henry: 187
 Elliot, S. R.: 89
 Enfantin, Barthélemy-Prosper: 274
 Engels, Frederick: 37, 260, 275
 Erlander, Tage: 168
 Fairbank, J. K.: 267
 Faure, Paul: 107
 Feder, Gottfried: 47
 Feis, H.: 267
 Fey, EmÜ: 153, 156-8
 Fierlinger, Zdanek: 186, 192
- Fimmen, Edo: 181
 Flandin, Pierre-Étienne: 98-9
 Foster, W. Z.: 199
 Fourier, Charles: 273
 Franco, Francisco: 18, 31-2, 82, 101, 104, 112-3, 122, 128, 130
 Frick, Wilhelm: 54
 Frugoni, Emilio: 211
- Gaitskell, Hugh: 72
 Georgiev, Kimon: 193
 Gerhardsen, Einar: 173
 Gidev: 190
 Gil Robles, José María: 126-7, 141
 Giral, José: 129, 135
 Gidow, Benjamin: 199
 Goebbels, Josef: 21
 Gollancz, Víctor: 85, 87
 Goring, Hermann: 53-7, 61, 64
 Gorkic, Milán: 189
 Greenwood, Arthur: 70, 74, 82
 Grossmann, Max: 58
 Grove, Marmaduke: 206
 Guesde, Jules: 115, 279
- Halifax, Lord: 105
 Han Lin-Fu: 258, 266
 Hannington, Wal: 71
 Hansson, Albin: 168
 Hardie, Keir: 276
 Hassenfeider: 63
 Haya de la Torre, Raúl: 204
 Haywood, W. D.: 280
 Henderson, Arthur: 70, 72, 74
 Hernández, Juan: 138
 Herodoto: 116
 Herriot, Édouard: 95
 Hilferding, Rudolf: 12, 149-50
 Hillquit, Morris: 197
 Hindenburg, Paul von: 45, 43-4, 61, 63-4, 76
- Hider, Adolf: 17, 19-20, 26, 28, 34-6, 40-1, 45, 49-50, 52-4, 56-65, 68, 76, 81-2, 84, 87, 90-1, 100-1, 105, 112, 114, 143-4, 151, 154-5, 158-60, 170, 191, 199, 209, 231, 286-9, 303
- Hlinka, Andrej: 186
 Hoare, Sir Samuel: 82, 100, 159
 Hoover, Herbert: 44
 Horner, Arthur: 88
 Hornsruud, Christian: 172
 Horthy, Miklós: 18, 22, 187

- Hsiang Chung-Fa: 248
 Hu Ch'iao-Mu: 267
 Hugenberg, Alfred: 45, 54, 58-9, 61
 Hyndman, H. M.: 276
- Ibáñez, C: 206
 Iglesias, Pablo: 123
 Isaacs, H. R.: 267
 Ivanov, Svety: 192
 Jager: 64
 Jaurés, Jean: 104, 116, 279
- Johannsen, Albin: 164
 Jovanović, Dragoljub: 190
 Jowett, F. W.: 70, 88
 Jurschov, Nikita: 304
 Justo, J. B.: 210
- Kamenev, L. B.: 142, 214, 234, 242
 Katayama, Sen: 205
 Katz: véase Dobrogeanu-Cherea, C.
 Kautsky, Karl: 149, 284, 301
 Keppler, Wilhelm: 59
 Kerache, John: 198
 Kerensky, Alexander: 300
 Kestl: 59
 Kilbom, Karl: 36
 Kirkwood, D.: 70
 Kirov, S. M.: 76, 106, 233
 Kramár, Karel: 186
 Kropotkin, Peter: 282
 Krupp von Bohlen, Alfred: 58-9
 Ku Chu-T'ung: 259
 Ku Shan-Chung: 266
 Kun, Béla: 22, 187
 Kuusinen, Otto: 174
- Lansbury, George: 69-70, 74, 81-2
 Largo Caballero, Francisco: 122-3, 129, 131-5, 137-8, 143
 Laski, Harold J.: 13, 85-6, 88, 91, 143
 Lassalle, Ferdinand: 274, 276
 Laval, Pierre: 29, 80, 82, 95, 99-100, 116, 159
 Lawrence, Susan: 70
 Layret, Francisco: 121
 Lee, Algernon: 198
 Leipart, Theodor: 57-8
 Lenin, Vladimir Ilich: 37, 241-2, 260, 261, 272, 280, 299, 301, 303-4
 Lerroux, Alejandro: 119-20, 125-6, 141
 Lewis, John L.: 201
- Ley, Robert: 57-60
 Li Li-San: 248, 266
 Litvinov, Maxim: 34, 90, 106
 Liu Jen-Ching: 266
 Lombardo Toledano, Vicente: 204-5, 210, 212
 Longuet, Jean: 83, 117
 Louis, Paul: 97
 Lovestone, Jay: 199
 Lueger, Karl: 157
 Lukács, Georg: 192
 Lvov, George Eugénievich: 300
 Lloyd, C. M.: 72
 Lloyd George, D.: 80
- MacDonald, Ramsay: 69, 79-81
 Madek, Vladimir: 190
 Maciá, Francisco: 121
 Mach, Ernst: 161
 Machow, Reinhold: 52
 Malatesta, Errico: 121
 Malénkov, Georgi: 305
 Maleter, P.: 305
 Malinov, Alexandr: 190
 Malvy, Louis: 95
 Mann, Tom: 88
 Mannerheim, Carl von: 175
 Mao Tse-Tung: 208-9, 244, 246-53, 255-61, 264-7, 269, 298, 305
 Marković, Simón: 188
 Marquet, Adrián: 96, 116, 180
 Martínez Barrio, Diego: 128-9, 137
 Martinovic, Ratko: 189
 Marx, Karl: 12, 24, 37, 86, 117, 221, 260-1, 269-70, 275-9, 283, 299, 301
 Matteotti, Giacomo: 19
 Maura, Miguel: 118
 Maurín, Joaquín: 123, 137
 Maurras, Charles: 96
 Maxton, James: 70, 73, 88
 Mazepa, Ivan S.: 224
 Metaxas, Ioannes: 190
 Middleton, J. S.: 74
 Mijailovic\ Draza: 192
 Mises, Ludwig von: 225
 Mitchison, G. R.: 72
 Moch, Jules: 117
 Molotov, V. M.: 288, 305
 Monatte, Pierre: 280
 Moraes, F.: 267
 Morones, Luis N.: 204-5
 Morris, William: 73

- Morrison, Herbert: 70, 78-9, 88-9
 Mosley, Sir Oswald: 69, 85
 Müller, Ludwig: 63-4
 Mussolini, Benito: 19-21, 76, 80-1, 100-101, 112, 143, 154-5, 157-9, 286-7
 Nagy, I.: 305
 Narayan, Jayprakash: 12
 Negrín, Juan: 128, 138
 Neickov, Dimitrov: 193
 Neumann, Heinz: 36
 Neurath, Konstantin von: 54
 Neurath, Otto: 12
 Nin, Andrés: 123, 134, 137
 Noel-Buxton, Noel E.: 70
 Norman, Montagu: 70
 North, R. C.: 267
 Nygaardsvold, Johan: 173
 Orwell, George: 143
 Owen, Robert: 273
 Paepe, César de: 11
 Parker, John: 73
 Pastochov, Kristin: 192
 Paul-Boncour, J.: 95-6
 P'eng Pai: 249
 Pestaña, Ángel: 122, 280
 Pétain, Henri: 29, 116
 Pethick-Lawrence, Lord: 79
 Philip, André: 117
 Pilsudski, Josef: 18, 23, 186, 269
 Pivert, Marceau: 102
 Poincaré, R.: 95, 99, 110
 Pollak, Oscar: 160
 Pollitt, Harry: 88, 91
 Prieto, Indalecio: 123, 135, 137-8, 140, 143
 Primo de Rivera, José Antonio: 126
 Primo de Rivera, Miguel: 31, 118, 122
 Prince, Albert: 98
 Proudhon, P. J.: 275, 277, 279, 282
 Radek, Karl: 234
 Radié, Stefan: 190
 Rakosi, Matías: 187
 Remmele: 36
 Renaudel, Pierre: 96, 117, 180
 Renner, Karl: 153-4, 160
 Rentelen, Dr. von: 60
 Reuther, Walter: 195, 201
 Rintelen, Antón: 157
 Rivera, Diego: 205
 Robson, W. A.: 72
 Róllum, Ernst: 61-2, 76
 Roosevelt, Franklin, D.: 26, 75-6, 111, 194-5, 197, 199-200, 207-8, 306
 Rose, D. B.: 267
 Rosmer, Alfred: 280
 Rosselli, Carlo: 19
 Rosselli, Nello: 19
 Rostow, W. W.: 267
 Runciman, Walter: 105-6
 Ruthenberg, Charles: 199
 Saint-Simon, Henri: 273-4
 Salazar, Antonio: 18, 269
 Samper, Miguel: 126
 Sandoz Carro: 206
 Sanjurjo, José: 32, 125
 Sarlo, Francesco de: 189
 Savordaya: 11
 Scott, F. R.: 203
 Schacht, Hjalmar: 61
 Schachtman, Max: 198
 Schleicher, Kurt von: 45, 53-4
 Schlucher, Dr.: 59
 Schmidt, Robert: 61
 Schmitz, doctor: 157
 Schober, D.: 149-50
 Schuschnigg, Kurt von: 76, 145, 157, 160
 Schwartz, B. I.: 267
 Seipel, Ignatz: 145-6, 148-53, 155, 160
 Seiss-Inquardt, von: 159
 Severing, Karl: 57
 Shinwell, Emanuel: 70, 81
 Sinclair, Upton: 197
 Snow, Edgar: 267
 Sófocles: 116
 Sokolnikov, G. N.: 234
 Souza, Germinal de: 138
 Spaak, Paul Henri: 177
 Stalin, José: 33, 36-7, 39-41, 90, 106, 131, 138-9, 188, 200, 205, 214-5, 217, 219, 221-2, 226, 229, 234-43, 260, 265, 267, 269, 287-8, 303-5
 Stambolisky, Alexander: 184
 Starhemberg, Ernst: 150, 153, 158
 Stauning, T.: 170
 Stavisky, Serge A.: 76, 96, 98-9
 Steeg, Théodore: 95

- Stefensson, Stefán Jóhr: 175
 Steincke, K. K.: 170
 Steiner, H. A.: 267
 Strachey, John: 85, 143
 Strasser, Gregor: 20, 52, 76
 Strasser, Otto: 116
 Streicher, Julius: 21
 Stresemann, Gustav: 55
 Sun Yat-Sen: 254
- T'an Ping-Shan: 266
 Tanner, Jack: 88
 Tanner, Vaino: 173-5
 Tardieu, André: 95
 Tawney, R. H.: 13, 267
 Templewood, Lord: véase Hoare, Sir Samuel
 Terra, Gabriel: 211
 Thaelmann, Ernst: 36
 Thomas, J. H.: 81
 Thomas, Norman: 195, 198
 Thorez, Maurice: 107, 115
 Thurber, P.: 267
 Thyssen, Fritz: 58-9, 62
 Tito, Josip Broz: 32, 188-9, 192
 Tomaso, Antonio di: 210
 Topalovid, Zivko: 32
 Toro, coronel: 206
 Tranmael, Martin: 172-3, 280
 Trevelyan, Sir Charles: 90
 Troelstra, Pieter: 181
 Trotsky, León: 39, 131, 200, 205, 214-215, 217, 234-5, 237-8, 240-2, 258, 300-1, 303
 Trujillo, Leónidas: 206
- Tukhachevsky, Mijail N.: 233-4, 287
- Ubico, Jorge: 206
 Uribe, Vicente: 138
 Uriburu, José E.: 210
- Vaillant, Édouard: 279
 Vandervelde, Émile: 177
 Vargas, Getulio: 206, 211
 Vaugoin, Karl: 150
 Vázquez, Mariano R.: 138
 Vogelsang, Karl von: 149, 155
 Von Papen, Franz: 45, 52-4, 57, 65
 Wagner, Otto: 59
 Wallas, Graham: 86
 Warwick, condesa de: 72
 Wauters, Arthur: 177
 Webb, Beatrice: 72, 224
 Webb, Sidney: 70, 72, 224
 Weber, Max: 20
 Wels, Otto: 56
 Wigforss, Ernst: 163, 167-8
 Wilkinson, Ellen: 70
 Winter, Ernst: 157
 Wise, E. F.: 73
 Wolfe, B. D.: 205
 Woodsworth, J. S.: 203
 Woolf, Leonard: 72
- Yagoda: 234
 Yezhov, Nikolai I.: 234
- Zeeland, van: 178
 Zinoviev, Grigori: 142, 214, 234, 242
 Zyromski, J.: 102

ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|-----------|
| <i>Figuras principales</i> | 7 |
| Prefacio por Margaret Colé | 9 |
| Introducción por Julius Braunthal | 10 |
| | |
| I. El mundo de 1931 a 1939 | 15 |
| II. El eclipse del socialismo en Alemania | 42 |
| III. Gran Bretaña | 69 |
| IV. El socialismo francés | 95 |
| V. La guerra civil en España | 118 |
| VI. El eclipse del socialismo austríaco | 145 |
| VII. Los países escandinavos y Finlandia | 162 |
| Dinamarca, 169; Noruega, 172; Finlandia, 173; Islandia, 175 | |
| VIII. Bélgica, Holanda y Suiza | 177 |
| Holanda, 180; Suiza, 181; Análisis general, 182 | |
| IX. Europa Oriental | 184 |
| X. Los Estados Unidos, el Canadá y América Latina | 194 |
| XI. La Unión Soviética desde principios del primer Plan Quinquenal | 214 |
| XII. El comunismo en China | 244 |
| Nota bibliográfica, 267 | |
| XIII. Una mirada al pasado y al futuro | 268 |
| | |
| INDICE DE NOMBRES | 309 |

Este libro se terminó de imprimir el día 31 de Julio de 1974 en los talleres de Lito Ediciones Olimpia, S. A., Sevilla 109; y se encuadernó en Encuademación Progreso, S. A., Municipio Libre 188, México 13, D. F. Se tiraron 5 000 ejemplares.

Historia del Pensamiento Socialista

VII Socialismo y Fascismo

La amplitud de este volumen es mucho más considerable de lo que sugiere el título. La historia de la tragedia del colapso del socialismo europeo se despliega ante nuestros ojos, al igual que el fenómeno del fascismo, en un análisis penetrante de los sucesos de esa época turbulenta. Investiga y valúa el incremento del movimiento obrero norteamericano, surgido de la Gran Depresión, y el cambio en la posición del poder de la clase trabajadora de los Estados Unidos originado por el Nuevo Trato. Describe igualmente el carácter peculiar de la Revolución en México y el movimiento social en los demás países latinoamericanos.

Pero el comunismo toma el lugar central del estudio. Al investigar las fuerzas primarias que produjeron el eclipse del socialismo europeo y el triunfo del fascismo, hace alto de nuevo en la Revolución bolchevique, su ideología, el desarrollo económico de la Unión Soviética desde el principio del primer Plan Quinquenal casi hasta el nacimiento del XX Congreso del Partido Comunista Ruso. Luego, en un notable capítulo, examina la filosofía del comunismo chino y su ascenso al poder.

En las páginas finales, "Una mirada al pasado y al futuro", Colé expone el estado actual del socialismo y hace una estimación de sus posibilidades para el futuro. Es un capítulo de particular importancia e interés porque recoge las últimas palabras del autor sobre su concepto del socialismo.

El profesor Colé murió en 1959, cuando este volumen estaba ya casi completo y mecanografiado. Fue editado y revisado por su viuda, Margaret Colé, con la ayuda de su hijo, Humphrey Colé, y de Julius Braunthal, quien contribuye a él con una Introducción.

